

La preparación del presente número de la revista del *OSAL* coincidió con el inicio de una nueva fase de la crisis del modelo neoliberal en Latinoamérica. Precipitado por los hechos de diciembre en Argentina, el “fantasma” del crack económico recorre hoy la mayor parte de los países de la región, desde México hasta Chile, alentado por la exacerbada volatilidad del capital financiero y la sucesión de escándalos empresarios –el caso Enron, el de WorldCom, y, hace apenas unos días, el de Xerox– que han conmovido la bolsa de valores neoyorquina y, peor aún, la ingenua confianza que el público en general tenía en la probidad de sus operadores, los gerentes de las grandes corporaciones y las empresas consultoras que, supuestamente, certificaban la “autenticidad” de sus balances. No sorprende que fuera la Argentina el país en donde el colapso del modelo neoliberal haya adquirido tan gigantescas proporciones, dado que fue allí precisamente donde las políticas neoliberales se aplicaron con inigualada radicalidad. La expansión de la crisis a nivel regional no es, por lo tanto, el “contagio” que un organismo enfermo provoca en otro sano sino la maduración catastrófica de las contradicciones propias del capitalismo neoliberal y sus gravosas consecuencias en todos los órdenes de la vida social. El cinismo del poder, que con la hipótesis del “contagio” pretende exonerar a las políticas del Consenso de Washington de toda responsabilidad en la producción de este verdadero holocausto social, no alcanza para ocultar la amplitud de la tragedia y la naturaleza estructural de la crisis que con desigual intensidad hoy sacude a todos los países de la región.

Por otra parte, esta crisis converge y profundiza la desintegración del consenso social del que gozara en otras épocas la propuesta neoliberal. Las crecientes y masivas protestas sociales contra los planes de ajuste, las privatizaciones y la concentración de la riqueza son un claro ejemplo del repudio generalizado que genera el modelo de la sociedad de mercado. Existe una progresiva conciencia en grandes masas de las poblaciones latinoamericanas que la tan pregonada “teoría del derrame” –con la cual los ideólogos del neoliberalismo pretendían convencer al público de los efectos virtuosos de sus políticas– no fue sino una perversa ilusión ya que los datos de la experiencia demuestran que la riqueza y los ingresos, en lugar de redistribuirse en favor de las clases y capas populares, se han concentrado hasta extremos desconocidos. Los diferentes conflictos y protestas que hemos venido reseñando en esta publicación en el último período revelan una cada vez mayor capacidad de interpelación a las reglas de juego del neoliberalismo y a sus beneficiarios, y evidencian, a través de la convergencia en la lucha de diversos sectores sociales, tanto la inédita polarización económica producida por las políticas ortodoxas como el rechazo cada vez más generalizado que ellas suscitan.

En los últimos meses, en diferentes países, dichos procesos se han profundizado hasta límites insospechados para transformarse, como lo demuestra palmariamente el caso argentino, en crisis de los propios regímenes democráticos. Frente a esta ilegitimidad de la “governabilidad neoliberal”, por una parte, surgen novedosas experiencias de participación popular de las que se da cuenta en la Introducción a las Crono-

logías y que ponen de manifiesto una voluntad de renovación democrática basada en el protagonismo social. Pero, por otro lado, dicha crisis de los modelos de dominación ha abierto también, particularmente después del 11 de septiembre y la “guerra infinita” proclamada por el gobierno norteamericano, distintos intentos de consolidar formas políticas que se sustentan en la criminalización de los movimientos de protesta, la violencia y un creciente autoritarismo.

En esta perspectiva debe entenderse –además de la ruptura del proceso de paz en Colombia– el fallido intento de golpe de estado contra el régimen democrático en Venezuela, que amenaza con el retorno de trágicas experiencias ya sufridas en el continente en décadas pasadas. Es por ello que dedicamos el Dossier temático del presente número al análisis y tratamiento de estos hechos. El proceso de desestabilización política orquestado por las élites locales y los medios de comunicación de dicho país –con la aprobación y auxilio del gobierno norteamericano, como lo demuestra el trabajo de Edgardo Lander– ilustra claramente las adversidades que enfrenta hoy en día en nuestra región cualquier proyecto político que pretenda establecer una relativa autonomía frente al hegemonismo norteamericano. Los diferentes artículos que componen el dossier indagan sobre los orígenes e intereses que confluyeron en la intentona golpista y permiten vislumbrar los enormes desafíos que luego de la misma afronta el gobierno venezolano, reinstalado en el poder gracias a una impresionante movilización popular.

Partiendo del debate público generado en Venezuela en torno al papel del gobierno de los Estados Unidos en el golpe de estado, Edgardo Lander esboza algunas conclusiones provisorias sobre esta cuestión que ponen de manifiesto –en base al simple análisis de la información pública ya disponible, particularmente de fuentes norteamericanas– la profunda relación existente entre los golpistas y el gobierno de Washington. Por otra parte, Dick Parker analiza la política seguida por el gobierno de Chávez, señalando aquellos errores que, a entendimiento del autor, facilitaron la conformación de un arco opositor heterogéneo pero amplio en términos de los factores de poder que en él confluían. A continuación, Luis Lander y Margarita López Maya examinan la precipitación del golpe de estado a la luz de la reforma petrolera que, iniciada a partir de febrero de 1999 por el gobierno de Chávez, se profundiza con una reciente sanción del paquete de decretos-leyes y la renovación de la conducción de la empresa estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.). Más allá de sus límites y dificultades, esta política petrolera procuró construir una alternativa frente a los modelos pautados por la globalización neoliberal, enfrentando la creciente beligerancia del gobierno norteamericano. La contribución de Antonio González Plessmann, por último, pone de manifiesto el contraste entre el discurso “democrático” enarbolado por la oposición para desestabilizar el gobierno constitucional y las acciones anticonstitucionales del efímero gobierno de Carmona Estanga y sus aliados, lo que pone de relieve la extraordinaria laxitud con que la fugaz dirigencia opositora consideró las cuestiones constitucionales y legales en la medida en que éstas fuesen funcionales a la preservación de sus intereses. En la sección Documentos, presentamos un relato de los hechos protagonizados por los distintos sectores de poder y la sociedad venezolana durante los cuatro días transcurridos desde el inicio de los acontecimientos, con la

concentración en la sede de PDVSA en el Chuao, hasta el retorno de Chávez al gobierno del país. Asimismo, publicamos el primer y único decreto emitido por el gobierno encabezado por Pedro Carmona Estanga.

En la sección Cronologías José Seoane reflexiona sobre la crisis de régimen abierta en la Argentina en las jornadas de diciembre de 2001 y analiza los procesos acontecidos a lo largo de los primeros meses del presente año, señalando las características que asume la intensa movilización de amplios sectores sociales. El artículo de Aníbal Quijano, a su vez, ofrece un pormenorizado examen de la situación política peruana bajo el gobierno del presidente Alejandro Toledo, revelando la continuidad de las políticas neoliberales iniciadas durante el régimen fujimorista. La perdurabilidad de la recesión, la desinversión, el desempleo y la pobreza señaladas en este trabajo permiten entender la amplitud de la reciente protesta en la región sur del Perú (particularmente en Arequipa) contra la política económica y las privatizaciones encaradas por el gobierno de Toledo. Por último, en esta sección, se publica un artículo de Armando Bartra con un análisis del Encuentro Campesino Mesoamericano en el cual participaron numerosas organizaciones y movimientos sociales con el objetivo de discutir las políticas agrícolas excluyentes, los tratados comerciales y fundamentalmente el impacto del Plan Puebla Panamá. Con este artículo, el *OSAL* pretende dar continuidad a las reflexiones iniciadas en el número 4 de nuestra revista sobre este proyecto que –promovido por los gobiernos mexicano y norteamericano– constituye una grave amenaza a los derechos y condiciones de vida de los pueblos de la región.

Finalmente, en la sección de Debates Teóricos abordamos –en una línea que esperamos continuar en el próximo número– el intenso debate suscitado alrededor del reciente libro *Imperio* de Toni Negri y Michael Hardt. En este caso, en primer lugar, se presenta un artículo donde dichos autores exponen los argumentos centrales de su reflexión, con particular referencia al problema de la democracia. A continuación, Atilio Boron realiza un análisis crítico de dicha perspectiva haciendo hincapié en la continuidad histórica existente entre algunos componentes característicos del imperialismo y los que predominan en la actual fase de la mundialización neoliberal. Pese a los cambios, para Boron, el imperialismo conserva su identidad y estructura y sigue desempeñando su función histórica en la lógica de la acumulación global del capital. A la luz del proceso en Latinoamérica, esta discusión sobre la conceptualización de las nuevas formas de dominación a nivel internacional y nacional, del rol del estado-nación y las perspectivas emancipatorias cobra una urgente actualidad.

Como señalamos anteriormente, muchos países de América Latina se enfrentan hoy a renovados desafíos que exigen impostergables definiciones programáticas. La crisis del orden neoliberal forjado en los años noventa refuerza la necesidad de imaginar un futuro diferente y de postular salidas alternativas. Se trata ciertamente de un proceso signado por oscuras sombras pero también por renovadas esperanzas, y ante el cual ninguna actitud podría ser más nefasta que la prescindencia ética fundada en una supuesta exigencia del método científico.

El abril venezolano: golpe de estado y resistencia popular

Edgardo Lander

*El papel del gobierno de los EE.UU.
en el golpe de estado
contra el Presidente Chávez.
Una exploración preliminar*

Dick Parker

*Debilidades en la conducción política
del proceso también facilitaron el golpe*

Luis E. Lander y Margarita López Maya

Venezuela, golpe y petróleo

Antonio J. González Plessmann

*Venezuela: oposición y
estado de derecho*

El papel del gobierno de los EE.UU. en el golpe de estado contra el Presidente Chávez.

Una exploración preliminar

Por Edgardo Lander*

¿Cuál ha sido el papel del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, del Pentágono, de la Embajada en Caracas en el golpe de estado realizado el 11 de abril en contra del gobierno constitucional del Presidente Chávez? Como ha ocurrido en las múltiples experiencias de intervenciones directas o mediadas de los Estados Unidos en el derrocamiento de gobiernos que no eran considerados como satisfactorios, sólo con el tiempo será posible saber qué fue lo que efectivamente ocurrió. En cada uno de los casos en que posteriormente se comprobó la intervención directa de agentes del gobierno de los Estados Unidos en golpes militares latinoamericanos –entre los cuales destacan los de Venezuela (1948), Guatemala (1954), Brasil (1964) y Chile (1973)– los funcionarios del gobierno estadounidense negaron toda ingerencia en los asuntos del país donde ocurrió el golpe. Las denuncias iniciales siempre han sido descalificadas de infundadas. En cada uno de estos casos, en la medida en que se logró acceso a los memorándum internos del Pentágono y del Departamento de Estado, así como las comunicaciones con la embajada en el país en cuestión, se confirmó plenamente la participación directa de los Estados Unidos.

Dada la información confiable disponible a pocas semanas del golpe, es temprano aún para llegar –en forma responsable– a conclusiones definitivas. Es, sin embargo, abundante la información públicamente disponible, especialmente en medios impresos norteamericanos, que sugiere que la administración Bush jugó efectivamente un papel significativo. Por ello, más que conclusiones, el presente texto se propone destacar algunas de las líneas de indagación que han sido hasta ahora apuntadas en el debate público. Por ahora está claro tanto el profundo disgusto que le produce al gobierno de los Estados Unidos el gobierno de Chávez, como las expresiones de satisfacción con las cuales responde a las primeras noticias de su derrocamiento.

* Profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela



Son múltiples los motivos del malestar que en estos tiempos de globalización neoliberal hegemonizada por los Estados Unidos tiene el gobierno de dicho país con uno que ha tenido la osadía de proponer, para Venezuela y para América Latina, una alternativa autónoma y *popular*. Han sido consideradas como particularmente inaceptables las siguientes posturas del gobierno venezolano:

- 1) crítica al mundo unipolar e intentos de fortalecer el multipolarismo en las relaciones internacionales; ampliación de las relaciones políticas y comerciales con países del Sur;
- 2) contribución al relanzamiento de la OPEP y la consecuente recuperación de los precios del petróleo; cuando los Estados Unidos está abiertamente programando una estrategia de invasión a Irak (Shanker y Sanger, 2002), la seguridad y ampliación del suministro petrolero venezolano se convierte en un asunto estratégico de primer orden;
- 3) críticas al Plan Colombia;
- 4) negativa a autorizar vuelos militares y de la llamada guerra contra la droga sobre territorio venezolano;

5) relaciones diplomáticas y visitas presidenciales a países de la OPEP considerados por los Estados Unidos como “terroristas”, en particular Irán, Libia e Irak;

6) falta de un apoyo incondicional a la *guerra contra el terrorismo*; destacan aquí las afirmaciones de Chávez de acuerdo a las cuales no es posible responder al terrorismo con terrorismo;

7) relaciones fraternas con el gobierno cubano, especialmente el suministro de petróleo mientras Estados Unidos hace esfuerzos por imponer su bloqueo a la isla;

8) autonomía de voto de Venezuela en los diferentes foros internacionales, mientras muchos de los gobiernos latinoamericanos son (exitosamente) presionados para votar de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos; es este el caso, por ejemplo, de la acusación a Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

9) la insistencia del gobierno venezolano en que dadas las extremas desigualdades existentes entre los Estados Unidos y América Latina, no están dadas las condiciones para una Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que no favorezca los intereses de los Estados Unidos y sus corporaciones. Esto no puede sino perjudicar a las poblaciones más pobres del continente. Por ello el gobierno venezolano ha planteado en forma reiterada la necesidad de avanzar primero en mayores niveles de integración en América Latina. Igualmente ha insistido en que es de tal trascendencia para los países de América Latina los acuerdos que están contemplados en el ALCA, que –tal como lo exigen muchos movimientos sociales en toda Latinoamérica– estos acuerdos no deben ser firmados sin antes someterlos a la consideración democrática de la población mediante un referéndum en cada país. El ALCA es en la actualidad, la principal iniciativa de los Estados Unidos para todo el continente.

La política del gobierno estadounidense hacia Venezuela está enmarcada tanto dentro de la agresiva política global de la llamada *doctrina Bush*, de acuerdo a la cual o se está con los Estados Unidos o se está en contra y por lo tanto se es sospechoso de terrorista o de auxiliar a terroristas, como de las formas específicas que adquiere esta política en relación a América Latina. La mayoría de los responsables de la política de los Estados Unidos para América Latina tienen una agenda que no ha superado el anticomunismo mili-

tante de la guerra fría, contando con una amplia experiencia en guerras sucias (Villiamy, 2002). Siete de los doce funcionarios con mayor responsabilidad en relación a América Latina en el Departamento de Estado son de origen cubano, con una fuerte agenda en contra del régimen cubano y sus “amigos”. Entre otros actuales funcionarios, Otto Reich, el Secretario de Estado Asistente para el Hemisferio Occidental, tuvo una destacada responsabilidad en las políticas de apoyo a los contras en Nicaragua durante el gobierno de Reagan (Campbell, 2002[b]).

Han sido múltiples, y muy públicas, las expresiones de la oposición del gobierno del Presidente Bush al gobierno venezolano. Desde el inicio de su gestión, la administración Bush ha expresado en forma reiterada –en ocasiones con tono amenazante– su desagrado con el gobierno de Chávez, ya sea en declaraciones del propio presidente o por la vía de sus principales funcionarios de política exterior, el Secretario de Estado Collin Powell o la Consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice.

Acentuando el desagrado con el gobierno de Chávez, altos funcionarios de la administración Bush se han reunido en forma pública y reiterada con los más destacados representantes de la oposición (golpista) política, militar y empresarial. El peregrinaje de las principales figuras de la oposición a Washington formó parte del preámbulo a la organización del golpe en Venezuela (Marquis, 2002[a])¹, tema que fue discutido abiertamente en estas reuniones (Marquis, 2002[b]; De Young, 2002; Barón, 2002; El País, 2002[b]; Cornwall, 2002).

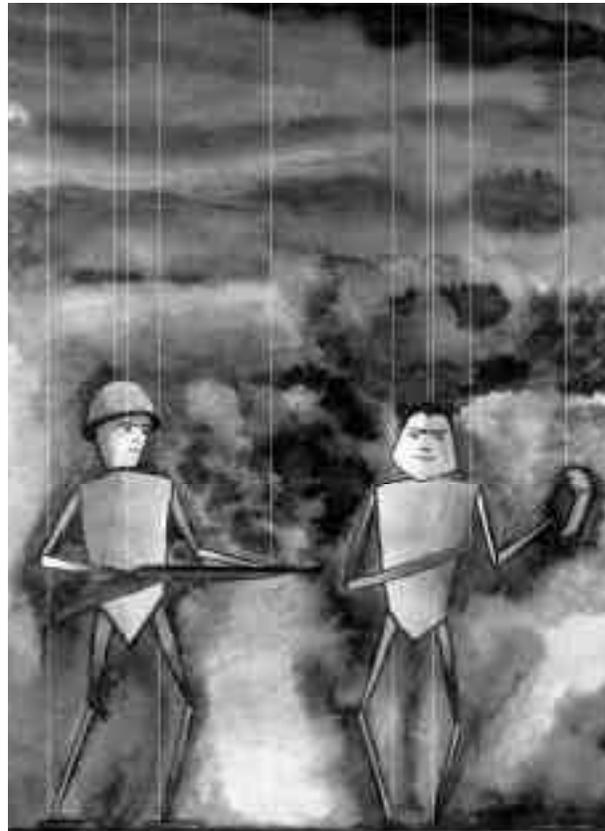
No se trató sólo de discusiones y de apoyo moral. Está bien documentado el financiamiento directo por parte del gobierno de los Estados Unidos a muchas organizaciones de la oposición venezolana, incluso a algunas de las que estuvieron directamente involucradas en el golpe de estado. Este financiamiento ha sido otorgado principalmente a través del *National Endowment for Democracy* (NED). El NED es una organización conservadora financiada por el Congreso de los Estados Unidos que fue creada a comienzos de la década de los ‘80, durante el gobierno de Ronald Reagan. Su propósito es la promoción de la democracia, en palabras de la *Heritage Foundation*, como vía para promover los “intereses nacionales de los Estados Unidos” y “facilitar las reformas de libre mercado que con frecuencia ofrecen oportunidades para la inversión y el comercio internacional” (Phillips). Opera principalmente mediante el apoyo a gru-

“La política estadounidense hacia Venezuela está enmarcada dentro de la doctrina Bush, de acuerdo a la cual o se está con los Estados Unidos o se está en contra y por lo tanto se es sospechoso de terrorista o de auxiliar a terroristas...”

pos que defienden la libre empresa y la visión norteamericana de la democracia en todo el mundo, mediante financiamiento y asesoramiento, sustituyendo así a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en muchas de sus actividades de subversión de gobiernos y movimientos populares en el extranjero (Blum, 2000). Los principales recipientes de su apoyo han sido asociaciones civiles y partidos políticos de oposición a los gobiernos que desagradan al de los Estados Unidos, así como organizaciones sindicales opuestas a las corrientes combativas del movimiento obrero. Es amplio el espectro de organizaciones de la oposición cubana que han recibido un generoso financiamiento del NED durante las últimas dos décadas.

De acuerdo al NED, Venezuela es un caso de régimen *semi-autoritario*, en el cual “no hay elecciones libres y justas” y hay “serias violaciones en los derechos humanos” (ISS, 2002). En Venezuela en el año 2000, entre las organizaciones de la llamada “sociedad civil democrática” que fueron financiadas por el NED está el Centro de Divulgación de Conocimiento Económico (CEDICE) y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV). La Gerente General de CEDICE, Rocío Guijarro Saucedo, en representación de la “sociedad civil”, firmó el decreto golpista que abolió todo el orden constitucional el 11 de abril. La CTV es la organización sindical de oposición cuyo llamado a la huelga general indefinida constituyó parte clave de la estrategia golpista. En el año 2001, en la medida en que se acentuaba la polarización política en Venezuela, los fondos del NED para apoyar a la oposición venezolana se multiplicaron por cuatro, llegando a más de \$877.000 (Marquis, 2002[a]).

Los portavoces de la política exterior de los Estados Unidos no ocultaron su satisfacción por el golpe militar que derrocó temporalmente a Chávez. En la primera declaración oficial, hecha en forma conjunta con España, no se hace referencia alguna a la interrupción del orden constitucional. Sólo “expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el breve plazo a la normalización democrática plena y sirva para lograr un consenso nacional y la garantía de los derechos y libertades fundamentales” (Reeker, 2002). De acuerdo al *Washington Post*, los funcionarios del gobierno de Bush, sin lograr ocultar su satisfacción por la salida de Chávez, se refirieron al hecho no como un golpe de estado, sino como un “cambio de gobierno”, producto de la voluntad del pueblo venezolano. Adicionalmente, le atribuyeron al propio Chávez la responsabilidad por su derrocamiento (Sleven, 2002; *The Guardian*, 2002)². El día después del golpe, el Embajador de los Estados Unidos en Caracas, Charles Shapiro, se reunió con el presidente golpista. Refiriéndose a un gobierno que acababa de desconocer la totalidad del orden constitucional, declaró a la prensa: “Alabamos (su) intención de fortalecer las instituciones y los procesos democráticos dentro



de un marco de respeto a los derechos humanos y estado de derecho” (El Nacional, 2002[d]).

Sólo después que la mayoría de los países de América Latina reunidos en San José de Costa Rica condenaron “la interrupción del orden constitucional en Venezuela” e instaron a la normalización de la institucionalidad democrática (Venegas, 2002), y una vez que el golpe comenzó a ser revertido el sábado 13 de abril, vota el representante de los Estados Unidos en OEA a favor de la decisión de la resolución del Consejo Permanente de la organización que condenó “la alteración del orden constitucional en Venezuela” (OEA, 2002). La actitud de prepotencia intervencionista no se alteró con el regreso de Chávez a la presidencia (*El Nacional*, 2002[a]; [b]; *El Universal*, 2002[b]).

Portavoces de algunas de las más connotadas organizaciones de la derecha norteamericana, como la *Heritage Foundation* y el *International Republican Institute*, expresaron en forma inmediata su satisfacción con el golpe de estado³. Con la notoria excepción del *Washington Post*, la reacción de los principales periódicos de los Estados Unidos fue celebratoria. De acuerdo al *New York Times*, “la democracia venezolana ya no estaría amenazada por un dictador en ciernes”. El *Chicago Tribune* sostuvo: “No es todos los días que una democracia se beneficia de la intervención militar para sacar a un presidente electo” (FAIR, 2002).

El “mercado”, esto es, los dueños del capital, reaccionaron con euforia ante las noticias del golpe. La bolsa de Caracas aumentó en más de 10% en un sólo día, bajó el *riesgo país*, subió el valor del bolívar en relación al dólar, y mejoraron la cotizaciones de los bonos soberanos de la deuda externa venezolana (Hernández Lavado, 2002). El día siguiente al golpe, el Fondo Monetario no sólo reconoció al gobierno golpista, sino que le ofreció su colaboración (*El Universal*, 2002[c]). El gerente general de la Cámara de Comercio Venezolano-americana (Venacham) dio un giro de 180 grados en su evaluación pesimista de la situación venezolana, afirmando que el “cáncer de la desconfianza” se había eliminado con la caída de Chávez (Rodríguez Pons y Rojas Jimenez, 2002). Ante la perspectiva del cambio en la política petrolera venezolana y el consecuente debilitamiento de la OPEP, bajaron los precios del petróleo (*El Nacional*, 2002[c]). Los analistas de Wall Street recibieron con entusiasmo las perspectivas de unas políticas más “amistosas hacia el mercado” (*El Universal*, 2002[d]). Cuando Chávez regresa al poder, los principales analistas financieros declaran que Venezuela pagará las consecuencias (Cason y Brooks, 2002[c]).

Las denuncias más graves que han aparecido en la prensa internacional se refieren a la participación directa de agencias de inteligencia y militares de los Estados Unidos en la planificación y ejecución del golpe de estado. De acuerdo a la generalmente bien informada empresa de inteligencia privada conservadora estadounidense Stratfor:

“Nuestras fuentes en Venezuela y Estados Unidos reportan que la CIA tenía conocimiento, y probablemente hasta apoyó, a los civiles ultra-conservadores y oficiales militares que (intentaron derrocar a Chávez)”. De acuerdo con esta empresa, existían dos operaciones paralelas (CIA y Departamento de Estado) cuyo objetivo era apoyar el derrocamiento del Presidente Chávez (Cason y Brooks, 2002[b])⁴. Wayne Madsen, ex-oficial de inteligencia de la marina de los Estados Unidos, informó al *Guardian* que funcionarios de la agregaduría militar en la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, barcos de la marina y agentes de la lucha contra los narcóticos estuvieron implicados en el golpe (Campbell, 2002[a])⁵. De acuerdo con la hoja de registro de entradas y salidas de la sede de la Comandancia General del Ejército (Fuerte Tiuna) en Caracas, centro de las operaciones militares del golpe de estado, tanto el “jefe de contraterrorismo de la Embajada de los Estados Unidos”, James Gerald Rodgers, como el agregado militar, teniente coronel Ronald Mac Canno, estuvieron en dichas instalaciones en el transcurso del gobierno de facto (Hernández, 2002; *El País*, 2002[a]). Un grupo de senadores y representantes del Congreso de los Estados informaron que estaban promoviendo la realización de una investigación legislativa en vista del “número creciente de informes y admisiones de un papel estadounidense en el intento de derrocar al gobierno de Chávez” (Cason y Brooks, 2002[a]). Los funcionarios del gobierno de los Estados han negado reiterada y categóricamente toda implicación en el golpe (*La Jornada*, 2002; *El Universal*, 2002[a]).



El gobierno venezolano, buscando no incrementar las tensiones que le resultan tan peligrosas para la propia estabilidad, ha intentado bajar el tono de confrontación en sus relaciones con los Estados Unidos y ha hecho esfuerzos sistemáticos por minimizar el papel de éste en el golpe. El conocimiento detallado de la medida y las modalidades de la participación de diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos en el golpe sólo se logrará con el tiempo, y dependerá en buena medida de la actividad investigativa de reporteros y grupos latinoamericanos y estadounidenses con experiencia en la utilización de recursos de acceso a información clasificada tales como el *Freedom of Information Act*.

■ Bibliografía

- Barón, Ana 2002 “EE.UU. admitió que sabía del golpe contra Chávez”, en *Clarín* (Buenos Aires) 17 de abril.
- Blum, William 2000 *Rogue State. A Guide to the World's Only Superpower*, Common Courage Press, Monroe, 189-183.
- Campbell, Duncan 2002[a] “American navy ‘helped Venezuelan coup’”, en *The Guardian* (Londres) 29 de abril.
- Campbell, Duncan 2002[b] “The Coup”, en *The Guardian* (Londres) 22 de abril.
- Cason, Jim y Brooks, David 2002[a] “Legisladores de EU exigen investigar el papel de la Casa Blanca en el golpe en Venezuela”, en *La Jornada* (México) 7 de mayo.
- Cason, Jim y Brooks, David 2002[b] “El departamento de Estado y la CIA habrían apoyado el golpe”, en *La Jornada* (México) 16 de abril.
- Cason, Jim y Brooks, David 2002[c] “Venezuela recibirá un castigo económico advierten analistas de Wall Street”, en *La Jornada* (México) 16 de abril.
- Conrwall, Robert 2002 “Bush aids met plotters before Chavez coup”, en *The Independent* (Londres) 17 de abril.
- De Young, Karen 2002 “U.S. Details Talks With Opposition”, en *The Washington Post* (Washington) 17 de abril, A-8.
- El Nacional* 2002[a] “La Casa Blanca tiene esperanza de que Chávez cumpla su palabra” (Caracas) 30 de abril.
- El Nacional* 2002[b] “Mensaje de Bush a Chávez: “Si hay una lección, es importante que la aprenda” (Caracas) 19 de abril.
- El Nacional* 2002[c] “Precio del petróleo cayó 3% tras la renuncia de Chávez” (Caracas) 13 de abril.
- El Nacional* 2002[d] “Respeto a las instituciones pide la comunidad internacional” (Caracas) 13 de abril.
- El País* 2002[a] “Un militar de EE.UU. estuvo hasta el final con los golpistas de Venezuela” (Madrid) 22 de abril.
- El País* 2002[b] “Venezuela: El Gobierno de EE.UU. se reunió con la oposición antes del golpe” (Madrid) 16 de abril.
- El Universal* 2002[a] “Powel niega participación en el golpe” (Caracas) 6 de mayo, 1-4.
- El Universal* 2002[b] “Powell espera que el golpe haga más ‘sensible’ a Chávez” (Caracas) 25 de abril.
- El Universal* 2002[c] “Fondo Monetario ofrece respaldo a Carmona Estanga” (Caracas) 13 de abril.
- El Universal* 2002[d] “Wall Street respira aliviada” (Caracas) 13 de abril.
- Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR) 2002 “US Papers Hail Venezuelan Coup as Pro-Democracy Move” (Nueva York) 18 de abril.
<<http://www.fair.org/press-releases/venezuela-editorials.html>>
- Hallinan, Conn 2002 “Anatomy of a Coup”, en *San Francisco Examiner* (San Francisco) 3 de mayo.
- Hernández, Taynen 2002 “Dos oficiales de EE.UU. en Fuerte Tiuna”, en *El Universal* (Caracas) 30 de abril, 1-8.
- Hernández Lavado, Vladimir 2002 “Repuntan los bonos de la deuda”, en *El Nacional* (Caracas) 13 de abril.
- Hilton, Isabel 2002 “Cheering on democracy’s overthrow”, en *The Guardian* (Londres) 16 de abril.
- ISS 2002 “Strategy Document, National Endowment for Democracy”, en *IIS Democratization Seminar*, January 29.
<<http://democracy.stanford.edu/Seminar/Gershman.pdf>>
- La Jornada* 2002 “Niega Bush haber intervenido en golpe contra Chávez” (México) 19 de abril.
- Marquis, Christopher 2002[a] “U.S. Bankrolling Is Under Scrutiny for Ties to Chávez Ouster”, en *The New York Times* (New York) 25 de abril.
- Marquis, Christopher 2002[b] “Bush Officials Met With Venezuelans Who Ousted Leader”, en *The New York Times* (New York) 16 de abril.
- OEA 2002 Declaración sobre Venezuela, 13 de abril.
<<http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res811.htm>>
- Phillips, James A. “The National Endowment for Democracy: an Important Weapon in the War of Ideas”, en *The Heritage Foundation, Executive Memorandum N° 360*.
<<http://www.heritage.org/library/categories/forpol/em360.html>>
- Reeker, Philip T. 2002 “US-Spain Joint Statement on the Situation in Venezuela”, en *Deputy Spokesman*,

Department of State (Washington, DC) April 12. <<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/9322pf.htm>>

Rodríguez Pons, Corina y Rojas Jiménez, Andrés 2002 “Venacham y Conapri auguran buen clima para la inversión”, en *El Nacional* (Caracas) 13 de abril.

Shanker, Thom y Sanger, David E. 2002 “U.S. Envisions Blueprint in Iraq Including Big Invasion Next Year”, en *New York Times* (New York) 28 de abril.

Sleven, Peter 2002 “Chavez Provoked His Removal, U.S. Officials Say”, en *New York Times* (New York) 13 de abril, A17.

Stratfor s/d “Strategic Forecasting Venezuela: Rumored U.S. Involvement Could Hurt Bush Administration”. <<http://www.stratfor.com/region.php?ID=5&fPage=2>>

The Guardian 2002 “US Blames Chavez For His Own Ouster” (Londres) 12 de abril.

Venegas, Juan Manuel 2002 “Pide Grupo de Río restaurar la democracia en Venezuela”, en *La Jornada* (México) 13 de abril.

Villiamy, Ed 2002 “Venezuelan coup linked to Bush team”, en *The Observer* (Londres) 21 de abril.

Notas

1 Muchas de estas visitas fueron financiadas por el gobierno de los Estados Unidos.

2 La reacción del gobierno de Gran Bretaña fue similar. Ver Isabel Hilton.

3 De acuerdo al presidente del Instituto Republicano Internacional, “Anoche, encabezados por todos los sectores de la sociedad civil, el pueblo venezolano se levantó para defender la democracia en su país. Los venezolanos fueron llevados a la acción como resultado de la represión sistemática por el gobierno de Hugo Chávez”, “IRI President Folsom Praises Venezuelan Civil Society’s Defense of Democracy”, *Global News*, <<http://prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=PRN12&STORY=/www/story/04-12-2002/0001705053&EDATE=>>>

4 Para el texto completo del informe, ver Stratfor.

5 De acuerdo a esta versión, los barcos de la marina norteamericana habrían interceptado las comunicaciones de los países que expresaron su respaldo al gobierno de Chávez. Ver igualmente Conn Hallinan.



Debilidades en la conducción política del proceso también facilitaron el golpe

Por Dick Parker*

E

l fugaz derrocamiento del presidente Chávez el 11 de abril fue consecuencia, entre otras cosas, de un marcado debilitamiento de su gobierno, sobre todo a partir del último trimestre del año pasado. ¿Cómo explicar este debilitamiento y su contracara —el fortalecimiento de una oposición que, hace apenas un año, lucía minoritaria, fragmentada y desorientada? Para ayudar a responder a este interrogante, proponemos examinar un aspecto del problema que los partidarios del proyecto suelen soslayar: la contribución de errores de conducción política por parte del mismo gobierno.

Empezamos por constatar que el proyecto nacional-popular¹, iniciado a partir de la convincente victoria electoral de diciembre de 1998, desafiaba explícitamente poderes e intereses hegemónicos a nivel nacional e internacional. La retórica anti-oligárquica y de rechazo al neoliberalismo había calado profundamente entre los sectores populares mayoritarios de la nación. Además, más allá de las fronteras, el proyecto suscitaba esperanzas de encontrar, a nivel continental, una alternativa a las políticas impuestas, desde hace tiempo, por las potencias centrales y los organismos financieros internacionales. Se trataba de una brecha que se había logrado abrir y que se proponía ensanchar, con plena conciencia de que los intereses hegemónicos afectados harían todo a su alcance para abortar el proyecto. Son las dimensiones del desafío asumido y la predecible reacción de los intereses potencialmente afectados lo que nos lleva a centrar el análisis en la estrategia política adoptada por el gobierno.

Era evidente, desde el comienzo, que las perspectivas de consolidación del proyecto estaban íntimamente vinculadas a su legitimidad democrática. Los cambios profundos que se proponía introducir serían utópicos si no se consolidaba el masivo apoyo popular logrado, canalizándolo a través de una institucionalidad democrática reconocida más allá de las



fronteras del país. Precisamente por eso, durante el primer año y medio del gobierno, la estrategia se dirigió prioritariamente a modificar el marco institucional a través de mecanismos electorales universalmente reconocidos como medulares para cualquier sistema democrático. Las sucesivas contiendas electorales que llevaron a la aprobación de una nueva Constitución y la posterior “relegitimación” de los poderes públicos tuvieron como propósito expreso “refundar la República” y establecer las bases de un marco institucional más propicio a la política de cambios propuesta. Sirvió, al mismo tiempo, para mantener en estado permanente de movilización a los sectores populares proclives al gobierno.

Paralelamente, el gobierno implementó una política económica diseñada para ampliar los recursos financieros disponibles, sin provocar un enfrentamiento con los organismos financieros internacionales: recuperación de los precios del petróleo a través del fortalecimiento de la OPEP; creación de un Fondo de Estabilización como colchón para eventuales caídas en los precios del crudo; una política doméstica centrada en una disminución de la inflación, lo que excluía la posibilidad de mejoras significativas, a corto plazo, en los ingresos reales de los sectores asalariados. Al mismo tiempo, se prefiguraban las prioridades del proyecto

*Profesor titular del Departamento de Estudios Latinoamericanos, Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela.

umentando significativamente los recursos dedicados a los sectores salud y educación, revirtiendo así una tendencia que había caracterizado las dos décadas anteriores. También se implementó un Plan Social (Plan Bolívar) que involucraba a las Fuerzas Armadas en una campaña de ayuda a los sectores más pobres de la sociedad, concebida para atenuar los problemas más urgentes, mientras no se lograra sentar institucionalmente las soluciones propuestas en el proyecto.

Al año y medio de haber asumido el poder, el gobierno parecía haber consolidado un marco institucional propicio para la implementación de su programa, contando todavía con un nivel de apoyo popular poco común en la historia política venezolana. A esas alturas, un dirigente de uno de los barrios más populosos de Caracas pudo comentar que “este gobierno genera inquietud en la oligarquía más por lo que puede llegar a hacer que por lo hecho hasta ahora. Pero ellos, los poderosos, no lo quieren. De eso no tenemos dudas. Por eso, estamos firmes con él”². En efecto, a pesar de haber desplazado a la élite política tradicional y mantenido a raya el peligro de un descalabro económico, todavía no se vislumbraban medidas que afectaran seriamente los intereses de las clases privilegiadas, que apuntarían a mejorar sustancialmente las condiciones de los sectores empobrecidos o que iniciaran los cambios estructurales prometidos por la Revolución Bolivariana.

Durante esta misma etapa inicial del gobierno, se evidenciaron ciertas debilidades en el proceso que, a la postre, contribuirían a una disminución de su apoyo popular. En las sucesivas elecciones celebradas entre 1999 y 2000, se manifestó un mayor grado de polarización en la votación: mientras que se consolidaba el apoyo entre los sectores populares, ya se había iniciado un proceso de alejamiento de aquellos sectores de la clase media que inicialmente apoyaban al gobierno. Preocupaba la aparente incapacidad de transformar el partido oficialista, el MVR, en algo más que una maquinaria electoral que ya padecía de muchos de los vicios tan criticados en los partidos tradicionales. El mismo proceso que culminó en la sanción de la nueva constitución y la relegitimación de los poderes públicos suscitó dudas respecto a la voluntad del gobierno de promover aquellos aspectos de la nueva Constitución diseñados a encausar la dimensión participativa de la nueva institucionalidad.

Sin embargo, tal vez la más llamativa de las debilidades se puso de manifiesto en la política del gobierno y del MVR frente a los sindicatos. En octubre del año 2000 se produjo

un enfrentamiento entre la directiva de la empresa estatal del petróleo (PDVSA) y el sindicato Fedepetrol, que fue una primera muestra clara de la torpeza del gobierno frente a legítimos reclamos gremiales. El conflicto culminó con una derrota del gobierno y el nombramiento de un nuevo presidente de la empresa pero, además, permitió a un dirigente sindical de Acción Democrática (AD), Carlos Ortega, transformarse en abanderado de la defensa de los derechos sindicales frente a un gobierno tildado de autoritario y arbitrario.

Cuando, en diciembre de 2000, el gobierno promovió la renovación de las autoridades sindicales a través del mecanismo de un referéndum, confiaba en su capacidad de provocar el desplazamiento de aquella dirigencia tradicional dominada por AD que, según mostraban las encuestas, había llegado a niveles de deslegitimación parecidos a aquellos de los partidos tradicionales. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Se le facilitó a la oposición una recuperación de su influencia en los sindicatos y una relegitimación de su liderazgo. El gobierno ganó el referéndum, pero el alto nivel de abstención reflejaba serios cuestionamientos a una iniciativa que muchos interpretaban como una amenaza a la autonomía sindical.

Además, durante el curso de la posterior campaña para la renovación de las autoridades sindicales, se evidenció el reducido peso del MVR entre los sindicalizados. En estas circunstancias, la negativa del partido de gobierno a buscar alianzas con aquellas fuerzas sindicales que desde hace años venían promoviendo una democratización de las estructuras sindicales, debilitó aún más al MVR, reforzando la percepción de que lo que buscaba era menos la democratización de los sindicatos que su subordinación al gobierno. Cuando finalmente se efectuaron las elecciones para la CTV en octubre de 2001, el gobierno prolongó su polémica con la dirigencia sindical, aduciendo serias irregularidades en el proceso (que, en efecto, existían) y negándose a reconocer la victoria de Ortega y la legitimidad de la nueva directiva. Esta confrontación con los nuevos dirigentes de la CTV evidentemente facilitó su incorporación a una estrategia política de la oposición dirigida a buscar la renuncia o el desplazamiento del Presidente.

La incorporación de la cúpula empresarial, representada por Fedecámaras, a la ofensiva política, también estuvo facilitada por una iniciativa del gobierno. En noviembre de 2001, el Ejecutivo aprobó 49 leyes mediante el recurso de la Ley Habilitante sancionada anteriormente por la Asamblea Nacional, sin propiciar un debate público con los dis-

“La manera indiscriminada en que se descalificaba a la oposición [abrió] frentes de conflicto en forma igualmente indiscriminada. Esto ayudó a unificar a la oposición, no en torno a un proyecto alternativo, sino tras la consigna ‘fuera Chávez.’”

tintos sectores afectados, lo que seguramente hubiera reducido la magnitud de los conflictos a posteriori. Aun cuando la mayoría de estas leyes no eran controversiales, varias eran claves para su proyecto, destacándose la Ley de Hidrocarburos, que constituía el marco para iniciar la reforma petrolera, y la Ley de Tierras. La protesta empresarial, iniciada por la Federación de Ganaderos en contra de la Ley de Tierras, rápidamente se extendió hasta llevar a Fedecámaras a una postura de duro enfrentamiento con el gobierno. Así, y sin que se vislumbrara una recuperación significativa de la influencia de los partidos de oposición, se produjeron las condiciones para que una alianza entre las organizaciones cupulares sindicales y empresariales se transformara en eje de una ofensiva política de la oposición.

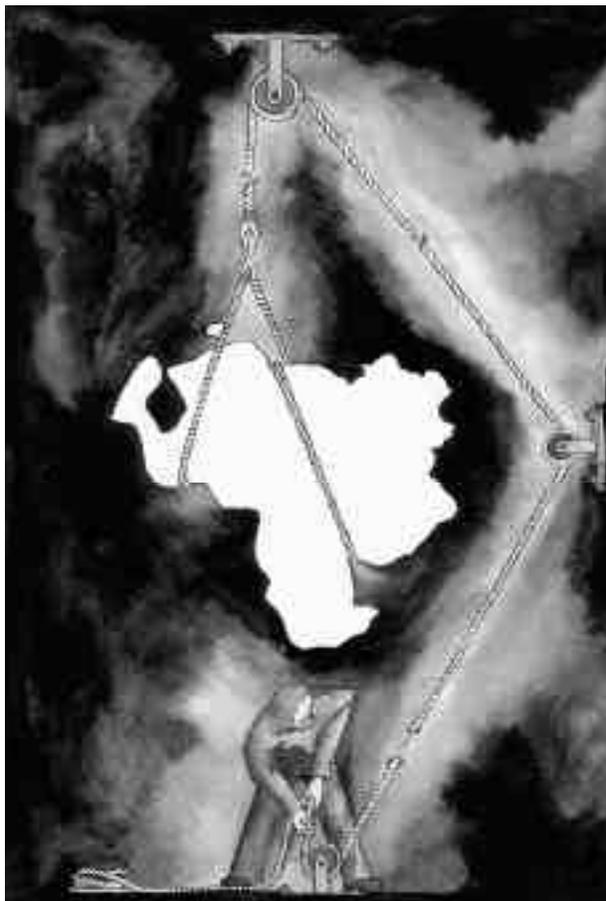
La ofensiva encabezada por la CTV y Fedecámaras, iniciada con el paro del 10 de diciembre de 2001, se produjo en un contexto marcado por los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Para el gobierno venezolano, eran dos las consecuencias más relevantes de ese acontecimiento: primero, un endurecimiento general de la política exterior de los Estados Unidos que inevitablemente se reflejaría en una postura menos tolerante frente al gobierno venezolano; y, segundo, la caída de los precios del petróleo por debajo del límite inferior de la banda que venía defendiendo la OPEP. El ejecutivo se vio obligado a revisar sus previsiones presupuestarias para el año 2002 y la oposición anticipaba que las dificultades económicas ya previstas (aun en caso de mantenerse precios estables en el mercado petrolero) se harían inmanejables. Se esperaba un sustancial déficit fiscal, una pérdida de control sobre las tasas de inflación y un apreciable deterioro de las condiciones de vida de los asalariados reflejado, a su vez, en una creciente conflictividad laboral y una erosión mayor de los niveles de apoyo popular al gobierno. En estas circunstancias, se anticipaba que una ofensiva de la oposición que orquestara organizaciones sindicales y empresariales, una clase media movilizada a través de las organizaciones de su "sociedad civil", los medios de comunicación, la jerarquía eclesiástica y sectores desafectos al régimen dentro las fuerzas armadas, sería capaz de tumbar al gobierno.

De hecho, en el primer trimestre de 2002, los precios del petróleo se recuperaron y, a la altura del 11 de abril todavía no se había materializado la esperada crisis económica, ni tampoco la situación de grave conflictividad laboral que anticipaba la oposición. El enfrentamiento se había precipitado a consecuencia de otra iniciativa del gobierno: el nombramiento, en febrero, de una nueva directiva en PDVSA y la posterior aplicación del 'principio de autoridad' frente a las protestas de los cuadros gerenciales de la empresa. Sin embargo, más allá de la aparente torpeza del gobierno frente al conflicto en PDVSA, la precipitación de la crisis política parecía más bien consecuencia de una decisión

gubernamental de desafiar la ofensiva encabezada por la dirigencia sindical y empresarial. En enero se produjo la salida del Ministerio del Interior y del gabinete de Luis Miquelena, figura clave en cualquier intento de dialogar con la oposición. Al mismo tiempo, los nuevos nombramientos para los dos Ministerios claves para negociaciones con los empresarios y los sindicatos (de Industria y Comercio y de Trabajo) parecían indicar una falta de interés en el diálogo.

Como nuestro análisis se ha concentrado en el problema de la estrategia política del gobierno y los errores de conducción política, terminamos señalando cómo entendemos el carácter general de estos errores, apuntando así hacia las rectificaciones que parecieran necesarias, no simplemente como concesiones a la oposición, sino más bien como condiciones imprescindibles para aprovechar el fracaso del golpe y la posibilidad de un segundo aire para adelantar el proyecto.

Pareciera que el notable éxito de la ofensiva política desarrollada a partir de la victoria electoral de Chávez en 1998 hubiera llevado al presidente, al gobierno y al MVR a sobreestimar la fuerza real que se había conquistado a través de su amplio dominio de las instituciones públicas nacionales. Más allá de las contradicciones y errores puntuales que





inevitablemente surgen en un intento de llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como el planteado, parece evidente que el lenguaje beligerante, pugnaz y muchas veces despectivo con que el presidente Chávez ha encarado una oposición caracterizada como “enemigo del proceso”, había contribuido a caldear los ánimos más allá de lo conveniente para que el proceso pudiera efectuarse dentro de los cauces de un mínimo de convivencia democrática. Pero el problema no era simplemente de forma o de estilo. La manera indiscriminada en que se descalificaba a la oposición tuvo como consecuencia que se abrieran frentes de conflicto en forma igualmente indiscriminada. Esto indudablemente ayudó a unificar a la oposición, no en torno a un proyecto alternativo, sino tras la consigna “fuera Chávez”.

Otro aspecto de este problema general de conducción política llevó al debilitamiento de la alianza que respaldaba al gobierno, hasta el punto de poner en peligro la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. En ocasión de la reelección de las instituciones representativas en julio de 2000 se rompió la alianza con el PPT (Patria Para Todos), dejando a este último partido sin representación parlamentaria. La posterior reconciliación entre el PPT y el gobierno no pudo remediar esta situación, de manera que, a nivel parlamentario, se acentuaba la importancia de la alianza con el MAS (Movimiento al Socialismo). Cuando a comienzos de 2001 los máximos dirigentes del MAS asumieron una postura de “apoyo crítico” al proceso, el gobierno intentó aprovechar la renovación de sus autoridades internas para desplazar a los dirigentes “críticos” por otros considerados más afines. El resultado fue una división del partido y el paso de la mayoría a la oposición. Por último, la radicalización de la postura del gobierno frente a la oposición, reflejada en la

salida de Luis Miquelena, llevó a la marginación del MVR de cuatro parlamentarios, abriendo así, por primera vez, la posibilidad de una pérdida de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.

Quienes venían preparando el golpe necesitaban unificar la oposición en torno a la exigencia de la renuncia de Chávez y, evidentemente, promovieron todas las acciones de calle que pudieran provocar una crisis de gobernabilidad. Pero la exacerbada polarización política que precedió al golpe no fue exclusivamente responsabilidad de la oposición, ni mucho menos una simple expresión de la conspiración. Fallas en la conducción política del gobierno facilitaron a los golpistas un piso político donde había muchos que no creían en una salida de fuerza. Afortunadamente, Chávez no llegó a renunciar y los golpistas rápidamente revelaron su vocación autoritaria, de manera que se pudo abortar el golpe. Ahora, el gobierno reconoce la necesidad de una rectificación. Nuestro análisis sugiere que la rectificación que urge no tiene por qué pasar por un abandono del proyecto; pero sí requiere de una conducción política más a la altura.

■ Notas

1 Para una discusión del proyecto, ver Parker, Dick 2001 “El chavismo: populismo radical y potencial revolucionario” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas), Vol. 7, N° 1, 13-44.

2 Juan Contreras, citado en Aznárez, Carlos 2000 *Los sueños de Bolívar en la Venezuela de hoy* (Nafarroa-Navarra: Editorial Txalaparte) 200.

Venezuela, golpe y petróleo

Por Luis E. Lander* y Margarita López Maya**

Pocas cosas ocurren en Venezuela que no tengan que ver, directa o indirectamente, con el petróleo. Este es uno de los principales países productores de hidrocarburos en el mundo, y su papel en el mercado energético internacional es aun más importante. Ha sido una fuente segura de abastecimiento para los consumidores del hemisferio occidental y muy especialmente para los EE.UU. Por ello es indispensable evaluar las incidencias que el petróleo haya podido tener en el fallido golpe de estado del 11 de abril.

Desde que Chávez asumió el poder en febrero de 1999, se inició una reforma en la política petrolera que había sido dominante en la década anterior. La nueva orientación rescata aspectos esenciales de la larga tradición petrolera venezolana y busca superar algunas orientaciones consideradas equivocadas y que se habían venido estableciendo desde la nacionalización en 1976¹. En los días iniciales mismos de la nueva gestión se tomaron iniciativas para recuperar el papel de la OPEP como actor regulador del mercado internacional. Al asumir el gobierno, los precios internacionales de los hidrocarburos estaban en su punto más bajo en años. Para ese mes el precio promedio de la cesta venezolana de crudos y derivados llegó a desplomarse a \$ 8,43 el barril. Como resultado de las iniciativas promovidas por el nuevo gobierno los precios comenzaron a recuperarse de inmediato, y la OPEP a fortalecerse. En reconocimiento al activo papel de Venezuela en este proceso, Caracas fue aceptada como sede, en septiembre de 2000, de la segunda conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la organización. Además, el primer ministro de Energía y Minas del gobierno de Chávez, Alí Rodríguez Araque, fue primero designado como presidente de la OPEP y luego Secretario General de esa organización.

Aunque comprender a cabalidad una reforma petrolera puede resultar complejo, son cuatro los rasgos básicos de la reforma en marcha que nos interesa destacar en este análisis².

* Profesor de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela.

**Historiadora. Profesora de la Universidad Central de Venezuela. Directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales.



Primero, busca recuperar para el Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Energía y Minas, el papel rector en el diseño, definición e implementación de las políticas públicas referidas al sector. Antes de la nacionalización, el ministerio del ramo había progresivamente aumentado su capacidad técnica y política de supervisión y control sobre las transnacionales energéticas que operaban en el país. A partir de la nacionalización misma en 1976, y con más fuerza en la pasada década con la llamada *Apertura Petrolera*, la alta gerencia de PDVSA fue desplazando al Ministerio en el ejercicio del crucial rol de conducción política para el sector. Segundo, persigue alcanzar niveles apropiados de ingresos fiscales de origen petrolero. Para ello la reforma privilegia la regalía sobre los impuestos. Cobrar regalía es mucho más sencillo que cobrar impuestos y resulta más transparente. El monto total recaudado a través de la regalía depende de los volúmenes producidos y del precio en el mercado internacional, mientras que los impuestos a las ganancias pasan por determinar los montos de esas ganancias mediante complejos procesos de auditoría. La reforma busca revertir un proceso que se había venido dando en Venezuela, dentro del contexto de la liberalización económica, que traía como resultado que los ingresos fiscales de origen petrolero, que se centraban más en impuestos a la ganancia y reducían la regalía, disminuyeran de manera sostenida y

alarmante. No debe pasarse por alto que el ingreso fiscal petrolero es la forma como los sectores venezolanos no petroleros participan de la principal industria del país.

En tercer lugar, la reforma procura también fortalecer a la OPEP y compromete a Venezuela a respetar los compromisos soberanamente adquiridos con la organización. Este es un eje clave para la articulación favorable de Venezuela en los actuales procesos de globalización. En cuarto lugar, la reforma, sin negar la participación de capitales privados en el sector, frena las tendencias a la privatización de PDVSA. Estos dos últimos aspectos son los que a nuestro juicio generan más roces con el gobierno de los EE.UU. Más adelante ampliaremos por qué.

En el diseño y definición de esta reforma, el gobierno de Chávez ha tenido claridad. Pero en su implementación no han sido pocos los errores y torpezas. Los dos pilares legales de la reforma, la Ley de Gas y la de Hidrocarburos Líquidos, fueron aprobados mediante facultades otorgadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo (leyes habilitantes) que sacaron de la discusión pública los contenidos de estas leyes y de la reforma en su conjunto, dificultando que el ciudadano común identificara los intereses en pugna. En escasos tres años de gestión, el presidente Chávez ha nombrado, incluyendo al designado la segunda quincena de abril, a cinco presidentes de PDVSA. Con alguna razón, la gerencia de la empresa se siente insegura, incómoda e inestable. Con el nombramiento de una nueva directiva presidida por Gastón Parra en febrero de este año, parte significativa de esa alta gerencia entró en abierta confrontación con el gobierno.

Sectores de la llamada “nómina mayor”, es decir los niveles más altos de la gerencia, se erigieron como dirigentes en este conflicto. Alegando que se habían violentado los criterios tradicionales de nombramiento de los integrantes de la directiva de PDVSA al irrespetarse “la meritocracia”, terminaron por convocar un paro laboral que fue respaldado por las centrales sindical y empresarial (CTV y Fedecámaras). Sin embargo, tras el conflicto por los nombramientos, se ocultan otros de mayor trascendencia. La alta gerencia se muestra renuente a renunciar a las cuotas de poder que llegó a alcanzar con la *Apertura Petrolera*. No parecen dispuestos a aceptar que el centro de conducción de las políticas públicas petroleras vuelva al Ministerio. Como muchos han señalado, la empresa ha llegado a ser “un Estado dentro del Estado”, condición que es amenazada por la reforma que de

manera explícita en la nueva legislación busca revertir esto. Tampoco parecen dispuestos a rendir cuentas en forma transparente. La empresa también ha sido señalada por algunos de sus críticos como una “caja negra” por ser difícilmente auditable y haber, de manera sistemática, dificultado a su dueño, el Estado venezolano, conocer cómo se administran sus finanzas³.

En los acontecimientos de la segunda semana de abril que desembocaron en el fallido golpe, PDVSA tuvo un rol protagónico. Como ya mencionamos, el conflicto de PDVSA sirvió de plataforma para el lanzamiento de un paro nacional de 24 horas que degeneró dos días después en una huelga general indefinida, que como toda acción de este tipo tuvo un claro corte insurreccional. Como complemento a la huelga, fue programada por la oposición para el fatídico 11 de abril una marcha que tenía como lugar de llegada la sede de PDVSA en Chuao. Y fue en esa sede donde de forma inesperada e irresponsable dirigentes de la oposición deciden continuar la marcha hasta el Palacio de Miraflores, con el explícito propósito de “sacar a Chávez”. Los hechos de violencia que se desencadenaron en el centro de Caracas, con deplorables saldos de muertes y heridos, sirvieron de justificativo a los pronunciamientos militares que pondrían en marcha el golpe.

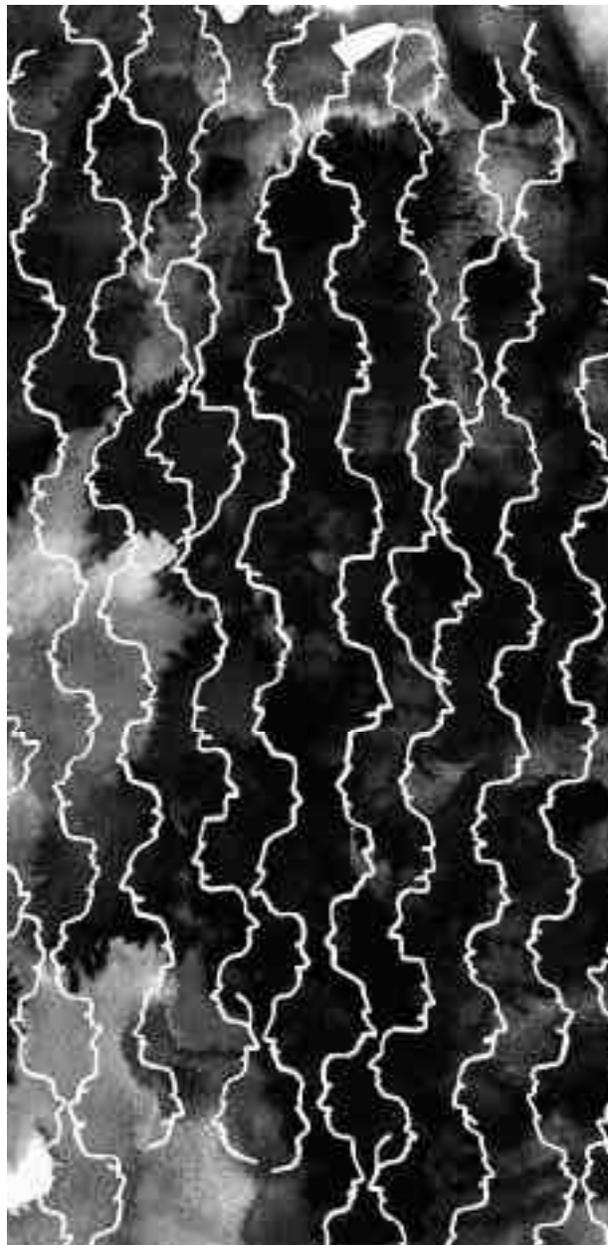
En la agenda del efímero gobierno de facto los asuntos petroleros tuvieron la mayor importancia. Entre los escasos nombramientos que el “presidente” Carmona Estanga llegó a anunciar, estuvo el de Guacaipuro Lameda como presidente de PDVSA. Fue éste el presidente removido en febrero por su oposición a la recién promulgada Ley Orgánica de Hidrocarburos. Lameda expresó en entrevista pública que se iniciaría una recuperación agresiva de mercados, lo que para cualquier conocedor de asuntos petroleros indica que inexorablemente se avanzaría a una confrontación con la OPEP y el inevitable debilitamiento de esta organización. Por su parte, una asamblea de gerentes reunida el mismo día 12 de abril, en medio de un clima festivo y desbordante de alegría y en clara reafirmación de que el centro de conducción de la política petrolera venezolana sería la empresa, anunció el desconocimiento de acuerdos internacionales comprometidos por Venezuela proclamando “ni un barril de petróleo más para Cuba”. Esa asamblea también procedió a hacer nombramientos en la misma empresa, usurpando facultades del Presidente de la República y de la Junta Directiva de PDVSA legalmente constituida.

“...la reforma petrolera no puede verse fuera del proyecto político del Presidente Chávez. [el cual] Con todas sus insuficiencias e indefiniciones, (...) procura, sin rupturas radicales, construir una alternativa frente a (...) la globalización neoliberal.”

La posición del gobierno de EE.UU. en torno a la reforma petrolera en marcha en Venezuela ha sido cuando menos contradictoria. Venezuela no ha dejado en ningún momento de ser un suplidor seguro y estable. Aquí los intereses de ambos países coinciden plenamente. Para EE.UU. el petróleo venezolano es de muy difícil reemplazo, y para Venezuela ese país es, por mucho, su principal cliente. Además, la política de estabilidad de los precios dentro de la banda fijada por la OPEP, que tiene en Venezuela su proponente inicial y un decidido actor, favorece a EE.UU. en su condición de productor de hidrocarburos. Producir hidrocarburos en EE.UU. es más costoso que en otras regiones del mundo, razón por la cual, si los precios bajan en demasía, muchos de sus pozos resultarían no competitivos. En contraste, en su condición de país consumidor e importador, los altos precios no son vistos con simpatía. Sin embargo, para nadie es un secreto que en el actual gobierno de EE.UU. los intereses del sector petrolero están muy bien representados, y no parece que vaya a ser este gobierno quien impulse políticas dirigidas a abatir los precios. No es aquí donde deban esperarse mayores tensiones entre ambos países, aunque es innegable que la relación directa de los EE.UU. con la gerencia de PDVSA resultaría más fluida que con funcionarios de este gobierno. Los primeros siempre han privilegiado los intereses de la empresa sobre los de la nación. No es casual que el principal promotor de la llamada *Apertura Petrolera* desde la presidencia de PDVSA, el Ing. Luis Giusti, sea hoy uno de los asesores petroleros del gobierno de Bush.

Pero hay otras áreas del negocio petrolero donde los intereses de los EE.UU. son más uniformes y distintos a los de Venezuela. Ha sido una posición tajante del actual gobierno venezolano su compromiso con la OPEP. Sin duda, la mayor relevancia actual de esta organización en el escenario mundial es parte de los haberes de Chávez y su política petrolera. Con esto no solamente se ha logrado la recuperación de los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial, sino que además se ha fortalecido a la organización y a los países que la integran. El fortalecimiento político de la OPEP y sus países miembros no puede sino causar aprehensión, cuando no abierto malestar, en el gobierno de los EE.UU. No debe olvidarse que forman parte de la organización países que son tenidos por ese gobierno como sus “enemigos”: Irak, Libia, Irán. No resulta nada sorpresivo dentro de la política de lucha antiterrorista desatada desde el 11 de septiembre de 2001, que en diversos medios de la sociedad estadounidense hoy se esté debatiendo sobre la posible participación de su gobierno en el fallido golpe militar.

En su alocución del mismo día de su retorno a la presidencia, Chávez hizo pública y aceptó la renuncia de la Junta Directiva de PDVSA que se le presentara el mismo día 11. La semana siguiente designó una nueva con importantes cambios. En lugar de Gastón Parra Luzardo, ocupa aho-



ra la presidencia de PDVSA Alf Rodríguez Araque, el actual secretario general de la OPEP. También se incorpora como director externo a Hugo Hernández Rafalli, quien viene de ocupar la presidencia de la Cámara Petrolera de Venezuela que agrupa a los empresarios privados de este sector. Estos cambios han sido públicamente aceptados por el momento por la gerencia de la industria. Con esta aceptación se afirma que la “meritocracia” ha retornado. Pero no hay que olvidar que el nuevo presidente ha sido y sigue siendo uno de los principales promotores y protagonistas de la reforma en curso y esa reforma presupone cambios profundos en PDVSA. Las razones de las tensiones entre PDVSA y el Ejecutivo siguen estando presentes, y podríamos presenciar en el futuro próximo nuevos conflictos.

Adicionalmente, la reforma petrolera no puede verse fuera del proyecto político del Presidente Chávez. Con todas sus insuficiencias, ambigüedades, improvisaciones e indefiniciones, es un proyecto que procura, sin rupturas radicales, construir una alternativa frente a los modelos pautados por la globalización neoliberal. Por ello, sectores importantes de América Latina y el mundo siguen con atención e interés este ensayo. Por el contrario, la primera potencia del mundo no puede verlo sino con disgusto.

■ Bibliografía

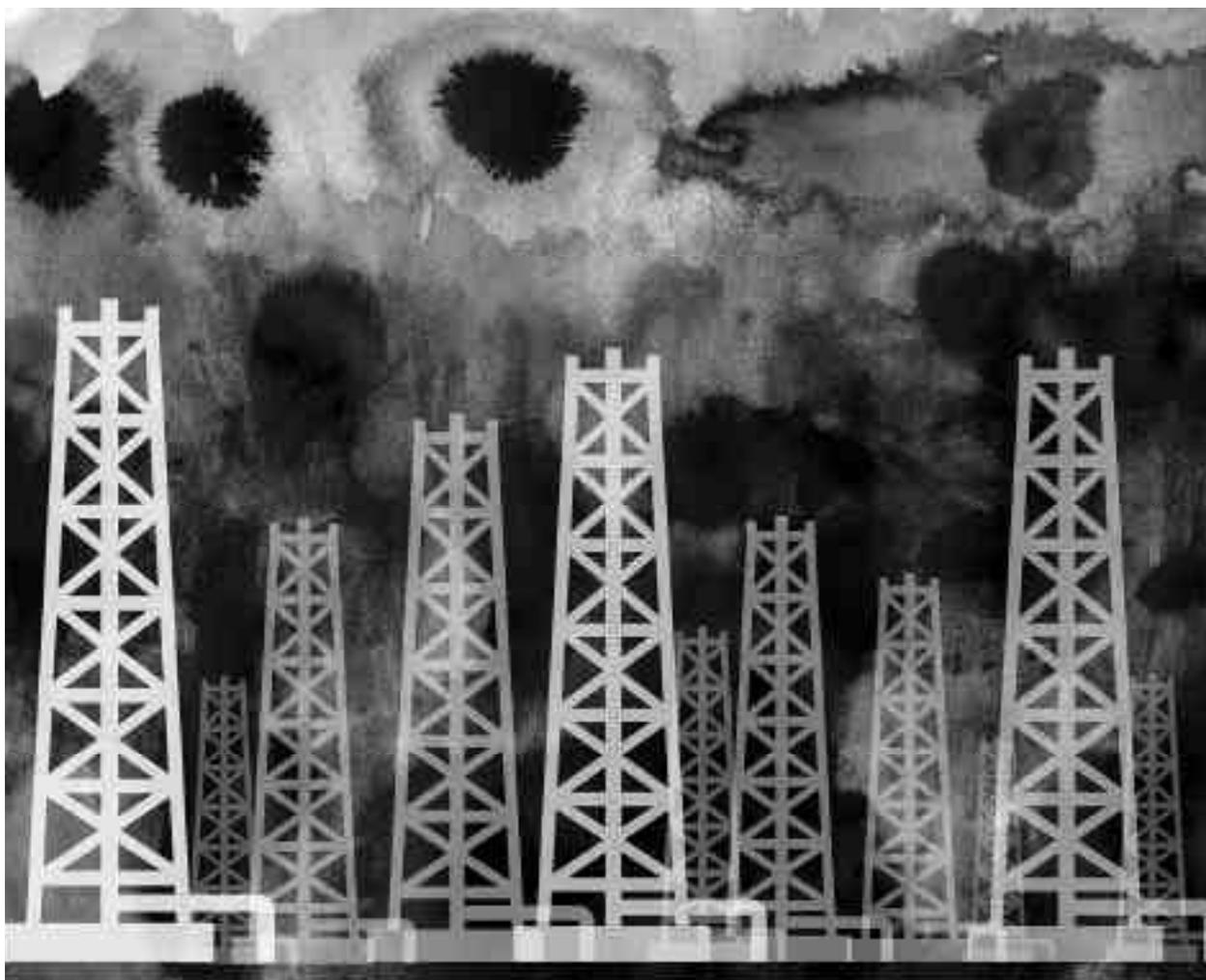
Lander, Luis E. 1998 “‘La Apertura Petrolera’ en Venezuela: de la nacionalización a la privatización”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: Universidad Central de Venezuela). Vol. 4, N° 1, enero-marzo, 153-182.

■ Notas

1 Para una aproximación a la política petrolera anterior al gobierno de Chávez, véase Lander, 1998.

2 La *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* publicará en su segundo número de este año (mayo-agosto, 2002) el tema central dedicado a la reforma petrolera del gobierno de Chávez.

3 En su columna semanal el hoy ministro de Finanzas, economista Tobías Nóbrega, ha escrito reiteradamente sobre este asunto (véase semanario *Quinto Día*).



Venezuela: oposición y estado de derecho

Por Antonio J. González Plessmann*

El irrespeto al estado de derecho por parte del proyecto chavista ha sido el *leit motiv* de la oposición en Venezuela. En particular, la vulneración de la libertad de expresión y del principio de independencia de los poderes públicos. La visibilidad que adquirieron sus críticas facilitó crecientemente la difusión de una imagen del Presidente Chávez como la de un “tirano” y la de su gobierno como la de un “peligro para la democracia”.

No se pretende aquí demostrar que el proyecto chavista ha respetado al pie de la letra las reglas del juego establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni que todo lo señalado por la oposición ha sido una construcción sin sustento. Tampoco cuestionar la legitimidad de que cualquier ciudadano formule señalamientos sobre los ilegalismos cometidos desde el estado y los tramite institucionalmente. La intención es contrastar, brevemente y con los datos provisorios disponibles, algunas de las acciones de la oposición venezolana en los sucesos de abril contra lo que ha sido la fundamentación de su discurso.

■ Sobre la libertad de expresión

El jueves 11 de abril de 2002 el canal público de televisión (VTV), que venía transmitiendo información oficial sobre la crisis política, fue tomado por las fuerzas golpistas y su señal fue tumbada. Al día siguiente, 12 de abril, cinco medios comunitarios de radio y televisión ubicados en zonas populares de Caracas (Radio Perola, Radio Alternativa de Caracas, Radio Catia Libre, CatiaTV y TVCaricuao) fueron allanados sin orden judicial por cuerpos policiales (Llona, 2002)¹. En uno de estos casos (Radio Perola), uno de sus integrantes fue detenido y torturado (Llona, 2002). Igualmente, algunos periodistas afines al oficialismo recibieron amenazas telefónicas que los señalaban como parte de una lista de personas que serían detenidas (Provea, 2002[b]).

Paralelamente, los principales medios de comunicación privados informaban sobre la renuncia del Presidente de la



República y el nombramiento de un “gobierno transitorio” respaldado por un grupo de oficiales militares de alto rango. Ese mismo día y el sábado 13 de abril, en distintas zonas de Caracas y el interior del país se sucedían protestas exigiendo que fuera presentado públicamente el Presidente de la República, las cuales eran reprimidas por organismos policiales (Provea, 2002[a] [b]), al tiempo que militares leales a la Constitución amenazaban con atacar a las autoridades ilegítimas si no restituían al Presidente de la República. Asimismo, voceros del oficialismo como el Ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, convocaban a ruedas de prensa para informar que el Presidente no había renunciado y que se encontraba arbitrariamente privado de su libertad (Gordils, 2002). Entre tanto, los principales canales de televisión transmitían el acto de instalación del gobierno del empresario Pedro Carmona Estanga en el que se celebraba la “transición hacia la democracia”, y omitían completamente cualquier información sobre los hechos antes señalados. Apenas el Fiscal General, Isaías Rodríguez, utilizando un anzuelo, convocó a los medios a una rueda de prensa para “presentar su renuncia” y, una vez iniciada la misma, lejos de plantear la renuncia denunció el golpe de estado (Sallas, 2002). Su entrevista fue abruptamente interrumpida, pero logró unos valiosísimos minutos para la institucionalidad democrática.

* Activista venezolano de derechos humanos.

El domingo 14 de abril, en el contexto de la restitución del hilo constitucional, las principales televisoras del país transmitían programas de concursos, revistas de variedades, comics y películas de ficción, sin ningún tipo de programación informativa. En los días siguientes, empleados de estos medios denunciaron que las directivas habían dictado órdenes para omitir cualquier información de voceros del oficialismo, del partido de gobierno o de sectores que presentarían una versión que asomara que había ocurrido una ruptura del hilo constitucional (Salas, 2002; Moreno, 2002; Mudarra, 2002; Martínez, 2002). Se trataba de un cerco informativo planeado en solidaridad o connivencia con el gobierno de facto.

“La población venezolana vio vulnerado su derecho a recibir información (...), y los voceros del gobierno constitucional y los sectores que exigían la restitución del estado de derecho vieron vulnerada la posibilidad de expresarse.”

La población venezolana vio vulnerado su derecho a recibir información sobre lo ocurrido en el país, y los voceros del gobierno constitucional y los sectores que exigían la restitución del estado de derecho vieron vulnerada la posibilidad de expresarse. De tal vulneración fueron corresponsables las autoridades del gobierno de facto y las empresas privadas que administran medios impresos y radiotelevisivos. Tanto los dueños de los medios de comunicación como muchos de quienes apoyaron al gobierno de facto habían asumido con mucha fuerza, en el pasado inmediato, la defensa de ambos derechos (Provea, 1999, 2000 y 2001).

■ **Sobre la división e independencia de los poderes públicos**

El viernes 12 de abril, el gobierno de facto emitió un decreto mediante el cual, en su artículo 3, suspendía “de sus cargos a los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional”; en su artículo 7 autorizaba al Presidente de facto la posibilidad de “remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estatales y municipales [...] así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos Andinos y Latinoamericanos”, y en su artículo 8 destituía “de sus cargos [...] al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia” (Decreto, 2002), concentrando de esta manera en la Presidencia de la República el control de todos los poderes públicos. El derecho a elegir y ser elegido, así como el principio de división e independencia de los poderes, fue radicalmente vulnerado por el gobierno de facto.

En el acto de presentación del decreto, que se desarrollaba en un ambiente festivo, estaban presentes representan-

tes de la jerarquía eclesiástica, financiera, empresarial, de partidos de oposición, de medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales, la mayoría de los cuales habían cuestionado públicamente en 1999, por inconstitucional, el proceso de designación de los poderes Judicial y Ciudadano. En la mañana y la tarde de ese día también visitaron el Palacio de Gobierno, según se aprecia en videos mostrados a posteriori, destacados periodistas, abogados constitucionalistas de importantes bufetes, y embajadores. Al día siguiente, un grupo de ciudada-

nos, entre los que se encontraban seis dirigentes de ONG que han tenido una intensa movilización por la defensa del estado de derecho durante el gobierno chavista², hacían público un comunicado titulado “La sociedad civil saluda el renacimiento de la República de Venezuela” en el que se reconocía “la legitimidad democrática del nuevo Presidente provisional de la República de Venezuela, Dr. Pedro Carmona Estanga” y se apoyaba “firmemente el proceso de reconstrucción democrática del país” (Santana y otros, 2002).

Uno de esos dirigentes, Elías Santana, representante de la ONG Queremos Elegir, había señalado, quizá premonitoriamente, el 5 de febrero del mismo año, que habría que pensar en la posibilidad de que la sociedad buscara “cauces democráticos y pacíficos, con el concurso de la Fuerza Armada, para que haya una salida institucional” (Santana, 2002). No quedaba claro entonces, ni quedó luego del 11 de abril, cómo se conjugaría lo “institucional” con “el concurso de la Fuerza Armada”. Lo que sí parece estar claro, a la luz de su comportamiento emblemático en estos sucesos, es que su visión del estado de derecho no es necesariamente incompatible con un golpe de estado, siempre que éste se haga contra un “tirano” con las características del actual Presidente de la República.

■ **Sobre el poder y la tolerancia de ilegalismos**

En 48 horas mucho de lo que le ha valido legítimas críticas al gobierno de Chávez fue caricaturescamente exagerado por el brevísimo gobierno de las élites económicas, develando con ello su disposición y la de sus aliados a ser tolerantes con algunos ilegalismos, siempre que éstos se inserten en un proyecto funcional a sus intereses.

El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Dr. Juan Méndez, luego de su visita *in loco* a Venezuela y ante la pregunta periodística

“¿Considera que en Venezuela hay democracia plena?”, respondió: “No. Tampoco en los 35 países que están bajo competencia de la CIDH” (Alvarez, 2002). El estado de derecho es débil en la mayoría de los países de la región, era débil en Venezuela antes del chavismo y lo siguió siendo durante el chavismo. Sin embargo, en Venezuela esa debilidad se hizo más visible que en otros lugares y otros tiempos, al punto de presentarse como justificatoria de un golpe de estado.

Tal visibilidad, que indudablemente tiene un sustento en la realidad, es el producto del ejercicio de grandes poderes nacionales e internacionales que, por razones ajenas a una auténtica preocupación por el fortalecimiento de la democracia (tal como demostraron en abril), encuentran en el proyecto chavista una amenaza u obstáculo a sus propósitos. Una línea, a nuestro juicio sugestiva, para intentar comprender la orientación estratégica de esos poderes, podría encontrarse en el hecho mismo del renacimiento del lenguaje *macarthista* en el debate político venezolano.



Bibliografía

Álvarez, Irma 2002 “Algunos círculos bolivarianos están armados (Entrevista al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Juan Méndez)” en *Diario El Universal*, 12 de Mayo, 1-4.

Decreto 2002 Pedro Carmona Estanga, 12 de Abril, mimeo.

Gordils, Ramón (funcionario directivo del Ministerio de Educación Cultura y Deportes) 2002 Testimonio 12 de Abril.

Llona, Gorka 2002, 10 de mayo, mimeo.

Martínez, Ibsen 2002 *Diario El Nacional* 20 de Abril, A-8.

Moreno, Eleonora (periodista de radio) 2002 Testimonio presentado en el Foro “La responsabilidad social de los medios”, organizado por la ONG Por Todos los Medios. Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” (Celarg) Caracas, 3 de Mayo.

Mudarra, Pavel (periodista del Diario 2001) 2002 Testimonio presentado en el Foro “La responsabilidad social de los medios”, organizado por la ONG Por Todos los Medios. Centro de Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” (Celarg) Caracas, 3 de Mayo.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Caracas: Provea) 2002[a], 13 de abril, mimeo. <www.derechos.org.ve>

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Caracas: Provea) 2002[b], 12 de abril, mimeo. <www.derechos.org.ve>

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Caracas: Provea) 2001 *Situación de los*

Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual. 2000–2001 (Caracas: Provea). <www.derechos.org.ve>

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Caracas: Provea) 2000 *Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual. 1999 – 2000* (Caracas: Provea). <www.derechos.org.ve>

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Caracas: Provea) 1999 *Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual. 1998–1999* (Caracas: Provea). <www.derechos.org.ve>

Salas, Marcos 2002 “Nunca la censura fue tan vulgar (entrevista a Andrés Izarra)” en *Diario Tal Cual* (Caracas) 24 de Abril, 15.

Santana, Elías 2002, 6 de mayo, D-2.
<<http://128.241.247.116/archive/result.asp?file=d:\www\nacional\home\archive\2002\03\06\pd2s4.htm&rest=santana>>

Santana, Elías y otros 2002 “La sociedad civil saluda el renacimiento de la República de Venezuela” *Diario El Nacional* 13 de Abril, Comunicado.

Notas

1 Gorka Llona es miembro de Radio Catilibre y promotor del movimiento por una “Libre Comunicación”. <<http://www.librecomunicación.org>>

2 Elías Santana (Queremos Elegir), Leonardo Carvajal (Asamblea Nacional de Educación), Ruth Capriles (Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello), Vilma Petrash (Asamblea Nacional de Ciudadanos), Cipriano Heredia (Visión Emergente) y el Gral. (r) Fernando Ochoa Antich (Frente Institucional Militar).

Venezuela: recuento de una semana fatídica para la democracia

Un primer paso para el análisis y la evaluación de la crisis política que hoy aflige a la sociedad venezolana consiste en reconstruir de la manera más precisa y seria posible lo acaecido entre el 11 y el 14 de abril. La interpretación que sigue debe considerarse preliminar, en virtud de lo reciente de los acontecimientos y de su intensidad. Sin embargo, se ha tenido el cuidado de confrontar entre sí diversas fuentes hemerográficas para cumplir con los requisitos metodológicos de la disciplina histórica. La información utilizada procede de seis periódicos, cuatro nacionales y dos extranjeros: *El Nacional*, *El Universal*, *Tal Cual*, *El Nuevo País* (tomando exclusivamente la versión de la periodista Patricia Poleo), *El País* (España) y *La Jornada* (México). Adicionalmente, se han tomado algunas informaciones bajadas de Internet, de esos días y los siguientes, de portales de diverso signo ideológico.

■ El o los golpes

El golpe de estado del 11 de abril tuvo como desencadenante directo el paro laboral de los empleados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la industria petrolera propiedad del estado venezolano, motivado por el nombramiento por parte del Ejecutivo Nacional en febrero de este año de una nueva directiva para la empresa (véase el artículo “Venezuela, golpe y petróleo” en este número del *OSAL*). Este paro petrolero fue apoyado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que el día 9 de abril llamó a un cese de labores de 24 horas en solidaridad con la empresa. La huelga de la CTV contó con el apoyo explícito de los sectores empresariales representados en Fedecámaras, así como de la iglesia católica representada por el Episcopado. El paro tuvo ese martes 9 sólo un éxito parcial, pues a diferencia del paro cívico del 10 de diciembre del pasado año, no había logrado parar el transporte colectivo, ni el servicio bancario, ni los centros de acopio y distribución de víveres y alimentos a los mercados mayores y menores de la ciudad capital, ni otros varios servicios. La situación era similar en otras ciudades del país, había más o menos paralización de comercios y abastos y algunos servicios como el de educación privada, pero la huelga carecía de la contundencia del 10 de diciembre. El paro no evidenciaba capacidad de mantenerse por mucho tiempo. Sin embargo, la directiva de la CTV, en lo que pareció una decisión temeraria, convocó el 9 en la tarde este paro por 24 horas más. El miércoles 10, el paro seguía sin expresar contundencia y la manifestación convocada esa tarde frente a la CTV tampoco. Sin embargo, sorprendentemente, los dirigentes de la confederación sindical llamaron esa tarde a una huelga general indefinida. Como es sabido, pero vale la pena enfatizarlo, una huelga general indefinida tiene un carácter insurreccional. Con esa decisión, la CTV como representante de los trabajadores sindicalizados, se declaraba en rebelión total frente al gobierno.

La decisión insurreccional de la CTV fue respaldada ampliamente por sectores empresariales organizados y por una gama de organizaciones sociales de clase media y alta y partidos



políticos de oposición. El partido Primero Justicia, por ejemplo, en boca de uno de sus dirigentes, Leopoldo Martínez, dijo: “Vamos hasta el final, hasta que caiga [el presidente Chávez]”. Cipriano Heredia, de la organización social Visión Emergente, declaró: “...estamos aplicando los artículos 333 y 350 de la Constitución, porque el gobierno se ha salido de su cauce constitucional con lo que hizo contra los medios y el allanamiento contra Acción Democrática (AD)” (*El Universal*, 11/4/02)¹. La “Coordinadora por la Democracia y la Libertad”, que estas organizaciones habían constituido para pedirle la renuncia a Chávez, convocó a una marcha –en el este de la ciudad de Caracas– desde el Parque del Este hasta la sede de Pdvsa en Chuao, para el día jueves 11 a la mañana.

El 11 de abril, una nutrida marcha se inició hacia las 10 am e hizo su recorrido anunciado. Pero al mediodía, al llegar al edificio de Pdvsa en Chuao, los convocantes –Fedecámaras, la CTV y algunos dirigentes de las otras organizaciones sociales–, animados por las dimensiones de la marcha, decidieron arengar a las multitudes para que se dirigiesen al Palacio Presidencial de Miraflores para, como lo señaló Carlos Ortega, presidente de la CTV, “sacar a Chávez”. El mensaje y la convocatoria a Miraflores fueron profusamente informadas, convocadas y cubiertas por los canales privados de televisión, de manera que la marcha fue creciendo en la medida que iba hacia el centro de Caracas. Como quien invita a un concierto o a una fiesta, los canales pasaban la propaganda gratis para que todos los venezolanos concurrieran a la insurrección. Porque esta marcha también tenía evidente naturaleza insurreccional: se estaba haciendo sorpresivamente y sin ningún permiso dentro de una huelga general indefinida.

El adversario, el gobierno constitucional, la autoridad, está en Miraflores, rodeado por simpatizantes que están haciendo ya el tercer día de vigilia desde que estallara el paro laboral, protegiendo al Presidente. Al anunciarse que la marcha opositora prosigue rumbo a Miraflores, el partido de gobierno, el Movimiento V República (MVR), comienza a convocar de urgencia a sus simpatizantes y militantes para que con su presencia impidan que la oposición llegue a las puertas del palacio. Los ánimos, a diferencia de la fiesta que se está desarrollando en el este de la ciudad, son de creciente ira, posiblemente mezclada con sentimientos de temor: las sólidas manifestaciones pro-gobierno de los últimos meses han sido pobremente reseñadas por los medios de comunicación. En contraste, las protestas de la oposición reciben siempre amplia cobertura audiovisual y se agigantan en los diarios impresos. Las encuestas que se publican muestran una baja sorprendente de la popularidad del gobierno. Pronunciamientos militares en los últimos meses corroboran que en los cuarteles hay inquietud y rebelión. Los simpatizantes del presidente están resentidos. Se agolpan alrededor de Miraflores con gritos de confrontación: “No pasarán”.

Al entrar la marcha opositora al centro de Caracas, aproximándose al palacio presidencial, comienzan los disturbios. Hacia las 2 pm de la tarde las multitudes prochavistas están tirando piedras y palos hacia el hotel Edén, que queda al lado de Miraflores, donde aparentemente francotiradores apostados en la terraza están atacándolos (*Tal Cual*, 17/4/02). A esa misma hora en el edificio de La Nacional, en puente Llaguno, un poco más allá y donde hay oficinas de la alcaldía Libertador donde gobierna el MVR, los empleados no pueden salir por la violencia que se ha desatado en la calle. En la terraza de este edificio también están apostados francotiradores (id.). Aparecen personas armadas de lado y lado de la confrontación callejera, la violencia se desata y al final de la tarde el número de muertos alcanza las 19 víctimas, pro y anti-chavistas (*El Universal*, 27/4/02).



Estamos ya claramente en el golpe de Estado. Las informaciones de los días siguientes revelan que a la misma hora en que comenzaba la confrontación en la calle, a eso de las 2:30 pm, un grupo de militares con el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez como cabecilla están en una oficina en Chuao ensayando un pronunciamiento que harían por los medios de comunicación desconociendo al

gobierno y al Presidente (*El Nacional*, 13/4/02). Se trata, nos informa este diario, de un grupo de militares que vienen reuniéndose desde hace meses, disgustados con la política del gobierno, especialmente su acercamiento a Cuba y países como Irak e Irán, por las tensiones que esto ha provocado con los EE.UU. La comunicación de estos militares saldría al aire a las 7 pm, pues fue retardada por la cadena del Presidente, que comenzó poco antes de las 4 pm. Los medios audiovisuales, al comenzar la cadena del Presidente, deciden –también en clara rebeldía– dividir la pantalla, como ya lo habían hecho el día anterior, para mostrar lo que está sucediendo en el centro de Caracas. El Presidente anuncia que va a sacar del aire a los medios privados, pero éstos siguen transmitiendo vía señal por cable. La alocución presidencial también es sabotada por un ruido que interfiere la voz en la señal. Al terminar la cadena, en el canal 10 el dirigente copeyano y hombre del Opus Dei, José Rodríguez Iturbe, exhorta a los militares a salir de sus cuarteles y terminar el trabajo que los civiles han comenzado con un costo de sangre. A las 7:00 pm sale al aire el video del vicealmirante Ramírez y su grupo. Poco más tarde se transmite un pronunciamiento del comandante en jefe del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, quien informa que dicha arma no acatará órdenes presidenciales. Hacia las 8:00 pm el ex hombre fuerte del gobierno de Chávez y del MVR, Luis Miquilena, pide –a través de los medios– una salida institucional a la crisis y dice que Chávez tiene las manos ensangrentadas (*El País*, 7/5/02). A esa hora los generales Manuel Rosendo y Hurtado Soucre negocian con Chávez su salida y amenazan con bombardear el palacio de Miraflores (*La Jornada*, 17/4/02)². A las 10:00 pm el canal del Estado es forzado a cesar sus emisiones. A la 1:10 de la madrugada del día 12 los medios comienzan a informar que Chávez se ha entregado a los militares rebeldes. Pasadas las 3:00 am el general en jefe de la Fuerza Armada, Lucas Rincón Romero, anuncia que Chávez ha renunciado. Cerca de las 4:00 am el presidente sale de Miraflores hacia el Fuerte Tiuna con la Escolta Presidencial. Va a ser recibido allá por el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Baltasar Porras. A las 4:15 am Pedro Carmona Estanca (representante de Fedecámaras) anuncia que asumirá la presidencia de Venezuela al frente de un gobierno de transición cívico-militar.

■ El 12 de abril

Por informaciones publicadas con posterioridad al retorno del presidente Chávez sabemos que, a la misma hora que el señor Carmona se posesionaba del cargo de Presidente, comenzaban los problemas entre los diversos actores que habían contribuido a la caída del gobierno constitucional. En apariencia, los primeros en darse cuenta de que el golpe militar no iba a responder a sus expectativas fueron el presidente de la CTV y el general comandante del Ejército (*El Nuevo País*, 17/4/02). Aparentemente, los intereses que querían hacer prevalecer tenían poco o nada que ver con la democracia y la participación, razón pública esgrimida para ejecutar o apoyar el golpe según casi todos sus protagonistas. Por un lado, constitucionalistas de fama redactaban un decreto autoritario como pocas veces se ha visto en la historia del país; por otra parte, en nombre de la llamada “masacre de El Silencio”, comenzaba una cacería de brujas contra las autoridades del régimen caído. Acompañados por turbas enardecidas, alcaldes del partido Primero Justicia sacaban de sus moradas humillantemente a funcionarios del gobierno anterior. A las 5:30 pm, luego de la autojuramentación de Carmona y la emisión de su primer decreto, la situación estaba clara: la salida de Chávez había conducido a la sociedad a un gobierno de facto de extrema derecha, una plutocracia. Se cambió el nombre de la república, se disolvieron los poderes públicos, se suspendió la venta de petróleo que bajo convenio se tenía establecida con Cuba, se allanaba sin orden judicial, se suspendían las 49 leyes de la Habilitante, se echaba para atrás el aumento de sueldos y salarios decretado por el gobierno derrocado. En pocas palabras estábamos sin estado de derecho.



Ante la evidencia de que Venezuela caminaba apresuradamente hacia un retroceso de todos sus logros en el siglo XX como sociedad democrática y civilizada, la resistencia que ya venía

evolucionando tímidamente ese día 12 se hizo patente al caer la noche. La ciudad de Caracas fue sacudida por un cacerolazo descomunal que se oía en los barrios populares del oeste de la ciudad, al tiempo que frente al Fuerte Tiuna comenzaron a reunirse las multitudes, sin convocatoria por los medios de comunicación, exigiendo ver a Chávez y que él les dijera “que había renunciado”. También se protagonizaban disturbios y tiroteos en esta zona de Caracas. Poco después de la alocución del dictador Carmona, un medio de comunicación comunitario alternativo, radio Fe y Alegría, transmitió una entrevista con el ministro de Educación depuesto, Aristóbulo Istúriz, quien contó las últimas horas de Chávez en el palacio presidencial y señaló con claridad que éste no había renunciado. Quienes apoyaron la insurrección del día anterior no salieron a defender a su gobierno. Así las cosas, los sectores populares tomaron las calles y cerraron las vías de acceso de la ciudad de Caracas para exigir el retorno de sus instituciones, de su presidente. En otras ciudades del país también ocurría esta sorprendente movilización.

■ Restituida la institucionalidad

Desde la mañana del sábado la situación del nuevo gobierno se hace crítica. Carmona se reúne con su gabinete provisorio y los medios de comunicación. Estos últimos le piden que rectifique el decreto dictatorial e incorpore a la CTV a las reuniones del poder. Se sabe ya que el general Raúl Isaías Baduelli, comandante del batallón de paracaidistas del Ejército, está en rebeldía en la base militar de la ciudad de Maracay, la principal del país, así como que están alzándose otras guarniciones. Las multitudes frente a Miraflores están creciendo. En el Fuerte Tiuna el comandante de la Tercera División de Infantería, general García Carneiro, sale en tanqueta hacia la zona sur de Caracas –El Valle– gritándole a la multitud: “¡Soy un soldado y estoy con Chávez!” (*El Nuevo País*, 18/4/02). Al mediodía comienzan a llegar a Miraflores los designados para su juramentación como ministros del nuevo gobierno. Algunos quedarán atrapados en la sede gubernamental porque el contragolpe está en franco desarrollo, se da orden de evacuar el edificio y la Guardia de Honor del palacio se alza, mandándole señas a la multitud en la calle de que está con ella. A partir de ese momento, poco después de mediodía, comienza la llegada de los ministros del gabinete de Chávez a Miraflores. Carmona, que iba a Miraflores, tuerce su rumbo y se va al Fuerte Tiuna. A las 3:30 pm el comandante en jefe del Ejército sale nuevamente por los medios –como el día 11– para anunciar que su arma sólo apoyará al nuevo gobierno si cumple ciertas condiciones, entre ellas modificar el decreto dictatorial y mantener las políticas sociales del gobierno de Chávez. Carmona anuncia que se reformará el decreto cuestionado, pero ya es muy tarde. Mientras los medios de comunicación transmiten una programación regular, como si nada en el país pasase, la ciudad de Caracas está cortada de sus accesos por los cuatro costados, los sectores populares marchan hacia Miraflores desde el este, el sur y el oeste, hay saqueos en distintas zonas, las guarniciones se van sumando al contragolpe. Los medios de comunicación internacionales informan, gracias a entrevistas con el Fiscal General y la esposa de Chávez, que el presidente Chávez no ha renunciado y está preso. A las 8:00 pm las fuerzas del gobierno constitucional retoman el canal del Estado, vuelve la señal, y desde allí informan por fin a los venezolanos, que controlan Miraflores desde mediodía. A las 10:00 pm Carmona renuncia, y a las 3:30 de la madrugada del día 15 el Presidente regresa en helicóptero a Miraflores para retomar al poder. Dirige unas palabras a la multitud y les hace gestos de que se vayan a dormir.

Margarita López Maya

■ Notas

1 El primer artículo se refiere al deber de la ciudadanía de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la constitución. El segundo, da derecho a los ciudadanos de desconocer cualquier régimen que contrarie los “valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

2 Entrevista con el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz.

**DECRETO DEL GOBIERNO PROVISIONAL
DE PEDRO CARMONA ESTANGA**

ARTICULO 1

Constituir un gobierno de transición democrática y de unidad nacional. Se designa a Pedro Carmona Estanga, Cédula N° 1.662.556, presidente de la República de Venezuela.

Asume en este acto de forma inmediata la jefatura del Estado, por el período establecido en este mismo decreto.

ARTICULO 2

Se reestablece el nombre de República de Venezuela.

ARTICULO 3

Se suspenden de sus cargos a los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional y se convoca a elecciones legislativas nacionales a más tardar el mes de diciembre de 2002 para elegir a los miembros del Poder Legislativo Nacional el cual tendrá facultades constituyentes para la reforma general de la constitución de 1999.

ARTICULO 4

Se crea un Consejo Consultivo que ejercerá las funciones de órgano de consulta del Presidente de la República. El Consejo de Estado quedará integrado por 35 miembros principales y sus respectivos suplentes, en representación de los diferentes sectores de la sociedad democrática venezolana. Los mismos principales podrán separarse temporalmente de sus cargos, sin perder su investidura, para ocupar cargos en el Ejecutivo nacional, estatal o municipal y sus faltas temporales o absolutas serán cubiertas por sus suplentes.

El Consejo Consultivo elegirá de su seno un presidente, dos vicepresidentes y un secretario y quedará integrado por los 35 ciudadanos que se identifiquen en el decreto ley que a tal efecto se dicte.

ARTICULO 5

El Presidente de la República de Venezuela coordinará las políticas de transición democrática nacional y las demás decisiones adoptadas para garantizarlas con los poderes públicos estatales y municipales.

ARTICULO 6

Se convocará a elecciones nacionales generales en un lapso que no excederá de los 365 días a partir de la presente fecha. El gobierno de transición democrática cesará en sus funciones una vez que el presidente electo democráticamente asuma su cargo. El Presidente de la República designado en este acto no podrá ser candidato a la presidencia de la República en dicho proceso electoral.

ARTICULO 7

El Presidente de la República en consejo de ministros podrá remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estatales y municipales para asegurar la institucionalidad democrática y el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos Andinos y Latinoamericanos.

ARTICULO 8

Se decreta la reorganización de los poderes públicos a los efectos de recuperar su autonomía e independencia y asegurar una transición pacífica y democrática.

A sus efectos se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

ARTICULO 9

Se suspende la vigencia de los 48 decretos de fuerza de ley, dictados de acuerdo con la Ley Habilitante de fecha 13 de noviembre de 2000. El Presidente de la República instalará una comisión de revisión de dichos decretos, integrada por representantes de diversos sectores de la sociedad.

ARTICULO 10

Se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colinda con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática.

Asimismo, se mantienen en vigencia todos los compromisos internacionales válidamente asumidos por la República de Venezuela.

ARTICULO 11

El gobierno de transición democrática y unidad nacional entregará sus poderes y rendirá cuentas de sus gestiones a los órganos del poder público que legítimamente se elija de acuerdo con lo dispuesto en el decreto y demás disposiciones constitucionales y legales.

Dado en el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas el día 12 del mes de abril del año 2002.

Enero – abril 2002

Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado” en América Latina¹



Por Emilio Taddei

■ La legitimidad perdida del neoliberalismo latinoamericano

El primer cuatrimestre del año 2002 aparece signado en la región por la repercusión regional e internacional de la crisis económica y del régimen político en la Argentina. El derrumbe del modelo neoliberal en dicho país –ejemplificado en el plano económico por la salida de la convertibilidad dólar/peso, la virtual cesación de pagos y la confiscación de los depósitos bancarios de los ahorristas– inaugura un nuevo ciclo de crisis económicas que desnudan con brutalidad los devastadores efectos sociales del liberalismo económico y que desestabilizan los propios regímenes democráticos.

Durante las precedentes crisis en la región (México en 1994 y Brasil en 1999) los efectos de las mismas pudieron ser parcialmente acotados gracias a la inyección masiva de préstamos del FMI resultante de la decisión política de los gobiernos de los países centrales (fundamentalmente de los Estados Unidos). El dinamismo de la economía internacional aún imperante en aquellos años (liderado por la “locomotora norteamericana”) facilitó el masivo salvataje de las dos mayores economías de la región, al igual que sucediera en Rusia, Turquía y el sudeste asiático, pero al precio de una profundización de las recetas neoliberales. Los efectos de las mis-

mas abrieron un nuevo ciclo de protestas sociales en América Latina (Seoane y Taddei, 2001) y asestaron un duro golpe a la legitimidad de las políticas neoliberales.

Desde finales de 2000 el contexto económico internacional mudó sustancialmente. El ingreso de la economía norteamericana en una fase recesiva (de la que aún no se ha recuperado), la perdurabilidad del estancamiento japonés y las dificultades de las economías de la Unión Europea son expresión de la desaceleración experimentada por la economía internacional. Esta pérdida del dinamismo capitalista –que cerró el ciclo de crecimiento irregular de la década de los noventa– se hizo sentir rápidamente en el conjunto de los países latinoamericanos. El año 2001 arrojó modestos o negativos índices de crecimiento en las economías de América Latina. La profundización de los planes de ajuste neoliberal como respuesta oficial a la crisis en numerosos países de la región ahondó las tensiones y favoreció el estallido de numerosos conflictos sociales. El sostenido crecimiento de los mismos durante los primeros nueve meses del año se vio momentáneamente afectado por la militarización internacional promovida por el gobierno norteamericano luego de los atentados del 11 de septiembre y la criminalización y represión de las protestas (Seoane, Taddei y Algranati, 2002). Sin embargo hacia finales de 2001 los conflictos recuperaron el dinamismo evidenciado anteriormente.

La debacle económica en Argentina se produce en un contexto internacional marcado por los efectos de la recesión y, en ese sentido, constituye una crisis de nuevo tipo que parece prefigurar –más allá de sus especificidades– los perfiles del debilitamiento estructural del neoliberalismo y la respuesta social en la mayoría de los países latinoamericanos. El notorio cambio de actitud del FMI y de los gobiernos de los países industrializados en el tratamiento de la situación argentina en relación a las crisis precedentes es una señal inequívoca de las mudanzas en el contexto mundial.

En América Latina las tendencias económicas recesivas se han agudizado desde inicios de este año, desnudando la enorme vulnerabilidad de las economías latinoamericanas luego de casi tres décadas de sostenidas políticas ortodoxas. La persistencia y profundización de las políticas de ajuste, privatización y concentración del ingreso practicadas por los gobiernos de la región como respuesta al agravamiento de la crisis provocan una creciente polarización social y política que se pone de manifiesto a través del incremento de los conflictos sociales del primer cuatrimestre del año 2002. Los registros de conflictos en el período enero-abril señalan un aumento del 29% en relación al cuatrimestre inmediatamente anterior (2.425 registros contra 1.868). La comparación del primer cuatrimestre de 2002 con el mismo período en el año 2001 arroja –utilizando idéntica metodología y fuentes de datos– un notorio incremento del 98% en el número de protestas consignadas por el OSAL.

En este marco de creciente polarización social, la respuesta oficial aparece de forma cada vez más recurrente signada por la profundización de la política represiva y de criminalización de los movimientos de protesta. La exacerbación de las crisis políticas en numerosos países de la región –Venezuela, Argentina y Paraguay son en este período los casos más destacados– combinada con el creciente tratamiento represivo de la cuestión social consolidan un modelo de dominación cada vez más

autoritario. Frente a la erosión de la hegemonía neoliberal, la legitimidad democrática de los regímenes políticos parece estar eclipsándose de forma alarmante en beneficio de una política basada en la ley de la fuerza, garante de la continuidad y efectividad de las políticas neoliberales, que algunos autores califican como de “neoliberalismo armado”.

La lucha contra el terrorismo –promovida por el gobierno norteamericano y utilizada de manera recurrente por numerosos gobiernos de la región para justificar la política represiva y la persecución de dirigentes sociales– surge como una pieza clave en la legitimación de la política represiva. La agudización de esta tendencia en el área andina –particularmente en Bolivia y Colombia– es una señal inequívoca de la creciente influencia de la política norteamericana en el tratamiento de los problemas políticos, sociales y económicos de la región. El intento de golpe de estado en Venezuela constituye un ejemplo inapelable de esta tendencia y pone de manifiesto la voluntad de los Estados Unidos de subordinar toda consideración democrática o de derechos humanos a sus intereses imperiales.

■ **Radicalidad, agregación sectorial y politización de las luchas sociales latinoamericanas**

La importante respuesta social frente a la profundización de la crisis evidencia la consolidación de algunas tendencias que caracterizan el ciclo de protesta social que se despliega en América Latina desde hace ya tres años. Muchos de los conflictos del período analizado se distinguen por un incremento en la radicalidad de sus formas y en su extensión temporal. Asimismo, es notorio destacar la proliferación de aquellos que cuestionan abiertamente las políticas económicas liberales y que parecieran evidenciar un incremento cualitativo de los niveles de politización del conflicto social. Así, un número significativo de este tipo de acciones presenta una creciente capacidad de agregación social: la convergencia en la lucha de diferentes secto-

res sociales (asalariados, campesinos, estudiantes, clases medias, etc.) afectados por los procesos de expropiación social y concentración del ingreso que genera el neoliberalismo. El caso argentino durante los meses de enero y febrero resulta –desde este punto de vista– quizás el más significativo del período, pero no el único. Otro elemento destacado es la presencia de conflictos que obtienen una respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones como lo demuestra, por ejemplo, la decisión del gobierno boliviano de atender las reivindicaciones de los coccaleros de la región del Chapare en relación a la erradicación de los cultivos de coca. Si bien esta característica no puede generalizarse a todos los sectores y/o países, la misma pareciera estar ligada a la capacidad de articulación social y presión política desplegada. Por último, es preciso señalar una tendencia ya mencionada por el OSAL (Seoane, Taddei y Algranati, 2001) que evidencia la difusión geográfica de modalidades de protesta. El contagio del “cacerolazo” argentino a protestas en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay es el ejemplo más destacado de esta “contaminación” regional en las formas de lucha.

En el período que analizamos el aumento del contencioso social se distribuye con una mayor homogeneidad geográfica que en los cuatro meses precedentes, destacándose el aumento de las protestas en México y países centroamericanos (Nicaragua y Guatemala) como así también en la región andina, donde la importancia política de los las luchas se incrementa en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú. Asimismo, la ruptura del proceso de paz en Colombia en el mes de febrero produjo un recrudescimiento de los conflictos armados en dicho país andino. En el Cono Sur sobresalen la masiva respuesta popular a la crisis del régimen económico y político en Argentina y las movilizaciones en Uruguay contra las privatizaciones y la política económica del gobierno.

Entre enero y abril de 2002 cabe destacar el incremento en la realización de huelgas nacionales y/o regionales y manifestaciones

contra las políticas económicas neoliberales y las privatizaciones. A mediados de febrero tuvo lugar en Ecuador un paro nacional multisectorial de 48 horas convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y organizaciones sociales y sindicales. Dicha protesta, que fue acompañada de bloqueos de carreteras y manifestaciones en Quito y otras ciudades, tuvo por objetivo el rechazo a las políticas promovidas por el gobierno. Los departamentos de la región sur del Perú también fueron escenario de un paro regional –con epicentro en Arequipa (ver artículo de Aníbal Quijano en la Región Andina)– de dos días convocado por el Frente Amplio Cívico contra la anunciada privatización de las centrales de producción energética EGASA y EGESUR. Bajo la consigna “Por un Uruguay sin excluidos”, la Propuesta Intersindical de los Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) realizó a finales de enero una multitudinaria caravana a Punta del Este que fue acompañada por un paro nacional en reclamo de un cambio de política económica y el rechazo a la privatización de la compañía telefónica. En Colombia, el paro departamental en Boyacá del mes de febrero fue en protesta contra la política de privatizaciones del gobierno nacional. Por otra parte, la ofensiva privatizadora lanzada por el presidente González Macchi en Paraguay y el aumento tarifario ligado a la misma provoca múltiples acciones multisectoriales protagonizadas por trabajadores estatales con el apoyo de partidos políticos y organizaciones sociales nucleados en el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos. Durante el mes de enero trabajadores, sindicalistas y estudiantes universitarios salvadoreños realizan una marcha en San Salvador en protesta contra los miles de despidos y la política aplicada por el gobierno, exigiendo al mismo la apertura de mesas de negociación. En el marco de la crisis del régimen neoliberal argentino la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) convoca a mediados de enero a un paro nacional de 24 horas para exigir la libertad de dirigentes de esa central detenidos en la provincia de Neuquén.

La perdurabilidad y profundización del ajuste fiscal en la región explica el particular dinamismo de los reclamos de los asalariados del sector público, muchos de ellos de carácter nacional. Las luchas de la educación pública se incrementan en un 24% respecto al cuatrimestre anterior. Argentina (dos paros nacionales de 24 horas de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –CTERA– por pago de bonos y sueldos atrasados), Bolivia (huelga general por tiempo indeterminado por aumento salarial) y Ecuador (paro nacional en rechazo al proyecto oficial de municipalización educativa) son los ejemplos más destacados. Diferentes acciones reivindicativas en reclamo de aumento del presupuesto educativo, reajustes salariales, por mejoras en las condiciones laborales, contra la privatización de la educación pública y en defensa de los estatutos docentes se suceden en Paraguay, Perú (huelga de hambre), Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Brasil (Río de Janeiro), República Dominicana y Uruguay. En el ámbito universitario se destacan los paros por aumento salarial en México (UAM y UNAM), Bolivia y Colombia –donde los profesores universitarios protagonizan una huelga contra el proyecto de reforma legislativa que promueve la privatización de la educación pública. La resistencia a las privatizaciones de empresas públicas y el reclamo de salarios adeudados ilustran el notorio incremento (114%) de los conflictos protagonizados en diferentes países por los trabajadores de las empresas estatales. En el sector de la salud pública se registran a nivel nacional y municipal numerosos paros nacionales por aumentos salariales y de presupuesto para el área en Bolivia, Chile (asalariados municipales de la salud), Colombia, Ecuador (paro por tiempo indeterminado), Paraguay y Venezuela.

Las acciones de trabajadores desocupados se incrementan, en el período reseñado, en un 334% en relación al último cuatrimestre de 2001. Esta tendencia resulta particularmente del aumento de este tipo de luchas en la Argentina donde los diferentes movimientos “piqueteros” continúan desempeñando un papel

destacado en la dinámica social de dicho país. También en Chile (entrega de planes de empleo temporal), Perú, Panamá y Uruguay este tipo de acciones comienzan a manifestarse con cierta regularidad –aunque aún con menor impacto político que en la Argentina– y ponen de manifiesto la paulatina difusión regional de agrupaciones de trabajadores desocupados que revelan la importancia social y política que cobra la desocupación como consecuencia de la recesión económica y de las reformas estructurales del neoliberalismo.

El crecimiento de las protestas urbanas (14,44% en enero-abril 2002 contra 7,96% en septiembre-diciembre 2001) se focaliza en la Argentina, donde la dinámica abierta por la crisis del régimen económico y político alimenta las experiencias de autoorganización social –asambleas barriales– fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (ver el artículo de José Seoane en el presente número). El rechazo a medidas económicas que promueven el aumento de impuestos y de las tarifas de servicios públicos también origina protestas urbanas en Guatemala y Uruguay. En Argentina, Panamá, Perú y Guatemala se destacan numerosas acciones multisectoriales contra la corrupción política asociada al modelo neoliberal que se prolongan a lo largo de todo el período analizado. Si en Argentina la generalización de los “escraches” revela la amplitud del repudio social a los políticos neoliberales, en Guatemala las manifestaciones multisectoriales desembocan en un pedido de renuncia del presidente Portillo.

■ Las múltiples facetas de la hegemonía norteamericana

El impulso cobrado por la política norteamericana en la región durante los cuatro últimos meses de 2001 se intensifican significativamente desde inicios del año. El involucramiento directo de las agencias oficiales norteamericanas en el frustrado golpe de estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez (ver artículo de Edgardo Lander en el

presente número) denota un alarmante cambio de política en el tratamiento norteamericano de la “cuestión democrática” en el continente. Esta intervención política norteamericana en Venezuela se suma pues a las estrategias tendientes a consolidar los intereses de los Estados Unidos en la región: el despliegue militar (Plan Colombia y Plan Andino), la criminalización de las protestas sociales bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, el renovado estímulo a las políticas de liberalización comercial en paralelo con el aumento de las políticas proteccionistas norteamericanas y, por último, el cambio de actitud –en relación a las turbulencias financieras precedentes– en el tratamiento de las crisis económicas en curso. La intransigencia manifestada frente a la crisis argentina –que amenaza con expandirse al conjunto de la región– pareciera ser una señal en dicho sentido.

El frustrado intento de golpe de estado en Venezuela es, junto con la crisis argentina, el hecho más relevante de la evolución política latinoamericana del cuatrimestre. La ruptura del orden constitucional perpetrada por representantes de la “Triple Alianza” (empresarios, Iglesia y militares) tuvo –entre sus objetivos principales– la privatización en beneficio de intereses transnacionales de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con el propósito de poner fin a la política petrolera autónoma del gobierno del presidente Chávez (ver artículo de Luis Lander y Margarita López Maya en la sección Análisis de casos). La actitud complaciente de Washington frente a la violación de las reglas constitucionales resulta una clara muestra del papel estratégico que ocupa el control de los recursos energéticos y naturales en la política exterior norteamericana en la región. Las otrora “incuestionables cláusulas democráticas” que guiaron las relaciones de los gobiernos norteamericanos con la región durante la década de los noventa parecen diluirse en beneficio de una nueva política hemisférica despojada de todo prurito democrático. La reposición del orden constitucional –lograda gracias a la masiva movilización popular– constituye una inapelable demostración

del rechazo que genera en vastos sectores sociales esta nueva política de *big stick* promovida por el presidente George Bush Jr.

La ruptura por parte del gobierno colombiano del proceso de paz con la guerrilla de la FARC en febrero produce un inmediato recrudescimiento de los enfrentamientos armados en el contexto de la campaña presidencial en Colombia y una creciente militarización del país. Las declaraciones del presidente Pastrana, que califica a las FARC como grupo terrorista, anteceden en pocos días a la visita de Bush a dicho país y al Perú. Este simbólico viaje presidencial se acompaña con la presentación de un proyecto de ley en el congreso de Estados Unidos para levantar las restricciones de la ayuda militar norteamericana a través del Plan Colombia a los efectos de destinar dicha ayuda a la lucha contrainsurgente. En tanto, las acciones militares desarrolladas en el marco del Plan Tácticos producen un incremento de los desplazamientos de poblaciones indígenas y campesinas hacia las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela.

El proceso de criminalización de la protesta y de líderes sociales cobra particular relevancia en Bolivia con la ruptura del diálogo –a partir de enero– entre el gobierno y los cocaleros de la región del Chapare y los Yungas. La prolongada lucha de los campesinos contra la política de erradicación de cultivos de coca promovida por los Estados Unidos adquiere un particular dramatismo en los meses de enero y febrero en los que las fuerzas represivas asesinan a militantes campesinos, arrestan a más de cincuenta dirigentes cocaleros y reprimen, en la ciudad de Cochabamba, una marcha multisectorial en la que confluyen –en apoyo a la lucha de los pequeños productores de coca– las Federaciones de Trabajadores Fabriles, de Maestros Urbanos y Rurales, de Trabajadores de la Salud, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUCTB) y la Coordinadora del Agua, entre otras muchas organizaciones. La legitimidad social de la lucha cocalera y la significativa presión polí-

tica de la misma obligan al gobierno a dejar sin efecto la aplicación de los decretos de erradicación de la coca y a anular el proceso de desafuero parlamentario del dirigente cocalero y diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales, acusado por los organismos de inteligencia de desarrollar actividades terroristas.

La intensificación de la represión se generaliza a otros países y parece afectar de manera particular –aunque no exclusiva– las luchas campesinas e indígenas por la tierra, y contra la destrucción y/o privatización de recursos naturales comunitarios. En Chile, la lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica de ENDESA en Ralco protagonizada por las poblaciones mapuches y pehuenches se caracteriza –como ya señaláramos en otras ocasiones– por un creciente endurecimiento de la posición del gobierno que continúa y profundiza la represión y encarcela a dirigentes autóctonos de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco.

En México, el hostigamiento a las comunidades zapatistas de Chiapas genera movilizaciones de denuncia contra la presencia militar en la región y las agresiones y amenazas por parte de grupos priístas en la zona norte de la Selva Lacandona. El proyecto gubernamental de construcción de un nuevo aeropuerto en la localidad de Texcoco, en las cercanías de la ciudad de México, produce un vasto proceso de movilización de ejidatarios contra la expropiación de sus tierras destinadas a albergar las instalaciones de la terminal aérea. Asimismo, en Veracruz el Movimiento de los 400 Pueblos realiza acciones exigiendo la entrega de cinco mil hectáreas de tierras para campesinos de esa región.

La movilización campesina ocupa un lugar destacado en la protesta social en Paraguay. Las ocupaciones de tierras en el Chaco paraguayo van acompañadas de una violenta represión seguida de desalojos que arrojan numerosos heridos y detenidos. Durante el mes de marzo la Federación Nacional Campesina, apoyada por otras organizaciones sociales y

políticas, realiza una marcha hasta Asunción para pronunciarse en defensa de la banca pública, contra la privatización de los entes estatales –exigida por el FMI–, por la industrialización de los productos agrícolas y por el derecho a la tierra y a la educación pública. Durante el mismo mes, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) realiza su plenaria nacional y resuelve continuar la lucha contra el neoliberalismo, el terrorismo de Estado, por mayor presupuesto para salud, educación, caminos y electrificación rural. En Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra protagoniza también acciones de ocupación de tierra, particularmente en propiedades de la familia del presidente Fernando Henrique Cardoso.

Las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana en Ecuador fueron el escenario de un prolongado paro regional multisectorial de once días en reclamo de la emergencia del sector agrícola en la región. La activa participación de diferentes comunidades indígenas y campesinas en el corte de carreteras y acceso a campos petroleros se enfrentó con la violenta represión policial que causó la muerte de cuatro personas y numerosos detenidos en el marco del estado de emergencia decretado por el presidente Gustavo Noboa. En conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina, en el mes de abril, la Coordinadora Nacional de Tierras (CONTIERRA) de Guatemala realiza ocupaciones de fincas en demanda de la reforma agraria y del cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno.

El anuncio de medidas proteccionistas realizado por el gobierno norteamericano durante el período analizado –que afecta a numerosos productores rurales de la región– se combina con una notable aceleración de iniciativas que promueven la firma de tratados de libre comercio (TLC) o a la apertura de negociaciones en este sentido. La generalización de TLCs se inscribe en el marco del proceso de negociaciones comerciales a escala continental tendientes a la concreción del ALCA impulsado por los gobiernos de Esta-

dos Unidos y Canadá. A los acuerdos y/o negociaciones ya reseñados en el período inmediatamente posterior al 11 de septiembre (Seoane, Taddei y Algranati, 2002) es preciso agregar la iniciativa de arancel externo común acordado en enero por los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN, integrada por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) que regirá a partir de enero de 2004. Costa Rica firma con República Dominicana una carta de entendimiento en la que se ratifican los instrumentos del TLC firmado en 1998, al mismo tiempo que comienza a regir el TLC entre Chile y el país centroamericano. Asimismo, el senado chileno aprueba los protocolos para dar vía libre al TLC entre el país andino y El Salvador. Este último país firma con Panamá un TLC bilateral en el mes de marzo. En el mes de febrero los ministros de economía de Centroamérica comienzan en Nicaragua el proceso de elaboración de una propuesta de TLC con Estados Unidos, a pesar de la advertencia del Departamento de Estado a Centroamérica de que será difícil negociar en este tratado el acceso de productos de esa región al país norteamericano y la reducción de los subsidios agrícolas. El Parlamento Europeo a su vez impulsa la moción española de negociar un TLC con Centroamérica. Durante el mes de abril se inicia en Ottawa la tercera ronda de negociaciones para establecer un TLC entre Canadá y Centroamérica.

En el marco de la recesión económica y de la caída de los precios de numerosos productos agrícolas, los efectos de la desregulación comercial se hacen sentir de manera significativa entre los pequeños propietarios rurales de varios países de la región. Las protestas de los productores de leche de Cochabamba (Bolivia) y de Chile, los arrozeros de Costa Rica, los azucareros de Nicaragua y los maiceros y arrozeros del Ecuador denuncian los perjuicios provocados por las políticas agrícolas vigentes. En Guatemala, Perú y Uruguay también se registran numerosos conflictos que exigen soluciones para este sector. En México, la Federación Nacional de Productores de Arroz exige la revisión del capítulo agropecuario del NAFTA mientras

que se registran, a lo largo de todo el período, protestas de productores agropecuarios en demanda de la reducción de las tarifas eléctricas.

El rechazo a los proyectos hegemónicos dinamiza los procesos de convergencia regional de diferentes movimientos populares latinoamericanos, como lo expresa la realización del Encuentro Campesino Mesoamericano realizado en Tapachula, México, con el objetivo de discutir el impacto de las políticas agrícolas excluyentes, los tratados comerciales y fundamentalmente el impacto del Plan Puebla Panamá. El segundo Foro Social Mundial reunido en febrero en Porto Alegre fue el marco para la realización de una nueva reunión continental de movimientos sociales opuestos al ALCA con el objetivo de dinamizar la campaña regional a desarrollarse contra este proyecto durante el año 2002.

■ **Criminalización, desestabilización política y “neoliberalismo armado”**

El repaso de los conflictos sociales del cuatrimestre enero-abril del presente año arroja un alarmante incremento de muertos, acciones represivas, secuestros y detenciones de líderes sociales y manifestantes. En Bolivia, Colombia, República Dominicana, Nicaragua y Ecuador numerosas personas fueron muertas por las fuerzas represivas. En este último país, un estudiante murió durante las manifestaciones estudiantiles reprimidas por la policía en la ciudad de Cuenca y otras cuatro personas perdieron la vida durante el conflicto reseñado en la amazonia ecuatoriana. En Paraguay una multitudinaria manifestación organizada bajo la consigna “No al terrorismo de Estado” puso de manifiesto la amplitud del repudio a la detención ilegal y posterior tortura de dos militantes del Movimiento Patria Libre. Argentina, Perú, Chile y El Salvador se agregan a la lista de países donde se incrementan los actos represivos contra manifestantes y las detenciones de líderes comunitarios y sociales.

La progresiva ilegitimidad social de la “governabilidad neoliberal” resulta del aumento del descontento social que cuestiona de forma creciente “la ley de hierro del ajuste” como única respuesta oficial frente a la crisis económica. La preocupante generalización de la represión en la región parece hablar de una nueva fase política caracterizada por la violación –desde la propia esfera del Estado– de los derechos humanos y democráticos, practicada bajo el manto discursivo de la lucha contra el terrorismo. Frente a las tensiones sociales y políticas derivadas de la crisis, el “neoliberalismo armado” aparece como la respuesta del poder constituido frente a las demandas populares de democracia y justicia social. Esta política autoritaria encuentra, sin embargo, importantes resistencias en los vastos procesos de convergencia social antineoliberal reseñados anteriormente.

Esto quedó de manifiesto en ocasión de dos encuentros internacionales que tuvieron lugar en países latinoamericanos en el período analizado: el II Foro Social Mundial (Porto Alegre, Brasil) y la Contracumbre de los movimientos sociales en paralelo a la Cumbre del Desarrollo de la ONU (Monterrey, México, en el mes de marzo). La masividad del II FSM, realizado a comienzos de febrero, fue una renovada y contundente muestra de la vitalidad de los diferentes movimientos sociales latinoamericanos e internacionales contra el neoliberalismo. El “Foro por un mundo sin guerras”, realizado con el auspicio de CLACSO en el marco de este encuentro internacional, fue una clara muestra del compromiso con la paz y del rechazo del movimiento por otra mundialización a la militarización de las relaciones internacionales promovida por los poderes neoliberales. Tal cual lo postula el documento aprobado en este foro “un mundo con guerras ha sido el mundo del dominio de la búsqueda ilimitada de lucros, de la explotación desenfrenada de los recursos naturales, de la superexplotación de los trabajadores, del uso de la tecnología para acumular más riquezas y no para la conquista del bienestar de la humanidad” (Manifiesto por un mundo sin guerras, 2002). Asi-

mismo, el plenario de movimientos sociales realizado en el marco del II FSM –que contó con una importante presencia de delegados latinoamericanos y caribeños– renovó su compromiso contra la guerra y la represión y con las diferentes luchas sociales y políticas tendientes a revertir el cercenamiento creciente de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales promovidos por el “neoliberalismo armado”.

■ Bibliografía

Seoane, José y Taddei, Emilio 2001 “De Seattle a Porto Alegre. Pasado, presente y futuro del movimiento anti-mundialización neoliberal”, en Seoane, José y Taddei, Emilio *Resistencias mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: CLACSO).

Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2002 “Tras el 11 de septiembre. Conflicto social y hegemonía norteamericana en América Latina”, en *OSAL* (Buenos Aires), N° 6, Enero.

Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2001 “Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta”, en *OSAL* (Buenos Aires), N° 5, Septiembre.

Manifiesto por un mundo sin guerras 2002 en *Porto Alegre. Globalizar la esperanza* (Santiago: Editorial Aùn creemos en los sueños).

■ Nota

1 El autor agradece las sugerencias y comentarios realizados por Clara Algranati, Atilio Boron, Ivana Brighenti y José Seoane.



Argentina: la configuración de las disputas sociales ante la crisis¹

Por José A. Seoane*

■ Crisis de la hegemonía neoliberal

En un desenlace reiteradamente anunciado durante los meses previos, diciembre de 2001 marca el colapso del régimen económico, social y político forjado en la década de los noventa y que signara la Argentina de la convertibilidad. Su propio mentor, Domingo Cavallo –en su segunda estancia al frente del Ministerio de Economía– certificaba su final con el congelamiento –en los inicios de dicho mes– de los depósitos bancarios ante la inminente quiebra del sistema financiero. Sin embargo, dicha crisis –acelerada por la protesta social que se acrecienta en los días siguientes y estimulada por las violentas disputas al interior del establishment político de cara a la ya planteada transición– habrá de adoptar un nuevo carácter a partir de la intensa movilización social –particularmente de los sectores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores– que iniciada la noche del miércoles 19 desencadenara la renuncia del ministro Cavallo primero y del presidente De la Rúa y el breve gobierno de la Alianza al día siguiente.

Estas jornadas –signadas por un intenso y renovado protagonismo popular– expresarán la irrupción de la protesta social en la arena del poder, proyectando su cuestionamiento al ámbito de la dominación política y señalando la apertura de una crisis de hegemonía del modelo neoliberal implantado en la Argentina desde mediados de la década de los '70. Para comprender cabalmente su explosión y derrotero posterior deben tenerse en cuenta las diferentes dimensiones que convergen en ella, y que pueden sintetizarse en:

- 1) La estrecha vinculación de la crisis económica nacional respecto de la profundización de la recesión y crisis financiera a nivel internacional, que progresa de la periferia al centro desde finales de 1997 (Toussaint, 2002) y la nueva orientación que frente a ésta asumió el gobierno estadounidense bajo la gestión Bush, particularmente acentuada luego del 11 de setiembre (Ceceña y Sader, 2002).
- 2) La disputa abierta a partir de 1999 al interior del bloque dominante que había forjado el régimen de la década de los '90 (Basualdo, 2000). Dicha puja establecida fundamentalmente entre dos fracciones (el sector financiero y las trasnacionales asentadas en los servicios públicos privatizados por un lado, y los grupos económicos locales –particularmente exportadores– por el otro) alrededor de las salidas a la crisis (dolarización o devaluación respectivamente) atravesó y potenció también los conflictos y realineamientos al interior del establishment político (Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho, 2001).
- 3) La creciente ilegitimidad que a los ojos de grandes porciones de la población ostentaban el conjunto de las instituciones políticas –tras la frustración que en términos de un mínimo cambio de rumbo significó el gobierno de la Alianza– y que se expresó rotundamente en los resultados electorales de octubre de 2001².

* Sociólogo. Docente de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del OSAL.



4) La ampliación de la protesta social y el crecimiento de los movimientos populares en un proceso que, iniciado a mediados de la década, se intensifica a partir de 2000 y se caracteriza además por la aparición de nuevas formas de organización y colectivos sociales. Vale mencionar que el número de conflictos impulsados por diferentes organizaciones a lo largo del año 2001 se incrementó en más de un 50% respecto del año anterior³.

Durante las últimas semanas de diciembre estos procesos se combinaron para sellar la suerte del oficialismo, cuestionar el propio régimen democrático y poner en debate las salidas a la crisis de la convertibilidad (Seoane, 2002).

Las Jornadas de Diciembre

El ciclo de protestas que se inicia a mediados de diciembre condensa, en menos de quince días, una intensa variedad de formas de lucha y movimientos. Abierto el miércoles 12 con múltiples conflictos y cortes de ruta –protagonizados por el movimiento piquetero– en todo el país, ya se escuchan los primeros “cacerolazos” y “bocinazos” en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente todas las centrales sindicales convocan a un paro nacional contra la política económica que recoge un altísimo acatamiento –uno de los mayores de la década⁴. Ese mismo día ocurren los primeros saqueos y reclamos de comida en el interior del país que se prolongan en una ola que, los días 18 y 19, se multiplica en todo el conurbano bonaerense y en buena parte de las principales ciudades.

Por la noche del 19 de diciembre, en respuesta al anuncio presidencial del estado de sitio y en un acto de abierta desobediencia al estado⁵, los vecinos de Buenos Aires –y de numerosas urbes del interior– comienzan a hacer sonar sus cacerolas, para reunirse luego en las esquinas e iniciar una larga marcha hacia los lugares símbolos del poder político (la residencia presidencial de Olivos, la casa del ministro Cavallo, el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo). Cuando las primeras columnas –donde se destacaban las mujeres y los jóvenes– llegan a la Plaza de Mayo, ya es pasada la medianoche. La represión que se descarga sobre los primeros manifestantes no hace desistir al conjunto, abriéndose una verdadera disputa por la ocupación de la plaza. En la noche del 19 se anuncia la dimisión del ministro de Economía. El jueves 20 se reinicia la batalla callejera –que se prolongará durante casi todo el día– extendiéndose paulatinamente a todo el centro de la ciudad. La brutal represión cobra cientos de heridos y detenidos y, por lo menos, seis muertos bajo las balas policiales⁶. Hacia el fin del día 20, el presidente y el gobierno en su conjunto renuncian.

Hasta aquí la breve descripción de los principales hechos. Su interpretación ha motivado un intenso debate que ha atravesado todos los ámbitos sociales y que se prolonga hasta la actualidad. Lo inesperado de la rebelión social de diciembre y la ausencia de mediaciones organizativas en su convocatoria ha servido a enfatizar el carácter novedoso y espontáneo de la misma. Sin embargo, por distintas razones, estos “cacerolazos” y movilizaciones se inscriben en un proceso de más largo aliento de incremento de la protesta social, fortalecimiento de los movimientos populares y creciente radicalización social⁷. Signado por la amplitud de los sujetos que lo protagonizan –que abarcó a trabajadores ocupados (particularmente del sector público), desocupados, estudiantes, comerciantes y pequeños productores rurales y urbanos– dicho ciclo de protesta, reiniciado en el 2000 e intensificado en el 2001, se caracterizó por la aparición y extensión de movimientos sociales asociados a nuevas formas de organización y de lucha. Al respecto vale mencionar al movimiento de trabajadores desocupados bautizado como piquetero pero también a las puebladas y al surgimiento de multisectoriales en el interior del país. Los primeros cortes de ruta masivos en el conurbano bonaerense durante el año 2000 significaron la afirmación del movimiento piquetero en el otrora cordón industrial del país. En el mismo sentido, el levantamiento de los sectores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires puede interpretarse como la aparición de la pueblada en el centro del poder político nacional.

Diciembre marca así la incorporación al arco social de la protesta de los sectores urbanos –particularmente las capas medias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano castigadas también por la polarización social de las últimas décadas– bajo sus propias forma de protesta –cacerolazos– y organización –asambleas barriales. Pero la movilización de los sectores medios –que habían sido el principal apoyo electoral del triunfo de la Alianza en 1999– no sólo impugnaba en las calles a su “propio” gobierno sino que desplegaba también un cuestionamiento general al régimen político. La desobediencia frente al estado de sitio decretado el miércoles por la noche, la confrontación con las fuer-

zas policiales del día jueves, la impugnación abierta a los poderes constituidos manifestada en las movilizaciones posteriores⁸, no refería –como algunos analistas quisieron señalar– simplemente a la manifestación de ahorristas enfurecidos. La potencia destituyente de este protagonismo popular⁹ –aún con sus limitaciones a la hora de consagrar un orden distinto– tanto postulaba el rechazo a la institucionalidad política que había gestionado la aplicación del neoliberalismo en la década pasada como esbozaba la potencialidad y demanda de una nueva democracia, radical, participativa y efectiva.

El decisivo rol de estas manifestaciones en la caída del gobierno, así como su cuestionamiento al régimen político, habrán de interpelar al conjunto de los movimientos y organizaciones populares. Por otra parte, sus características autogestionarias y autoorganizativas encontraban además profundas vinculaciones con otras experiencias sociales recientes, especialmente con el movimiento de trabajadores desocupados. Aún en la forma primaria que adoptó en diciembre¹⁰, la convergencia de la movilización de los sectores urbanos –particularmente las capas medias– con los desocupados y asalariados señalaba la potencialidad de dicha articulación para incidir efectivamente en el curso de la crisis. La evolución de estas convergencias, así como la cuestión democrática, habrán de marcar los momentos claves en el período posterior.

■ El gobierno de Duhalde

Por la noche del martes 1° de enero de 2002 la Asamblea Legislativa –convocada por segunda vez en menos de quince días– coronó como nuevo presidente al senador justicialista Eduardo Duhalde. Por vía del acuerdo parlamentario llegaba así al Poder Ejecutivo quien fuera ampliamente derrotado en las elecciones presidenciales de 1999 y ocupara un destacado papel en la gestión de la década menemista. La ilegitimidad de esta elección a ojos vista de las protestas decembrinas no podía ser más evidente. Pero también estaba lejos de concitar el apoyo del conjunto de las élites económicas y políticas así como de la administración norteamericana. Su elección representaba en realidad el arribo de una fracción política (“duhaldismo” al interior del partido Justicialista, “alfonsinismo” en el radicalismo) próxima a los intereses de los grupos económicos locales, y que cristalizaría en la primera semana de gestión con la adopción de la salida devaluatoria.

Enmarcado en este escenario post-convertibilidad, el período abierto por la gestión “duhaldista” prolonga y condensa un complejo proceso de disputas sociales signado por sucesivas crisis que amenazan de manera reiterada con el brusco fin del gobierno. A lo largo de todo enero, la continuidad e intensidad de los “cacerolazos” y “piquetes” acosarán la estabilidad gubernamental. A principios de febrero la confrontación con la ampliamente cuestionada Corte Suprema alrededor del congelamiento de los depósitos bancarios (“corralito”) revitalizará los rumores de renuncia presidencial culminando con la liberalización del mercado cambiario exigida por el FMI. En el tránsito de marzo a abril, los momentos de estampida devaluatoria y las amenazas del quiebre del sistema bancario –bajo la sostenida presión del gobierno norteamericano– apresurarán primero la sanción de un presupuesto fiscal signado por un nuevo ajuste así como, luego, la firma de un compromiso público de las élites políticas en consonancia con los requerimientos planteados por el sistema financiero y los organismos internacionales.

En este sentido, en términos del bloque dominante, la relativa primacía inicial de los grupos económicos locales en el rumbo de la gestión (además de la salida devaluatoria, la pesificación de sus deudas en divisas con el sistema financiero local y el resguardo de sus patrimonios a través de la sanción de la Ley de Quiebras, por ejemplo) dará lugar rápidamente a las demandas del FMI y de los sectores financieros (adopción del régimen de flotación cambiaria –acentuando la dependencia respecto del financiamiento externo; profundización del ajuste fiscal con la sanción del presupuesto 2002 y la firma de un nuevo compromiso con las provincias; preservación del patrimonio del sistema bancario estatizando la deuda privada pesificada: conversión de una parte de los depósitos en bonos estatales).

Por si hiciera falta un ejemplo más, la coalición político-social que habían impulsado los grupos económicos locales bajo un discurso “nacional industrialista” probaría con creces tanto la falacia de dicho discurso como su negativa a trascender mínimamente el consenso neoliberal. La íntima integración de las distintas fracciones del bloque dominante al circuito financiero internacional no podía sino poner el centro de la política económica en el reestablecimiento del financiamiento externo y, en ese sentido, en la negociación con los organismos internacionales de crédito y la administración norteamericana. La sostenida negativa de éstos a concretar un préstamo efectivo sólo puede entenderse como parte de una



política regional que aspira a imponer no sólo los rumbos económicos sino también la orientación de la integración comercial (subordinación al ALCA, desintegración del Mercosur) y la reestructuración del sistema político en el sentido de hacerlo más funcional a sus intereses (Basualdo, 2002).

En este sentido, la gestión gubernamental de la crisis resulta en un proceso de reestructuración al interior del bloque dominante –como forma de consolidar un nuevo consenso– al tiempo que garantiza la transferencia de ingresos y riquezas desde las arcas fiscales y la sociedad toda hacia éste.

Por otro lado, de cara a las protestas sociales que se prolongan a lo largo de estos meses –y más allá de las promesas oficiales– las políticas dirigidas a disciplinar y reprimir las mismas adoptarán una forma diferente marcada por la generalización de acciones emprendidas por grupos irregulares¹¹. La ilegitimidad y debilidad del gobierno –así como la radicalización de la protesta– abrirá paso, en la actualidad, al ejercicio de una violencia parapolicial –aunque protagonizada por grupos dependientes o vinculados al estado– que prodirá atentados, amenazas y golpizas¹². Por otra parte, el conjunto de los sectores populares afrontarán, en una situación de adversidad, el nuevo escenario abierto tras la devaluación que supuso la combinación de los males de las décadas de los '80 y '90: el inicio del ciclo inflacionario con el crecimiento veloz de la desocupación.

Así, la prolongación de la depresión económica significará el acelerado deterioro de las condiciones de vida para una cada vez más amplia franja de la población. Si en octubre de 2001 el número de ciudadanos debajo de la línea de la pobreza representaba el 38,3% –casi 14 millones de habitantes–, para mayo del corriente año las estimaciones oficiales elevan dicho porcentaje a más del 50%. Por otra parte, los índices de desocupación alcanzan hoy el 21,5% de la PEA¹³ –es decir más de 3 millones de personas– cuando en octubre del pasado año ascendían al ya record histórico de 18,3%¹⁴. En el mismo sentido, la inflación ha significado una caída de más del 50% del poder adquisitivo de los salarios.

Desde esta perspectiva, la crisis puede visualizarse también como un proceso de violenta y regresiva reestructuración social que profundiza la concentración del ingreso que caracterizó las décadas pasadas amenazando con condenar a las dos terceras partes de la población a la indigencia y la pobreza. De ahí que, en su derrotero, resulte incapaz de reconstruir una mínima legitimidad social y tropiece con la imposibilidad de afirmar un modelo de dominación estable.

En este sentido, se ha afirmado que Duhalde representa un gobierno de transición. Desde el punto de vista de la reestructuración social que promueve –al interior del bloque y en relación con los sectores populares– está claro que la prolongación de la crisis lejos de ser tiempo muerto tiene un carácter productivo fundamental. En todo caso el calificativo de transitorio resulta significativo en términos de la generación de una salida que permita el reestablecimiento de una dominación estable. Así, puede decirse que es una transición que no atisba a concluir en tanto que –enfrentada a la movilización y descontento social– es incapaz tanto de garantizar una revalidación electoral que dé nuevos aires al neoliberalismo, como de afirmar una salida autoritaria.

■ La configuración de la protesta social

A lo largo de los cuatro primeros meses de 2002 la protesta social habrá de intensificarse prolongando la dinámica abierta en diciembre. Particularmente significativa en enero, el número de hechos de conflicto de este período duplicará a aquellos que signaron el último cuatrimestre de 2001¹⁵. En el espacio de la Ciudad de Buenos Aires la marcha de las cacerolas, las movilizaciones contra la Corte Suprema de Justicia, los reclamos de los ahorristas y deudores, los “escraches” a bancos y políticos, las movilizaciones piqueteras y sindicales y la profusión de asambleas barriales transformarán la geografía urbana en un frenesí de protestas, debates y articulaciones. Más allá de la visibilidad y significación política de estas acciones, el conflicto social habrá de generalizarse en todo el país, siendo particularmente importante durante el primer mes del año¹⁶. Además de los sectores urbanos, el protagonismo social de la protesta encarnará en las acciones desarrolladas por los movimientos de trabajadores desocupados (afectados particularmente por la suspensión del pago de los subsidios de desempleo) y de los empleados públicos (que enfrentan nuevos recortes del presupuesto fiscal)¹⁷. No estarán tampoco ausentes las puebladas como la que conmovió a la ciudad de Casilda (15/1), ni las protestas de los pequeños y medianos propietarios y comerciantes. Se multiplicarán también las experiencias de fábricas ocupadas donde los trabajadores, ante la quiebra de los establecimientos, tomarán en sus manos la gestión de las mismas.

Frente a esta amplitud e intensidad del conflicto, la diversidad de movimientos y colectivos sin embargo encontraron dificultades a la hora de consolidar un marco de acción común que reforzara su capacidad de disputa. En su riqueza y multiplicidad estas experiencias plantean una doble pregunta sobre las razones de estas dificultades, así como sobre las formas que podría adoptar la construcción de una estrategia articuladora del conjunto de los sectores en lucha. En la Argentina de mediados del siglo pasado este rol lo cumplía el movimiento obrero. En este sentido, cabe señalar que a lo largo de los cuatro meses que analizamos –si bien hubo intensas protestas particularmente de los trabajadores del sector público (maestros, administrativos) y, por ejemplo, las movilizaciones impulsadas por la CTA contra la sanción del presupuesto fiscal 2002– no existió ninguna convocatoria a huelga general¹⁸.

Por otra parte, los “cacerolazos” y movilizaciones abren al interior de los sectores urbanos nuevos procesos de organización local que cristalizan en el nacimiento y expansión de las asambleas populares que llegan a sumar varios cientos a nivel nacional. Si bien las mismas se desarrollan en muchas de las principales ciudades del país, la amplia mayoría habrá de concentrarse en la ciudad de Buenos Aires y el cordón urbano que la rodea¹⁹. Hijas de las jornadas de diciembre, surgidas en los principales lugares de encuentro de los barrios, las asambleas se constituirán en un espacio de rearticulación de nuevas sociabilidades, prácticas y politicidad regidas por formas de democracia horizontal. Protagonistas de las movilizaciones nocturnas cada viernes, de las continuas y múltiples protestas ante bancos, empresas privatizadas y representantes del establishment político; la actividad de las asambleas irá más allá, desde la ocupación y refuncionalización pública de espacios barriales hasta el desarrollo de estrategias colectivas frente a la crisis (bolsas de trabajo, huertas, compras comunitarias) e iniciativas ante el colapso del sistema de salud. En este sentido, el cuestionamiento al conjunto del régimen político, que analizamos anteriormente, verbalizado en el estribillo–consigna “que se vayan todos”, operará también como experimentación local en una lógica de reapropiación social del espacio comunitario que, en su conjunto, da cuenta de nuevas formas de gestión de lo público. En este camino el surgimiento de las coordinadoras zonales primero y de la coordinación interbarrial después, y de las convocatorias a “cacerolazos” nacionales luego –que tendrán una importante repercusión en los principales centros urbanos del país– marcarán los sucesivos intentos de construir formas de articulación más amplias.

En el mismo sentido, el movimiento de trabajadores desocupados experimenta, en su conjunto, un importante crecimiento tanto en el número de acciones que lleva adelante como en su densidad y extensión en relación al pasado año. Sin embargo, el punto de unidad alcanzado en el segundo semestre de 2001, la Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados (que sesionó el 24 de julio y el 4 de setiembre de 2001), se fragmenta en distintos espacios sin que pueda alcanzarse la unidad de acción que había caracterizado el ciclo de luchas anteriores²⁰. A pesar de este contexto, a lo largo del primer cuatrimestre de 2002 diversas acciones de solidaridad y convergencia entre los sectores urbanos, los piqueteros y los asalariados tendrán lugar. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires puede señalarse, a modo de ejemplo, tanto la recepción que las asambleas populares dieron a la marcha de desocupados que, impulsada por la FTV-CTA y la CCC, desde La Matanza concluye en Plaza de Mayo a fines de enero, como su presencia y participación en la Asamblea nacional que se realiza el sábado 16 de febrero a iniciativa del Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones. En una escala más pequeña –aunque no menos significativa– los días que corren desde diciembre han visto multiplicarse las acciones de solidaridad entre colectivos y movimientos en una red difusa que une a las asambleas, los trabajadores (particularmente las fábricas tomadas) y el movimiento piquetero²¹.

■ Horizontes emancipatorios e intereses hegemónicos

El proceso abierto en diciembre ha conllevado una resignificación de los mitos fundacionales que atravesaron las tres últimas décadas en el largo recorrido de instalación del neoliberalismo en Argentina. En primer lugar ha implicado el quiebre del disciplinamiento social consolidado bajo el ejercicio o amenaza del terror represivo que impusiera la dictadura militar de 1976. En segundo lugar, cuestiona la experiencia de la institucionalización democrática de los ‘80 en un proceso donde la democratización se expresa como práctica societal, demanda y confrontación ante un régimen político signado por el creciente autoritarismo que impone la dictadura de los poderes económicos. Y por último, el enaltecimiento de lo privado y del individualismo egoísta que fuera uno de los signos que acompañó la década menemista ha sido trastocado abriendo paso tanto a una recuperación del valor



de lo público –en un sentido no necesariamente estatal– como de la solidaridad como patrimonio de la experiencia popular. Estas puertas de nuevos sentidos permanecen abiertas.

Por el contrario, la reconstrucción del modelo de dominación supone clausurarlas y disolver las convergencias –reseñadas anteriormente– entre los diferentes movimientos y colectivos que protagonizan el ciclo de protestas aislando a sus sectores más activos. En este sentido, el dispositivo de criminalización de la pobreza forjado alrededor de la cuestión de la seguridad y el delito así como las tentativas de estigmatizar a grupos y colectivos bajo su asociación con la violencia reaparecen con nitidez en la última parte de la gestión de Duhalde. Sin embargo, estos intentos han tropezado –y tropiezan– con una respuesta social adversa señalando la fuerza que asumen los procesos de convergencia y unidad en relación con la cuestión democrática.

En este punto confrontan también con la reestructuración del régimen político propiciada por la administración norteamericana, verbalizada, entre otros, en la fórmula de Rodiger Dornbusch de una intervención extranjera directa a través de los organismos internacionales en la definición de las políticas públicas que sólo puede interpretarse como una reactualización de la lógica imperial de los protectorados.

Ciertamente la profundización del rumbo neoliberal como salida de la crisis no podría sino implicar el reforzamiento autoritario de la lógica estatal así como tener un impacto y magnitud regionales. En este sentido, durante enero afirmábamos que la crisis de diciembre en Argentina podía ser el anticipo de su proyección en la región latinoamericana. Hoy, cuando la expansión regional de la crisis está ya a la vista, podríamos pensar que la evolución y definición de la misma en nuestro país aparece íntimamente vinculada a la marcha del contexto regional.

Bibliografía

- AA.VV. 2002 *Qué son las asambleas populares* (Buenos Aires: Ediciones Continente).
- Basualdo, Eduardo 2002 “La crisis actual en Argentina: entre la dolarización, la devaluación y la redistribución del ingreso”, en *Chiapas* (México: Ediciones Era) Nº 13.
- Basualdo, Eduardo 2000 *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, FLACSO, IDEP).
- Bonasso, Miguel 2002 “Informe especial: la represión aumenta”, en *Página 12* (Buenos Aires) 17 de Junio.
- Cecea, Ana Esther y Sader, Emir 2002 *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial* (Buenos Aires: CLACSO).
- Colectivo Situaciones 2002 *19 y 20 Apuntes para el nuevo protagonismo social* (Buenos Aires: Ediciones de Mano en mano).
- Cotarelo, María Celia 2002 “Un punto de inflexión en las luchas populares en la Argentina actual: la insurrección espontánea de diciembre de 2001”, en *Herramienta* (Buenos Aires: Editorial Antídoto) Nº 19, Otoño.
- Seoane, José 2002 “Crisis de régimen y protesta social en Argentina”, en *Chiapas* (México: Ediciones Era) Nº 13.
- Seoane, Viú, Rodríguez y Santucho 2001 *Informe de Coyuntura. Área de Investigación* (Buenos Aires: Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) mimeo.
- Spaltenberg, Ricardo y Maceira, Verónica 2001 “Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en Argentina”, en *OSAL* (Buenos Aires) Nº 5, Septiembre.
- Toussaint, Eric 2002 *Argentina: eslabón débil en la cadena mundial de la deuda* (Neuquén: Instituto Regional de Educación y Promoción Social) Ficha de Trabajo Nº 25, Febrero.

Notas

1 Este artículo es una versión abreviada del texto original; el mismo puede consultarse –junto a otras contribuciones sobre esta temática– en la página web: <<http://osal.clacso.org>>. Agradezco los comentarios de Atilio Boron, Emilio Taddei y todo el equipo del *OSAL*; y especialmente a Clara Algranati e Ivana Brighenti sin cuya colaboración el presente texto no hubiera tenido lugar.

2 Las elecciones de octubre de 2001, en comparación con los resultados de fines de 1999, mostraron el derrumbe electoral de la alianza gobernante, la pérdida de votos del partido Justicialista –aunque le permitió conquistar la primera minoría en la Cámara de Diputados; el vertiginoso crecimiento del voto nulo o blanco que alcanzó a casi el 22%, constituyéndose en la tercera fuerza a nivel nacional; el caudal electoral obtenido por nuevas coaliciones electorales –en buena parte conformadas por desprendimientos y rupturas de la “alianza gobernante”– críticas a la política gubernamental y el importante incremento de la izquierda política.

3 Esta evaluación resulta de los datos proporcionados por el *OSAL*. Las versiones, a texto completo, de los últimos números de la revista del *OSAL* se encuentran en nuestro sitio de internet.

4 Vale señalar también que entre el viernes 14 y el lunes 17 el Frente Nacional contra la Pobreza –multisectorial que agrupa a la CTA, organismos de derechos humanos, asociaciones de pequeños propietarios del campo y la ciudad y partidos políticos– realizó una consulta nacional por el reclamo de un seguro de empleo y formación para los jefes y jefas de hogar desocupados que recogió más de 3 millones de votos a favor.

5 Cabe mencionar que uno de los cánticos más populares que animaron dichas movilizaciones expresaba un cuestionamiento abierto al estado de sitio.

6 Los 6 muertos (algunas informaciones elevan el número a 7) son las víctimas fatales reconocidas resultado de la represión policial en el centro de la ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, a lo largo de estos días de diciembre, el número de muertos alcanza, por lo menos, a 37 personas –la amplia mayoría jóvenes– contándose los heridos en cientos y en más de 3.500 los detenidos.

7 Este ciclo de protestas sociales –que ponía ya de manifiesto el final del período de derrota, retroceso, cooperación y fragmentación social que habían sufrido las organizaciones sindicales y los movimientos populares en los primeros años de la década de los ‘90– se inicia claramente en 1996 con la aparición de las primeras puebladas y piquetes en el interior del país.

8 En el cacerolazo y movilizaciones del 28 de diciembre de 2001 que desencadena la renuncia de Rodríguez Saa, se generaliza la consigna “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

9 Tanto el carácter destituyente como las características de este nuevo protagonismo popular han sido desarrollados por Colectivo Situaciones (2002).

10 Vale recordar que los cacerolazos y movilizaciones del miércoles 19 surgen frente a la declaración de un estado de sitio dirigido principalmente para responder a los saqueos y reclamos de comida protagonizados por los desocupados desde los días anteriores.

11 La política del régimen frente a las protestas en los años pasados había consistido fundamentalmente en los intentos de criminalizar los movimientos (principalmente el movimiento piquetero tras la asociación de delito y pobreza), de persecución judicial de los activistas (existiendo hoy más de 3.000 procesados) así como de represión de las acciones más significativas (en un triste historial que sumará decenas de muertos).

12 A modo de ejemplo puede señalarse que de los 23 hechos represivos relevados por el periodista Miguel Bonasso (2002), 21 refieren al accionar de grupos patoteriles y parapoliciales.

13 Población Económicamente Activa.

14 Datos Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), informe onda octubre 2001 y mayo 2002.

15 Según datos provistos por el OSAL.

16 Los hechos de conflicto en el interior del país representan casi el 60% del total registrado para el mes de enero.

17 El número de acciones impulsadas por estos movimientos representan más del 40% del total del período.

18 Esta ausencia señala también la integración al régimen neoliberal y el compromiso asumido frente al gobierno de Duhalde por las dirigencias de las centrales sindicales que formalmente agrupan a la mayoría de los asalariados del sector privado (CGT Daer, CGT Moyano). Recién en mayo reaparecerán las convocatorias a paro nacional, especialmente el del 29/5 que –bajo la forma de “paro social” e impulsado por un amplio conjunto de organizaciones, entre ellas la CTA– contará con una masiva adhesión.

19 Para dar una idea de ello puede referirse a los datos elaborados por el Centro para una Nueva Mayoría en su informe de marzo de 2002. De acuerdo al mismo funcionaban, en ese momento, en todo el país, 272 asambleas; de las cuales 112 en la Ciudad de Buenos Aires y 105 en la Provincia de Buenos Aires. Entre ambas jurisdicciones abarcaban casi al 80% del total.

20 Por un lado, el sector representado por la FTV-CTA (Federación Tierra y Vivienda - Central de Trabajadores Argentinos) y CCC (Corriente Clasista y Combativa) que tiene su epicentro fundamental en el distrito de La Matanza, PBA. Por otro lado, el Bloque Piquetero Nacional constituido por diferentes organizaciones (Polo Obrero, Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras), la mayoría de ellas vinculadas a partidos políticos de izquierda. Fuera de estos dos agrupamientos existen otras organizaciones significativas como Movimientos Barrios de Pie (CTA), Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD de Raúl Castells) y la Coordinadora Anibal Verón que cuenta con una presencia importante en la zona sur del conurbano bonaerense.

21 En muchas de estas experiencias, alrededor de una práctica asamblearia, puede visualizarse la aparición de un espacio que vincula la autogestión en lo económico, la autoorganización en lo social y el planteo de una democratización radical de la gestión pública.



Argentina

REGION
SUR



ENERO

Martes 1 • El senador del Partido Justicialista (PJ) Eduardo Duhalde es proclamado por la Asamblea Legislativa presidente de la Nación y ejercerá el mandato hasta diciembre de 2003. Se inicia un cacerolazo en numerosos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y una marcha al Congreso y la Plaza de Mayo.

Miércoles 2 • Unos 200 vecinos realizan un cacerolazo frente a la legislatura de Corrientes en reclamo de la revalorización de los bonos de cancelación de deuda de la provincia, denominados Certificados de Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Corrientes (CECACOR).

Viernes 4 • Productores agropecuarios, comerciantes y vecinos autoconvocados de las localidades de Chabas y Sanfort (Santa Fe) realizan una masiva protesta frente a bancos. Exigen el no pago de la deuda externa, el traspaso de las deudas de dólares a pesos, la suspensión por dos años para el pago de los créditos bancarios, de los remates y ejecuciones, la devolución inmediata de los fondos en cajas de ahorro y cuentas corrientes, reestatización de las empresas de servicios privatizadas, entre otras reivindicaciones.

• En La Plata unos 1.200 desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) bonaerense se movilizan hacia la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires (PBA) en reclamo de 10 mil planes de trabajo, alimentos y por la libertad de los dirigentes Raúl Castells y Emilio Alfí.

Sábado 5 • Cerca de 6 mil vecinos realizan una marcha en el barrio de Floresta de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar justicia por el asesinato de tres jóvenes perpetrado hace una semana por un suboficial retirado de la Policía Federal.

Martes 8 • En Mar del Plata, PBA, unos 2 mil trabajadores municipales comienzan un paro por tiempo indeterminado, en reclamo de salarios adeudados.

Jueves 10 • En Tucumán, trabajadores desocupados de la CCC cortan cuatro puntos de la ruta nacional 38 y las provinciales 320 y 175 en demanda de puestos de trabajo.

• Unos 2 mil manifestantes con cacerolas en la mano se congregan frente a los tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• Vecinos de distintos barrios porteños y del norte de la PBA hacen sonar cacerolas y cortan algunas avenidas en protesta por la continuidad y ampliación del corralito financiero, la Corte Suprema, el gobierno y la política económica. También en la ciudad de Rosario (Santa Fe) unas 2 mil personas se congregan en el Monumento a la Bandera en un espontáneo cacerolazo.

Viernes 11 • En La Plata se llevan a cabo varios cacerolazos para protestar contra el corralito y las dificultades derivadas del pago en bonos.

Lunes 14

- La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realiza un paro provincial por 24 hs. para exigir la libertad de los dirigentes de esa organización de la provincia de Neuquén detenidos anteriormente. Dos mil personas participan en una marcha convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén.
- Durante la mañana, más de 2 mil personas realizan sendos cacerolazos en contra del corralito frente a entidades bancarias de distintas localidades de Córdoba.

Martes 15

- Más de 3 mil desocupados de la PBA y distintas localidades del interior del país, convocados por el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Territorial Liberación (MTL), el Movimiento Sin Trabajo (MST) y el Polo Obrero marchan a la Plaza de Mayo en demanda de planes de empleo, asistencia alimentaria y la libertad de Emilio Alfí.
- En Casilda (Santa Fe) se realiza una protesta masiva contra el sistema financiero y unos 8 mil manifestantes marchan encolumnados por la ciudad. Numerosos bancos son atacados con huevos y piedras, mientras que la policía antimotines dispara gases y balas de goma. Más tarde, la ira popular se traslada a la Empresa Provincial de Energía y, luego, a la filial de Telecom.
- En la Capital, 4 mil desocupados agrupados en la CCC y en el MIJP marchan en reclamo de alimentos y planes de empleo.

Miércoles 16

- Alrededor de 2 mil vecinos de Liniers clausuran simbólicamente los bancos extranjeros de ese barrio capitalino en rechazo al corralito financiero.
- Trabajadores de los Programas de Emergencia Laboral (PEL) bloquean los accesos al puente interprovincial General Belgrano, Corrientes, contra la suspensión de los planes de empleo. Empleados públicos se concentran frente a la Casa de Gobierno contra el pago de salarios a través de bonos LECOP (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales).

Jueves 17

- Se realiza, como todos los jueves, un cacerolazo frente al Palacio de Tribunales para exigir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. La protesta culmina en el Congreso Nacional bajo la consigna “que se vayan todos”.
- Unos 2 mil vecinos marchan en la ciudad de Rosario en contra del sistema financiero y en demanda de la recuperación de los planes sociales y de alimentos, el no pago de la deuda externa ilegal y fraudulenta, la devolución inmediata de los fondos incautados y la reestatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y de las empresas privatizadas.

Viernes 18

- Numerosas organizaciones sociales y partidos de izquierda marchan a la Plaza de Mayo, para exigir juicio y castigo a los responsables de la violenta represión desatada en la jornada del 20 de diciembre pasado.
- En Neuquén, unas 3 mil personas se movilizan por el centro de la capital provincial exigiendo la liberación del titular de ATE Neuquén y de los otros tres detenidos durante una protesta.
- Unas 2 mil personas realizan un cacerolazo frente al Consejo Deliberante para pedir la reducción de los gastos políticos. La Policía reprime a los manifestantes.
- Desocupados mantienen cortes en 13 rutas nacionales y provinciales de la provincia de Jujuy en protesta por la falta de creación de puestos de trabajo.

Domingo 20 • Más de mil vecinos de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires se reúnen en Parque Centenario para fundar una asamblea interbarrial que coordine las acciones de las asambleas de cada barrio que funcionan desde hace semanas en la ciudad.

Lunes 21 • Más de mil manifestantes pertenecientes a la Coordinadora de Desocupados Aníbal Verón cortan durante cinco horas el Puente Pueyrredón –vía de acceso a la Capital– en demanda de planes de empleo y asistencia social.

Miércoles 23 • Más de 150 desocupados de la CCC cortan puentes de acceso a la Capital; 500 manifestantes del Movimiento Barrios de Pie de la CTA cortan la ruta en Isidro Casanova (PBA); 700 desocupados de la Coordinadora Aníbal Verón marchan en Florencio Varela (PBA). También se producen cortes en La Plata, Mar del Plata, Jujuy, Chaco y Catamarca.

• En Rosario 2 mil personas protestan en el acceso a la ciudad contra el corralito.

Jueves 24 • Unas mil personas marchan por el centro de Mar del Plata y ponen fajas de clausura en varios bancos. Alrededor de 4 mil santafesinos y santiagueños, la mayoría pequeños productores rurales, marchan en la ciudad de Ceres (Santa Fe).

Viernes 25 • Se realiza un cacerolazo a nivel nacional, en casi todos los barrios de la Ciudad y en algunas zonas de la PBA, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Pampa, La Plata, Mendoza, San Luis, Tucumán, Santa Fe y Salta. En la Capital, miles de manifestantes marchan hacia la Plaza de Mayo. En la zona norte de la PBA unas 3 mil personas se convocan frente a la quinta presidencial. En Rosario se concentran 4 mil personas en el Monumento a la Bandera.

Domingo 27 • Comienza la marcha a pie de los desocupados de La Matanza (PBA) rumbo a Plaza de Mayo, encabezada por los dirigentes de la CTA y la CCC.

• La asamblea interbarrial de Parque Centenario reúne a más de 1.500 vecinos de 80 asambleas de la Ciudad y la PBA, que acuerdan continuar con los cacerolazos. Concentran los reclamos en la renuncia de los miembros de la Corte, el fin del corralito, llamado a elecciones, el no pago de la deuda externa y el apoyo a la marcha de desocupados.

Lunes 28 • Los 15 mil desocupados que partieron desde La Matanza llegan a la Ciudad de Buenos Aires. Son recibidos con un desayuno organizado por los vecinos y comerciantes del barrio de Liniers. Varios grupos de vecinos autoconvocados se suman a la protesta y marchan hasta el centro, al grito de “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”.

Jueves 31 • Miles de manifestantes realizan un nuevo cacerolazo en Capital para reclamar la renuncia de los miembros de la Corte al grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

FEBRERO

Viernes 1 • Unas 8 mil personas realizan un cacerolazo en la Plaza de Mayo en contra del Gobierno. Cerca de un millar de personas se concentra frente a la quinta presidencial de Olivos (PBA) en demanda de la devolución de los depósitos incautados. También hay protestas similares en La Pampa, Tucumán y Córdoba.

Lunes 4 • Unos mil desocupados mantienen cortes de calles en La Plata y otras ciudades de la PBA, así como en las provincias de Catamarca y Formosa para conseguir puestos de trabajo y comida.

Martes 5 • Desocupados del Bloque Piquetero Nacional, junto al sector que dirige Raúl Castells y el Movimiento Barrios de Pie, de la CTA, marchan por la Ciudad de Buenos Aires y se concentran en la Plaza de Mayo para reclamar planes de empleo, cambios en su forma de distribución, ayuda alimentaria y la liberación de dirigentes detenidos.

• Un grupo de personas de la Coordinadora Aníbal Verón realiza un piquete, en Esteban Echeverría (PBA), en demanda de planes de empleo. Un comerciante mata a un piquetero.

Miércoles 6 • Cientos de ahorristas recorren el microcentro porteño realizando escraches a los bancos contra la pesificación de los depósitos. En Mar de Plata y San Juan se registran protestas similares.

• Desocupados de la Coordinadora Aníbal Verón, realizan cortes de ruta en el sur de la PBA en reclamo de puestos de trabajo, alimentos, asistencia médica y el esclarecimiento del asesinato del piquetero ocurrido en el día de ayer.

• En Tucumán mil desocupados de la CCC que reclaman planes de empleo y alimentos son reprimidos por la policía.

Jueves 7 • Más de 5 mil personas participan del cacerolazo contra la Corte Suprema y se movilizan al Congreso exigiendo el juicio político a los miembros del máximo tribunal. La protesta se repite en Rosario y Mendoza.

• En La Plata mil trabajadores estatales se concentran frente a la casa de gobierno para reclamar por un presupuesto más justo en salud, educación y justicia y por la regularización del pago de haberes.

Viernes 8 • Más de 7 mil vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y algunos barrios de la PBA realizan un cacerolazo en la Plaza de Mayo en repudio al Gobierno y al corralito bancario.

Lunes 11 • Más de 7 mil desocupados del Bloque Piquetero Nacional cortan los accesos que vinculan a la Ciudad de Buenos Aires con las zonas sur y oeste de la provincia, en reclamo de puestos de trabajo, alimentos, la libertad de los detenidos durante las protestas y el cese de la represión policial.

Miércoles 13 • En Villa Dolores (Córdoba) 500 manifestantes que reclaman planes de trabajo y alimentos son reprimidos por la policía provincial cuando intentan saquear un minimercado.

• Desocupados del Bloque Piquetero Nacional mantienen por tercer día consecutivo su “campamento de protesta” frente a la petrolera Repsol-YPF en Dock Sud (PBA) en reclamo de 50 mil puestos de trabajo.

Viernes 15 • En Río Colorado (Río Negro) 400 manifestantes sitian el edificio de la municipalidad durante cinco horas y obligan al intendente a presentar su renuncia.

Lunes 18 • Más de 7 mil personas marchan en la ciudad de Comodoro Rivadavia en rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de gravar con un 20% las exportaciones de petróleo y sus derivados.

Miércoles 20 • Numerosas organizaciones sociales y familiares de las víctimas de la represión del pasado 20 de diciembre realizan una procesión que recorre todas las esquinas cercanas a la Plaza de Mayo donde fueron asesinados cinco manifestantes.

- Unos 4 mil manifestantes convocados por la CTA y la CCC rodean el Congreso Nacional para tratar de frenar la sanción del presupuesto 2002 y repudiar la represión del 20 de diciembre.

Viernes 22

- En Córdoba 600 vecinos y empleados municipales realizan, como todos los viernes, un cacerolazo contra el intendente.

Miércoles 27

- En Santa Fe 8 mil docentes marchan en repudio al modelo económico y los ajustes en la educación, y en defensa de la escuela pública.

Jueves 28

- Maestros del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) participan de una movilización en contra de la aprobación por parte de la Legislatura provincial de la reforma laboral docente. La misma implica una reducción del gasto en ese área y suspende la vigencia del estatuto docente, entre otras modificaciones. La policía reprime dejando un saldo de 18 personas heridas.

MARZO

Viernes 1

- Más de 6 mil personas realizan un cacerolazo en la Plaza de Mayo contra el gobierno, la clase política, la Corte Suprema, la desocupación, los bancos y el corralito financiero.

Lunes 4

- Los productores tamberos de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba comienzan un bloqueo por 72 hs. de las salidas de camiones de las industrias lácteas en reclamo de un mayor precio por la materia prima.

- La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) inicia un paro nacional por 24 hs. en demanda del pago de sueldos atrasados y contra los recortes presupuestarios y el pago en bonos.

- Continúan las protestas de ahorristas en contra del corralito en el microcentro porteño y en Mar del Plata.

Martes 5

- Continúan los piquetes de tamberos en distintas rutas del país, llegando a bloquear unas 70 plantas lácteas. Las cadenas de supermercados comienzan a trasladar el aumento a los productos lácteos.

- Se inicia en Villa Constitución (Santa Fe) la Marcha Federal del Acero por el Trabajo y la Producción, convocada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y apoyada por la CTA y la CCC, en defensa de la reactivación y la industria nacional. Estatales de ATE acompañan la protesta.

Miércoles 6

- En Salta manifestantes convocados por una multisectorial marchan por las calles del centro para reclamar por la falta de pago de las prestaciones médicas por parte de la obra social estatal.

- Más de 6 mil personas –entre docentes, padres y alumnos– marchan por las calles de General Roca (Río Negro) en defensa de la educación pública.

Jueves 7

- La Marcha Federal del Acero, con la participación de la UOM, la CTA y la CCC, en defensa de la reactivación y la industria nacional, llega a la Plaza de Mayo.

- Trabajadores de la salud nucleados en la Asociación Argentina de Médicos y en la Federación Nacional de Salud de la CTA se concentran frente al Congreso Nacional y marchan hasta el Ministerio de Salud en defensa del hospital público.

- Unos 7 mil docentes de escuelas públicas marchan por distintas ciudades de la provincia de Río Negro en demanda del pago de salarios atrasados y la reparación de unos 300 edificios escolares.

Viernes 8

- En el marco del Día Internacional de la Mujer trabajadoras de la fábrica Brukman, que desde diciembre mantienen tomada la sede ubicada en el barrio capitalino de Once, cortan la avenida Jujuy. Luego realizan el doceavo cacerolazo a la Plaza de Mayo, que confluye con el que realizan las asambleas barriales.

- Las entidades de productores de leche de la PBA, La Pampa y Santa Fe levantan la protesta luego que el Gobierno fijara en 20 centavos el precio del litro para la leche de calidad.

Lunes 11

- Desocupados y miembros de las organizaciones sindicales que conforman el Bloque Piquetero Nacional comienzan una marcha desde distintos puntos del país hacia la Plaza de Mayo.

Miércoles 13

- Los manifestantes del Bloque Piquetero Nacional realizan actos frente a la fábrica de Acindar en Villa Constitución (Santa Fe) y en la plaza central de San Nicolás (PBA). En La Plata (PBA) una de las columnas acompaña el reclamo de alimentos y planes de empleo que realizan unos mil desocupados de la Coordinadora de Aníbal Verón.

Jueves 14

- Más de 4 mil trabajadores y desocupados nucleados en la CTA realizan una marcha hacia la Plaza de Mayo en reclamo de la restitución del recorte del 13% de los sueldos, un aumento de salarios, la aplicación del seguro de empleo y formación y la libertad de Emilio Alí.

- CTERA realiza un paro nacional en protesta por los recortes presupuestarios y los atrasos en el pago de salarios a docentes provinciales.

Sábado 16

- Las trabajadoras de Brukman son desalojadas por la policía. Más de 200 vecinos y organizaciones sociales se acercan al lugar, cortando por unas horas la avenida Jujuy, para repudiar la acción de los efectivos policiales y acompañar a las trabajadoras. Por la noche, vuelven a ocupar la fábrica.

Lunes 18

- En la ruta nacional 3 en el acceso norte a Trelew –donde 200 trabajadores desocupados mantienen desde hace una semana cortada parcialmente la ruta en demanda de puestos de trabajo– docentes y alumnos de las escuelas más pobres de esa ciudad realizan un acto de comienzo de clases paralelo al oficial, reclamando al gobierno una solución urgente para ese conflicto.

Miércoles 20

- Desocupados de la CCC y de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de la CTA realizan un piquetazo nacional con cortes de ruta en todo el país por la libertad de Emilio Alí. Más de 5 mil personas se concentran en la ruta 3 en La Matanza (PBA). En el interior se realizan cortes de ruta en Salta, Tucumán, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Mar del Plata, Rosario y La Plata.

- Participantes de once asambleas barriales se reúnen en Plaza Italia con antorchas encendidas para repudiar el tarifazo de las empresas privatizadas y contra todos los abusos. La protesta culmina con un escrache a la sede de la compañía eléctrica EDENOR.

Domingo 24 • Unas 100 mil personas realizan una manifestación para repudiar el 26 aniversario del último golpe militar. En Neuquén, más de 7 mil personas se movilizan por las calles de esa ciudad.

Martes 26 • En Almirante Brown (PBA) 500 piqueteros de la Coordinadora de Aníbal Verón de Florencio Varela se movilizan hasta la comuna y ocupan el edificio, en reclamo de planes de empleo prometidos.

ABRIL

Martes 2 • Los maestros de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) cumplen 53 días de paro en demanda del pago de salarios adeudados y la refacción de escuelas en mal estado.

Miércoles 3 • La Sala Primera del Tribunal de Casación de la PBA ordena la libertad de Emilio Alí.

Viernes 5 • Un grupo de entre 10 y 15 personas saquea el supermercado Súper Dos de Mastromauro, en la localidad de Junín, PBA.

• Dos mil personas del MIJP se concentran frente a la Gobernación de la PBA, la Legislatura y los Tribunales, para reclamar la libertad del dirigente piquetero Raúl Castells.

Sábado 6 • La FTV de la CTA y la CCC organizan un acto en la ruta 3 de La Matanza, PBA, en el que participan más de 8 mil personas para festejar la libertad de Emilio Alí.

• Los vecinos de Floresta marchan por las calles de ese barrio capitalino para reclamar justicia por el crimen de los tres jóvenes efectuado hace cuatro meses por un suboficial retirado de la Policía Bonaerense.

Martes 9 • Unos 1.200 vecinos del Movimiento Barrios de Pie de la CTA se concentran frente a supermercados en la ciudad y PBA en reclamo de la entrega de alimentos y en repudio al Fondo Monetario Internacional (FMI).

• Unos 2 mil desocupados de la CCC, apoyados por la CTA, marchan por las calles de San Miguel de Tucumán y se instalan en la Plaza Independencia para exigir a las autoridades provinciales la entrega de planes de trabajo y subsidios para unos 20 comedores sociales del interior.

• El gremio de conductores de trenes La Fraternidad inicia un paro por 24 hs. en las cinco líneas ferroviarias que unen la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, en rechazo al pago fraccionado de salarios y del levantamiento de servicios nocturnos.

Viernes 12 • Unos 200 productores del sur de la provincia de Santa Fe, convocados por la Federación Agraria Argentina (FAA) y el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML), cortan el tránsito en la ruta nacional 3, a la altura de Casilda, en reclamo por la crítica situación que viven pequeños y medianos chacareros de todo el país, en contra del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y el alto costo del gasoil.

Lunes 15 • Unos 200 desocupados de la Coordinadora Aníbal Verón y del Bloque Piquetero Nacional cortan la ruta provincial 205, a la altura de la intendencia de Lanús (PBA), en de-

manda del pago de planes Trabajar. Un miembro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) le dispara a uno de ellos cuando intenta atravesar el piquete.

- CTERA inicia una Caravana Educativa que parte desde Entre Ríos, San Juan y Río Negro y llegará el viernes a la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación pública y del derecho a enseñar y aprender, y en demanda del pago de sueldos atrasados y el lamentable estado de muchos establecimientos.

Martes 16

- Raúl Castells, líder del MIJP, es absuelto en un juicio al que fue sometido por cortar una avenida, resistirse a la autoridad y pintar con aerosol.

- Los gremios de trabajadores estatales de San Juan comienzan un paro por tiempo indeterminado y toman los ministerios de Salud y Acción Social, de Educación y de Economía en reclamo del pago de salarios adeudados desde enero.

- Unos mil trabajadores estatales marchan por las calles de Comodoro Rivadavia y de Trelew, provincia de Chubut, en reclamo por la falta de pago de sueldos.

Miércoles 17

- Más de 5 mil docentes de la Unión de Educadores de Córdoba marchan por las principales calles de la ciudad en rechazo a la ley de jubilaciones anticipadas y la limitación de las suplencias que impulsa el gobernador Juan Manuel de la Sota.

Jueves 18

- Unos 4 mil trabajadores estatales de Jujuy convocados por el Frente de Gremios Estatales y los desocupados de la CCC y la CTA se concentran frente a la Legislatura provincial en demanda del pago de sueldos atrasados. Son reprimidos por la policía.

- Desocupados y trabajadores estatales de Chubut que reclaman el pago de sueldos atrasados son reprimidos por la policía.

- En el Chaco, la CCC realiza piquetes frente al Nuevo Banco del Chaco en reclamo de planes Trabajar.

- La Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga (CATAC) inician un paro por tiempo indeterminado en rechazo a los recientes incrementos en el precio del gasoil y de los insumos.

Viernes 19

- Con una marcha de antorchas desde el Congreso a la Plaza de Mayo culmina la caravana educativa organizada por CTERA.

- Los trabajadores estatales de San Juan que desde hace cuatro días mantienen un paro de actividades y ocupan tres ministerios y la Legislatura levantan las medidas al ser depositada parte de los sueldos atrasados.

Sábado 20

- Más de 5 mil personas pertenecientes a las asambleas barriales de la Ciudad y PBA realizan un cacerolazo en la Plaza de Mayo para conmemorar los sucesos del 20 de diciembre último y para exigir la renuncia del presidente.

Martes 23

- Desocupados organizados en el Movimiento Barrios de Pie de la CTA y en la CCC exigen bolsones de comida en la puerta de las grandes cadenas de supermercados de la Ciudad y PBA.

- Ahorristas, asambleas, la CTA, empleados bancarios, militantes de partidos de izquierda y centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se concentran en el Congreso de la Nación para impedir que los legisladores traten el plan Bonex que proponía la entrega de bonos del estado a cambio de los depósitos bancarios. La ley no se trata y renuncia el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov.

Jueves 25

• Unas 3 mil personas, convocadas por el Bloque Piquetero Nacional, partidos políticos de izquierda, Asociación Madres de Plaza de Mayo y algunas asambleas barriales, marchan hasta la Plaza de Mayo para reclamar la renuncia de Eduardo Duhalde y pedir la ruptura con el FMI.

Viernes 26

• Unos 2 mil desocupados marchan por las calles de la provincia de Formosa en demanda del pago de subsidios para jefes de hogar desocupados. Luego, intentan saquear un supermercado y son reprimidos por efectivos de la guardia de infantería.

• En medio de un paro general de actividades de la administración pública y con 23 cortes de rutas en toda la provincia de Jujuy, los estatales junto con desocupados de la CCC y la CTA realizan una multitudinaria movilización hasta la cárcel local para pedir la inmediata liberación de dos detenidos en las protestas.

Martes 30

• En el marco de un paro activo, trabajadores agrupados en ATE realizan una manifestación frente a la sede del Ministerio de Economía, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de un aumento salarial y de la devolución del 13%, y en rechazo a cualquier despido en el sector público y al FMI.

■ Glosario de siglas

AFJP	Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
ATE	Asociación de Trabajadores del Estado
CATAC	Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas
CCC	Corriente Clasista y Combativa
CECACOR	Certificados de Cancelación de Obligaciones de la Provincia de Corrientes
CER	Coefficiente de Estabilización de Referencia
CTA	Central de Trabajadores Argentinos
CTERA	Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
FAA	Federación Agraria Argentina
FADEEAC	Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas
FMI	Fondo Monetario Internacional
FTV	Federación de Tierra y Vivienda
LECOP	Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales
MIJP	Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados
MML	Movimiento de Mujeres en Lucha
MST	Movimiento Sin Trabajo
MTL	Movimiento Territorial Liberación
MTR	Movimiento Teresa Rodríguez
PBA	Provincia de Buenos Aires
PEL	Programas de Emergencia Laboral
PJ	Partido Justicialista
SPF	Servicio Penitenciario Federal
SUTEBA	Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
UBA	Universidad de Buenos Aires
UNTER	Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro
UOM	Unión Obrera Metalúrgica



JANEIRO

- 4a Feira 02** • Rebelião de presos em Rondônia (RO) contra a decisão de restringir a circulação dos detentos no interior do presídio. A Polícia Militar (PM) controlou o motim, que teve quarenta e cinco presos mortos. Segundo os policiais, as mortes foram causadas por facções rivais.
- 3a Feira 08** • Início da greve de policiais civis e parte de policiais militares da capital da Bahia (BA), que reivindicam aumento e unificação do salário-base da categoria, além da reintegração de policiais exonerados por liderarem a última greve (em julho de 2001) e a libertação dos cinco soldados presos após convocarem uma assembléia através de rádios patrulha. O governo do estado disse que não vai negociar e enviou a tropa de choque para invadir os batalhões. Os rebelados entregaram suas armas, mas permaneceram aquartelados até o início da noite.
- 4a Feira 09** • Fim da greve dos policiais civis e parte dos policiais militares na Bahia, sufocada pela PM, que pôs fim ao aquartelamento dos soldados em três batalhões. O Comando da PM pede a prisão de vinte líderes do movimento que estão foragidos, além de destituir os comandantes dos batalhões onde houve o aquartelamento.
- 6a Feira 11** • Cinco ônibus foram apedrejados e um incendiado na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), em represália à morte de três líderes do tráfico de drogas local.
- 2a Feira 14** • Rebelião de presos em Mato Grosso (MT), que reivindicavam revisão de penas, transferência de detentos e melhorias na alimentação. A rebelião teve oito reféns, mas nenhum ficou ferido. A Secretaria de Segurança Pública do Estado autorizou as transferências.
- 6a Feira 18** • O Prefeito do município de Santo André - São Paulo (SP), Celso Daniel, que pertence ao Partido dos Trabalhadores (PT) foi seqüestrado na capital paulista.
- Sábado 19** • Líderes do PT começam uma vigília em Santo André pelo desaparecimento do prefeito na noite anterior.
- Domingo 20** • Encontrado o corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel, com sete tiros em um município a 78 Km da capital. Cerca de oito mil manifestantes se reuniram em frente a prefeitura com lenços brancos pedindo paz e justiça.
- 2a Feira 21** • Cerca de cem mil pessoas acompanharam o cortejo fúnebre do prefeito assassinado de Santo André, com manifestações pedindo justiça e o fim da violência. O governo federal anunciou mais um pacote de medidas administrativas e legislativas para a segurança pública.

- 3a Feira 29** • Protestos durante todo o dia entre moradores de dois morros no RJ e a PM, com troca de tiros, bombas de gás lacrimogêneo e saques, além da destruição de treze veículos. Eles denunciavam o seqüestro de um traficante por PMs, que continuava desaparecido mesmo após o pagamento do resgate. O Secretário de Segurança do estado disse que vai apurar a denúncia contra os policiais.
- 4a Feira 30** • O Prefeito de uma cidade do interior do estado de SP bloqueou a rodovia de acesso ao município para impedir a entrada da marcha de cerca de mil e duzentos manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). No ano passado, a fazenda da família do prefeito foi invadida pelo MST. O bloqueio só findou por determinação do governador do estado. O Ministério Público inquérito civil para apurar se o prefeito cometeu improbidade administrativa.
- 5a Feira 31** • Abertura do II Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre (RS) até o dia 06/02, com a Marcha Contra a Guerra e Pela Paz, que reuniu cerca de cinquenta mil pessoas de diversas nacionalidades em uma manifestação pacífica.

FEVEREIRO

- Domingo 10** • Rebelião de presos em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul (MS), que destruíram a área administrativa do presídio e fizeram um refém. Os rebelados exigiam a transferência de vinte presos, reclamaram de maus tratos e pediram o afastamento do diretor do presídio. A equipe de negociação realizou as transferências.
- 6a Feira 15** • Conflito entre PMs e cerca de dois mil manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) na desocupação de um terreno ocupado em Belém, capital do Pará (PA), evoluiu tiros e bombas de fabricação caseira. Sessenta pessoas ficaram feridas e os integrantes do MTST acabaram por deixar a área. Foi aberta uma sindicância administrativa que será apurada pelo Ministério Público.
- Domingo 17** • Rebeliões em sete presídios da capital de SP, comandados por facções do Primeiro Comando da Capital (PCC), além de dois atentados a bomba, um deles contra o prédio da Secretaria de Administração Penitenciária, exatamente um ano após a maior rebelião já realizada no sistema carcerário brasileiro, ocorrida no mesmo estado. Tiveram quinze mortes e uma lista de reivindicações, que incluía, entre outras, a remoção de condenados que já possuem direito ao regime semi-aberto e o fim das represálias ao PCC.
- 5a Feira 21** • Na capital federal, integrantes do MST invadiram e ocuparam o gabinete do relator da Comissão Especial sobre Transgênicos, favorável a liberação dos alimentos geneticamente modificados. A sessão da Comissão foi cancelada.
- 6a Feira 22** • Servidores da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) de nove estados brasileiros realizaram uma passeata no centro do RJ. Eles protestavam contra a extinção da FUNASA para dar lugar a uma Agência Federal de Prevenção. Segundo o diretor da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, com esta medida serão criados apenas três mil cargos contra os atuais trinta e oito mil funcionários da FUNASA, provocando um descontrole das doenças endêmicas no país.

MARÇO

- 5a Feira 07** • Início da paralisação dos professores da rede estadual de ensino do estado do RJ, insatisfeitos com o não pagamento do Plano de Carreira dos professores.
- 6a Feira 15** • Professores estaduais do RJ em greve desde 07/03 realizam manifestação em frente a sede do governo do estado.
- 5a Feira 21** • A Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizou manifestações nas principais capitais do país contra a flexibilização da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que contaram com a adesão de diversas categorias de trabalhadores. O governo retirou o “regime de urgência” da votação da reforma da CLT no Senado.
- Domingo 24** • Cerca de quinhentos trabalhadores do MST ocuparam a fazenda de propriedade da família do presidente Fernando Henrique Cardoso para exigir o assentamento de aproximadamente setecentas famílias, além da liberação de recursos para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Foram enviados agentes da Polícia Federal ao local.
- 2a Feira 25** • Integrantes do MST deixam a fazenda do presidente após negociações com a Ouvidora do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conseguindo a desapropriação de uma outra fazenda além de infra-estrutura para dos assentamentos. Dezesseis integrantes do movimento foram presos e transferidos para Brasília (DF), acusados de invasão a estabelecimento agrícola e violação de domicílio. Ao saber da notícia, a Ouvidora pediu exoneração de seu cargo e uma comissão dos sem-terra foi recebida pelo Ministro da Reforma Agrária Raul Jungmann.
- 3a Feira 26** • Cerca de mil manifestantes do MST ocuparam em SP a fazenda de um dos sócios da família do presidente Fernando Henrique, em solidariedade aos dezesseis integrantes do movimento presos ontem.
- 4a Feira 27** • Passeata reúne centenas de professores da rede estadual de ensino do RJ, em greve há vinte dias, reivindicando o descongelamento dos Planos de Carreira. Em assembléia, a categoria decidiu manter a greve.
- 5a Feira 28** • Militantes do MST que ocupavam uma fazenda em SP desde 26/03 deixaram o local em cumprimento a uma ordem judicial de despejo.
- Militantes do MST acamparam em frente ao Ministério da Justiça, em Brasília, e fizeram vigília em protesto a prisão dos líderes presos em 25/03.

ABRIL

- 4a Feira 10** • Três integrantes do MTST foram presos durante confronto com o Batalhão de Choque da PM de Recife, capital de Pernambuco (PE). Com ordem judicial, os policiais foram garantir a reintegração de posse de um terreno que havia sido ocupado por 143 famílias. Mais de vinte pessoas ficaram feridas, sendo cinco PMs. Após o confronto, coordenadores do MTST conseguiram uma reunião com o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Cronología

5a Feira 11

• Professores da rede estadual de ensino decidem manter a greve até a assembléia do dia 18. O impasse entre a categoria e o governo estadual é a falta de propostas concretas para o pagamento do Plano de Cargos e Salários. Professores se reuniram com o secretário de Educação, que se comprometeu a apresentar uma proposta de pagamento nos próximos dez dias e a abonar as faltas do período de greve, além do retorno do repasse da contribuição sindical que havia sido cortado pelo ex-governador.

• Estado de greve dos funcionários da Indústria de Material Bélico (IMBEL), administrada pelo Exército Brasileiro. Os trabalhadores querem reajuste de 73% e a contraproposta da empresa era de 10%. Segundo o sindicato da categoria, os funcionários estão há sete anos sem receber reajuste salarial.

Domingo 14

• Cerca de três mil integrantes do MST ocuparam áreas no PE. O movimento promete intensificar os protestos em todo o país até o final do mês.

Sábado 20

• Funcionários públicos federais iniciam uma paralisação de dois dias e cerca de dois mil fizeram um protesto na capital federal, com o intuito de pressionar o Congresso a votar dois projetos de lei que reestruturam seus cargos e salários.

3a Feira 23

• O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE) do RJ decidiu manter a greve da categoria, que já se estende por 50 dias. Os professores resolveram ainda, acampar em frente ao Palácio da Guanabara, sede do governo do Estado. O SEPE quer o plano de carreiras seja cumprido e um aumento total que varia de 30% a 103%.

Siglas

56

BA	Estado da Bahia
CLT	Consolidação das Leis Trabalhistas
CUT	Central Única dos Trabalhadores
DF	Estado do Distrito Federal
FUNASA	Fundação Nacional de Saúde
IMBEL	Indústria de Material Bélico
INCRA	Instituto de Colonização e Reforma Agrária
MS	Estado do Mato Grosso do Sul
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
MT	Estado do Mato Grosso
MTST	Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto
PA	Estado do Pará
PE	Estado de Pernambuco
PCC	Primeiro Comando da Capital
PM	Polícia Militar
PT	Partido dos Trabalhadores
RJ	Estado do Rio de Janeiro
RO	Estado de Rondônia
RS	Estado do Rio Grande do Sul
SEPE	Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação
SP	Estado de São Paulo

Equipe Responsável: Coordenação: Prof. Dr. Emir Sader (LPP) e Profa. Dra. Silene de Moraes Freire (PROEALC).

Coleta de Dados, Redação e Sistematização da Cronologia: Fernanda Ribeiro Rohen (Graduação/FSS/PROEALC); Maria das Graças Garcia e Souza (Graduação/FSS/PROEALC); Mariana Oliveira Setúbal (Graduação/FSS/LPP) e Paloma Navarro Lobato (Graduação/FEDUC/LPP).

Fontes: Jornal do Brasil, Jornal O Globo, Jornal O Dia, Jornal Extra e Jornal Folha de São Paulo.

Chile

REGION
SUR



ENERO

Jueves 3

• Un grupo de pehuenches toma la sede de la Corporación Nacional Indígena (CONADI) ubicada en la localidad de Ralco exigiendo la destitución del delegado del organismo en el Alto BíoBío.

Viernes 4

• Ocho mapuches de la comunidad Trif Trif Co, que pertenecen al Consejo de Todas las Tierras, son detenidos bajo la acusación de haber participado en la toma e incendio del fundo San Jorge ocurridos el 14 de diciembre.

Lunes 7

• Carabineros desalojan la sede de Ralco de la CONADI y detienen a 16 pehuenches.

Miércoles 9

• Los 16 pehuenches detenidos son puestos en libertad.

Domingo 13

• Un centenar de desocupados se instalan junto a sus familiares con carpas frente a la catedral San Marcos de Arica, I Región, exigiendo ser incluidos en alguno de los planes de empleo que aplica el gobierno en dicha ciudad.

• Alrededor de 50 mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco, de cinco comunidades de la IX Región, toman el fundo particular Los Pastales ubicado en Temuco.

Lunes 14

• Medio centenar de pehuenches cortan la ruta que une Ralco con el Alto BíoBío, en protesta por el incumplimiento del protocolo de acuerdo firmado con la empresa española Endesa, que establece la entrega de 2,1 millones de dólares a 184 familias no afectadas directamente por la construcción de la central hidroeléctrica. Carabineros despejan la zona por la fuerza.

Martes 15

• Carabineros ingresan al fundo Los Pastales, encontrándolo desocupado.

Miércoles 16

• Un centenar de desocupados de Lota, Arauco, bloquea la principal ruta de salida de la provincia exigiendo al gobierno la entrega de planes de empleo de emergencia, tras lo cual son reprimidos por carabineros, quienes detienen a 12 manifestantes.

• El dirigente del Consejo de Todas las Tierras José Nain es detenido bajo el cargo de maltrato a carabineros.

Jueves 17

• Desocupados de Lota acuerdan con la gobernadora de Concepción la entrega de 100 cupos de empleo y la continuación de otros 130 además del pago de un anticipo de sueldo.

• Pehuenches, el gobernador de BíoBío y Endesa acuerdan iniciar una mesa de diálogo en la que tratarán el cumplimiento del protocolo de acuerdo firmado en 1998 en torno a electrificación rural gratuita, subsidios habitacionales y puestos de trabajo para las familias afectadas indirectamente por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.

Miércoles 23

• Más de 300 trabajadores municipales de El Bosque y La Granja toman sus respectivas sedes de gobierno exigiendo que no sea implementado el anuncio de la Intendencia

Metropolitana, consistente en despedir a la mitad del personal y rebajar los salarios de quienes queden efectivos.

- El Senado chileno aprueba los protocolos para dar vía libre al Tratado de Libre Comercio (TLC) con El Salvador, que entrará en vigencia a partir del mes de abril de este año.

Martes 29

- Cerca de 100 habitantes de las comunas de Peñalolén y San Ramón toman la Intendencia de la Región Metropolitana exigiendo que no sean reducidos a media jornada los planes de empleo temporales.

- Alrededor de 300 trabajadores del programa de empleos de emergencia se manifiestan frente a la Gobernación Provincial de Valdivia y reclaman el mantenimiento de los planes de trabajo.

- Un centenar de pehuenches corta las rutas que unen Santa Bárbara con Ralco y ésta localidad con Guallalí exigiendo la entrega de 35 mil hectáreas. Carabineros despejan el corte y detienen a siete personas.

Jueves 31

- Más de 70 integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS) y la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM), entre otras organizaciones, toman las dependencias capitalinas del Ministerio de Salud requiriendo garantías de estabilidad laboral para los trabajadores afectados por el decreto-ley sobre hospitales experimentales, que otorga recursos y personería jurídica propios y la facultad de contratar y despedir empleados a libre arbitrio a 29 centros sanitarios. Los manifestantes demandan una reunión con el subsecretario del despacho.

- En Andacollo, cerca de 200 mineros cortan la ruta a La Serena en demanda de soluciones ante el cierre de la empresa canadiense Dayton, encargada de la explotación del yacimiento de oro y cobre.

- Trabajadores de la Coordinadora Nacional Marítimo Portuaria (CNMP) cortan calles cercanas al puerto de Valparaíso exigiendo la inclusión de 39 personas en el programa de apoyo a la microempresa acordado con el gobierno federal tras la privatización del servicio de atraque reclaman también el pago de cuotas atrasadas de manutención que forman parte del mismo programa.

FEBRERO

Viernes 1

- Dirigentes de los trabajadores que se encontraban tomando el Ministerio de Salud acuerdan con el titular del despacho un protocolo en el que las partes se comprometen a revisar los estatutos que regirán para la aplicación de la Nueva Ley de Hospitales Experimentales.

- Cerca de 150 trabajadores de Habitacoop toman la sede capitalina de la empresa junto al sindicato local, exigiendo el pago de los sueldos atrasados e indemnizaciones. El Banco del Estado se compromete a pagar los salarios adeudados y discutir las indemnizaciones.

Domingo 17

- Alrededor de 600 trabajadores de la feria persa capitalina Los Morros se manifiestan en la zona contra los desalojos ejecutados tras una orden de traslado emanada del gobierno local. Carabineros reprime la medida y detiene a ocho personas.

Lunes 18 • Un centenar de jefas de hogar de Talcahuano marchan en la ciudad en demanda del mantenimiento de los planes de empleo de emergencia.

Martes 19 • En la IX Región, mapuches de las comunidades de Llalletué y Lipún, pertenecientes a la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, ocupan el fundo Santa Laura, en Galvarino, y exigen la entrega de 750 has. más 1.500 has. a la empresa forestal Millalemu.

Miércoles 20 • Efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojan a los mapuches que ocupaban el fundo Santa Laura.

Sábado 23 • Pehuenches intentan detener el traslado de una turbina belga a la central hidroeléctrica Ralco en la ruta que une Concepción con Cabrero, tras lo que son reprimidos por carabineros. Siete personas detenidas son liberadas horas después.

MARZO

Lunes 4 • En el Alto BíoBío, personas encapuchadas detienen e incendian un camión que transporta un transformador hacia la central hidroeléctrica Ralco. La empresa Endesa repudia el ataque y solicita mayor presencia policial permanente en el área.

Martes 5 • Un centenar de pehuenches del Alto BíoBío corta un puente de acceso a las obras de construcción de la central hidroeléctrica Ralco exigiendo la instalación de una mesa de negociación con el Ministerio de Planificación, el director de la CONADI y diputados de la zona para debatir el cumplimiento de un protocolo de acuerdo suscrito por el gobierno y Endesa en 1998. La gobernación provincial se niega al encuentro. Por la tarde, carabineros desalojan la vía.

Viernes 8 • La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realiza una marcha en Concepción en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la que sus participantes protestan contra el desempleo y la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.

Sábado 9 • Alrededor de 500 pehuenches y araucanos de las regiones VIII y IX se reúnen en el Alto BíoBío junto al Consejo de Todas las Tierras para definir estrategias de apoyo a los comuneros que se oponen a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Un grupo de 20 pehuenches, junto al lonco de la comunidad Malla Malla, cortan una ruta ubicada a 5 km. de Ralco.

Domingo 10 • La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) de la IX Región demanda la aplicación de las leyes de Seguridad Interior y Antiterrorista.

Lunes 11 • CONFUSAM inicia un paro indefinido al que se pliegan cerca de 24 mil trabajadores de todo el país en demanda de un aumento salarial de un 12%, mayor al 7,5% propuesto por el gobierno. Según el gremio el paro fue total en cinco regiones del país.

Martes 12 • CONFUSAM, el Ministerio de Salud y la Asociación Chilena de Municipalidades acuerdan un incremento salarial de 10,6% en cuatro años, el pago de un bono único, el reforzamiento de consultorios y la creación de un estímulo al desempeño colectivo además de incentivos al retiro y la capacitación.

Miércoles 13

- Las federaciones regionales de la CONFUSAM de las regiones I, II, IV, V y VIII rechazan el acuerdo alcanzado con el gobierno.
- Un centenar de vecinos de Maipú se enfrenta con carabineros tras asistir a una inspección ocular del alcalde a las obras de construcción del basural impulsadas por el consorcio Coinca y reclamar su clausura. La disputa finaliza con cinco detenidos.
- Custodiado por más de 50 carabineros y vehículos policiales, llegó a Alto BíoBío el transformador para la central hidroeléctrica Ralco.

Jueves 14

- La Coordinadora Nacional de Sindicatos de Correos de Chile convoca a un paro por 24 hs. que es acatado, según los organizadores, por el 96% de los 6.500 trabajadores de la empresa. Más de mil empleados se manifiestan frente a La Moneda junto a la CUT exigiendo al presidente que deje sin efecto el pago de un bono de 75 millones de pesos a once ejecutivos de la firma y que lo haga extensivo a todo el personal.

Lunes 18

- Cerca de 300 integrantes de Federación Nacional de Productores de Leche (FEDELECHE) se manifiestan frente a La Moneda exigiendo al presidente un incremento en el arancel a la importación del producto.

Martes 19

- Alrededor de 120 jefes de familias integrantes de la comunidad Pantano Antinis toman un predio perteneciente a la sociedad Stapping, ubicado en Lumaco, y reclaman un menor precio por sus tierras y denuncian matanzas de animales.
- El presidente Lagos anuncia la reestructuración y la entrega de 130 millones de dólares a la CONADI además de designar al ministro de Planificación como coordinador ejecutivo de Políticas y Programas de los Pueblos Indígenas.

Jueves 21

- El pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción acoge la solicitud del gobernador permitiendo la aplicación de la Ley Antiterrorista en el BíoBío.

Sábado 23

- Cerca de 150 desocupados cortan la ruta 5 norte a la altura de Villa El Edén exigiendo al gobierno planes de empleo.

Domingo 24

- El consejo directivo de CONFUSAM respalda la gestión realizada por el directorio que puso fin al paro convocado el 11 de marzo.

ABRIL

Lunes 1

- Cerca de 1.800 internos de la ex-Penitenciaría de Santiago iniciaron una huelga de hambre exigiendo traslados y el cese de maltratos. Gendarmería desconoce la medida aludiendo no haber sido notificada por escrito de los planteos.

Jueves 4

- Cerca de 500 productores lecheros de la provincia de Llanquihue, X Región, se concentran en Puerto Vargas y realizan una caravana hacia Puerto Montt exigiendo al gobierno la fijación del precio mínimo del litro de leche en 0,9 pesos.
- Medio centenar de indígenas de la comunidad Loncomahuida ocupan el fundo Pidi-ma, propiedad de Bosques Arauco ubicada en Temuco. Carabineros desaloja la toma y detiene a tres comuneros mapuches.

Viernes 5 • Más de 400 integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Portuarios de Iquique inician una huelga y exigen que la Inspección del Trabajo investigue el cumplimiento de las normas laborales y la contratación de personas ajenas a la función.

Jueves 11 • Más de 3 mil personas, entre trabajadores portuarios, jefas de hogar, desocupados, pescadores artesanales, estudiantes y empleados de salud, convocados por la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Sindicales de San Antonio, V Región, marchan y se manifiestan frente a la sede de la gobernación provincial, en reclamo por el mantenimiento de un sector del puerto que la Empresa Portuaria pretende suspender demandan también el aumento en la cuota de captura de recursos marítimos y en los cupos de planes de empleo temporal, entre otras cuestiones.

• Cerca de 300 desocupados marchan y se manifiestan frente a la municipalidad de Viña del Mar exigiendo planes de empleo municipales y denunciando ser marginados por haber participado en una huelga de hambre y por integrar organizaciones sindicales. Carabineros reprimen la manifestación y detienen a 50 personas.

Viernes 12 • Trabajadores de dos hospitales de Viña del Mar y de Valparaíso paralizan sus labores y se manifiestan contra la implementación del plan Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE). Los empleados toman las dependencias del servicio de salud Viña del Mar-Quillota y bloquean una calle, tras lo que son reprimidos por carabineros.

Sábado 13 • Tres personas encapuchadas queman un camión que trasladaba leña desde un fundo particular de la IX Región. Carabineros detiene a dos hijos del lonco Pascual Pichún, acusados del atentado.

Miércoles 17 • Quince desocupados toman las dependencias de la Gobernación de San Antonio exigiendo medidas contra el desempleo, un aumento en las cuotas de extracción marítima y el dragado del puerto de la ciudad. Carabineros detiene a los manifestantes, tras lo cual 100 personas se manifiestan frente a la Primera Comisaría demandando su liberación. La Coordinadora de Organizaciones Sociales y Sindicales de la zona corta la avenida principal de la ciudad.

• Medio centenar de universitarios indígenas se manifiesta frente a la Intendencia Regional y la Corte de Apelaciones de Temuco exigiendo la liberación de los detenidos el pasado sábado 13.

Lunes 22 • Cerca de 800 trabajadores de la Agrupación de Médicos Generales de Zona inician un paro de 48 hs. junto a becarios, dentistas y químicos farmacéuticos en reclamo por el establecimiento de los montos de estímulo y la reglamentación del sistema de turnos. La medida, con un acatamiento del 95%, es acompañada de marchas y afecta a 111 hospitales rurales y 200 consultorios de todo el país.

• Medio millar de trabajadores de la empresa acerera Huachipato de Talcahuano bloquean las rutas de acceso a las industrias que operan en la ciudad impidiendo el paso de camiones con materia prima importada y exigiendo al gobierno la aplicación de salvaguardias. Los manifestantes botan la carga de un vehículo.

Martes 23 • La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) convoca a un paro estudiantil acatado en 12 de las 14 facultades de la Universidad de Chile (UCH) en reclamo de la asignación de recursos para bienestar estudiantil y para financiar programas médicos y deportivos. Cerca de 2 mil universitarios marchan a su Casa Central.

■ Cronología

• El secretario de Salud acuerda con los trabajadores en huelga la revalidación de un decreto supremo firmado en octubre que reglamenta el pago de asignaciones de estímulo y los turnos de urgencia.

Jueves 25

• Cerca de 2 mil alumnos y 50 funcionarios de la Universidad Católica de Maule (UCM) se manifiestan frente a la intendencia de Talca exigiendo la asignación de fondos para créditos y becas estudiantiles.

Lunes 29

• La convención nacional del Colegio Médico se pronuncia, en un debate en torno a la reforma del sector, a favor de que el estado garantice el derecho a la salud, que se fortalezca el sistema público, que sea implementado un modelo de salud integral y que sea priorizada una forma de financiamiento solidaria del sector. El presidente del organismo informa que el 93% del tercio de los 17 mil profesionales médicos del país que participaron en un plebiscito nacional realizado el 15 y 16 de abril se pronunciaron contra el plan AUGE.

Martes 30

• Alrededor de 2 mil estudiantes de distintas universidades junto a la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) marchan hacia el Ministerio de Educación exigiendo la asignación de una partida de 6 mil millones de pesos para crédito fiscal. La manifestación es reprimida por carabineros. Cerca de 3 mil universitarios se manifiestan en Concepción, mientras que en Valparaíso protestan alumnos de tres casas de estudio. Las manifestaciones son reprimidas. La ministra de Educación afirma que no aceptará presiones.

■ Glosario de Siglas

62

AUGE	Acceso Universal con Garantías Explícitas
CNMP	Coordinadora Nacional Marítimo Portuaria
CONADI	Corporación Nacional Indígena
CONFECH	Confederación de Estudiantes de Chile
CONFENATS	Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud
CONFUSAM	Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal
CPC	Confederación de la Producción y el Comercio
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
FECH	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FEDELECHE	Federación Nacional de Productores de Leche
TLC	Tratado de Libre Comercio
UCH	Universidad de Chile
UCM	Universidad Católica de Maule

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.

Fuentes: diarios La Tercera y El Mercurio.

Paraguay

REGION
SUR



ENERO

Martes 15 • La Unión de Trabajadores del Alto Paraná (UTAP) comienza una huelga departamental y unas 500 personas marchan por Ciudad del Este hasta la sede local de la gobernación, para exigir la recontractación de los empleados de la empresa Auto Rent S.A. y la reincorporación de 395 funcionarios despedidos de la Municipalidad.

Miércoles 16 • La UTAP declara en cuarto intermedio la huelga departamental, luego de reunirse con varios ministros del Poder Ejecutivo, quienes se comprometen a mediar en los conflictos suscitados entre los trabajadores despedidos de la empresa Auto Rent y de la Municipalidad de Ciudad del Este.

• Más de 300 familias ocupan en Caazapá tierras que habían sido prometidas por el Instituto de Bienestar Rural (IBR).

Sábado 19 • María Edith Bordón de Debernardi, secuestrada desde el 16 de noviembre de 2001, es liberada, luego de que sus familiares pagan un alto rescate.

Domingo 20 • Tres activistas del Movimiento Patria Libre (MPL) son detenidos, acusados de integrar la banda de secuestradores de María Edith de Debernardi. Familiares de Juan Arrom –señalado como el cerebro del secuestro– denuncian que está desaparecido desde el 17 de enero.

Lunes 21 • Más de 90 reclusos de la cárcel regional de Misiones levantan la huelga de hambre que mantenían desde hace dos semanas, luego de que la Justicia anuncia que se aclarará la situación de cada persona reclusa.

Miércoles 30 • Son hallados Juan Arrom y Anuncio Martí, ambos militantes del MPL. Denuncian haber estado secuestrados desde el 17 de enero y haber sido torturados para que se declarasen culpables del secuestro de María Edith de Debernardi.

Jueves 31 • Unas 3 mil personas se concentran frente a la Catedral de Asunción, reclamando el fin del terrorismo de Estado y la remoción de los fiscales a cargo de la investigación del secuestro de Debernardi. Exigen, además, la renuncia o juicio político al presidente Luis González Macchi.

FEBRERO

Sábado 2 • Juan Arrom es acusado por los fiscales del caso Debernardi y pasa a prisión preventiva. Martí queda en libertad.

Lunes 11 • El director del Centro de Investigación Judicial es destituido de su cargo, implicado en las detenciones forzosas y torturas de Arrom y Martí.

• Unas 500 personas pertenecientes a organizaciones sociales y sindicales de sin tierras, indígenas y funcionarios municipales cesados de sus cargos, convocados por la UTAP, se manifiestan por las calles de Ciudad del Este para reclamar, entre otras cosas, el fin del terrorismo de Estado.

Viernes 22 • El ex presidente Raúl Cubas Grau se entrega a la Justicia luego de tres años de estar prófugo, acusado, entre otras cosas, por la matanza de jóvenes ocurrida en marzo de 1999.

Martes 26 • Integrantes de la Federación de Estudiantes (FEUNA) se concentran en las puertas de una de las sedes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), mientras sus representantes estudiantiles irrumpen en la reunión del Consejo Superior Universitario, para exigir la restitución del presupuesto de becas, fondos para investigación y que el rector renuncie a sus otros cargos para dedicarse a la UNA.

Jueves 28 • Unos 2 mil campesinos son desalojados de un terreno del km. 26 de la ruta Transchaco, Villa Hayes, Chaco Paraguayo; se enfrentan a los uniformados y son reprimidos, resultando más de 20 personas heridas y casi un centenar detenidas. Luego, 400 familias ocupantes del nuevo asentamiento San Isidro, de la Asociación Chaqueña de Comunidades Sin Tierra (ACHACOSTI), son desalojadas por los mismos efectivos policiales sin oponer resistencia, por lo que firman un acuerdo con la Gobernación por el cual las autoridades les entregarán tierras.

MARZO

Martes 5 • El equipo económico anuncia un aumento de 30% en la tarifa de energía eléctrica; de 25% en el agua potable y de 100% en el teléfono.

Miércoles 6 • El presidente Luis González Macchi aprueba únicamente un aumento del 30% anual en las tarifas de energía eléctrica, por lo que el ministro secretario de la Reforma, el presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO) y los interventores de la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA) y del Ferrocarril renuncian.

Jueves 7 • Los docentes del departamento de Neembucú se declaran en huelga, ante el retraso en el pago de sus salarios.

Lunes 11 • Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del de Justicia y Trabajo, de Obras Públicas y del Poder Judicial marchan hasta el Congreso para reclamar por sus sueldos atrasados. En tanto, profesionales agremiados en el Sindicato Médico del Paraguay se concentran también frente al Parlamento para denunciar la situación de desabastecimiento de insumos y medicamentos de los hospitales públicos y el retraso del pago de sus salarios.

Miércoles 20 • Unos 5 mil campesinos de todo el país asociados a la Federación Nacional Campesina (FNC) marchan por Asunción hasta el Congreso, en defensa de la banca pública y contra la privatización de cualquier ente del estado. Exigen la industrialización de los productos agrícolas, tierra, salud, educación e infraestructura básica.

- Martes 26** • La fracción que responde al ex general Lino Oviedo –quien, acusado de numerosos delitos, permanece prófugo de la justicia– rompe con el Partido Colorado y se inscribe en el Registro Electoral como un nuevo partido político, la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE).

ABRIL

- Lunes 1** • CORPOSANA deja de ser una institución estatal y pasa a ser una sociedad anónima, cuyo nombre se oficializa como Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP).
- Viernes 5** • Con el objeto de obtener un mejor precio para la venta de COPACO, el gobierno sube las tarifas telefónicas.
- Lunes 8** • Padres de familia y docentes, representantes de 146 escuelas del departamento de Caindeyú y nucleados en la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), realizan una manifestación frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para pedir mayor presupuesto para el sector.
- Viernes 12** • El ex presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) es condenado a cuatro años de cárcel por el delito de lesión de confianza, en perjuicio del estado, a raíz de la inyección económica de 42 mil millones de guaraníes del patrimonio público al Banco Desarrollo, que estaba en quiebra.
- Martes 16** • El personal de los hospitales públicos nacionales para durante dos horas, en reclamo de mayor presupuesto para el sector.
- Miércoles 17** • Los obreros de COPACO marchan por el microcentro de la capital para pedir la revisión del contrato de concesión de la empresa y la reconducción del proceso de privatización. En tanto, las 13 organizaciones empresariales y sociales que componen el Consejo Deliberante de la Reforma del Estado deciden desvincularse del proceso de privatización de COPACO, debido a las denuncias de corrupción en los trámites para la venta de esta empresa.
- Alrededor de 500 campesinos de Cordillera y Concepción pertenecientes a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) marchan por Asunción hasta el Congreso para pedir la suspensión de la privatización de la banca pública y de las empresas telefónicas del estado y reclamar más presupuesto para salud y educación. Representantes de distintos departamentos cierran rutas para acompañar la protesta de la capital, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones (SINATTEL) para durante la jornada. En Ciudad del Este, unos 300 campesinos bloquean la ruta 7 en el km. 30, mientras que unos 500 integrantes de la UTAP marchan por las calles de la ciudad.
- Jueves 18** • Mientras realizan su cuarto día de paro, con la modalidad de ir agudizando la medida en una hora por día, los funcionarios de Salud Pública se manifiestan frente a la Cámara de Diputados para exigir la modificación de la ley de presupuesto, de modo tal que puedan seguir cobrando doble o triple salario. Consiguen su objetivo, por lo cual levantan el paro.

■ Cronología

• Luego de reunirse con el ministro del Interior y con el presidente del Congreso para pedir la suspensión de las privatizaciones, los dirigentes del MCNOC se declaran en movilización permanente y amenazan con paralizar el país mediante el cierre de rutas si las autoridades no atienden el reclamo popular. En tanto, unos 2 mil campesinos de Minga Guazú, Alto Paraná, indígenas de la parcialidad mbya-guaraní y camioneros de la zona, cierran la ruta 7 en el km. 30, reclamando un referéndum para apoyar o reprobando las privatizaciones impulsadas por el gobierno.

Miércoles 24

• Tras una manifestación popular desde la Catedral Metropolitana hasta el Senado, los dirigentes de Patria Querida presentan ante el Congreso 75 mil firmas que respaldan el proyecto de reforma electoral, vía iniciativa popular, cuyo objetivo es conseguir el desbloqueo de las listas cerradas.

Lunes 29

• Los trabajadores de la COPACO comienzan una huelga de 72 hs., en reclamo de la modificación de la reglamentación del contrato de concesión y la revisión de la cláusula que establece que el privado traslade sus costos a las tarifas, sin la participación del ente regulador, entre otros puntos.

■ Glosario de siglas

ACHACOSTI	Asociación Chaqueña de Comunidades Sin Tierra
COPACO	Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.
CORPOSANA	Corporación de Obras Sanitarias
ESSAP	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
FEUNA	Federación de Estudiantes
FNC	Federación Nacional Campesina
IBR	Instituto de Bienestar Rural
MCNOC	Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
MEC	Ministerio de Educación y Cultura
MPL	Movimiento Patria Libre
OPEP	Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay
SINATTEL	Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones
UNA	Universidad Nacional de Asunción
UNACE	Unión Nacional de Ciudadanos Éticos
UTAP	Unión de Trabajadores del Alto Paraná

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora y Noticias.*

Uruguay

REGION
SUR



ENERO

Jueves 24 • Bajo la consigna *Por un Uruguay sin Excluidos* y a pesar del decreto presidencial que prohíbe el ingreso de los trabajadores a Punta del Este, unas 15 mil personas –encabezadas por la Propuesta Intersindical de los Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y acompañadas por miles de ciudadanos que salen al camino a manifestar su apoyo, en el marco de un paro nacional– marchan desde Montevideo hasta Maldonado, donde realizan un acto frente al edificio local de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), reclamando un cambio en la política económica. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) paran durante la jornada.

Viernes 25 • El presidente Jorge Batlle deja sin efecto una serie de medidas anunciadas un día atrás por el ministro de Economía, como el aumento a los combustibles o el impuesto a las llamadas internacionales.

Jueves 31 • El personal de la empresa Montevideo Refrescos S.A. (embotelladora de Coca Cola) para durante la jornada para oponerse a las licencias y despidos que impondrá la compañía a partir del 1° de febrero.

FEBRERO

Martes 5 • Ante más de 25 mil personas reunidas en Agraciada y San Quintín, Montevideo, para celebrar un acto por el 31 aniversario del Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, máximo dirigente de la izquierda, reclama al Gobierno un cambio en la política económica.

Miércoles 6 • Los transportistas de carga comienzan un paro de 72 hs. y se vuelcan masivamente a las rutas, para que el Ejecutivo cumpla con su promesa de sacar el Impuesto Específico Interno (IMESI) al gasoil.

Jueves 7 • El presidente Batlle se dirige a la población para explicar cómo ajustará las cuentas del estado: anuncia la venta de la Torre de Telecomunicaciones de ANTEL; la liquidación de la aerolínea nacional Pluna y del Instituto Nacional de Colonización; el impuesto a las llamadas telefónicas, a frutas y verduras, a los sueldos, a la leche larga vida, al agua potable y a los juegos de azar, y responsabiliza de la crisis económica uruguaya a la situación internacional.

Martes 19 • En el marco de un paro de tres horas impulsado por el PIT-CNT para permitir que los trabajadores acompañen la entrega de las actas, la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional (CDPN) entrega a la Corte Electoral 720 mil adhesiones, solicitando la realización de un referéndum donde la ciudadanía decida el futuro de ANTEL.

Jueves 21 • Con la oposición del Espacio Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y de Rafael Michellini, legislador del Nuevo Espacio (NE), los senadores colorados y blancos aprueban un paquete impositivo de extensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y gravamen a tarjetas de crédito y teléfonos celulares, y la reducción de gastos en el estado, entre otros puntos.

Jueves 28 • El Sindicato Unico Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) realiza un paro parcial y se moviliza en todo el país para oponerse al recorte presupuestario gubernamental.

MARZO

Viernes 1 • Centenares de personas se concentran frente a las oficinas de la Receptoría de Aduanas de Artigas y otras cientos cortan el puente internacional La Concordia, en oposición a la medida que desde el jueves se aplica para controlar el cruce de todo tipo de mercancías por los pasos fronterizos internacionales. Piden que el Gobierno permita el cruce de la canasta básica de alimentos, como venía sucediendo hasta ahora.

• Los presos del penal de Libertad se amotinan, incendiando y destruyendo el recinto y tomando como rehenes a siete guardias carcelarios, reclamando que se clausure la prisión y se los traslade. Luego de acordar con las autoridades que se conformará una comisión que visitará el establecimiento y tras la promesa de que no se tomarán represalias, liberan a los rehenes.

Sábado 2 • Los habitantes de Artigas levantan el bloqueo del paso fronterizo con Quaraí (Brasil), luego de negociar con el director de Aduanas que se permitirá el ingreso semanal de una canasta básica por familia.

Lunes 4 • Los presos del penal de Libertad culminan el motín, tras lo cual las autoridades disponen trasladar un grupo de reclusos al Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (COMCAR) y otro a La Tablada, ex centro de detención para presos políticos durante la dictadura.

Jueves 7 • Más de 100 trabajadores del Ingenio Cooperativo Calnu, en Bella Unión, agremiados al Sindicato Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA), ocupan la planta, reclamando el reintegro de los 131 obreros que están con Seguro de Desempleo.

Lunes 11 • En el primer día de clases en todo el país, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) realiza paros de una hora por turno, para oponerse a la reforma que impulsa el Consejo Directivo Central (CODICEN) para el secundario y que actualmente ya se está aplicando en el ciclo básico.

Sábado 16 • El presidente Batlle anuncia que el Gobierno derogará los artículos del Presupuesto referidos a ANTEL, por lo que el referéndum para evitar la privatización de la telefónica no será necesario.

Jueves 21 • La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) para durante la jornada y realiza una concentración frente al Obelisco, que culmina en el Ministerio de Salud Pública (MSP), denunciando las malas condiciones en la atención a los usuarios, recortes en la Asistencia Integral y desmantelamiento del Servicio de Enfermedades Infecto-Contagiosas.

- Centenares de afiliados a la Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) marchan hasta el Ministerio de Vivienda para rechazar el recorte a esta dependencia y solicitar créditos para una treintena de cooperativas.
- El PIT-CNT y 26 gremiales empresariales firman un acuerdo programático que, entre otras cosas, le reclama al gobierno un cambio en el rumbo económico.

ABRIL

Lunes 1

• Unos 157 presos del penal de Libertad comienzan una huelga de hambre denunciando que están bajo constante amenaza, luego de la crisis carcelaria desencadenada a partir del motín del 1° de marzo.

• La UNOTT y la Asociación de Cooperativas del Transporte (ASCOT) marchan con unos 100 ómnibus desde el Obelisco hasta la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y el Ministerio del Interior, en demanda de un cambio en la política económica, a la cual responsabilizan directamente de la violencia que está viviendo en las calles el pueblo uruguayo y particularmente el sector, producto de la marginación a la que los condena el sistema.

Viernes 12

• Un centenar de cooperativistas afiliados a la FUCVAM ocupa el anexo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en protesta por el recorte gubernamental al presupuesto de programas habitacionales. Son desalojados por la policía.

Martes 16

• Alrededor de 100 mil personas de distintos puntos del país, convocadas por la Concertación para el Crecimiento –integrada por el PIT-CNT y las gremiales empresariales rurales– marchan desde el Palacio Legislativo hasta el Obelisco de Montevideo, para reclamar al gobierno un cambio urgente en su política económica. Los maestros públicos suspenden las clases, los transportistas urbanos e interurbanos y los bancarios de Montevideo paran durante la tarde, y los médicos sólo atienden urgencias. En las capitales de San José, Paysandú, Lavalleja y Treinta y Tres, los trabajadores también realizan actos.

Martes 23

• El presidente Batlle anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, tras las palabras de reprobación de Fidel Castro luego de que Uruguay promoviera el voto contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Miércoles 24

• Alrededor de 5 mil personas realizan un acto en la explanada de la Universidad de la República, en repudio a la decisión del Presidente de romper las relaciones diplomáticas con Cuba.

Lunes 29

• Un grupo de integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) instala un campamento en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para reclamarle al gobierno puestos de trabajo.

■ Glosario de siglas

AEBU	Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay
ADES	Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
ANTEL	Administración Nacional de Telecomunicaciones
ASCOT	Asociación de Cooperativistas del Transporte
CDPN	Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional
CODICEN	Consejo Directivo Central
COMCAR	Complejo Carcelario de Santiago Vázquez
EP-FA	Espacio Progresista-Frente Amplio
FA	Frente Amplio
FFSP	Federación de Funcionarios de Salud Pública
FUCVAM	Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua
IMESI	Impuesto Especifico Interno
IMM	Intendencia Municipal de Montevideo
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MSP	Ministerio de Salud Pública
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
NE	Nuevo Espacio
PIT-CNT	Propuesta Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores
SOCA	Sindicato Obreros de la Caña de Azúcar
SUNCA	Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
UNOTT	Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte
UTD	Unión de Trabajadores Desocupados
ONU	Organización de las Naciones Unidas



El Fujimorismo del Gobierno Toledo

Por Aníbal Quijano*

Nueve meses apenas después de jurar como Presidente de la República del Perú, Alejandro Toledo ya había superado una marca nacional: según las encuestas de opinión pública, a fines de abril sólo el 26% de los peruanos aprobaba su gobierno. Ninguno de sus antecesores en el cargo había alcanzado tan baja marca en tan breve tiempo. Para contrarrestar esa imagen, pocos días después de la publicación de los resultados de esa encuesta Toledo decidió darse un baño de popularidad visitando Gamarra, el más famoso y más importante centro comercial de la “economía informal” limeña. Pero lo recibió una masiva rechifla y una lluvia de botellas de plástico y de frutas y verduras podridas, que la televisión y los periódicos no tuvieron más remedio que registrar y difundir. Frente al escándalo político, el Ministro del Interior no titubeó en declarar que esas acciones eran sólo deliberadas maniobras políticas dirigidas a desestabilizar la democracia en el país. Pero la siguiente encuesta encontró que aquel índice de aprobación se había reducido al 23%.

A mediados de mayo, Toledo viajó a Madrid a otra reunión cumbre de los presidentes latinoamericanos con los de la Unión Europea. La TV limeña no dejó de mostrarlo saludando a Aznar, Chirac o Blair, como augurio de importantes acuerdos comerciales y financieros favorables al Perú. Pero Toledo regresó con las manos vacías ya que sólo Chile y México fueron beneficiarios de tales acuerdos. Con todo, su partido logró juntar unas pocas decenas de miles de sus simpatizantes para recibirlo en una manifestación pública. Y en esa ocasión, además de reiterar, una vez más, sus promesas electorales, proclamó insólitamente que quienes no estaban allí eran enemigos de la democracia. La posterior y más reciente encuesta de opinión pública (*El Comercio*, 2002[b]) registra que ahora sólo el 22% de los peruanos aprueba la gestión de Toledo, y que el 71% rechaza su política económica, contra apenas el 17% que la aprueba. Y casi seguramente, el descenso aún no ha concluido, aunque la esposa de Toledo ha amenazado con represalias a las encuestadoras.

Del otro lado, la protesta de las masas por el continuado deterioro de su situación económica, sin cualquier señal de mejoría, puebla las calles de todas las ciudades del país, virtualmente todos los días. A comienzos de mayo, un paro regional organizado por los Frentes Regionales y las Municipalidades Provinciales, fue acatado por la totalidad de la población de los departamentos del Sur y del Centro (Arequipa, Cuzco, Moquegua, Puno, Tacna y Apurímac, Ayacucho, Cerro de Pasco, Junín, Huánuco) en oposición a la privatización de las instalaciones regionales de producción de servicios públicos vitales, electricidad y agua potable, principalmente. En Yurimaguas, ciudad de la amazonía peruana, la población en masa tomó de rehén al Alcalde, del partido de Toledo, con graves acusaciones, reclamando la presencia de autoridades competentes para tomar decisiones que resuelvan sin dilación esos problemas.

Recientemente, el 14 de mayo se realizó un Paro Nacional organizado por las centrales sindicales y los frentes regionales. La prensa y los voceros oficiales admiten que en las

* Director del Centro de Investigaciones Sociales (CEIS) de Lima, Perú. Profesor de Binghamton University, Nueva York.



ciudades provinciales el Paro fue acatado por la amplia mayoría de la población, pero también proclaman que en Lima fue parcial y minoritario. Todos coinciden, no obstante, en que se trata de una seria advertencia de las masas contra la política económica del gobierno de Toledo. El 22 de mayo, decenas de miles de gentes de los barrios pobres de Lima desfilaron por las calles oponiéndose a la privatización del servicio de agua potable de la ciudad.

Esta no es una situación nueva. Viene desde hace varios meses. El 16 de abril los departamentos de la Región Sur realizaron una total paralización de actividades, en protesta contra la anunciada privatización de EGASA y de EGESUR, centrales regionales de producción de energía eléctrica. El Frente Regional de la Amazonía levantó a la mayoría de la población y produjo en Iquitos, la más importante ciudad de dicha zona, un conflicto político de repercusión nacional, en demanda del cumplimiento de las promesas electorales de Toledo, referentes sobre todo a medidas para la reactivación económica de una de las zonas ahora más deprimidas del país. En el Norte del país, en Chimbote y Trujillo sobre todo, la población ha salido a las calles con frecuencia en demanda de mejoras económicas. Y, por supuesto, Lima es el frecuente escenario diario de masas recorriendo las calles en demanda de empleo, de salario, de devolución de derechos conculcados como la negociación sindical por ramas de actividad o el cumplimiento de la decisión del Congreso de relegalizar la jornada de 8 horas, suprimida bajo el Fujimorismo.

Ya en marzo, antes de la visita de Bush a Lima, crecía una auténtica marejada de diarias protestas callejeras en todas las ciudades del país, demandando el término de la política económica neoliberal, que continúa la que realizaba el Fujimorismo, y el cambio del Ministro de Economía y de sus principales funcionarios, casi todos procedentes de la administración fujimorista. El 20 de marzo un coche-bomba estalló cerca de la Embajada de Estados Unidos, causando la muerte de 10 personas e hiriendo a muchos. Hasta ahora no se ha identificado a los responsables. Pero el Gobierno de Toledo, por iniciativa de su Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, aprovechó el clima de opinión que ese acto terrorista había causado, para lograr mayoría en el Congreso y hacer aprobar nuevas leyes represivas. Dos son las más importantes y sintomáticas: 1) la policía está ahora legalmente autorizada a interceptar los teléfonos y la correspondencia privados sin necesidad de autorización judicial; lo hacían, en realidad, desde hace tiempo, pero ahora con la protección de la ley, es decir conculcando el derecho a la reclamación; 2) los que en una marcha o manifestación política “estorben” el tránsito en la calle pueden ser, por tan grave delito, condenados a prisión hasta por seis años. Ni Fujimori se había animado a tanto.

Esa política represiva y la alarma antiterrorista en un país que sufrió durante más de una década una feroz “guerra sucia”, el intercambio entre terrorismo de estado y terrorismo subversivo, lograron entonces neutralizar las protestas callejeras y reducir su masividad y virulencia. Pero como ahora se observa, no por mucho tiempo. Las víctimas del neoliberalismo, continuado por más de una década también, han vuelto a las calles y a la resistencia en todo el Perú, demandando un cambio real y pronto de esa política. El problema es que tales demandas son dirigidas al mismo gobierno cuyo sentido y estructura constitutivas son, precisamente, la continuación y la profundización de dicha política.

■ Perú, país estancado

La explicación y el sentido de tal escenario peruano caben en pocas palabras. El Perú es un país estancado. Y, en lo inmediato, sin ninguna señal de salida hacia horizonte alguno.

Al término del Fujimorismo, la recesión económica se prolongaba por tercer año consecutivo. Hoy se arrastra por cuarto año consecutivo. La desarticulación de la previa estructura productiva, que ya se ordenaba en torno del predominio industrial y comercial, y su completa

re-primarización, realizadas bajo el Fujimorismo y el neoliberalismo, no se han hecho sino más profundas y definitivas. La estructura social constituida entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y mediados de los '80, ha sido desintegrada totalmente y la que existe es cada vez más precaria, fragmentaria e inestable. Los espacios ganados por la población dominada y las capas intermedias en el Estado después de la Segunda Guerra Mundial, fueron casi eliminados por el Fujimorismo y el proceso de democratización y de nacionalización de la sociedad y del Estado fue bloqueado y distorsionado. El control del Estado fue re-privatizado, separado de toda intervención de la vasta mayoría de la población. Esa situación no ha sido revertida, ni tiende a serlo, no obstante la crisis y la derrota políticas del Fujimorismo y el país ha ingresado en el cauce de una inestabilidad social y política que se mueve en dirección a una crisis abierta.

■ La política económica de Kuczynski-Toledo: recesión, desinversión, desempleo, pobreza

Hasta hace poco, el gobierno de Toledo insistía en que la actividad económica había comenzado a reactivarse en el último trimestre. La cifra oficial difundida por el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, llegaba al 3,3%. Ya había, sin embargo, consenso entre los economistas y la mayoría de los empresarios en que descartada Antamina, una de las minas más grandes y productivas del país, la cifra podía quizá llegar al 2% y que, por lo demás, ese resultado no debía nada a la política económica del actual gobierno. Pero el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), organismo del Estado, informó que la cifra real era de 1,6%. Y, finalmente, el propio Kuczynski, jaqueado por una amenaza de interpelación parlamentaria, ha terminado confirmando esa información (*La República*, 2002[a]). Esto es, no hemos siquiera comenzado a salir de la recesión, sobre todo frente a las cifras negativas de la industria (-4,3%), en particular en el rubro de la producción de alimentos (-5,4%). Ni se ve cómo, en esta política económica, eso sería posible.

Entre tanto, las exportaciones del primer cuatrimestre de este año bajaron en 4,8% respecto del período similar de 2001. Incluso las importaciones bajaron 5,3%, porque disminuyó la compra de bienes de capital e insumos (aunque en abril aumentaron por la compra de bienes de uso y consumo duradero). Pero la balanza comercial fue negativa, y el déficit fue superior en 8,9% al del período equivalente el año anterior y el déficit en cuenta corriente llegó a ser el 2,6% del PBF (*El Comercio*, 2002[a]).

El problema es que para las víctimas del neoliberalismo, que son la abrumadora mayoría de la población peruana, la continuación de la recesión económica implica un continuado y diario empeoramiento de su ya catastrófica situación. Cuando el Fujimorismo fue derrotado, de cada 100 peruanos, según las cifras oficiales, 57 no tenían el equivalente de un dólar diario para cubrir sus necesidades básicas y cerca de 30 ni siquiera medio dólar diario. Un año después, el porcentaje de peruanos pobres, los que no logran satisfacer sus necesidades básicas, sobrepasa el 60%.

Al término del Fujimorismo, el desempleo abierto en el Perú no había llegado, según las cifras oficiales, al 10% de la población económicamente activa (PEA). Pero el subempleo alcanzaba a más del 50% de ella. Nueve meses después, el desempleo abierto es del 11% de la PEA y el subempleo afectaba en el 2001 al 47,6% sólo en el sector urbano. En el conjunto del país la cifra sobrepasaría largamente el 60% de esa población. Y puesto que no hay inversiones nuevas, internacionales o locales, privadas o públicas, las perspectivas de empleo en el futuro próximo son simplemente sombrías.

Si se observa la política de salarios del gobierno de Toledo, no sólo se ha mantenido, sino que se ha acentuado la creciente distancia entre los salarios de los trabajadores y los de la tecnoburocracia estatal y privada que había sido iniciada con el Fujimorismo. Este



congeló el salario de los trabajadores estatales, pero levantó desmedidamente el salario y los ingresos de su tecnoburocracia pública, organizó listas secretas de los salarios más elevados, así como listas secretas de los privilegiados en el Sistema Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), contrató con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la administración de salarios en miles de dólares, que provenían sin embargo del propio erario público, para producir la impresión de que se trataba de sueldos internacionales. Y como es mundialmente conocido ahora, distribuyó ilegalmente entre el núcleo interno de la mafia los recursos normales del Estado y los más de 9 mil millones de dólares que provenían de la “privatización” o remate del capital estatal, y amparó el tráfico ilegal de armas y de droga para aumentar los ingresos de la mafia.

Al mismo tiempo, el Fujimorismo amparó la reducción del salario de los trabajadores de la empresa privada, mientras se dismantelaba la estructura productiva industrial y el capital ocupaba la “economía informal” y organizaba allí un sistema de sobre-explotación de los trabajadores, por medio del aumento del tiempo de trabajo a 12 o 14 horas diarias y de la simultánea drástica reducción del salario. Ese régimen de trabajo se prolongó casi una década y se convirtió en un orden natural para los empresarios. Cuando al comienzo mismo del gobierno de Toledo, las centrales sindicales y un sector de parlamentarios comenzaron a presionar por la re-legalización de la jornada de 8 horas diarias, el dirigente máximo de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleisser, no vaciló en declarar a la TV, con una sonrisa, que pensar en una jornada de 8 horas era “puro surrealismo”.

En el gobierno de Kuczynski-Toledo, por el momento no es probable que la rapiña ilegal del presupuesto estatal sea ya tan vasta y sistemática como en los tiempos del Fujimorismo. Pero los salarios de los trabajadores estatales, en especial de cientos de miles de profesores de todos los niveles del sistema de educación pública, siguen congelados, mientras los de la tecnoburocracia política siguen en alza. Para comenzar, inmediatamente después de jurar como el nuevo Presidente de la República, Alejandro Toledo se asignó 19 mil dólares mensuales de sueldo y pasó a ser el Presidente más caro de la historia peruana y latinoamericana (aunque frente a la repulsa pública y a la expresa petición de los líderes de oposición ofreció reducirlo a 12 mil por mes, no hay sobre eso información concreta disponible en este momento). Los contratos fujimóricos con el PNUD se han mantenido para un grupo privilegiado de funcionarios públicos que reciben altos salarios de miles de dólares. Y, por supuesto, los salarios de los trabajadores de la empresa privada siguen, en promedio, bajando al mismo tiempo en que crece el desempleo y se mantiene la “informalidad” del capital. Como hace notar ANALISIS SALARIAL –una conocida institución privada de estudios salariales– en su reciente edición de marzo de 2002, el aumento de 50 soles (11 dólares al cambio corriente) a los empleados públicos, así como la oferta de salario de 320 soles mensuales para el programa A Trabajar Urbano es “una muestra de falta de iniciativas en el campo de las remuneraciones, al menos públicas”. Sin embargo no siempre faltan iniciativas, y algunas pueden ser perversas. Por ejemplo, el gobierno estableció que las viudas reciban solamente el 50% de la pensión de jubilación que sus maridos tenían al momento de morir. Así la viuda de un profesor universitario jubilado en una universidad estatal cuya pensión máxima es de unos 325 dólares mensuales (según el cambio del día), recibiría apenas la mitad cuando, probablemente, ya no está ella misma en condiciones de obtener empleo y salario u otros ingresos. Claro está que hay un pequeño grupo de funcionarios estatales cuyas pensiones de jubilación suman miles de dólares. Pero, como es normal, la ley se hace contra la mayoría.

Así, la reconcentración de ingresos, como parte de la reconcentración mundial del control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, acentúa y acelera en el Perú la extrema polarización social de la población. Como en todas partes del mundo globalizado en los términos del neoliberalismo, las víctimas de esa política han sido encajonadas en una perversa trampa: sin el mercado no se puede sobrevivir y con el mercado no se puede sobrevivir. Y como se observa sin dificultad, las razones no son misteriosas, ni “naturales”.

■ Política fiscal recesiva

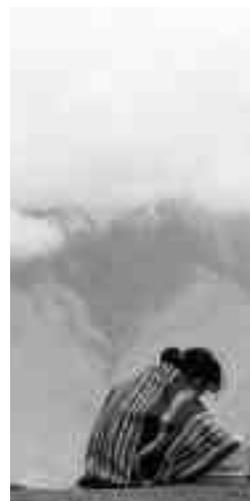
Dada la situación mundial, en particular la recesión en los países “centrales”, sobre todo en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Japón, dada la crisis de Argentina y la inestabilidad social y política de toda América Latina, no es difícil entender que no haya inversión privada internacional en el Perú. La inversión privada “nacional”, esto es, la de los capitalistas peruanos, se lleva a cabo, principalmente, en los paraísos fiscales del exterior. Y eso se remite a la vieja relación dependiente de la burguesía peruana con la del “centro”. Pero que no haya inversión estatal en el momento más necesario, requiere otra explicación.

Oficialmente, la falta de inversión estatal, se debería a la falta de recursos fiscales. En el debate público, sin embargo, se sabe que el Estado dispone actualmente de alrededor de 10 mil millones de dólares de reservas internacionales y que hay créditos acordados, pero no desembolsados por falta de proyectos específicos, por otros mil millones. La oposición aprista demanda por qué dichos recursos no se usan para reactivar el capitalismo en el país. La respuesta oficial usa el fantasma de la hiperinflación desatada por el capital financiero en el tramo final del gobierno aprista, para sostener que una rigurosa disciplina fiscal es necesaria para evitar, precisamente, la repetición de esa experiencia. Esta se atribuye, por supuesto, sólo a la política fiscal y monetaria.

Pero en el período del gobierno aprista la inflación era el flagelo común a los principales países de la región, a pesar de las diferencias en las políticas fiscales, porque era parte de una política del capital financiero. En el Perú esa política se hizo virulenta al final del gobierno de Alan García, como represalia contra el intento de estatización de la banca y de todo el sistema de intermediación financiera. Actualmente, sin embargo, la inflación no es el problema de la economía peruana, sino la tendencia deflacionaria que sigue la política fiscal mientras se acentúa la re-concentración de ingresos. En efecto, ya en el tramo final del Fujimorismo la inflación era virtualmente plana. En julio de 2001, la tasa anualizada era ya solamente del 1,98%. Y en una economía tan largamente estancada, con más de la mitad de la población en situación de pobreza crítica, las tasas últimas apuntaban a una deflación. Así, entre abril de 2001 y abril de 2002 la cifra era ya sólo de 0,05% y la tasa actual anualizada para el 2002 será, probablemente, menor. Es decir, tras el prolongado estancamiento, la deflación está en curso. Y esa es, exactamente, la medida del continuado descenso de la capacidad de consumo de la población peruana y la demostración eficaz de que la creciente gran mayoría de los peruanos, después de una década de continuado neoliberalismo, es cada día más pobre.

Lo que el argumento oficial trata de ocultar es que los acuerdos con el FMI obligan a mantener el déficit fiscal en 1,9% anual, lo que a su vez obliga a reducir la inversión y los gastos fiscales. Esa política privilegia, como en todos los países sometidos al dominio del capital financiero mundial, el pago de los servicios crecientes de una impagable deuda internacional, y que, sin embargo, acaba de ser aumentada por el gobierno de Kuczynski-Toledo, por medio de una maniobra financiera cuyo sentido será discutido más adelante. Por si no fuera suficiente, la actual política fiscal mantiene la exoneración de impuestos, por casi una década, a las 5 mayores empresas internacionales que operan en el país, por cerca de 400 millones de dólares. Dicha exoneración fue decidida por el Fujimorismo, pero el régimen de Toledo la ha ratificado contra la protesta de la población.

La falta de inversión privada local está relacionada también, sin duda, a las altas tasas de interés del capital financiero en el Perú (20% anual en soles y 10% en dólares), a pesar de la baja de las tasas internacionales. Por supuesto, la política neoliberal bloquea toda posibilidad de control o de regulación local de dichas tasas, no obstante que en Estados Unidos, el estado hegemónico del Bloque Imperial Global, la regulación de dichas tasas es, famosamente, la ocupación principal del Sr. Greenspan, la suprema autoridad federal de la política monetaria de ese país. Las altas tasas de interés refuerzan la recesión de un país



donde casi el 80% de los depósitos en la banca está en dólares y por consecuencia los créditos tienen que hacerse, principalmente, en esa moneda. Y, desde luego, los precios corrientes del mercado son medidos también según ella, aunque el dólar se mantiene con pequeñas fluctuaciones en un nivel de cambio probablemente subvaluado.

■ La política financiera: ¿la deuda internacional como un nuevo tributo colonial?

Durante la campaña electoral, Toledo y su equipo insistieron en que tenían un proyecto económico de largo plazo para el país y un programa detallado de trabajo en el corto plazo para la inmediata reactivación económica. Pero si algo ha quedado claro en estos nueve primeros meses de gobierno, sin duda es la total ausencia de cualquier programa sectorial o general de reactivación económica. La única y reiterada insistencia recae sobre la necesidad de dar al capital financiero internacional todas las señales que le den la confianza necesaria para invertir en el Perú. Y eso explica la reticencia a devolver a los trabajadores los derechos conculcados, la negativa total a usar los recursos fiscales para financiar la industria y la agricultura paralizadas, a levantar la capacidad adquisitiva de una población que se asfixia en la pobreza y que lleva a cientos de miles de niños a la mendicidad, a la prostitución y a la sobre-explotación en actividades de probada rudeza.

Por razones que ahora son virtualmente obvias para cualquier observador, no existen condiciones globales, ni regionales, para atraer la inversión privada internacional en América Latina. Ya antes de esta crisis, el flujo de inversión directa internacional se concentraba en México, Brasil, Argentina.

76

En ese contexto, es necesario preguntarse ¿a qué podría venir alguna masiva inversión directa internacional al Perú actual? Virtualmente todos los recursos “naturales” que en el Perú interesan hoy al capital internacional ya están bajo su control: minería, petróleo, gas. El Fujimorismo vendió también y al remate, las empresas de electricidad, telefonía, refinerías de petróleo, redes de comercialización de petróleo y derivados, gasolina, gas licuado y kerosén, estatizadas bajo el velasquismo. Y, por supuesto, las empresas estatales de capital financiero y de intermediación financiera, lo que fue seguido por la venta de las empresas financieras privadas al capital internacional. A la fecha no hay ningún Banco “nacional”, esto es, de peruanos. El único que aún lo era ha trasladado su sede legal a la isla del Gran Caimán, un conocido paraíso fiscal. El Fujimorismo llamó a ese cambio de propiedad de las empresas, inversión de capital internacional. Además comenzó la comercialización de los servicios públicos, principalmente la seguridad social, ahora bajo control del capital internacional, y luego la educación y la salud públicas.

La extensión y la calidad de la tierra cultivable no son muy notables en el Perú. En la Sierra es muy fragmentada y montañosa; jamás pudo atraer capitales importantes. En la Selva, la buena tierra está lejos de las redes de transporte. Sólo en algunos valles de la Costa están las mejores y más aptas para cultivos de exportación, cerca de todas las rutas de transporte, de los centros urbanos de producción de servicios. Antes se destinaban a la caña de azúcar y al algodón. Pero esos cultivos entraron en crisis. Ahora, las tierras disponibles en la Costa están ya bajo control de capitalistas internacionales, españoles, israelitas, chilenos, produciendo y exportando, principalmente, espárragos y fresas. Y si se aprueba finalmente la nueva ley de preferencias arancelarias andinas (ATPA) en el Senado de Estados Unidos, imponiendo el uso de materias primas de ese país en la producción de textiles que luego podrían obtener preferencias arancelarias; inclusive los cultivos de algodón que son la base de la mediana agricultura de la Costa y de la decadente industria textil, podrían extinguirse.

Y finalmente, pero por encima de todo, la capacidad adquisitiva de la población peruana es una de las más bajas de toda la región. ¿A qué, pues, realmente vendría el capital in-

ternacional al Perú? Si la rentabilidad del capital fuera atractiva ¿por qué los capitalistas peruanos prefieren mandar su dinero, legal e ilegal, a los paraísos fiscales del mundo o a ser invertidos en otros países?

La colonialidad del poder bloqueó, después de la Independencia, la democratización de la sociedad y su representación en un estado democrático y nacional. Después, la dependencia histórico-estructural inherente a ese patrón de poder desembocó en la asociación imperialista que ha continuado el mismo antagonismo con la democratización y la nacionalización de la sociedad y del estado. Por eso y de ese modo, el estado-nación y la ciudadanización real de la población son en América Latina procesos inconclusos y distorsionados, por supuesto más en unos países que en otros, si se compara por ejemplo México y Perú. Y el mercado interno, en el capitalismo moderno, es una consecuencia y una expresión de la ciudadanía, es decir, de la democratización de las relaciones entre las gentes, con todas las limitaciones y relativismos de toda estructura de poder. No a la inversa, como suele ser imaginado en la ideología liberal o en la del “materialismo histórico” estalinizado (Quijano, 2000[a]; 2000[b]; 1993[a]).

Después de México, el proceso revolucionario que afectó a la totalidad de los países latinoamericanos entre 1925 y 1935 fue derrotado en todos los países, sin excepción. La democratización radical de la sociedad, la destrucción de la colonialidad del poder, la nacionalización del Estado, no pudieron ser conquistadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos sociales y políticos que buscaban la democratización y la nacionalización de sociedades y estados no lograron encontrar sino el incoherente y a la postre inconducente camino del nacionalismo democrático-popular, al que las lenguas sueltas han terminado llamando “populismo”. Ese fue, de todos modos, el carácter del proceso iniciado entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la crisis mundial de mediados de los ‘70 del siglo XX. Aunque incongruentes, limitados y erráticos, los resultados no fueron de ninguna manera desdeñables: la industrialización para el mercado local, la rearticulación de la acumulación como un circuito interno aunque ligado al circuito internacional, la formación de los agentes sociales y de su estructuración en una nueva sociedad, y su representación en un nuevo estado. Pero también, durante la crisis de los ‘70, ese proyecto y ese proceso terminaron derrotados. Y esa derrota permitió la imposición del neoliberalismo como una expresión del período más predatorio del capitalismo, el dominio de la especulación financiera.

En los países donde el estado-nación sólo pudo ser conquistado de modo muy parcial y precario, como en el Perú, bajo el neoliberalismo fueron desmanteladas todas las estructuras productivas vinculadas al proceso anterior, en particular la industria y su mercado local, y las estructuras sociales constituidas en su entorno, la burguesía industrial, el salariado industrial urbano, las capas medias profesionales y tecnocráticas. Y, por supuesto, el estado fue reprivatizado bajo el control de los funcionarios del capital financiero internacional y de sus asociados locales. Ese fue el proyecto que el Fujimorismo llevó a cabo en el Perú.

■ El Fujimorismo del proyecto Kuczynski-Toledo

Si bajo las actuales condiciones internacionales, que según todas las indicaciones no serán de muy corta duración, no puede esperarse ninguna inversión directa internacional masiva, y si no obstante toda la política económica del gobierno de Kuczynski-Toledo está explícita y oficialmente destinada solamente a dar confianza y garantías al capital internacional, ¿cuál es, en realidad, el proyecto que el gobierno de Kuczynski-Toledo ha comenzado a poner en marcha?

Puesto que virtualmente todos los recursos importantes que podrían interesar al capital internacional ya están bajo su control, es necesario tratar de encontrar o descubrir cuáles otros recursos podrían ser aún suficientemente atractivos como para pugnar por su control. Después de los remates del Fujimorismo, en verdad quedan pocos y de poca impor-



tancia: una pequeña refinería de petróleo, puertos y aeropuertos de provincia (el puerto y el aeropuerto del Callao, los principales del país, ya están privatizados), algunas carreteras muy traficadas (acaba de entregarse un tramo vital de la carretera panamericana norte a un consorcio privado, y se alcanzan los precios del peaje en otras vías para hacerlas rentables para el capital privado), la producción de energía eléctrica regional en el Sur y en el Centro, el servicio de agua potable en Lima y en las demás ciudades.

No obstante la protesta masiva de las poblaciones afectadas, Kuczynski y Toledo han reiterado que esos recursos serán de todos modos privatizados. El Estado vuelve a actuar contra la sociedad. Ahora puede entenderse mejor la política recesiva del actual gobierno: hacer lo mismo que hizo el Fujimorismo, deprimir los precios de esos recursos y sanearlos financieramente, por supuesto con los recursos fiscales que se dice que no existen para finalidades de reactivación, a fin de hacerlos atractivos y rentables para algunos grupos menores de capitalistas internacionales.

Las poblaciones de las provincias del Sur y del Centro, y ahora también la de Lima, están movilizándose contra la privatización de las centrales termoeléctricas y los servicios de agua y desagüe. Pero, astutamente, el gobierno pacta con los empresarios locales la distribución de beneficios, como acaba de hacerlo en Arequipa, la plaza fuerte de la protesta provinciana. Así, la burguesía local sería la socia, menor pero socia al fin, del capital internacional. Y moverá, junto con el gobierno central, todos sus recursos para neutralizar y contener, o reprimir, la protesta popular.

Aunque de menos porte que las que fueron privatizadas bajo el Fujimorismo, algunas de esas empresas, como las productoras de energía eléctrica o de agua potable, son sin duda buenos negocios. Con todo, son negocios menores en los términos del capital financiero global. Pero una vez que la absoluta totalidad de los recursos y de los servicios en el Perú haya pasado al control del capital internacional o global, la masa de empleo tenderá a ser aún más reducida, la distribución de ingresos mucho más reconcentrada, la masa de pobres mucho más extendida y más pobre. La masa mayor de la población, desempleada y empobrecida hasta el nivel de la mera sobrevivencia, no podría ser directamente explotada. En la práctica, esa perspectiva reproduce el viejo control de factorías coloniales en los territorios colonizados.

¿Se agota allí el proyecto Kuczynski-Toledo? No parece probable. La masa desempleada servirá, por supuesto, para deprimir los salarios de los pocos que logren obtener empleo. Pero el actual capital financiero es demasiado predatorio como para reprimirse de despojar aún más a esas poblaciones dominadas, ya que no le interesa explotarlas de otro modo. Y la más eficaz y probada manera es el endeudamiento público. Puesto que por largo tiempo aún no será posible sobrevivir sin el mercado, esas masas empobrecidas –aunque tampoco pueden sobrevivir con él– algo deberán comprar, bienes o servicios, inclusive los públicos. Y deberán, en consecuencia, pagar impuestos al Estado y éste deberá pagar los servicios de una eterna deuda internacional. En ese sentido específico, el pago de los servicios de una deuda internacional impagable y por lo tanto indefinidamente duradera, en países como el Perú, es el equivalente del histórico tributo colonial.

Eso es, precisamente, lo que Kuczynski-Toledo acaban de hacer. Con el argumento de que se requieren más recursos fiscales y no hay créditos internacionales, este gobierno decidió producir y vender “bonos soberanos”, esto es, bonos del Estado peruano, en el mercado financiero internacional. El resultado es el crecimiento de la deuda internacional, el aumento de sus tasas de interés y de las cifras que el Estado peruano debe pagar en los próximos años por el servicio de esa deuda.

De ese modo, el Perú no solamente quedará convertido en territorio de factorías coloniales y poblaciones condenadas a la miseria. Estas no podrían evitar ser convertidas en tri-

butarias coloniales, a través de los impuestos que de todos modos pagarán al Estado para que éste los transfiera al pago de los servicios de la deuda internacional.

Cuando esas tareas hayan quedado cumplidas, o al menos debidamente encaminadas, Kuczynski podrá dejar el “Gabinete de Todas las Sangres”³ y Toledo podrá dar la impresión de que cede a las presiones populares para el cambio del Ministro de Economía. Pero nada, salvo una revuelta política exitosa de las víctimas, podría revertir o cambiar algo importante en la obra cumplida. Kuczynski podrá regresar a su país (es ciudadano de Estados Unidos) y a sus negocios privados. Su principal negocio es, precisamente, la privatización internacional. Ha estado activo en Rusia, en Taiwán, en Malasia, entre otros lugares. A los argentinos les interesará saber que fue él, según se dice, quien dirigió la privatización de Aerolíneas Argentinas.

En el Perú aún no ha ingresado al debate la idea de pago de la deuda internacional con territorio, que ha saltado a la luz con ocasión del desastre argentino y la revelación de encuestas sobre el canje de deuda por los territorios antárticos y patagónicos de ese país. Esa idea, junto con la prepotente propuesta de que Argentina debería renunciar a la autonomía política para admitir un tutelaje internacional, se mueven hacia la re-colonización formal. Así, no solamente convertir a un país en un conjunto de factorías de carácter colonial, sino también convertir en tributaria colonial a su población, podría no ser suficiente para el proceso de globalización imperialista en curso. Mientras tanto parecen estar ya en el aire otros procedimientos en esa misma dirección, como veremos inmediatamente.

■ La operación “Nuevos Horizontes”: ¿la satelización del Perú?

El Perú es el único de los países latinoamericanos que, en los casi dos siglos transcurridos después de ganada su independencia, ha cedido formalmente en dos ocasiones su autonomía política en el orden inter-estatal del hemisferio. Eso ocurrió bajo el Fujimorismo. Primero en 1992: tras el golpe del 5 de abril de ese año, el Estado peruano fue sometido al “monitoreo” formal de la OEA mientras se institucionalizaban los principales mecanismos del Fujimorismo y se establecía la simulación liberal de una dictadura militar-tecnocrática tutelada por el Bloque Imperial Global. Y volvió a ocurrir tras el fraude electoral de 2000, frente a la masiva revuelta popular que abrió una severa crisis política en el país, y con el obvio propósito de bloquear la democratización de la sociedad y del estado que las masas demandaban (Quijano, 2000[c]; 1995).

El sometimiento formal del estado peruano al control de los organismos del sistema interestatal hemisférico no puede ser explicado sino por su extrema debilidad en tanto que estado-nación moderno. Dicha debilidad es, a su vez, consecuencia del completo desmantelamiento de la estructura social a la cual también representaba, o comenzaba a representar. No podemos aquí, sobre estas cuestiones, ir más lejos que indicar que el Fujimorismo impuso la separación virtualmente completa del Estado de toda ingerencia de la mayoría de la población, ya que incluso el voto fue objeto de fraude abierto. Eso implicó una re-privatización del control del estado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Estado peruano estaba bajo el control monopólico y, en consecuencia, autoritario, de la asociación oligárquico-imperial. Durante el Fujimorismo fue sometido al pleno control, igualmente autoritario, del Estado Hegemónico del Bloque Imperial Global y de sus agentes locales.

La estructura social que se había ido constituyendo por la urbanización de la sociedad, desde la Segunda Guerra Mundial, había logrado ir ocupando de modo parcial e irregular, pero no menos real, el Estado. La institucionalización de la producción y administración masiva y universal de servicios sociales por cuenta del Estado, y la redistribución parcial, pero importante, de recursos de producción y de ingresos entre la población de trabajadores rurales y urbanos, fueron la marca de los espacios de representatividad política ganados por los sectores dominados de la población. Las nuevas capas medias, las fracciones de burguesía indus-



trial y comercial urbana, el salariado urbano y rural, se fueron ampliando, con sus respectivas instituciones, a costa de la declinación y posterior extinción de los principales grupos de la coalición oligárquica. Pero la crisis capitalista de mediados de los '70 hasta fines de los '80, fragmentó y dispersó esa estructura social relativamente reciente, aún no afirmada y consolidada en el control del estado y tampoco liberada plenamente de la colonialidad del poder y, en consecuencia, dependiente de las tendencias centrales del capitalismo mundial. El Fujimorismo impuso la afirmación definitiva de ese proceso. De ese modo, sólo quedaron en el control del estado los militares y los grupos de nuevas capas medias ligadas a la especulación comercial o financiera, al tráfico de drogas, cualquiera que fuera su oficio o su profesión de origen, bajo la tutela de los agentes del capital financiero y del Estado Hegemónico.

El proceso de des-democratización y des-nacionalización de la sociedad y del estado en el Perú no solamente hizo posible que la autonomía o soberanía del Estado fuera cedida a la OEA formalmente, sino ante todo al Estado Hegemónico Mundial. Hay que recordar a este respecto tanto la presencia dominante de Estados Unidos en la OEA, como el hecho de que el Sub-Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos y el Jefe del Comando Sur de las FF.AA. de Estados Unidos, con sus respectivos asistentes, estuvieron en Lima en el momento final de la crisis y remoción del Fujimorismo, para asegurarse de que la transición podría hacerse sin intervención directa de las masas y la continuidad de las políticas básicas del Fujimorismo en la economía y en las relaciones con el sistema estatal hemisférico donde Estados Unidos tiene presencia dominante.

Ese proceso produjo también la desintegración de las agrupaciones sociales de los trabajadores y de sus respectivas instituciones. Produjo la generalizada crisis de identidad social en una población cada vez más heterogénea en términos de ubicación social, y en consecuencia respecto de intereses específicos. La dispersión social y política ha implicado también la extrema dificultad de producir discursos sociales propios y de evaluar los ajenos, y en consecuencia, de posibilidades prontas de reconquistar la pérdida representación, incluso la intermediación, en el Estado. Los controladores del poder, reprivatizado el Estado, pudieron quedar libres de continuar operando en contra de la población de su propio país, cualesquiera que fueran las protestas de masas dispersas y reducidas solamente a demandar de ese nuevo Estado algunas migajas de sobrevivencia. El Fujimorismo llegó a ser la ceñida expresión de esa situación. Y el régimen de Kuczynski-Toledo está sin duda empeñado en mantener y afirmar dicha situación, precisamente porque es el resultado de una transición muy controlada, de nuevo, por la OEA y por Estados Unidos.

No podría explicarse de otro modo la puesta en marcha de dos proyectos del Estado Imperial a través del estado peruano bajo el gobierno de Toledo:

- 1 El Perú aceptó actuar, y actuó, como plataforma de la política del gobierno de Bush contra Cuba. El argumento de que el gobierno de Castro es autoritario es, obviamente, un burdo pretexto, no solamente frente a la prolongada protección de Estados Unidos a los peores regímenes dictatoriales de América Latina, sino al hecho de que ahora Bush recibe a uno de los más represivos dictadores del mundo, el sátrapa militar de Malasia, acusado incluso en Estados Unidos de atropellar los derechos humanos, y lo declara, cínicamente, héroe de la democracia y de la lucha contra el terrorismo. Estos hechos son ya de conocimiento internacional, lo que hace inútiles más comentarios.
- 2 El Perú habría aceptado permitir a Estados Unidos el uso del territorio peruano para las fuerzas armadas de ese país, libres de cualquier restricción en sus movimientos, inclusive para transportar equipos bélicos pesados, naves de guerra, aviones, helicópteros, sin ninguna intervención, ni autorización especial, para realizar una llamada "Operación Nuevos Horizontes", cuya fachada se presenta como una suerte de acción cívica de esas fuerzas armadas, aunque un documento suscrito por el Coronel USA Gilberto Pérez, remitido el 9 de febrero de 2001 al Director de Asuntos Espe-

cializados de la Cancillería peruana, señala que “Nuevos Horizontes es un ejercicio conjunto/combinado de ingeniería, médico y de apoyo de servicio de combate, diseñado para mejorar la capacidad de reacción en entrenamiento conjunto de las fuerzas armadas de los Estados Unidos” (*La República*, 2002[c]).

Los ministros de RR.EE. y de Defensa del Perú y el Embajador de Estados Unidos en Lima han negado que los acuerdos se hayan formalizado. Pero los documentos que se filtraron a la prensa de Lima (*La República*, 2002[b], [c], [d]) son plenamente reveladores. Las tratativas para este proyecto se iniciaron, según las declaraciones del Embajador de Estados Unidos, el 1° de febrero de 2001, con los ministros de Defensa y de RR.EE. del Gobierno de Valentín Paniagua, llamado de “transición” entre Fujimori y Toledo. Y aunque los actuales ministros peruanos de RR.EE. y de Defensa han negado haber tenido conocimiento de esas tratativas, el Embajador de Estados Unidos se encargó de aclarar en la prensa que los mismos, además del anterior de Defensa, han participado igualmente en estos tratos. Las declaraciones de las autoridades peruanas se llenaron de ambigüedad y de contradicciones, incluidas las del vocero personal de Toledo, dejando abierta la sospecha de que esas negativas son una cortina de niebla diplomática sobre operaciones que están o estarán pronto en ejecución. Más aún, como lo prueba el video mostrado en el Parlamento por el Congresista Javier Diez-Canseco, personal militar estadounidense ha estado ya operando en territorio peruano.

El texto de la propuesta oficial de la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de RR.EE. del Perú (fechado el 1° de abril y publicado en su integridad en el diario *La República*, 2002[b]), es completamente explícito sobre el carácter del proyecto. En lo fundamental, ese documento propone, primero, que el Perú otorgue status diplomático pleno “al personal militar y civil del Departamento de Defensa de los Estados Unidos” que se “encuentre desplegado en el Perú para conducir “Nuevos Horizontes”, aceptando como válido un documento de identidad estadounidense para manejar vehículos, usar uniformes y realizar cualquier otro trabajo oficial, para la construcción de una “instalación militar” cuyas finalidades no se indican, así como tampoco el número y tipo de personal civil y militar destinado al proyecto. Segundo, que el Perú “otorgue derechos de libre importación y exportación, así como la exoneración de inspección e impuestos, de los productos, propiedad y material, equipo, vehículos, barcos y aviones importados, adquiridos o exportados por o a nombre del gobierno de los Estados Unidos o por su personal en conexión con sus actividades en virtud a este acuerdo y que las partes se comprometan a tomar las medidas del caso a fin de asegurar en el Perú la protección del personal estadounidense y de su propiedad”. Tercero, el Perú debe autorizar el uso de equipos de radiocomunicaciones, y “los sistemas de comunicación orgánica de las Fuerzas Armadas americanas para uso oficial”. Cuarto, el gobierno de Estados Unidos tendrá “el derecho de elegir a los contratistas y los contratistas y sus empleados gozarán de los mismos privilegios otorgados al personal civil y militar de los Estados Unidos” respecto de licencias profesionales, importación y adquisición de equipos y bienes. Finalmente, el gobierno del Perú se comprometería a ceder a Estados Unidos los derechos de propiedad de todo aquello que el personal civil y militar de ese país use y necesite, incluyendo territorio, bienes, o equipos. Y, no faltaba más, se comprometería a pagar a Estados Unidos por toda reclamación respectiva.

Así, pues, el territorio peruano será una plataforma de uso militar de Estados Unidos. Y eso no podría significar sino una etapa más avanzada en la ocupación política y militar del área andino-amazónica, y probablemente la preparación de una ofensiva contra las guerrillas colombianas.

¿Por qué fue escogido el Perú para esos propósitos? Porque, como acabamos de hacer notar, se trata de un Estado extremadamente debilitado, separado de la intervención del grueso de su población. Pero también se trata de que en el Perú las masas descontentas, a pesar de su actividad reciente en las protestas callejeras, no han logrado aún organizarse, coordinarse y articularse como movimientos políticos, a diferencia de Bolivia o de Ecuador, don-



de también el Estado actúa en contra de la mayoría de habitantes de sus respectivos países, pero donde en cambio son activos y relativamente fuertes los movimientos organizados de los trabajadores y de las poblaciones que se identifican como indígenas y que son, en consecuencia, la mayoría de los habitantes de esos países, y que no solamente están en lucha contra este Estado, sino por otras formas institucionales de autoridad que expresen y desarrollen la democracia en la sociedad.

Estados Unidos tiene en Mantas, Ecuador, una base aérea, instalaciones navales en Iquitos, puerto peruano en el Amazonas. Está negociando con Brasil el uso de una zona en el Amazonas, y acordó con De la Rúa, antes de su renuncia, el uso de un territorio en la Patagonia. En el Ecuador, por medio de una empresa transnacional, está armando un ejército privado de mercenarios, con sus respectivos equipos militares (¿es también para la misma finalidad que propone otorgar a contratistas privados elegidos por Estados Unidos los privilegios diplomáticos?). En Colombia participa ahora abiertamente en el conflicto interno de ese país. Desde que comenzó a hacerse visible, el proyecto de control del área andino-amazónica (Quijano, 1993[b]) ha caminado sin duda un trecho muy grande y decisivo.

Bibliografía

El Comercio 2002[a] (Lima) 27 de mayo, b1-b2.

El Comercio 2002[b] (Lima) 20 de mayo, a3.

La República 2002[a] (Lima) 8 de mayo.

La República 2002[b] (Lima) 22 de abril.

La República 2002[c] (Lima) 21 de abril.

La República 2002[d] (Lima) 20 de abril.

Quijano, Aníbal 2000[a] "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", en Lander, Edgardo (compilador) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO-UNESCO).

Quijano, Aníbal 2000[b] "El Fantasma del Desarrollo en América Latina", en *Revista Venezolana de Ciencias Sociales* (Caracas: Universidad Central de Venezuela) N° 2.

Quijano, Aníbal 2000[c] "La OEA y el Fujimorismo en el Perú", en *América Latina en Movimiento* (Quito) N° 137, 25 de julio.

Quijano, Aníbal 1995 "El Fujimorismo y el Perú", en *La República* (Lima) 13 de marzo.

Quijano, Aníbal 1993[a] "América Latina en la Economía Mundial", en *Problemas del Desarrollo* (México: IIE-UNAM), Vol. XXIV, N° 95, octubre-diciembre.

Quijano, Aníbal 1993[b] "¿América Latina, sobreviviera?", en *Sao Paulo em Perspectiva* (Sao Paulo: SEADE) Vol. 7, N° 2, 66-67.

Notas

1 Por razones de espacio, para la publicación de esta versión han sido eliminadas algunas partes, por lo cual la misma debe ser considerada como un adelanto resumido de otro trabajo más amplio y más detenido.

2 Informaciones del Banco Central de Reserva y de la Cámara de Comercio.

3 Toledo llamó "Gabinete de Todas las Sangres" a su primer Gabinete Ministerial.

Bolivia

REGION
ANDINA



ENERO

Miércoles 9

• Cerca de 250 comerciantes del Sindicato Las Hombres en San Antonio, para evitar el desalojo de sus puestos de venta que la alcaldía de Cercado pretende implementar. Se reúnen con autoridades de la misma pero no resuelven el conflicto.

Lunes 14

• Médicos y demás trabajadores de la salud del sector público realizan un paro de 24 horas en protesta por recortes del sueldo de diciembre resueltos por el Ministerio de Salud en los bonos de antigüedad y de locaciones de frontera.

• Cerca de tres mil campesinos de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB) marchan desde El Alto hacia el centro de La Paz, para exigir al gobierno el cumplimiento de la totalidad del acuerdo de Pucarani firmado el año pasado. La policía reprime con gases lacrimógenos, tras lo que los campesinos rompen el diálogo con el gobierno. En Cochabamba, los cocaleros del trópico junto con productores y comerciantes de coca, transportistas y los comités cívicos realizan una marcha en rechazo al desafuero –curul– del dirigente de los cocaleros y diputado Evo Morales y en reclamo de la derogación de los decretos 26.415 y 26.491 –que prohíben la comercialización de coca en los mercados primarios– y de la suspensión de la erradicación de la misma, entre otras cosas.

Martes 15

• Cientos de productores de coca toman el Centro de Acopio de Coca en Sacaba, Chapare, con bombas molotov, cartuchos de dinamita y armas de fuego, para exigir la derogación inmediata del Decreto Supremo 26.415 y la reapertura del mercado primario de coca en Sacaba. Se producen fuertes enfrentamientos con la policía.

Miércoles 16

• Los campesinos de Sacaba intentan tomar la Dirección General de la Coca (DIGECO) y levantan barricadas para combatir a la policía. Mueren dos campesinos por heridas de balas de plomo.

Jueves 17

• Cocaleros y efectivos militares y policiales continúan con los enfrentamientos en las afueras de la población de Sacaba, Cochabamba. Los primeros toman como rehenes a dos efectivos que posteriormente son asesinados e incendian la ambulancia en la que se trasladaban. También muere un cocalero y hay decenas de heridos. Más tarde, deciden establecer un cuarto intermedio para el inicio del diálogo.

• Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) de todas las regionales del país, afiliados a la Caja Nacional de Seguridad Social (CASEGURAL), realizan una huelga por tiempo indeterminado para exigir la destitución del director de la CNS en La Paz, acusado de ser responsable del desabastecimiento de todas las regionales del país y la aprobación de un decreto que dé inicio al proceso de institucionalización.

Sábado 19

• El grupo policial Dálmatas, apoyado por otros efectivos policiales, detiene a varios dirigentes cocaleros en la sede de la Federación Especial del Trópico de Cochabamba (FETC) de Evo Morales y a más de un centenar de hombres y mujeres del Chapare, Carrasco y Tiraque Tropical.

Lunes 21 • Al grito de “coca o muerte”, cocaleros y cocaleras, junto con estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), realizan una marcha en Cochabamba en protesta por la intervención policial contra su sede sindical el sábado pasado y la detención de sus 21 dirigentes.

• Uniformados detienen a la dirigente de los productores de coca Margarita Terán cuando estaba por viajar al Chapare.

• En Cochabamba, los cocaleros confluyen en una marcha con el Comité Cívico Popular, la Federación de Trabajadores Fabriles, la Federación de Maestros Urbanos y Rurales, la Federación de Trabajadores de la Salud, la Coordinadora de las Seis Federaciones de Productores de Coca, la CNS, la “generación sándwich” y la UMSS, entre otros, para exigir la derogación del decreto 26.415 y la libertad de los cocaleros detenidos en los enfrentamientos en el Chapare y contra el gobierno de Quiroga, entre otras cuestiones. La policía reprime con gases lacrimógenos y balas de goma y allana la sede de la Central Obrera Departamental (COD).

Miércoles 23 • Cocaleros del Chapare realizan una marcha en Cochabamba contra el desafuero de Evo Morales y para exigir la libertad de los compañeros detenidos. Posteriormente, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados vota a favor del desafuero por lo cual Evo Morales es destituido de la Cámara.

Viernes 25 • Cientos de manifestantes entre cocaleros, universitarios, comerciantes, trabajadores de la COD y pobladores se enfrentan con la policía en La Paz durante más de cinco horas. La policía reprime con gases y balas de goma. Comerciantes del mercado 25 de mayo, al grito de “Evo estamos contigo”, se suman a la protesta.

Lunes 28 • La Coordinadora del Agua y los cocaleros realizan marchas en la ciudad y en el trópico de Cochabamba. Además, se realizan bloqueos en Colomi, Senda Tres, Senda Cinco, Senda Seis, Entreríos e Ivirgarzama. En las poblaciones de Sinahota e Ivirgarzama se lleva adelante un paro cívico.

Martes 29 • La Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba dispone la libertad inmediata de dos dirigentes cocaleros.

Jueves 31 • Cerca de dos mil productores de hoja de coca del trópico cochabambino realizan una marcha por las calles de esa ciudad para exigir la liberación de los cocaleros del Chapare detenidos y la derogación del decreto supremo 26.415, entre otras cuestiones.

FEBRERO

Sábado 2 • Campesinos bloquean caminos en la población de Challapata, Oruro, para exigir la devolución del curul a Evo Morales y la derogación del decreto supremo 26.415, entre otras cosas. Policías y militares reprimen la medida. Muere un campesino por la represión, y otros seis resultan heridos.

Martes 5 • El sector campesino liderado por Felipe Quispe inicia un bloqueo de caminos en la localidad de Konani, carretera La Paz-Oruro. La medida es rápidamente reprimida por la policía. En la zona de los Yungas se mantiene bloqueada la población de Yolosa, mientras que en Copacabana y Sucre también hay bloqueos de cocaleros.

Jueves 7 • Se masifican los bloqueos en la zona del altiplano y de los Yungas. La Policía Nacional se declara en estado de emergencia. Además, el dirigente de los qaqachaca anuncia la muerte de otro comunario que fue herido por impacto de bala en el bloqueo campesino de la carretera Challapata el pasado sábado.

Domingo 10 • Cocaleros de los Yungas y colonizadores del norte paceño bloquean caminos en Chicalulo para exigir la modificación de dos artículos del decreto supremo 26.415 que tienen relación con la zona en la que se prohíbe la comercialización de la hoja de coca, y la derogación del 26.491, entre otras cuestiones.

Lunes 11 • Los caminos La Paz-Desaguadero, Achacachi-Sorata y los Yungas permanecen bloqueados.

Martes 12 • Dirigentes de los colonizadores de los Yungas y el gobierno acuerdan la modificación de los dos artículos cuestionados del decreto supremo 26.415 y la derogación del 26.491.

Viernes 15 • Cerca de 600 docentes rurales toman de rehenes a dos funcionarias en la Federación Departamental de Maestros Rurales, en la sede de Santa Cruz, para exigir el pago de los salarios adeudados de todos los trabajadores. Posteriormente, el Tesoro se compromete a reiniciar los pagos al día siguiente.

Lunes 18 • Cerca de 10 mil trabajadores de la salud realizan un paro nacional por tiempo indeterminado para exigir un aumento salarial de 1.800 a 3.000 bolivianos, el bono anual de vacunación y la reposición del bono al incentivo a la producción, entre otros reclamos.

Jueves 21 • Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Xavier, ubicada en Sucre, toman las instalaciones de la misma para exigir la renuncia del decano.

Viernes 22 • La Federación Universitaria de Docentes (FUD) realiza un paro en la Universidad San Francisco Xavier, en apoyo al decano acusado por los estudiantes de tener dos cargos.

Jueves 28 • Más de dos mil pobladores de Huanuni se concentran y obligan a uno de los concejales de la alcaldía a firmar una carta de renuncia ante una notaria de Fé Pública.

MARZO

Lunes 4 • Los trabajadores de la salud suspenden los servicios de emergencias por dos horas en hospitales de todo el país. A partir de mañana duplicarán el tiempo de suspensión, y así sucesivamente, hasta que el Ministerio de Salud dé respuesta a sus demandas. El Sindicato de Ramas Médicas ratifica la huelga general indefinida hasta que el ejecutivo pague el 50% de los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2001, entre otros reclamos. Asimismo, el Colegio Médico de Bolivia (CMB) inicia un paro general por tiempo indeterminado con piquetes de huelga de hambre a nivel nacional, para exigir al gobierno que cumpla con los convenios suscritos con el sector y la reposición de un porcentaje de sus salarios que fue descontado en los meses de diciembre y enero.

Martes 5 • Cerca de 5 mil trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), regional Cochabamba, realizan un paro general con huelga de hambre en reclamo de la institucionalización de la gerencia regional y la suscripción de un contrato colectivo de trabajo ante una posible privatización de la empresa.

Miércoles 6 • Los trabajadores de la salud levantan las medidas de fuerza luego de firmar con el gobierno un convenio en el que se establece un incremento del 4% con retroactivo a enero, entre otras cuestiones. Sin embargo, el CMB y la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la CNS continúan con las medidas de fuerza.

• Más de 4 mil mineros y habitantes de Huanuni bloquean el cruce de Marchacamarca, entre Oruro y Potosí, en reclamo de la destitución de la alcaldesa y los concejales acusados de corrupción. La policía reprime con balas de goma y gases lacrimógenos, a lo que los manifestantes responden con dinamitas y piedras.

Lunes 11

- Los maestros urbanos de todo el país, nucleados en la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), realizan una huelga general por tiempo indeterminado para exigir al gobierno un aumento salarial superior al 5% ofrecido por éste, entre otras cuestiones.

- Los reclusos de la cárcel de San Antonio bloquean el ingreso a la misma e inician una huelga de hambre en reclamo de que las autoridades de Régimen Penitenciario paguen los servicios de agua y de luz –que se encuentra suspendido– y los prediarios correspondientes al mes de diciembre pasado.

Miércoles 13

- Los trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos (COTEL) inician un paro de 48 horas y realizan marchas en el centro de La Paz para exigir el retiro de la empresa alemana Detecon de la administración de COTEL.

- Dirigentes de la CTEUB y delegados de las 26 federaciones de docentes urbanos del país inician la marcha nacional del magisterio desde la localidad de Caracollo hacia La Paz para exigir al gobierno nacional que dé respuestas a los reclamos de aumento salarial, entre otras demandas del sector.

Martes 19

- La Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Tarija (FSUTCT) inicia un bloqueo de caminos en el departamento en protesta por la falta de atención por parte del gobierno.

Miércoles 20

- Los más de 300 docentes que vienen marchando desde Caracollo llegan a La Paz en reclamo de un aumento del mil por ciento en el salario. La Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz declara un paro de 48 horas.

Viernes 22

- Cientos de maestros nucleados en la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia realizan una marcha y un bloqueo denominado las “mil calles” en La Paz, en demanda de un salario digno y en rechazo a la oferta salarial del poder ejecutivo por considerarla insuficiente, entre otras cuestiones.

Lunes 25

- Docentes inician una huelga general nacional por tiempo indeterminado y realizan marchas en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades, y toman las oficinas del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) de La Paz para exigir al gobierno aumento salarial y nivelación de salarios entre maestros urbanos y rurales. Además, docentes bloquean la carretera interdepartamental en Aiquile-Cochabamba.

- Estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) de Santa Cruz, junto con el rector y vicerrector de la misma, realizan bloqueos relámpago en distintos puntos de esa ciudad, para exigir un aumento de presupuesto.

Martes 26

- Trabajadores de COTEL inician una huelga y marchan en esa ciudad contra la administración alemana Detecon y los cerca de 600 despidos realizados por la empresa. Posteriormente, los trabajadores telefónicos y ejecutivos de Detecon reanudan los diálogos.

Miércoles 27

- En aplicación del artículo 5 del decreto supremo 25.255, el Ministerio de Educación comienza la sustitución de maestros destituyendo a 50 docentes huelguistas en varias escuelas primarias y secundarias de La Paz.

ABRIL

Martes 2

- Alrededor de 300 docentes, estudiantes y miembros del personal administrativo de la Facultad de Medicina de la UMSS, en Cochabamba, toman el Hospital Clínico Viedma (HCV) en reclamo de la destitución del director ejecutivo de esa institución.

• Cientos de docentes de distintas ciudades, nucleados en la Confederación de Maestros Urbanos, junto con la Central Obrera Regional (COR), las Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), la Federación de Comunidades Agrarias, y padres de familia, entre otros, realizan una marcha en La Paz para exigir al poder ejecutivo un incremento salarial del 20% y la reincorporación de los maestros sustituidos, entre otros reclamos. A la protesta se suman los trabajadores de COTEL que, además, realizan un mitin frente a las instalaciones de la cooperativa para reclamar la salida de Detecon. A la altura de la plaza San Francisco, los manifestantes son dispersados por la policía mediante disparos de gas lacrimógeno.

Jueves 4 • Miles de maestros, gremiales, trabajadores de COTEL, mineros, padres de familia y esposas de policías acuden al gran cacerolazo convocado por los docentes y toman las principales calles de la ciudad de La Paz expresando su desacuerdo con la política económica, social y educativa del gobierno.

Sábado 6 • Los maestros de Cochabamba firman un acuerdo con el prefecto del departamento. Suspenden el paro que mantenían desde hace 25 días y aceptan un incremento salarial del 4%.

Lunes 8 • Los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier, en Sucre, declaran un paro general por tiempo indeterminado en protesta por la toma del decanato realizada por dirigentes estudiantiles de la mencionada unidad académica el pasado ocho de marzo.

• El gobierno suscribe un acuerdo con la CTEUB que contempla un incremento salarial de un 4%, la duplicación del bono de cumplimiento y la suspensión de la aplicación del Reglamento de Administración y Funcionamiento de Unidades Educativas (RAFUE), entre otras cuestiones.

Martes 9 • Mineros de la ciudad de Cochabamba se crucifican en varios puntos de la ciudad de La Paz en reclamo del pago de salarios adeudados desde el mes de enero. Por otra parte, los trabajadores de COTEL organizan diversas marchas y huelgas de hambre en el marco del conflicto que mantienen con la administradora alemana Detecon. Los trabajadores se mantienen firmes en su reclamo de que la empresa recontrate a la totalidad de los cesanteados.

• Ex trabajadores de la empresa de aseo y recolección de basura Ciudad Limpia S.A. (CLISA) suspenden la huelga de hambre mantenida por más de 44 días en reclamo del pago de beneficios sociales y sueldos atrasados por tres meses. La empresa empleadora cancela el 40% del monto adeudado.

Miércoles 10 • La viceministra de justicia se hace presente en la ciudad de Cochabamba para iniciar el diálogo con las internas de la cárcel de San Sebastián que mantienen una huelga de hambre en reclamo de la designación de jueces para acelerar sus procesos.

• Alrededor de 300 desempleados de la ciudad de El Alto toman las oficinas del Servicio Financiero Rural Sartawi en demanda de puestos de trabajo de acuerdo a los proyectos presentados por el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) y de que éstos se extiendan por seis meses.

Sábado 13 • Por la madrugada, los trabajadores de COTEL y la empresa administradora Detecon suscriben un acuerdo por el cual se busca solucionar el conflicto que se desarrolla en la compañía telefónica. El documento, firmado también por el Ministerio de Trabajo, establece la reincorporación de los 177 trabajadores despedidos y la anulación de las medidas judiciales iniciadas contra los huelguistas, entre otras cosas.

Lunes 15 • Los ejecutivos de la empresa Detecon desconocen el documento firmado el pasado sábado 13 mediante el cual se acepta la reincorporación de los 177 trabajadores despedidos. Este hecho aleja la posibilidad de solucionar el conflicto. Por su parte, el gobierno asegura que hará cumplir el acuerdo.

- Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier toman las instalaciones del Instituto de Sociología Boliviana (ISBO) en demanda de la concesión de una cátedra paralela en la materia Técnicas de la Investigación y en respaldo del Centro de Estudiantes de Derecho que exige la renuncia del actual decano interino. A su vez, la planta docente de la carrera de Comunicación Social decreta un paro indefinido en apoyo a sus colegas de Derecho, quienes cesaron sus actividades hace una semana.

- La Asociación de Pequeños Productores de Leche de Chuquisaca (ADEPLECH), proveniente de Río Chico y Yotala, realiza una marcha por las calles de Sucre en apoyo a la Planta Industrializadora de Leche (PIL) de Chuquisaca y exige que el Servicio Nacional y Regional de Impuestos anule una multa de 55 mil dólares aplicada a la empresa.

Martes 16

- Estudiantes y autoridades de la UGRM de Santa Cruz protagonizan una masiva marcha de protesta luego de que fracasaran las negociaciones entre el Gobierno y la universidad en torno al presupuesto.

Miércoles 17

- Estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier toman las facultades Técnica y de Medicina para protestar contra la ineficiencia y los malos tratos recibidos por parte de varios profesores.

Lunes 22

- La empresa Detecon hace efectivo el acuerdo firmado con el gobierno y los trabajadores de COTEL el pasado sábado 13 de abril y reincorpora a los 177 trabajadores despedidos a lo largo de las seis semanas de conflicto.

- Estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de la ciudad de Sucre resuelven, tras una asamblea, endurecer las medidas de presión hasta conseguir la renuncia del rector de la institución y mantener el bloqueo del decanato, la toma del ISBO y la huelga de hambre, reclamando la intervención inmediata de las autoridades universitarias.

Miércoles 24

- Estudiantes de las carreras de Derecho y Técnica de la Universidad San Francisco Xavier mantienen las medidas de presión en el marco del conflicto docente-estudiantil que se desarrolla en la institución.

- Los campesinos asentados en el Parque Nacional Tunari (PNT) se oponen a que el Poder Ejecutivo apruebe un decreto dirigido a regular el manejo de los asentamientos y viviendas construidas en el parque.

- Dirigentes fabriles impiden el acceso al edificio de la Federación de Trabajadores Fabriles a dos dirigentes de la COD a quienes les exigen levantar o demostrar las acusaciones sobre hechos de corrupción en la elección del actual directorio de la Central Obrera Boliviana (COB) formuladas contra la Federación.

- Se producen enfrentamientos entre campesinos de Oruro y Potosí a raíz del conflicto limítrofe por el que atraviesan ambos departamentos, que dejan como consecuencia un campesino muerto, una mujer orureña secuestrada, el incendio de 35 casas y más de 30 heridos, mientras que efectivos del Ejército Nacional se dirigen hacia la zona para controlar la situación. Los enfrentamientos se producen por el rechazo de los campesinos de Tayaquira al trabajo de saneamiento de tierras realizado en la zona limítrofe por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Jueves 25

- Los pobladores de diferentes urbanizaciones ubicadas en el PNT protestan frente a la Prefectura contra la dilación en la aprobación del decreto supremo que regularice los asentamientos y urbanizaciones construidos en dicho parque.

- Los dirigentes estudiantiles de la facultad Técnica de la Universidad San Francisco Xavier de la ciudad de Sucre anuncian que el próximo viernes suspenderán la toma de

las instalaciones de la facultad que vienen manteniendo desde hace 11 días. Esta decisión posibilita una reunión entre autoridades, docentes y estudiantes en la que se intentará elaborar un reglamento interno por medio del cual se controle tanto a los cátedráticos como a los estudiantes.

- Estudiantes y docentes de las normales Eduardo Avaroa y Franz Tamayo de Llica de la ciudad de Potosí inician, tras una asamblea general, una huelga general. Bloquean los accesos a la ciudad en reclamo de que el Ministerio de Educación realice los desembolsos necesarios para su normal funcionamiento y exigen recursos para mejorar la infraestructura de las unidades académicas, las cuales son administradas por la Universidad Tomás Frías.

Lunes 29

- Durante la madrugada, cerca de 50 efectivos policiales de Sucre desalojan a los 3 estudiantes que protagonizan una huelga de hambre, y detienen a otros 16 estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier.

- Los docentes de la UMSS anuncian que asumirán acciones legales para anular el convenio por el cual se acordó la participación de los estudiantes de base en la calificación de los exámenes de competencia a docentes titulares de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La Federación Universitaria de Docentes realiza un paro de 24 hs. en rechazo a dicho acuerdo y advierte que de ser necesario tomará medidas de presión.

- Ganaderos de las zonas chaqueñas de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija suspenden el bloqueo de la carretera Camiri-Yacuiba, iniciado en horas de la madrugada, luego de que los dirigentes de la Confederación de Ganaderos de Bolivia llegaran a un acuerdo con el gobierno. Los ganaderos exigían la suspensión de los trabajos que viene realizando el INRA en el Chaco.

■ Glosario de siglas

ADEPLECH	Asociación de Pequeños Productores de Leche de Chuquisaca
CASEGURAL	Caja Nacional de Seguridad Social
CLISA	Ciudad Limpia S.A.
CMB	Colegio Médico de Bolivia
CNS	Caja Nacional de Salud
COB	Central Obrera Boliviana
COD	Centra Obrera Departamental
COR	Central Obrera Regional
COTEL	Cooperativa de Teléfonos
CSUTCB	Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CTEUB	Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia
DIGECO	Dirección General de la Coca
ECOBOL	Empresa de Correos de Bolivia
FEJUVE	Federación de Juntas Vecinales
FETC	Federación Especial del Trópico de Cochabamba
FSUTCT	Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Tarija
FUD	Federación Universitaria de Docentes
HCV	Hospital Clínico Viedma
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
ISBO	Instituto de Sociología Boliviana
PIL	Planta Industrializadora de Leche
PLANE	Plan Nacional de Empleo de Emergencia
PNT	Parque Nacional Tunari
RAFUE	Reglamento de Administración y Funcionamiento de Unidades Educativas
SEDUCA	Servicio Departamental de Educación
UGRM	Universidad Gabriel René Moreno
UMSS	Universidad Mayor de San Simón

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.

Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, La Prensa, El Diario, Correo del Sur y El Deber.

Colombia

REGION
ANDINA



ENERO

Sábado 5 • El Ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionaria carretera que de Caño Limón conduce a Arauca y bloquean la vía San Juan de Rioseco-San Juan de Síqueme. Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y tropas del ejército se enfrentan en Cocorná, Antioquia y en la vereda La Despensa, Concepción.

Martes 8 • Un grupo de autodefensas toma la región de El Tarra, norte de Santander, frontera con Venezuela, dejando un saldo de por lo menos 15 civiles muertos y el desplazamiento de más de 4.300 familias.

Viernes 11 • Luego de que el presidente Pastrana rechaza la condición de las FARC de que se levanten los controles a la zona de distensión, se inicia la primera ronda de negociaciones entre miembros de las FARC y el delegado personal del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intentar salvar el proceso de paz.

Domingo 13 • Grupos paramilitares asesinan al concejal y líder popular Enoc Samboní, presidente del Concejo Municipal de Santa Rosa, Cauca, y realizan ataques armados en el balneario de Bonda, ubicado a 2 km. de Santa Marta.

• Iniciado el plazo de 48 horas declarado por el gobierno para el despeje de la zona de distensión, las FARC anuncian que entregarán en un acto público los cinco municipios que conforman el área de distensión. Los representantes de los países facilitadores de las negociaciones entre el gobierno y las FARC anuncian nuevas gestiones para salvar dicho proceso, amenazado por los anuncios del gobierno primero, y de las FARC después, de considerar roto el diálogo de paz.

Lunes 14 • Las FARC toman por diez horas San José de Albán, en Nariño y realizan ataques en Quetame, Cundinamarca y asaltan con explosivos y armas a la cárcel de Picalaña, Huila, enfrentándose con el ejército.

Viernes 18 • Las FARC destruyen el puente Alcaraván, en los límites de la zona de distensión, dejando aislada la región del alto Ariari con el centro del país, y dinamitan el oleoducto Caño Limón-Coveñas en Cubará, Boyacá. Además, atacan una flotilla de helicópteros que realizan fumigaciones de coca en el área rural del municipio de Curillo, Caquetá, y se enfrentan con el ejército en cercanías a la población de Tame.

Domingo 20 • El gobierno nacional y las FARC, con la presencia de los diez embajadores de los Países Amigos, acuerdan una agenda y un cronograma de negociación que contempla el cese del fuego y las hostilidades, así como la discusión sobre los secuestros y el paramilitarismo, entre otras cuestiones.

Lunes 21 • Cerca de 400 campesinos de La Sierra, municipio del sur de Cauca, bloquean la única vía de acceso a los 14 municipios del Macizo Colombiano para exigir al gobierno la reconstrucción de 250 viviendas y el hospital, entre otras obras.

Miércoles 23 • Las FARC derriban dos torres de energía en los municipios de Une y Usme, al suroccidente de Bogotá, y ordenan un paro armado en los departamentos del Meta, Cauca y Cundinamarca.

• Cerca de 15 mil campesinos e indígenas bloquean la Troncal del Caribe entre Santa Marta y Riohacha y se declaran en paro en rechazo a la arremetida de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en esa zona.

Jueves 24 • Los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) bloquean las vías de Cali hacia Popayán y Buenaventura para exigir a la administración local y al gobierno nacional que logren un acuerdo para superar las causas de liquidación de la empresa y contra la privatización de la misma.

Sábado 26 • Las FARC atacan la población de Samaná, en el nororiente del departamento de Caldas y los departamentos de Tolima y Caquetá. Además, dinamitan siete torres de energía en Gacheta, Cundinamarca.

Domingo 27 • Más de cien trabajadores de EMCALI toman las instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, en el norte de Bogotá, en protesta por la inminente privatización o liquidación de la empresa.

• Más de 5 mil campesinos desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta a causa del accionar de las AUC, que se mantienen desde hace cuatro días sobre la carretera Troncal del Caribe, despejan la misma luego de la firma del acuerdo de Marquetalia. Dicho acuerdo establece que la carretera Troncal del Caribe permanecerá cerrada por la noche y se restringirá el tráfico vehicular, entre otras cuestiones.

Miércoles 30 • Los presidentes de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela –que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN)– reunidos en la ciudad boliviana de Santa Cruz, firman una declaración en la que se comprometen a conformar una zona de libre comercio antes del primero de junio de 2002 y acuerdan un arancel externo común aplicable a partir del 1 de enero de 2004.

Jueves 31 • Finaliza la Cumbre por la Paz en La Habana, Cuba, iniciada el martes pasado, en la que participan el gobierno, el ELN, delegados de los cinco Países Amigos –España, Francia, Suiza, Cuba y Noruega– y el secretario de la ONU, entre otros, y se avanzó en la definición de los compromisos a asumir por las diferentes partes que posibiliten la formalización de un acuerdo.

FEBRERO

Martes 5 • El gobierno colombiano propone a las FARC una tregua de seis meses bajo verificación internacional, así como la liberación de todos los secuestrados, suspender el hostigamiento a las poblaciones y el uso de minas antipersonales, entre otras cuestiones.

• Los trabajadores del Hospital General de Barranquilla, agremiados a la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Similares (ANTHOC), realizan un paro para exigir a la alcaldía la dotación de medicamentos y otros insumos de los centros asistenciales.

Viernes 8 • Las FARC instalan un retén en la vía que une Samaná con Victoria, en el departamento de Caldas. Por otra parte, el ejército frustra varios atentados de las FARC contra el sistema energético nacional.

Viernes 15 • Más de 3 mil estudiantes de las universidades estatales con sede en Bogotá realizan una marcha por la ciudad para exigir al gobierno que responda a la solicitud de los docentes y los llame a participar de la mesa de negociaciones para discutir el decreto 2.912 a través del cual se les rebaja el salario a los profesores con antigüedad y se les otorga

un sueldo mínimo a los nuevos. Los docentes se encuentran movilizados contra dicho decreto desde hace días.

Lunes 18

- La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) realiza un paro por tiempo indeterminado para exigir al gobierno un aumento en los fletes, la ampliación de pólizas de seguro antiterrorista y el congelamiento de los precios del combustible.

Miércoles 20

- Cerca de 2 mil trabajadores de diferentes sectores económicos de Boyacá inician un paro cívico departamental en el sector El Olimpo, en el municipio, y bloquean la vía Tunja-Bogotá para exigir al gobierno nacional el no cierre de la siderúrgica Acerías Paz del Río, la construcción de la doble calzada Briceño-Sogamoso y soluciones a la crisis del agro, entre otros reclamos.

- Cinco mil personas se reúnen en la Plaza de Bolívar de Bogotá, otras 3 mil en Cundinamarca, y otros cientos de personas en Bucaramanga y Medellín, entre otros, convocados por gobernadores y alcaldes, para realizar un apagón voluntario de tres minutos en reclamo de paz y contra los atentados y ataques a poblaciones que realizan las organizaciones armadas.

- El presidente Andrés Pastrana anuncia la ruptura del proceso de paz con las FARC a raíz del secuestro por parte de esta organización del senador Jorge Eduardo Turbay y de los atentados y ataques a poblaciones y a la infraestructura del país. A medianoche comienzan los sobrevuelos en el Caguán y el desplazamiento de 13 mil soldados desde diferentes regiones del país. La Comisión Europea apoya la decisión gubernamental pero reitera que hay que buscar una salida pacífica al conflicto.

Jueves 21

- En el marco de la operación “Tánatos” el ejército se instala en San Vicente del Caguán para recuperar la zona de distensión.

- Las FARC atacan la subestación eléctrica del municipio de Altamira, Huila, dejando sin energía a 20 municipios de este departamento y a todos los de Caquetá. Además, en Medellín y Aburrá hay cortes en el suministro de gas por atentados, y 14 municipios del sur de Cundinamarca y de Tolima se quedan sin comunicación telefónica por ataques realizados por las FARC contra la infraestructura del servicio.

Viernes 22

- El Ministro de Transporte y el presidente de la ACC acuerdan que durante 60 días hábiles los automotores podrán circular sin problemas mientras se evalúan las demandas efectuadas por la ACC.

- En el marco de una fuerte ofensiva militar, las FARC realizan incursiones armadas en la población de Suaza y en Gigante, Huila. En Timba, Cauca, dinamitan una torre de la empresa Epsa, entre otras.

- En un comunicado oficial de 13 puntos, las FARC rechazan la ruptura de los diálogos y aseguran que están dispuestas a discutir sus propuestas con el próximo gobierno, invitando a la comunidad internacional y al grupo de países amigos a seguir colaborando para la resolución del conflicto.

Sábado 23

- Las FARC secuestran a la candidata presidencial por el movimiento Colombia Nueva, Ingrid Betancourt, cuando ésta pretendía llegar a San Vicente del Caguán, desde Florencia.

Domingo 24

- Tropas del batallón de contraguerrillas 52, en el marco de la operación “destructor”, allanan un campamento de las FARC en Boyacá. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) logra la ocupación de los cascos urbanos de los cinco municipios que conformaban la zona desmilitarizada.

Martes 26

- Cerca de 12 mil trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, agremiados a la Unión Sindical Obrera

(USO), realizan un paro por tiempo indeterminado en rechazo al secuestro cometido por las AUC en Monterrey, Casanare, del dirigente Gilberto Torres Martínez.

Miércoles 27 • Cerca de 500 trabajadores de ECOPETROL realizan un mitin en la entrada de la refinería, en Barrancabermeja, y posteriormente marchan por las principales calles del puerto petrolero para exigir la liberación del dirigente sindical de la USO secuestrado el lunes pasado por los paramilitares.

Jueves 28 • Las FARC destruyen con explosivos la subestación generadora de energía eléctrica de Enalar, en el centro de la ciudad de Arauca, dejando sin servicio a dicha ciudad, y dinamitan tres torres de energía en Pajarito, Boyacá, afectando a 14 municipios del departamento de Casanare. Por otra parte, declaran un paro armado en la zona del bajo Putumayo.

MARZO

Viernes 1 • El gobierno nacional anuncia las medidas que se implementarán para combatir a las FARC: el establecimiento de un Teatro de Operaciones en lo que fue la zona de distensión y regiones aledañas, el control de la comercialización, producción y tráfico de explosivos o elementos para su fabricación, y el pago de recompensas a quienes suministren información sobre actos terroristas o sus autores, entre otras.

Domingo 3 • La embajadora de Washington en Bogotá sostiene que Estados Unidos no dejará sola a Colombia tras la ruptura del proceso y adelanta una posible ayuda militar para combatir a las FARC.

Lunes 4 • Las FARC atacan la red eléctrica que provee a las poblaciones del departamento del Meta, dejando sin servicio a trece de ellas.

Martes 5 • Las FARC secuestran a por lo menos seis integrantes de la campaña política de Lilo de Gnecco, candidata a la Cámara de Representantes por el César, en la vía que va de Valledupar a la localidad de Mariangola.

• La Unión Europea (UE) amenaza con suspender la ayuda a Colombia si las FARC no liberan en los próximos días a la candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Miércoles 6 • Trabajadores de nueve registradurías de Antioquia realizan un paro y amenazan con no trabajar el próximo domingo, cuando se llevarán adelante las elecciones del Senado y la Cámara de Diputados, en reclamo del pago de sus salarios atrasados.

• El ELN presenta su propuesta de tregua bilateral verificable a través de la cual se compromete a cesar los secuestros, bloqueos viales y otras acciones que afecten a la población.

Jueves 7 • La Asociación de Empleados y Trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD) inicia una jornada de paro que se extenderá hasta el domingo próximo en reclamo de más presupuesto para la red pública hospitalaria.

• Luego de horas de negociación, la USO decide levantar el paro en ECOPETROL previo compromiso del gobierno de reforzar la seguridad de los sindicalistas y promover la gestión de organismos humanitarios para que medien en la liberación del dirigente Gilberto Torres, que permanece secuestrado por las AUC.

Sábado 9 • Las FARC realizan un atentado contra una torre de interconexión, dejando sin luz a más de diez municipios de Nariño, como Tumaco y Barbacoas. También, en conjunto con el ELN realizan incursiones armadas en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Arauca, Caquetá y Nariño.

- Domingo 10** • Se realizan las elecciones para el Senado y la Cámara de Diputados. El abstencionismo alcanza aproximadamente el 57%. Las FARC instalan retenes en San Vicente del Caguán e impiden el transporte de boletas electorales en varios lugares del país. La distribución de votos por partidos en el caso de la Cámara de Diputados es: 32% para el Partido Liberal Colombiano, 8,1% para la Coalición, y 7,3% para el Partido Conservador Colombiano. Respecto de la Cámara de Senadores los porcentajes son: 30,6% de votos para el Partido Liberal Colombiano, 9,9% para el Partido Conservador Colombiano, y 6,3% para la Coalición.
- Jueves 14** • Docentes agremiados a la Federación Nacional de Profesores Universitarios Asociación, a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) y a la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), entre otras organizaciones, realizan un paro nacional de 24 horas con movilizaciones en distintas ciudades del país. Estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades participan, para exigir la derogación del decreto 2.912 y oponerse al proyecto de reforma a la Ley 30 como un paso hacia la privatización de la educación pública.
- Sábado 16** • Tropas de la IV División del Ejército y de las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA) combaten con miembros de las FARC en el sitio La Glorieta, jurisdicción de Vistahermosa. Además, el ejército y las FARC se enfrentan en las afueras de Bogotá, zona rural del municipio de Usme, en el municipio de Fosca, Cundinamarca, y en el departamento de Antioquia. Asimismo, cerca de 200 miembros de las FARC del frente Tulio Varón toman el municipio de Venadillo, Tolima.
- El arzobispo de Cali, Moseñor Isaías Duarte, es asesinado por la noche en el atrio de la Iglesia del Buen Pastor, en el distrito de Aguablanca.
- Domingo 17** • El ex sindicalista Manuel Salvador Guerrero, quien formó parte de la USO, es encontrado muerto en una zona rural de Barrancabermeja. Se acusa a las AUC de haber cometido el asesinato.
- Martes 19** • Delegados del gobierno y del ELN se reúnen nuevamente en La Habana, Cuba, para discutir una eventual tregua bilateral con cese del fuego y las hostilidades.
- Miércoles 20** • El tesorero regional de la USO en Barrancabermeja, Rafael Jaime Torres, es asesinado en ese lugar cuando estaba por llegar a su casa.
- En un operativo conjunto la IV Brigada y la FAC impiden el avance de la columna del frente 47 de las FARC desde la zona rural de Mesopotamia hasta el casco urbano del municipio de La Unión.
- Jueves 21** • Alrededor de cinco mil trabajadores de ECOPETROL inician una huelga por tiempo indeterminado en protesta por el asesinato del líder sindical Rafael Jaime Torres en el día de ayer.
- Lunes 25** • Un supervisor mecánico y un técnico de ECOPETROL son secuestrados en las cercanías de Aruaney cuando se desplazaban hacia sus trabajos en la estación del oleoducto de esta población, en Casanare, en el lugar conocido como Quebrada La Ñata.
- Domingo 31** • Las FARC dinamitan el puente principal de la carretera que va hacia Huila dejando incomunicadas a las ciudades de Neiva y Campoalegre, así como un puente en las cercanías a Pensilvania, Caldas y en el departamento del César. Se producen distintos enfrentamientos entre las FARC y el ejército en distintas partes del país.
- Tras el fracaso de las negociaciones con directivos de ECOPETROL, representantes de los trabajadores deciden continuar con la huelga que mantienen desde hace casi dos semanas en protesta por los asesinatos y secuestros de líderes sindicales.

ABRIL

- Jueves 4** • El sindicalista Alfredo Zapata, miembro del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SITUMAC), es secuestrado durante un retén por las AUC y posteriormente asesinado.
- Sábado 6** • Las FARC dinamitan cuatro torres de conducción eléctrica en zonas rurales de Guayabetal, al sur de Bogotá y en Villeta, al noroeste de la capital colombiana, y realizan un atentado con bombas en la llamada zona rosa de Villavicencio.
- Domingo 7** • Las AUC liberan al dirigente petrolero Gilberto Torres secuestrado el pasado 25 de febrero y es entregado a una comisión humanitaria en Casanare. La USO levanta el paro en ECOPETROL.
- Lunes 8** • El ELN secuestra a dos sacerdotes cuando éstos acudían a una cita para mediar en la liberación de siete políticos retenidos la semana pasada en Arauca, frontera con Venezuela.
- Martes 9** • Los maestros oficiales de Antioquia, agremiados a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), convocados por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), junto con estudiantes, realizan una marcha en Antioquia, para protestar contra el asesinato y la desaparición de líderes sindicales, el no pago de las primas al magisterio, el desempleo, y para exigir un aumento salarial.
- Miércoles 10** • El ELN libera a los alcaldes de las poblaciones araucanas de Saravena y Cravo Norte, tres concejales, dos diputados y dos sacerdotes en el departamento del Meta.
- Jueves 11** • Un grupo de las FARC secuestra a doce diputados provinciales durante la Asamblea Departamental en Cali. Se producen enfrentamientos a lo largo de la ciudad entre las FARC y efectivos de la III Brigada del Ejército, que se suceden durante varias horas.
- Domingo 14** • Se produce un atentado contra el candidato por Primero Colombia, Álvaro Uribe, durante una caravana que realizaba en el marco de su campaña presidencial. A causa del blindaje del coche ni Uribe ni sus acompañantes resultan heridos, pero el atentado deja un saldo de tres muertos y más de 30 civiles heridos.
- Lunes 15** • Habitantes de Cali, junto con la asamblea departamental y familiares de los doce diputados detenidos el pasado jueves, realizan una marcha por las principales calles de esa ciudad para exigir la libertad de los mismos.
- Paramilitares realizan incursiones armadas en Jamundí, corregimiento de San Antonio. Matan a dos campesinos lugareños y combaten con el frente 36 de las FARC en la vereda Concepción, entre los municipios de Angostura y Carolina del Príncipe.
- Martes 16** • Las AUC secuestran a un sacerdote irlandés, una voluntaria alemana, cuatro religiosos colombianos y un seglar en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, argumentando que entre los misioneros hay un miembro del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Horas más tarde liberan a los siete integrantes de la misión religiosa.
- Dos hombres armados asesinan al presidente del Sindicato de Trabajadores No Docentes de Colombia e integrante del Frente Social y Político, cuando se encontraba en su lugar de trabajo, la Universidad de Nariño.
- Miércoles 17** • El presidente Bush en su visita a Colombia confirma que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentará un proyecto de ley para levantar las restricciones que pesan sobre la ayuda militar norteamericana.

■ Cronología

• Cerca de mil personas inician la marcha de la Reconciliación y la No Violencia a Caicedo y marchan desde ese lugar hacia San Cristóbal, donde llegan después de más de siete horas de caminata. Los manifestantes seguirán marchando y pasarán por distintos pueblos del país.

Domingo 21

• El frente 34 de las FARC bloquea la marcha de la No Violencia, en la que participan cerca de mil personas, a la altura del sitio el Vaho por la carretera de Antioquia, y secuestran al gobernador de ese departamento, Guillermo Gaviria, a un comisionado de paz y a un sacerdote.

• El gobierno rechaza la propuesta de las FARC de canjear guerrilleros procesados por la justicia a cambio de la liberación de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, congresistas, diputados del Valle del Cauca y varios policías y soldados.

Lunes 22

• Soldados de los batallones de contraguerrillas 17 y 20 combaten con los frentes 7 y 51 de las FARC en los municipios de La Macarena, Meta y Cabrera, Cundinamarca. Además, en el sitio Caño Bálsamo, de Calamar, Guaviare, el Batallón de Contraguerrillas Número 64 combate con las FARC, mientras que en la vereda Flor, cerca de Ibagüé y en la vereda Canecas, de Puerto Asís, Putumayo, se producen combates entre el ejército y las FARC.

Jueves 25

• El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos decide aplazar la discusión del proyecto de ley que levanta las restricciones a la ayuda de ese país a Colombia.

Sábado 27

• En operaciones contra las FARC, el ejército desactiva un coche bomba con 150 kilos de dinamita en el municipio de San Vicente del Caguán y desmantela un laboratorio para la elaboración de bombas.

96

Domingo 28

• Cerca de 5 mil personas, convocadas por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, realizan una marcha por las calles de Cali para exigir la liberación de los doce diputados del Valle que fueron plagiados por las FARC el 11 de abril pasado, y que el gobierno intervenga en la liberación de los mismos.

■ Glosario de siglas

ACC	Asociación Colombiana de Camioneros
ADEA	Asociación de Educadores del Atlántico
ADIDA	Asociación de Institutores de Antioquia
ANTHOC	Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Similares
ASMETROSALUD	Asociación de Empleados y Trabajadores de Metrosalud
ASPU	Asociación Sindical de Profesores Universitarios
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CAN	Comunidad Andina de Naciones
ECOPETROL	Empresa Colombiana de Petróleos
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EMCALI	Empresas Municipales de Cali
FAC	Fuerza Aérea Colombiana
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECODE	Federación Colombiana de Educadores
FUDRA	Fuerzas de Despliegue Rápido
IRA	Ejército Republicano Irlandés
ONU	Organización de las Naciones Unidas
SITUMAC	Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción
UE	Unión Europea
USO	Unión Sindical Obrera

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.

Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.

Ecuador

REGION
ANDINA



ENERO

Miércoles 2

• Un grupo de estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (FEUE) y de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) protesta frente a la Universidad Central, en Quito, contra las medidas económicas dispuestas por el presidente Gustavo Noboa el 28 de diciembre de 2001, que contemplan, entre otras cuestiones, el alza de hasta el 15,38% en los precios de los combustibles. La policía reprime a los manifestantes y allana las instalaciones educativas, deteniendo a 15 menores.

Lunes 7

• Representantes de la organización Acción Ecológica instalan un campamento en la entrada del bosque de Mindo Nambillo, al noroeste de Quito, para impedir el avance de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que implica la violación de los preceptos constitucionales y legales de protección al medio ambiente.

Martes 8

• Cerca de mil estudiantes de colegios secundarios de Quito convocados por la FESE y la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE) marchan hasta la Defensoría del Pueblo para protestar contra el último incremento en los precios de los combustibles y exigir al Gobierno que derogue esa medida. La policía reprime a los manifestantes.

Miércoles 9

• El presidente Gustavo Noboa anuncia que se reforzará la frontera con Colombia tras la suspensión del diálogo entre el gobierno y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

• Estudiantes de colegios secundarios de la ciudad de Quito realizan nuevamente protestas callejeras contra el último incremento de los precios de los combustibles y de la ola especulativa registrada en los últimos días. Dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y del Frente Popular marchan en Guayaquil para protestar por el alza del precio de los combustibles y en demanda del pago de sus haberes. También se registran movilizaciones en Portoviejo y Machala.

Viernes 11

• Damián Peña, estudiante del Colegio César Izurieta de Cuenca, muere a causa de un disparo cuando participaba en una de las manifestaciones que se desarrollan en los alrededores de la Universidad Central en contra del alza del precio de los combustibles.

Martes 15

• Manifestantes de la FESE llegan pacíficamente a la Plaza de la Independencia para protestar contra el gobierno y para exigir la sanción de los policías que participaron en la muerte del estudiante Damián Peña. Además, piden que se revea el alza de los combustibles y se desista del incremento en el precio del gas de uso doméstico.

• El Frente Unitario de Organizaciones Sindicales (FUOS), el Seguro Social Campesino (SSC), la Unión Provincial de Campesinos del Cañar y el Frente Popular, entre otras organizaciones campesinas y de trabajadores del Cañar, realizan en Azogues un paro por doce horas con bloqueos de caminos, en rechazo a la decisión del gobierno de vender las distribuidoras eléctricas, en contra del incremento del precio de los combustibles y la anunciada elevación del gas.

Sábado 19

• La Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador (FENOCIN), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y otras organizaciones inician, en el teatro de la Universidad Central del Ecuador, el Congreso de los Pueblos, donde analizan la problemática del país y decidirán si se realiza o no una huelga nacional en contra del gobierno.

Domingo 20 • Las organizaciones indígenas y sociales reunidas en el Congreso de los Pueblos resuelven apoyar todas las medidas de hecho en contra del gobierno y realizar un levantamiento popular.

Lunes 21 • Más de 500 personas convocadas por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), CONAIE, Frente Popular, UNE y Frente Patriótico, entre otros, marchan en Quito en conmemoración de los dos años de la caída del régimen del ex presidente Jamil Mahuad y en contra de la política económica del gobierno, por el alza de los salarios, en rechazo a las privatizaciones y el alza de los precios de los combustibles y el eventual aumento de los pasajes y del gas de uso doméstico. Se registran manifestaciones en diferentes ciudades del país.

FEBRERO

Jueves 7 • Miles de indígenas y trabajadores eléctricos convocados por FENOCIN, FEINE, CONAIE, la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), entre otros, inician una movilización desde distintos puntos del país contra el gobierno y la privatización de las empresas de distribución de energía, que culminará el 21 de este mes en Quito. En su recorrido hasta el Palacio de Carondelet son dispersados con bombas lacrimógenas y balas de goma por efectivos de la Policía Federal.

Miércoles 20 • Centrales sindicales, frentes sociales y organizaciones indígenas inician un paro nacional por 48 hs. con movilizaciones, bloqueos de caminos, marchas de antorchas y cacerolas vacías en Quito, Guayas, Azuay, Cañar, Machala, Cuenca y El Oro, entre otras ciudades. Protestan contra la política económica del gobierno y la privatización de las empresas de energía eléctrica.

Viernes 22 • La Asamblea Biprovincial (ABP) de Sucumbíos y Orellana, dirigida por los prefectos de dichas localidades e integrada por todos los sectores sociales, inicia un paro por tiempo indeterminado con bloqueo completo de la red vial en ambas jurisdicciones, la toma de las instalaciones petroleras y la suspensión de las comunicaciones fluviales, en demanda de que se declare la emergencia del sector agrícola y una rápida solución a los apagones, entre otros puntos.

Sábado 23 • El presidente Gustavo Noboa declara el estado de emergencia en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Lunes 25 • Los siete cantones de Sucumbíos y los cuatro de Orellana están en paro. Las vías, los aeropuertos y los pozos petroleros están tomados por los habitantes. Un grupo de indígenas quichuas de la ciudad de El Coca, Orellana, interrumpe el paso hacia el campo petrolero Culebra. Un grupo de pobladores ocupa las instalaciones del aeropuerto de la misma ciudad. El aeropuerto de Lago Agrio también es cerrado y las oficinas de la empresa de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos (TAME) son tomadas por decenas de mujeres que habitan en la zona. La fuerza pública desaloja a los manifestantes con gases lacrimógenos. Habitantes de Sucumbíos y Orellana realizan una marcha exigiendo la libertad de once detenidos por efectos del estado de emergencia declarado días atrás.

• La Federación Médica Ecuatoriana (FME) inicia un paro por tiempo indefinido por el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados el 3 de agosto del año pasado, que contemplan un aumento salarial y un incremento para el sector de la Salud en el Presupuesto General de la Nación, entre otras cuestiones.

Jueves 28 • La FME decide levantar el paro luego de conocer el compromiso del gobierno de realizar reajustes salariales.

- Son cuatro los muertos a raíz de los enfrentamientos registrados entre manifestantes y militares en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

MARZO

- Viernes 1** • Trabajadores administrativos y de servicios de colegios, escuelas y jardines de infantes de Pichincha cierran las puertas de los establecimientos en forma indefinida, como medida de presión para que el gobierno atienda sus pedidos: el incremento de sueldos básicos al 100%, el pago de un bono por el Día del Servidor Público, y el incremento en el monto de las indemnizaciones de la venta de renuncias de 10 mil a 30 mil pesos.
- Domingo 3** • La huelga que comenzó hace once días en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos termina esta madrugada tras un acuerdo entre el gobierno y los representantes de la ABP. El gobierno levanta el estado de sitio e impone el estado de emergencia eléctrica y agroproductiva para agilizar acciones en esos campos. Además, determina tramos y tiempos para la continuación de obras viales. También se crea una comisión bipartita de garantes con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), delegados del Parlamento y la Defensoría del Pueblo para hacer un seguimiento de los acuerdos alcanzados.
- Miércoles 6** • Los servidores públicos del sector de la educación levantan el paro tras conocer la decisión del gobierno de aumentar un 50% el salario básico y la creación de un bono de 80 dólares por el Día del Servidor Público que se celebra el 1 de abril.
- Viernes 8** • Más de 500 trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inician una huelga de brazos caídos en demanda de un aumento salarial del 300%.
- Miércoles 13** • Los trabajadores eléctricos realizan una marcha en Quito en contra de la privatización de las empresas eléctricas.
- Jueves 14** • El gobierno resuelve suspender la subasta de las 10 empresas de la Sierra y la Amazonia y continuar con el proceso de las siete empresas de la Costa.
- Organizaciones nacionales e internacionales dan comienzo al Campamento Internacional Permanente por la Justicia Social y la Dignidad de los Pueblos, que se desarrollará hasta el 20 de este mes en Quito, cuya finalidad es crear un espacio de resistencia civil en contra de la globalización capitalista, el neoliberalismo, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Plan Colombia.
- Lunes 18** • Alrededor de 30 jubilados se concentran en las afueras de la sede matriz del IESS para reclamar a los trabajadores en huelga y a los directores del instituto una salida al conflicto que les permita el cobro de sus pensiones jubilatorias. Los huelguistas deciden continuar con el paro. La Dirección General del IESS solicita el inicio de 11 juicios penales con orden de prisión para los dirigentes del paro.
- Los 760 trabajadores de planta y 300 de misceláneos de la Refinería Esmeraldas, Esmeraldas, comienzan un paro preventivo por 72 hs. en demanda del incremento salarial y la firma del contrato colectivo y en contra de la venta de las empresas eléctricas. Además, impiden el funcionamiento de las dos máquinas que procesan el crudo.
- Martes 19** • Los trabajadores de la Refinería Esmeraldas, cumpliendo su segundo día de paro, ponen a funcionar una de las máquinas para demostrar su disponibilidad al diálogo y llegar a acuerdos con las autoridades de Petroecuador y el gobierno.
- Miércoles 20** • Representantes de organismos de derechos humanos de Argentina, Alemania, Colombia, Ecuador, EE.UU., Suecia, Perú y Venezuela participan del Campamento por la Paz

y Justicia desarrollado durante esta semana en las ciudades de Lago Agrio, Manta y Quito, para analizar los procesos de globalización y las consecuencias de la aplicación del Plan Colombia. Para finalizar el encuentro, los participantes marchan por las principales calles de la capital con la intención de llegar a la embajada de EE.UU. en repudio al Plan Colombia, la creación del ALCA y la Iniciativa Regional Andina propuesta por los EE.UU. La policía reprime la protesta dejando un saldo de dos manifestantes heridos.

Jueves 21 • Dirigentes de CONAIE, CMS, CEOSL, Frente Popular, FUT, FENOCIN, entre otros, se autoconvocan en la “Asamblea Cívica del Ecuador” con el fin de analizar la posibilidad de realizar un levantamiento en contra de las privatizaciones.

• Una gran delegación de trabajadores del IESS realiza una marcha desde la casa central del instituto hasta la Dirección del mismo en Quito para exigir un aumento del 300% del salario básico y la renuncia del director general.

Lunes 25 • Diecisiete ambientalistas ecuatorianos y de nacionalidad italiana, alemana, suiza, francesa, colombiana, irlandesa y estadounidense que se encuentran acampando en Guarumos, reserva de Mindo, en contra de la construcción del OCP, son desalojados y detenidos por la policía.

ABRIL

Lunes 1 • Ocho trabajadores del hospital Teodoro Maldonado Carbo, perteneciente al IESS, en Guayaquil, comienzan una huelga de hambre para exigir el alza de sus salarios y el cese de los sumarios administrativos contra varios de sus compañeros. Los dirigentes de los trabajadores del IESS mantienen una reunión con representantes provinciales pero no llegan a ningún acuerdo.

• Los 10 ambientalistas detenidos por protestar en contra de la construcción del OCP son liberados por la Alcaldía. Los extranjeros no serán deportados.

Jueves 4 • Tres empleados del IESS se extraen sangre en la puerta de la sede central del instituto en demanda de sus exigencias salariales. Luego se desmayan y los dirigentes de los trabajadores deciden desconocer al director y marchan al Tribunal Supremo Electoral para exigir que inicie el proceso de elección del Consejo Directivo del IESS en reemplazo de la Comisión Interventora. En Guayaquil, los trabajadores continúan con la huelga de hambre impidiendo la atención médica en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. No se atiende en la consulta externa.

• Cerca de 100 estudiantes, indígenas, ecologistas, activistas de derechos humanos y otros movimientos sociales realizan una manifestación en las afueras de la Embajada de Israel, en Quito, interrumpiendo el tránsito en repudio a la intervención del ejército israelí en territorio palestino.

Lunes 8 • Doce de los catorce cantones que conforman la Asociación de Municipalidades de El Oro (AMO) inician un paro por tiempo indeterminado con bloqueo de vías en rechazo a la falta de atención por parte del gobierno respecto de sus repetidas demandas de asignaciones presupuestarias para la realización de obras y proyectos en la región.

Martes 9 • La AMO continúa en paro, bloqueando con montículos de arena, piedras y llantas al menos siete puntos de la vía que conduce desde Machala hasta el cantón fronterizo. El último de estos cortes se localiza en el Canal Internacional sobre el puente que comunica a Ecuador con Perú, impidiendo el comercio entre estos dos países. El comité de paro de Santa Rosa, primer punto del bloqueo, decide levantar la medida.

Jueves 11 • Los manifestantes de El Oro atacan edificios públicos y son reprimidos por la Policía Aduanera de Huaquillas.

• El gobierno decide no vender el 51% de las acciones de las empresas de distribución eléctrica de la costa. El nuevo plan de modernización contempla que las 17 empresas de distribución del país realicen un concurso para administración internacional.

Viernes 12

• Los trabajadores del IESS levantan el paro luego de la firma de un acuerdo que contempla el alza salarial en un 20% retroactivo a enero, una segunda suba posterior a la reprogramación presupuestaria, y que no habrá represalias contra los trabajadores que participaron en las protestas o contra los dirigentes de la paralización del instituto. La reanudación de las labores comenzará el lunes próximo.

Lunes 15

• El paro de El Oro continúa. En los cantones Zaruma, Balsas y Piñas se encuentra paralizado el comercio y bloqueadas las vías de acceso. Los pobladores reclaman por el desabastecimiento comercial. Por su parte, en Huaquilla y el cordón fronterizo la comercialización se ha restablecido en un 40%. No se registran incidentes.

Martes 16

• Los manifestantes de El Oro levantan el paro y el bloqueo del puente internacional de Huaquillas tras una reunión en la Vicepresidencia de la República, en Quito, y logran un acuerdo entre las autoridades de esta localidad y el gobierno, en el que éste debe convocar a partir del próximo 30 de julio la licitación para la construcción de la planta regional de agua potable y dotar de alcantarillado a cinco cantones. También ofreció construir un hospital materno-infantil, entre otras cosas.

Miércoles 24

• La UNE cumple su primer día de paro nacional con movilizaciones en todo el país en protesta por el intento de municipalizar la educación.

Jueves 25

• Los profesores de Guayaquil realizan una marcha hasta el Cabildo y dialogan con el alcalde, quien les ratifica que se opone a manejar el área educativa. En Manabí los docentes piden la renuncia de la directora de Educación. Por su parte, en Quito unos mil profesores marchan hasta el Municipio para ser recibidos en comisión general, pero algunos concejales no dan paso al diálogo. Una reunión prevista para esta tarde en el Ministerio de Educación no se lleva a cabo. Finaliza el paro.

■ Glosario de siglas

ABP	Asamblea Biprovincial
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
AMO	Asociación de Municipalidades de El Oro
CEOSL	Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CMS	Coordinadora de Movimientos Sociales
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEINE	Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador
FENOCIN	Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador
FESE	Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE	Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FME	Federación Médica Ecuatoriana
FUOS	Frente Unitario de Organizaciones Sindicales
FUT	Frente Unitario de Trabajadores
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
JRE	Juventud Revolucionaria del Ecuador
OCP	Oleoducto de Crudos Pesados
ONU	Organizaciones de las Naciones Unidas
SSC	Seguro Social Campesino
TAME	Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos
UNE	Unión Nacional de Educadores

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.

Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.



ENERO

Jueves 3 • Unos 100 alumnos de la Universidad Nacional Centro Pre Francisco Aguinaga Castro, para exigir la renuncia del actual rector, a quien señalan como corrupto.

Martes 8 • Más de un centenar de maestros contratados y dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) toman las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación, exigiendo el cambio del sistema de evaluación en el concurso para el nombramiento de 35 mil docentes.

Jueves 10 • Los pobladores de Matucana comienzan un paro de 72 hs. para exigir la destitución del alcalde local, acusado de corrupto.

Viernes 11 • El presidente Toledo lanza el proyecto A Trabajar Urbano, con el objeto de generar 60 mil empleos temporales.

• El sindicato de trabajadores del petróleo de la región de Grau presenta ante las autoridades más de 58 mil firmas para que el Congreso apruebe la ley que evita la privatización de Petro Perú.

Miércoles 16 • Los algodoneros del departamento de Ica bloquean la Panamericana Sur, en demanda del alza del precio del algodón y la prohibición de la importación de este producto. Son reprimidos por la Policía Nacional, que detiene a 11 manifestantes y hiere a otros 50.

Martes 22 • Los trabajadores estatales despedidos durante el decenio fujimorista, agrupados en la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), marchan hasta la Plaza Mayor de Lima, donde realizan un mitin para reclamar ser repuestos en sus puestos de trabajo. Son dispersados con gases lacrimógenos por la policía.

Miércoles 23 • Nueve docentes afiliados al SUTEP comienzan una huelga de hambre al pie de la Catedral de Lima, demandando la modificación del reglamento del concurso de nombramientos de 35 mil docentes, al que consideran inconstitucional.

Viernes 25 • Tres profesores se unen a la huelga de hambre que vienen llevando a cabo maestros del SUTEP frente a la Catedral. A nivel nacional ya son más de 60 los maestros en huelga, reclamando la modificación del reglamento de concurso docente.

Martes 29 • Los habitantes del departamento amazónico de Loreto y de las provincias de Nauta, Raquena, Tamshiyacu, Mazán, Indiana, Yurimaguas y Caballococha, y en Contamana, de la región de Ucayali, comienzan un paro regional de 48 hs. para exigir al gobierno atención a los problemas económicos y que se desconozca el acuerdo de paz suscrito con Ecuador en 1998.

FEBRERO

Viernes 1 • Los azucareros de diferentes empresas agroindustriales de Lambayeque queman llantas frente al Palacio de Justicia e ingresan violentamente a la municipalidad local, en

protesta por el Decreto que otorga arancel cero a los grupos importadores de azúcar, maíz, arroz y leche.

- Jueves 7** • Cientos de jubilados agrupados en la Asociación Nacional de ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Nacional (ASEIPSS) marchan hasta el Palacio de Gobierno para reclamar al presidente Toledo el cumplimiento de la sentencia judicial que nivela sus pensiones.
- Sábado 9** • Los 243 ex trabajadores del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTCVC), que estaban refugiados en un local gremial ubicado en el Cercado de Lima, son detenidos por la policía acusados de promover actos vandálicos y ocasionar destrozos en la ciudad en los últimos días. Doce de ellos son derivados a la Dirección de Seguridad del Estado, y el resto es liberado.
- Domingo 10** • Luego de 19 días los maestros del SUTEP levantan la huelga de hambre en todo el país, a pedido de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica y sin ningún acuerdo con el Ministerio de Educación.
- Lunes 11** • Los líderes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) comienzan una huelga de hambre para reclamar un nuevo juicio, mejores tratos carcelarios y el acatamiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado peruano la modificación de la legislación antiterrorista.
- Martes 12** • Más de 650 condenados por terrorismo de diversos penales del país se suman a la huelga de hambre impulsada por Sendero Luminoso y el MRTA.
- Miércoles 13** • Los trabajadores de la CITE marchan hasta el Congreso para demandar al gobierno integrar la comisión multisectorial que revisa los ceses colectivos de las entidades estatales durante el régimen de Fujimori.
- Los maestros del SUTEP se movilizan por las calles de Lima hasta el Congreso para presentar un proyecto de ley de Educación y Cultura, en defensa de la gratuidad de la enseñanza y la calidad educativa.
- Martes 19** • Los algodoneros de Pisco, Cañete y Chíncha paran por 24 hs. y bloquean varios tramos de la Panamericana Sur, en reclamo de un aumento sobre el algodón en rama y para que el gobierno deje de importar este producto. Son corridos con bombas lacrimógenas por la policía; dos personas resultan heridas, y siete detenidas.
- Miércoles 20** • Los transportistas paran en todo el país, bloqueando carreteras en algunas zonas, en rechazo a la decisión del gobierno de imponer un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
- El presidente Toledo promulga la Ley de la Jornada Laboral, que ratifica la vigencia de ocho horas diarias de trabajo y aumenta un 35% el pago adicional por el trabajo nocturno.
- Jueves 21** • Los pobladores de Urcos, capital de la provincia de Quispicanchis, Cuzco, paran por 24 hs. para exigir al gobierno que declare en emergencia la vía Urcos-Marcapata-Puerto Maldonado, en Madre de Dios, así como el agro de la zona.
- Martes 26** • Los habitantes de Arequipa inician un paro regional de 48 hs., bloqueando las principales vías de acceso a la ciudad, para reclamar al gobierno que deje sin efecto el proceso de privatización de las empresas estratégicas regionales.

MARZO

Martes 5 • Los médicos de EsSalud comienzan un paro nacional de 48 hs. para reclamar, entre otros puntos, aumentos de sueldos, pago a los jubilados, nombramiento de los contratados, la autonomía de EsSalud y la destitución de los funcionarios que provienen de la dictadura fujimorista.

Miércoles 6 • Los trabajadores de la Construcción Civil comienzan una huelga nacional por tiempo indeterminado con una movilización de alrededor de 5 mil personas hasta el Palacio de Gobierno para que restituya la ley de negociación colectiva por rama.

Jueves 7 • Los trabajadores azucareros de diferentes empresas agroindustriales bloquean la carretera Panamericana, dejando incomunicado al norte con el resto del país y pidiendo que el gobierno aplique un arancel a la importación de azúcar. Son desalojados por la policía, que detiene a 32 personas.

• Mientras permanecen en huelga, trabajadores de la construcción civil vuelven a salir a las calles de Lima y distintas ciudades del interior del país, para demandar a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) que cumpla con la ley colectiva por ramas. En Lima se unen a la marcha los trabajadores de la CITE y delegaciones del Instituto Peruano del Deporte (IPD), del Banco de la Nación y de los despedidos de varios penales.

Viernes 8 • Los trabajadores de la Construcción Civil suspenden las marchas programadas y deciden levantar la huelga, luego de que el Ejecutivo promulga un decreto que le da a la CAPECO un plazo de tres días para que solucione los reclamos de los trabajadores.

• El gobierno comienza a aplicar una tasa de derechos arancelarios a la importación de azúcar del 20%.

Sábado 9 • El presidente Toledo confirma que fueron retiradas tropas militares de la frontera con Ecuador para ser reubicadas en la zona fronteriza con Colombia, con el objeto de evitar futuras incursiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Martes 12 • La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) suspenden su participación en la Comisión Multisectorial que estudia los casos de despido colectivo de trabajadores de la administración pública en épocas fujimoristas, denunciando falta de voluntad política para solucionar este problema.

Miércoles 13 • Sin mediar negociación alguna, los 600 presos por terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA levantan la huelga de hambre que cumplían desde hace un mes.

Jueves 14 • El Congreso aprueba una ley por la cual las personas que bloqueen carreteras o causen daños a la propiedad pública o privada durante movilizaciones políticas o de protesta laboral serán sancionadas con penas de entre tres y seis años de prisión.

Viernes 15 • El Ministerio de Trabajo y Promoción Social (MTPS) otorga un incremento salarial del 11% a los trabajadores de la construcción civil y ratifica la negociación colectiva por rama.

Miércoles 20 • A tres días de la llegada al país del presidente norteamericano George W. Bush estalla un coche bomba a metros de la embajada de Estados Unidos en Lima, causando nueve muertos y por lo menos 40 heridos.

• Miles de jubilados provenientes de todo el país marchan hasta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la primera de tres jornadas continuadas de protestas, para reclamar un incremento de las pensiones y la derogatoria de leyes dictadas por el gobierno de Fujimori.

Jueves 21 • Doce departamentos del centro y sur del país realizan paros regionales en rechazo al plan gubernamental de privatizar las empresas eléctricas regionales y exigiendo las renuncias del ministro de Economía y del presidente de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI).

Sábado 23 • George W. Bush llega a Lima por 24 hs. Soldados y policías vigilan la ciudad y el gobierno prohíbe las reuniones públicas, por lo que en una manifestación frente al Palacio de Justicia son detenidas 57 personas. Toledo y Bush informan que coinciden en iniciar en conjunto una guerra contra el terrorismo y el narcotráfico para preservar la democracia.

Lunes 25 • Los pobladores de la provincia de Bagua, Amazonas, comienzan un paro regional de 48 hs. para exigir la destitución del fiscal provincial, el reconocimiento de esta provincia en el régimen tributario especial de la selva, y autonomía presupuestal.

ABRIL

Miércoles 3 • Acusados por diversos delitos de corrupción, 14 congresistas y cinco ex parlamentarios son suspendidos de toda función pública luego de que el Pleno del Congreso aprueba un informe de acusación constitucional por delitos vinculados con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Viernes 5 • Los habitantes de la ciudad de Ilo paran durante la jornada para reclamar la restitución de la zona franca, neutralizada durante el gobierno fujimorista. Bloquean un tramo de la carretera Panamericana Sur.

Sábado 6 • Médicos y trabajadores contratados del sector salud inician un ayuno en una carpa instalada en la Plaza de Armas de Lima para exigir el nombramiento automático y la homologación de sus sueldos.

Lunes 8 • Los trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá S.A. inician paros escalonados en demanda del pago de sus salarios, atrasados desde hace dos meses.

Martes 9 • El MEF comunica que no podrá incorporar a los casi 5 mil trabajadores separados de sus cargos a través de la Ley de Promoción de la Inversión Privada, aplicada durante el régimen fujimorista.

Miércoles 10 • Cientos de trabajadores de diferentes organizaciones políticas marchan por las calles de Lima para expresar su solidaridad con el pueblo cubano y oponerse a cualquier resolución del gobierno peruano de condenar al gobierno de Cuba en relación a su política de derechos humanos.

• Los trabajadores petroleros presentan más de 46 mil firmas para oponerse a la privatización de Petro Perú.

Sábado 13 • Policías municipales y miembros del servicio de serenazgo de la Municipalidad de Lima inician una huelga indefinida y marchan por las calles céntricas de la capital, demandando que se les brinden beneficios sociales.

Martes 16 • Los habitantes de los departamentos sureños de Arequipa, Tacna, Puno y Madre de Dios comienzan un paro de 48 hs. para oponerse a la privatización de las empresas de energía eléctrica. Numerosos grupos de manifestantes bloquean los principales accesos a las ciudades de la zona.

Miércoles 17

• En el segundo día del Paro Cívico Macrorregional en el sur del país contra la privatización de las empresas eléctricas públicas, 31 personas son detenidas, 19 en Arequipa y 12 en Juliaca, a raíz de la nueva ley que impide a los manifestantes bloquear las carreteras.

• Tras el paro de 48 hs. en la región sur del país y la inminente decisión del Congreso de suspender la privatización de las generadoras eléctricas EGASA y EGESUR, la COPRI posterga hasta el 15 de mayo la presentación de propuestas para la venta de ambas empresas.

Jueves 25

• Federaciones, sindicatos, organizaciones sociales y políticas y delegaciones de frentes regionales del sur del país y del Frente Amplio Cívico de Arequipa realizan la Gran Movilización de la CGTP desde Plaza 2 de Mayo de Lima y la Plaza Grau hasta el Congreso y el Palacio de Gobierno, para exigir la inmediata restitución de sus derechos laborales, la no privatización de las empresas públicas, la generación de empleo y el cambio de política económica. En las principales ciudades del país, miles de trabajadores realizan multitudinarias marchas expresando su rechazo a la política continuista del gobierno de Alejandro Toledo.

Viernes 26

• La población de la provincia de Andahuaylas comienza un paro de 48 hs., con bloqueo de carreteras, para reclamar al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) la puesta en marcha de dos facultades autónomas de la universidad Micaela Bastidas en esta localidad.

Lunes 29

• Los pobladores de Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco y Huancavelica comienzan un paro macrorregional de 48 hs. en rechazo a la privatización y concesión del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro y Electrocentro.

• Los ex trabajadores de EsSalud inician una huelga de hambre para que los reclamos de reposición de 800 despedidos sean atendidos con prontitud.

Glosario de siglas

ASEIPSS	Asociación Nacional de ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social
CAPECO	Cámara Peruana de la Construcción
CGTP	Confederación General de Trabajadores del Perú
CITE	Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales
CONAFU	Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades
COPRI	Comisión de Promoción de la Inversión Privada
CTP	Confederación de Trabajadores del Perú
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
IPD	Instituto Peruano del Deporte
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MRTA	Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
MTCVC	Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
MTPS	Ministerio de Trabajo y Promoción Social
SOAT	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
SUTEP	Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú
UNPRG	Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
Fuentes: diarios Expreso, La República y La Industria.*



ENERO

- Domingo 6** • El secretario de Salud de la Alcaldía Mayor antiriales a cerca de 40 trabajadores de la salud, acusándolos de ser los responsables de los paros rotativos que ocurren en las consultas y urgencias de los hospitales de Caracas desde hace dos meses.
- Lunes 7** • Los siete sindicatos educativos del estado de Zulia, que agrupan a más de 10 mil docentes, se declaran en huelga indefinida exigiendo el pago de aguinaldos y otras percepciones.
- Las bancadas de Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y demás partidos opositores –que aglutinan a 74 representantes de los 165 que componen el recinto– crean el Bloque por la Autonomía Parlamentaria.
- Martes 8** • La Federación Médica Venezolana (FMV) realiza un paro nacional –con un acatamiento del 95%– por 24 horas, que afecta a las instituciones dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), exigiendo un aumento salarial, el cumplimiento del contrato colectivo y dotación de recursos. La federación anuncia otra huelga para el viernes.
- Jueves 10** • Los integrantes de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (FEGALAGO) se declaran en desobediencia civil contra la implementación de la Ley de Tierras.
- Domingo 13** • Chávez anuncia la designación del titular de la Secretaría de la Presidencia, Diosdado Cabello, como vicepresidente de la República.
- Alrededor de 200 conductores de colectivos realizan una caravana en Caracas exigiendo al Ejecutivo la elaboración de un plan antidelictivo tras la muerte de un compañero.
- Lunes 14** • La FMV realiza un paro nacional de 12 horas en las áreas de actividades electivas y consultas de urgencia.
- La Corte Primera en lo Contencioso Administrativo ordena la continuidad ininterrumpida de la prestación del servicio público de salud en los centros asistenciales y hospitalarios metropolitanos.
- Martes 15** • El presidente Chávez designa al nuevo ministro de la Secretaría de la Presidencia.
- Cerca de 110 familias invaden un parque ubicado en el municipio capitalino Libertador.
- Medio millar de empleados del Plan Bolívar 2000 cortan calles y se concentran frente al Palacio de Miraflores exigiendo el pago de deudas pendientes.
- Sábado 19** • Caficultores se manifiestan en distintos estados del país exigiendo al gobierno el cumplimiento de la banda de precios por parte de la agroindustria del sector.

Martes 22 • El Colegio de Bioanalistas organiza tomas y concentraciones en centros hospitalarios del MSDS de 22 estados del país en reclamo por el cumplimiento del contrato colectivo.

Miércoles 23 • En un nuevo aniversario de la caída de la dictadura ocurrida en 1958, organizaciones opositoras al gobierno realizan en Caracas la Marcha por la Unidad Democrática, en la que participan AD, COPEI, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), entre otros. Los manifestantes, más de 200 mil según los organizadores, exigen al presidente un cambio en la política gubernamental o su renuncia. El Movimiento V República (MVR) realiza una contra-manifestación en favor de Chávez en la que el mandatario expresa que la marcha opositora reunió un tercio de la realizada a su favor.

Jueves 31 • En la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones los presidentes de Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia resuelven la implementación de un arancel común estratificado a aplicarse en cuatro etapas a partir del 31 de diciembre de 2003, que aumentará los impuestos aduaneros de 0% a un 20% final. FEDECAMARAS manifiesta su rechazo a la eliminación de una quinta etapa.

FEBRERO

Lunes 4 • El presidente culmina en Fuerte Tiuna las celebraciones por el aniversario del levantamiento militar de 1992. Tras marchar por Caracas, 2 millones de personas –según fuentes oficiales– se manifiestan frente al Palacio de Miraflores. Organizaciones opositoras realizan manifestaciones de luto en la capital en memoria de los caídos en combate durante el intento de golpe militar.

Martes 5 • El Ministerio de Finanzas otorga una partida de 15 millardos de bolívares a la Alcaldía Metropolitana, destinada al pago salarial de enero de sus empleados.

Miércoles 6 • Finaliza en el Colegio Médico del Distrito Metropolitano un referéndum en torno a la declaración de hora cero o huelga total. Los votantes a favor, un 61% de 1.030 sufragantes, no logran llegar al 75% necesario para el inicio de huelga.

Jueves 7 • El coronel de aviación en actividad Pedro Soto pide la renuncia de Chávez, al igual que Pedro Flores, capitán de la Guardia Nacional. En Caracas, Zulia, Anzoátegui, Carabobo, Lara, Aragua y Mérida también se realizan manifestaciones a favor y en contra del presidente.

• Cerca de 12 mil personas marchan junto a la Federación Unica de Empleados Públicos (FEDEUNEP) hacia la Asamblea Nacional, donde entregan una propuesta de reforma del Estatuto de la Función Pública junto a representantes de gremios siderúrgicos, petroleros, eléctricos, gráficos y magisteriales, entre otros.

Domingo 10 • Alrededor de 200 habitantes de las comunidades de Macuto y Los Corales, en Vargas, cortan la vía Costanera de La Guaira exigiendo al gobierno regional la reanudación de los planes de reconstrucción infraestructural del estado.

Lunes 11 • Se inicia un consejo de investigación en contra de los militares que el jueves exigieron la renuncia del presidente.

- Martes 12** • El presidente Chávez anuncia la libre flotación del dólar además del ajuste del presupuesto de ingresos y gastos de 2002, realizado tras modificar la estimación del precio base del petróleo utilizada en el cálculo anterior. El presupuesto fiscal presentado muestra un recorte de 22,2% de los ingresos con respecto a la primera versión, que lo fijaba en 26,4 billones de bolívares.
- Viernes 15** • En la ciudad de Maracaibo y en el estado de Zulia se realizan un apagón de una hora y otras manifestaciones, convocadas contra el aumento de la tarifa eléctrica y la propuesta de aplicarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la misma.
- Sábado 16** • Cerca de 50 familias toman un edificio ubicado en Caracas exigiendo al gobierno la asignación de viviendas.
- Lunes 18** • El contralmirante Carlos Molina Tamayo pide la renuncia o el enjuiciamiento de Chávez.
- Martes 19** • Cerca de 800 personas de las federaciones de profesores, obreros y empleados administrativos de las 17 universidades públicas y 16 instituciones anexas se manifiestan frente al Ministerio de Educación exigiendo el pago de salarios atrasados, la firma de un nuevo contrato colectivo y que no sean aplicadas las Normas de Austeridad y Racionalización del Gasto discutidas en una reunión del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
- Jueves 21** • El ministro de Defensa informa que el consejo de investigación contra Pedro Soto resolvió darlo de baja.
- Tras una reunión entre los 74 generales del ejército, el general en jefe y el ministro de Defensa, el comandante general de la institución expresa que las leyes y reglamentos militares que los rigen están vigentes y que sus integrantes deben hacerse responsables en caso de actuar en disconformidad con ellos.
- Viernes 22** • Alrededor de 200 médicos, enfermeras, técnicos, obreros y empleados de seis hospitales del estado de Miranda cortan rutas exigiendo el pago de salarios y bonos adeudados por el MSDS y la gobernación estatal.
- Sábado 23** • El comandante general de la Guardia Nacional afirma que el capitán Pedro Flores será sancionado con 15 días de arresto severo a partir del lunes, según disposición del presidente.
- Lunes 25** • El presidente Chávez designa a una nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
- Miércoles 27** • En conmemoración del Caracazo, más de 30 mil simpatizantes de Chávez de distintos lugares del país marchan junto al vicepresidente y otros altos funcionarios del gobierno hacia el palacio de Miraflores. En Mérida, Nueva Esparta y Zulia también se realizan manifestaciones de apoyo al oficialismo. La CTV, por su parte, encabeza una columna opositora que marcha en la capital junto a AD, COPEI y Primero Justicia.
- Jueves 28** • Empleados de PDVSA marchan en Caracas exigiendo la rectificación de los nombramientos del directorio de la empresa. Alrededor de 3 mil gerentes medios y profesionales se declaran en asamblea permanente.

MARZO

- Domingo 3** • Chávez anuncia la designación de la nueva ministra de Trabajo.
- Lunes 4** • La FMV convoca a un paro por 48 hs. con un alto acatamiento en el interior del país, exigiendo el cumplimiento del Contrato Colectivo del Trabajo.
- La CTV organiza tomas de las oficinas del Ministerio de Trabajo en tres estados. En Caracas la organización realiza una manifestación frente al despacho.
- Martes 5** • Las siete federaciones magisteriales del país convocan a un paro nacional por 48 hs. acatado en un 96%, según los organizadores, en reclamo de la revisión de concursos, la entrega de créditos, la implementación de un plan de vivienda y la derogación de la Ley sobre Estatutos de la Función Pública.
- Viernes 8** • Cerca de 15 mil empleados, entre ejecutivos y personal administrativo de la estatal petrolera, realizan un paro por 4 hs.
- Cerca de 20 mil mujeres marchan en Caracas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer exigiendo la renuncia de Chávez junto a AD, COPEI, el Movimiento al Socialismo (MAS), Primero Justicia y La Causa R.
- Miércoles 13** • Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) marchan dentro de la casa de estudios en conmemoración de la toma del rectorado iniciada el 28 de marzo de 2001, exigiendo el inicio de diálogos encaminados a la reforma de la institución y la reincorporación de 18 compañeros expulsados.
- Jueves 14** • Medio millar de trabajadores de institutos autónomos adscritos al MSDS se manifiestan frente a la Fiscalía General de la República exigiendo la realización de una averiguación administrativa contra la titular del despacho.
- Lunes 18** • La FMV convoca a un paro indefinido que es acatado –según los organizadores– por 23 mil galenos de los hospitales dependientes del MSDS y del IVSS.
- Martes 19** • Finaliza sin acuerdos una reunión entre representantes de la FMV, el IVSS y el MSDS. El gremio rechaza la oferta de aumento salarial del 8% y exige uno de 45%.
- Estudiantes de tres instituciones de Trujillo marchan en la ciudad en solidaridad con los alumnos del Instituto Universitario Tecnológico Rómulo Betancourt, quienes exigen en huelga de hambre la destitución de sus autoridades. La Guardia Nacional reprime los saqueos realizados por participantes del evento y detiene a 22 personas.
- Miércoles 20** • Trabajadores afiliados al Sindicato Unico de Trabajadores Tribunalicios (SOUNTRAT) se manifiestan frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigiendo la anulación de un plan de reestructuración del poder judicial que, según denuncian, implica más de 5 mil despidos.
- Estudiantes de 25 institutos universitarios regionales se manifiestan frente al Palacio de Miraflores reclamando un aumento presupuestario.
- Jueves 21** • La Asamblea de Trabajadores de PDVSA afirma que un 80% de los empleados administrativos y de la nómina mayor de la empresa acató el paro convocado. Inspectores del Ministerio de Trabajo levantan actas por ausentismo en varias dependencias de la empresa.

- Viernes 22** • El presidente de PDVSA jubila a un consultor jurídico y al gerente de Asuntos Públicos de la empresa.

ABRIL

- Lunes 1** • Cerca de 2 mil transportistas de diez líneas del municipio de Sucre realizan un paro de más de 12 hs. exigiendo medidas de seguridad y protestando por la incapacidad de los organismos de seguridad del Estado.
- Cerca de 37 familias toman un terreno ubicado en el municipio caraqueño de Caricuao.
- Martes 2** • Más de 300 profesionales de la enfermería marchan hacia la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor exigiendo el pago de un bono de 1,2 millones de bolívares y un aumento salarial de 30%. Los trabajadores acuerdan con las autoridades del despacho la cancelación de las demandas en un plazo de 15 días.
- Cuatro mil docentes de la Asociación de Profesores de la Universidad de Zulia inician un paro indefinido en demanda del pago del salario de marzo, de 22 días en concepto de antigüedad y de recursos presupuestarios de 2002.
- Jueves 4** • Empleados de PDVSA realizan paros administrativos temporales en las plantas de Puerto la Cruz, El Palito, Barcelona y Anaco y medidas de fuerza menores en la planta de Jose, los complejos de Oriente y Ulé y las sedes de PDVSA Gas de La Campiña, Chuao, Chaguaramos, Deltaven y del Centro Internacional de Educación y Desarrollo. FEDECAMARAS y la CTV apoyan el inicio de la manifestación.
- Viernes 5** • Continúa la huelga de PDVSA que abarca a cerca del 60% de los 40 mil trabajadores de la nómina contractual. Paralizaciones parciales o totales son iniciadas en las sedes de Tablazo, Bajo Grande, Anaco y Paraguaná. Sindicatos del Zulia, Carabobo, Falcón, Monagas, Barinas, Apure, Morón y Anzoátegui realizan huelgas contra el despido reciente de 1.600 obreros. La junta directiva de la empresa suspende a dos directores generales y a otros dos ejecutivos de planta.
- Sábado 6** • A las paralizaciones realizadas en 16 sedes de PDVSA se suman las de otras dos. La directiva de la petrolera decide despedir a siete integrantes de la nómina mayor, pasar a jubilación a doce y remover a otros cinco.
- Domingo 7** • El presidente de la república anuncia un incremento de 20% en el salario mínimo de los trabajadores a partir del 1° de mayo.
- Martes 9** • La CTV inicia un paro nacional por 48 hs. y advierte al gobierno que si no rectifica su posición ante la medida llamará a realizar una huelga indefinida. El presidente de FEDECAMARAS asegura que la paralización de la actividad económica del país tiene un éxito del 80%. La Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FEDEPETROL) informa que en el Zulia el paro se cumple en un 60%, en Monagas 70%, en Falcón más de 80% y en El Palito 100%. Habitantes de 23 urbanizaciones caraqueñas realizan cacerolazos en apoyo al paro y exigiendo la renuncia presidencial, al igual que cerca de mil personas que se manifiestan frente a la casa del vicepresidente. Cacerolazos y movilizaciones opositoras al gobierno se producen en ciudades de los estados Falcón, Táchira, Lara, Guarenas, Guatire y Zulia.

Miércoles 10

• En el marco del paro general, el complejo Amuay Cardón inicia paralizaciones. Trabajadores petroleros se manifiestan en los estados de Carabobo, Táchira, Anzoátegui, Apure, Monagas, Falcón, Barinas y Zulia. La CTV y FEDECAMARAS acuerdan en la Junta Coordinadora por la Libertad y la Democracia continuar indefinidamente con la paralización de actividades. Partidarios del gobierno se manifiestan frente a Miraflores. El Alto Mando Militar ordena el acuartelamiento de las unidades castrenses del país.

Jueves 11

• Ante alrededor de 300 mil personas concentradas en la sede de PDVSA en Chuao, ubicada en Caracas, el presidente de FEDECAMARAS –Pedro Carmona Estanca– y el de la CTV –Carlos Ortega– exigen la renuncia del presidente de la república y de todo el gabinete ministerial y convocan a los manifestantes a marchar hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, donde se reúnen partidarios del gobierno. A la llegada de la movilización a Miraflores se producen enfrentamientos –en los que se detecta la participación de francotiradores– que terminan con un saldo de aproximadamente 15 muertos y más de 300 heridos. Tras estos hechos, ampliamente difundidos por las televisoras privadas, un grupo de generales de las cuatro fuerzas encabezados por el Vice Almirante Héctor Ramírez Pérez desconoce mediante un comunicado la autoridad del gobierno de Hugo Chávez y del Alto Mando Militar. El jefe de Estado Mayor Conjunto anuncia que el inspector general de la Fuerza Armada Nacional (FAN) pidió la renuncia al presidente. Generales de la Guardia Nacional toman su comandancia general y se suman al pedido de renuncia. El Comandante en jefe del Ejército se suma a las demandas de los conjurados.

Viernes 12

• Por la madrugada el presidente Chavez es arrestado y trasladado al Fuerte Tiuna. Las televisoras privadas informan, por el contrario, que el presidente Chávez ha renunciado. Cuerpos policiales llevan adelante distintos allanamientos y detenciones de partidarios chavistas. Por la tarde tiene lugar el acto de juramentación de Pedro Carmona Estanga como nuevo presidente. Dicha jura es precedida por la lectura de lo que se denomina primer decreto del nuevo régimen que –avalado por el sector empresarial, partidos políticos opositores, medios de comunicación, la iglesia y los gobiernos regionales– suspende a los diputados de la Asamblea Nacional, anuncia elecciones legislativas antes de diciembre de 2002, destituye a todos los magistrados del TSJ, deroga los 49 decretos-leyes dictados recientemente de acuerdo con la Ley Habilitante, además de dar marcha atrás con los despidos de la cúpula mayor de PDVSA. La CTV levanta el paro general. La Asociación de Gobernadores de Venezuela ofrece su respaldo al nuevo presidente.

Sábado 13

• Desde la mañana, las movilizaciones y protestas en rechazo al golpe de estado y por la restitución del presidente Chávez comienzan a hacerse más importantes. En horas del mediodía convergen en el palacio de Miraflores sendas manifestaciones procedentes de diversos sitios de la ciudad e inician un cacerolazo contra el gobierno de Carmona. Diferentes unidades militares, entre ellas la brigada de paracaidistas, desconocen al gobierno de facto. Luego, militares leales al presidente Hugo Chávez dan un contragolpe, retoman el palacio de Miraflores para forzar la salida del presidente del gobierno provisional y arrestan a cerca de 40 de sus ministros y colaboradores.

Domingo 14

• Chávez llega al palacio de Miraflores a bordo de un helicóptero del batallón de paracaidistas, retoma el ejercicio de la presidencia y se dirige a la población a través de la televisión convocando al diálogo y a la pacificación del país. El ex presidente Carmona Estanga es detenido en Fuerte Tiuna. Los gobernadores de Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Lara, Barinas, Guárico, Portuguesa, Nueva Esparta y Bolívar ratifican su apoyo al presidente tras haber retomado sus cargos. El presidente Chávez acepta la renuncia colectiva de la junta directiva de PDVSA mientras que representantes de los empleados de la empresa aceptan la invitación al diálogo propuesta por el presidente y garantizan el normal funcionamiento de la petrolera.

Lunes 15

• El presidente Chávez ordena la apertura de una investigación militar contra Carmona Estanga y cinco oficiales generales además de designar al nuevo comandante del Ejército. FEDECAMARAS acepta dialogar con el presidente Chávez si éste presenta una agenda con los temas definidos para la discusión. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas reporta un saldo total del 121 muertes desde el jueves en manifestaciones y saqueos en Caracas y el interior del país.

Miércoles 17

• Chávez designa a los nuevos comandantes de la armada y la fuerza aérea. La Corte Marcial dicta cuatro órdenes de arresto domiciliario para altos oficiales que se sublevaron contra Chávez. La Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) afirma su interés en participar en las mesas de diálogo con el gobierno.

Jueves 18

• Se instala con carácter provisional el Consejo Federal de Gobierno, al que asisten 17 gobernadores y 23 alcaldes. La directiva de la FMV aprueba dar una tregua de 15 días. El viceministro de Finanzas asume la titularidad del despacho. El presidente estadounidense George Bush niega cualquier papel de los Estados Unidos en el breve derrocamiento de Chávez.

Viernes 19

• Chávez expresa que no es necesario un referéndum que lo vuelva a legitimar. Un informe de los bomberos reporta 349 comercios saqueados y 78 quemados durante el fin de semana pasado.

Lunes 22

• La ministra de Producción y Comercio se reúne con el directorio de FEDECAMARAS, con el cual acuerda la revisión de algunas de las leyes de la Habilitante. El presidente Chávez designa a la nueva junta directiva de PDVSA.

Martes 23

• Chávez designa al nuevo comandante de la Aviación, además de reunirse con la cúpula eclesiástica. La CTV expresa que está dispuesta a conformar una mesa bipartita con el gobierno y demanda la disolución de los círculos bolivarianos. Los representantes del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA) y la Federación de Agricultores de Venezuela (FEDEAGRO) apoyan la iniciativa del parlamento de reformar algunas de las 49 leyes sancionadas por el ejecutivo en el marco de la Habilitante.

Domingo 28

• José Vicente Rangel deja el ministerio de Defensa para ser nombrado vicepresidente.

• El Consejo de Ministros aprueba el incremento del salario mínimo en 20% que regirá para los sectores público y privado a partir del próximo 1° de mayo y decide aceptar la propuesta de la Federación de Micro, Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (FEDEINDUSTRIA) de escalar el aumento para la pequeña y mediana empresa.

Martes 30

• Un total de 39 representantes de distintos sectores del país –iglesia, universidades, periodistas, sector privado, gremios, profesionales, gobernaciones y alcaldías, entre otros– conforman la Comisión Presidencial del Diálogo, juramentada por Chávez. FEDECAMARAS se ausenta de la jornada inaugural de la mesa de diálogo nacional presidida por Chávez afirmando que no aceptará la invitación del ejecutivo hasta que la CTV sea convocada a la cita.

• La Asamblea Nacional aprueba la reforma a la Ley del IVA con los votos del oficialismo. La nueva ley incorpora las exenciones al suministro de electricidad para el sector agropecuario al mismo tiempo que establece una sobretaza de 10% para venta de artículos considerados de consumo suntuario.

■ Glosario de siglas

AD	Acción Democrática
CNU	Consejo Nacional de Universidades
CONINDUSTRIA	Confederación Venezolana de Industriales
CONSECOMERCIO	Consejo Nacional del Comercio y los Servicios
COPEI	Comité de Organización Política Electoral Independiente
CTV	Confederación de Trabajadores de Venezuela
FAN	Fuerza Armada Nacional
FEDEAGRO	Federación de Agricultores de Venezuela
FEDECAMARAS	Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
FEDEINDUSTRIA	Federación de Micro, Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela
FEDENAGA	Federación Nacional de Ganaderos
FEDEPETROL	Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela
FEDEUNEP	Federación Unica de Empleados Públicos
FEGALAGO	Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo
FMV	Federación Médica Venezolana
IVA	Impuesto al Valor Agregado
IVSS	Instituto Venezolano del Seguro Social
MAS	Movimiento al Socialismo
MSDS	Ministerio de Salud y Desarrollo Social
MVR	Movimiento V República
PDVSA	Petróleos de Venezuela SA
SOUNTRAT	Sindicato Único de Trabajadores Tribunalicios
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia
UCV	Universidad Central de Venezuela



La invención de Mesoamérica

Por Armando Bartra*

Entre mueras al Plan Puebla-Panamá (PPP) y los consabidos ¡Zaaapata vive!... ¡la luuucha sigue!, se coló un tímido ¡Viva Mesoamérica!, y luego, más fuerte, ¡Vivan los campesinos de Mesoamérica!... ¡Que vivan!

Así, bajo el sol canicular de Tapachula, Chiapas, los 2 mil calcinados participantes en la marcha que culminó el Encuentro Campesino Mesoamericano, inauguraban una nueva y promisoría identidad. Ya antes los vivas a Augusto César Sandino y a Farabundo Martí, impulsados por nicaragüenses y salvadoreños, habían ampliado el santoral cívico de la mayoría mexicana. Sin embargo, el nuevo concepto geopolítico no entraba fácilmente: ¡Viva México!, bien, ¡Viva Guatemala!, claro, ¡Viva Honduras!, también... pero, ¿Viva Mesoamérica?

Durante tres días, del 3 al 5 de mayo, doscientos setenta delegados de casi sesenta organizaciones de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice y México, que representan a cientos de miles de trabajadores rurales y de pequeños y medianos productores agropecuarios, debatieron el presente y futuro de los campesinos de la región. Como siempre criticaron las políticas agrícolas excluyentes, los tratados comerciales inicuos y por sobre todo al PPP, síntesis y emblema de la nueva colonización.

Pero como bien dijo un joven zapoteco representante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo: “Ya es hora de pasar de la protesta a la propuesta”, y efectivamente, el centro de la reunión fueron las opciones. Alternativas desde abajo para resistir la guerra anticampesina desatada en todo el mundo por el gran dinero. Y en esta reflexión colectiva se fue mostrando la comunidad Mesoamericana: una identidad multinacional hecha de geografía, de historia, de cultura, de economía, pero también de carencias, sufrimientos y experiencias compartidos.

■ No sólo los *polleros*¹ prosperan en Tapachula

Mesoamérica, como espacio viable de una convergencia construida desde los pueblos, fue de arranque la apuesta de los promotores del encuentro. La representación de los países istmeños quedó a la postre en manos de la Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo, fundadora de la red mundial La Vía Campesina, miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo (CLOC), y que en la región enlaza a la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá, a la Mesa Nacional Campesina de Costa Rica, a la Unión Nacional de Productores Asociados y la Asociación de Trabajadores del Campo, de Nicaragua, al Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, a la Alianza Democrática Campesina, de El Salvador, a la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, de Guatemala, y a la Beli-

* Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, A. C., miembro del Comité Editorial de la revista *Chiapas*.



ce Association of Producers Organization. Por el lado mexicano los anfitriones fueron la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, también integrantes de la CLOC, y particularmente las organizaciones regionales de Chiapas, que agrupadas en coordinadoras plurales asumieron la logística con eficacia y entusiasmo. Pero además de los convocantes estaban ahí representantes de redes sectoriales, como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, que agrupa a decenas de miles de huerteros de toda la República, y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, que enlaza a productores de maíz, sorgo, soya y otros granos básicos, de diversos estados. Había, también, delegados de agrupamientos locales destacados por su lucha, como la organización Emiliano Zapata Vive, de Tepeaca, Puebla, que resiste las amenazas expropiadoras del Proyecto Milenium. Fuerte y visible era la presencia indígena, tanto de Chiapas y Oaxaca, como de Guatemala, y aunque menos numerosa resultó brillante la participación de campesinas, como las tzotziles de la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red.

Ahí estaban todos. Es un decir, claro; sin duda muchos no pudieron ir. Pero cualitativamente se encontraban representados los principales sectores del campesinado mexicano y una muestra muy significativa de la franja autónoma y democrática de sus organizaciones, desde las centrales nacionales hasta los agrupamientos locales, pasando por las redes sectoriales.

En cuanto a Centroamérica, a la postre la delegación resultó numéricamente modesta, pero portavoz de una vertiente muy relevante de las organizaciones rurales de la región. Y aunque lo repudian unánimemente, no llegaron a Tapachula convocados por el fantoche del PPP, sino porque a los campesinos el fuego les está llegando a los aparejos y sólo sumando fuerzas podrán impulsar un desarrollo mesoamericano alternativo, o cuando menos un programa de salvación regional que contrarreste la ruina rural, las hambrunas y el éxodo.

■ Una protesta con propuesta

A diferencia de los gobernantes y funcionarios de organismos multilaterales, cuando se juntan los trabajadores hablan de puras cosas importantes. En Tapachula se discutió, por ejemplo, la creciente pérdida de soberanía alimentaria de nuestros países, que deriva en hambrunas recurrentes y la irremisible merma de soberanía laboral, la cual se expresa en migraciones incontrolables. Fenómenos perversos cuyas raíces están en la guerra comercial emprendida por Estados Unidos y la Unión Europea, que al proteger y subsidiar sus agriculturas mientras a nosotros nos imponen apertura comercial, arrasan cultivos alimentarios, arruinan campesinos, y ponen de rodillas a las naciones incapaces de emplear a su población y de producir su propia comida.

Se habló, también, de los ínfimos precios de las materias primas de origen agropecuario y de los alimentos de exportación, debidos a la sobreproducción inducida, a la especulación –cuando cotizan en bolsa– y sobre todo a una intermediación monopólica y rapaz, por la que al cafecultor, por ejemplo, le llegan menos de siete centavos de cada peso que los consumidores gastan en café.

De una reforma agraria que no ha llegado a países como Guatemala y se revierte en los que sí la hubo, como México o Nicaragua, se dijo que hay que extenderla del reparto de parcelas al manejo y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad por las comunidades campesinas e indígenas, y al reconocimiento de los territorios de los pueblos originarios.

Y englobándolo todo, se insistió en la necesidad de luchar por las libertades políticas: por auténtica democracia participativa, por los derechos autonómicos de los pueblos indios y por las reivindicaciones de género de la mujer campesina, incluyendo sus derechos agrarios.

Hacia un Plan de Ayala para el tercer milenio

Intenso intercambio de experiencias, y más coincidencias que discrepancias, vencieron la lógica desconfianza inicial y forjaron un acuerdo básico: hacer de la reunión de Tapachula el arranque de una convergencia permanente de los trabajadores rurales de la región, cuyo siguiente paso será la realización del Segundo Encuentro Campesino Mesoamericano, el 14 y 15 de julio de 2002 en Managua, Nicaragua, aprovechando que del 16 al 18 se realizará el tercer Foro Mesoamericano Frente al Plan Puebla-Panamá Globalicemos la Solidaridad. Y no se trata de reunirse por reunirse, sino de trabajar una plataforma común para las organizaciones campesinas de la región. Por lo pronto, en los debates de Tapachula ya surgieron consensos fundamentales:

- la tierra, el agua, los bosques, la biodiversidad toda, así como los saberes agrícolas, la medicina tradicional y la cultura indígena, no son mercancías sino bienes colectivos patrimonio de la humanidad. Por tanto, hay que sacar la agricultura de la Organización Mundial de Comercio, impedir que entre al ALCA –si no podemos evitar que éste se firme– y, para el caso de México, revisar los capítulos agrícolas del TLCAN.
- la privatización y saqueo de los recursos naturales, la biodiversidad y la pluralidad cultural, así como la imposición de modelos tecnológicos excluyentes y agresivos con el medio ambiente, conducen a una catástrofe social y ecológica de proporciones planetarias. Frente a la lógica depredadora del capital reivindicamos una agricultura campesina sustentable, es decir, económicamente viable, socialmente justa y ambientalmente sana.
- los países pobres debemos recuperar soberanía alimentaria, produciendo en lo fundamental nuestra propia comida. De otra manera nunca tendremos verdadera seguridad alimentaria, seguiremos padeciendo hambrunas periódicas y perderemos soberanía en general, pues los alimentos son armas en manos del imperio.
- sin una fuerte agricultura campesina productora de alimentos y materias primas y generadora de empleo e ingreso dignos, nuestros países seguirán expulsando masivamente a su población, dependiendo cada vez más de la diáspora y sus “remesas” y perdiendo en definitiva su soberanía laboral.
- hacen falta, entonces, políticas públicas comprometidas con la agricultura y en particular de fomento a la pequeña y mediana producción campesina, con vistas a integrar cultivo, transformación y consumo, con énfasis en los mercados locales y nacionales, y no sólo, como ahora, en la exportación.
- Mesoamérica –esto es México, Centroamérica y El Caribe– requiere de una gran convergencia desde los pueblos, que impulse su integración económica, social, política y cultural. Una articulación democrática y desde abajo que ponga por delante los intereses de los trabajadores y frene programas neocoloniales como el PPP.

¿El Big Brother?

Esto último es un gran desafío para nosotros. Entre el río Bravo, donde según los *gabachos*² empieza Sudamérica, y el Suchiate, donde según los *chapines*³ empieza Centroamérica, México es tierra incógnita. Para los anglófilos gobernantes de los sexenios recientes no hay duda: estamos llamados a ser la avanzada del imperio. “La ubicación geoestratégica que nuestro país ocupa... nos permitirá desarrollar acciones importantes como país puente”, escribió Jorge Castañeda (El nuevo rumbo de la diplomacia, Enfoque, 23 de septiembre de 2001). Y es que el secretario de Relaciones Exteriores cree firmemente (*strongly believes*) que lo mejor para México es pegarse a la *chichi*⁴ del yanqui. Pero como “no se puede mamar y dar de topes” (Castañeda en entrevista, 17 de septiembre de 2001), nuestro ilustre canciller no duda en asumir el papel de Tonto⁵ y, como el indio del Llanero Solitario, se apunta como solícito



chalán o incondicional de Bush el pequeño. Pero si algunos aspiran a cancerberos del yanqui, al resto no nos gusta el papel de *Big Brother* prepotente y preferimos jugárnosla con Mesoamérica. Cuando menos ésta es la opción de los campesinos mexicanos presentes en el encuentro de Tapachula. Labradores que provenían del sur y centro de la República, pero también del norte, como los delegados del Frente Popular de Zacatecas. Y es que México es uno, y si le apostamos al Sur tendremos que admitir que todos, todos, somos mesoamericanos.

■ ¡PPPrrrt! (un programa desinflado)

Este promisorio encuentro fue inducido, cuando menos en parte, por un ominoso proyecto foxista que concitó la repulsa general. Pero mientras los PPPfóbicos se multiplican, el programa entró en hibernación. Puesto en *stand by* por la recesión económica mundial y el cambio de prioridades derivado de la primera guerra del milenio, el PPP está congelado. Es verdad que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) negoció una línea de crédito de 4 mil millones de dólares, pero en condiciones de no-crecimiento económico es dudoso que los gobiernos los utilicen plenamente. Y en cuanto a los recursos fiscales propios, la caída de ingresos tributarios dificulta cubrir el gasto corriente y los previos compromisos de inversión, cuanto más las grandes erogaciones que demanda Mesoamérica. Así lo reconoció el 9 de marzo en Fortaleza, Brasil, el coordinador de la Unidad de Apoyo del BID: “Las acciones del PPP serán limitadas, porque la inversión con que se financia proviene de recursos fiscales que son pocos o de préstamos, que no son fáciles de conseguir”. De hecho lo más importante son los 5.350 millones de pesos de recursos propios que México destinará al corredor carretero del Golfo, pues de los 4 mil millones de dólares disponibles, nuestro gobierno solicitó a crédito la inaudita cantidad de... 20 millones. En cuanto a la pretendida interconexión energética centroamericana, puede resultar un nuevo descalabro político del presidente Fox, pues se pretende “impulsar la promulgación de una ley regional de concesiones que permita a los inversionistas financiar proyectos de infraestructura, sin obstáculos legales”, lo que presumiblemente violaría una vez más nuestra Constitución.

Finalmente, en lo tocante a la inversión privada, que presuntamente debía inundar el sureste atraída por su ubicación, recursos y mano de obra barata, así como por la infraestructura, desregulación y exenciones fiscales, más que llegar con alborozo se retira atropelladamente. Y es que al retroceso de la producción mundial se agregó más recientemente el del consumo, y la industria maquiladora, centrada en confección, electrónica y autopartes, está despidiendo personal o cerrando plantas.

Paradójicamente, cuando los críticos más acérrimos denostábamos al PPP porque nos iba a traer una invasión de maquiladoras, megadesarrollos turísticos y plantaciones agroexportadoras, amén de creciente exclusión social y mayor migración, resultó que el más angustioso problema mesoamericano del momento es que las maquiladoras están cerrando, que el empleo en turismo disminuye, que las fincas cafetaleras, bananeras y otras contratan menos cosechadores. Y en el extremo: si hasta hace unos meses era preocupante que los jóvenes emprendedores desertaran de sus comunidades para buscar fortuna en el *gabacho*⁶, hoy lo alarmante es que se reducen las remesas de dólares y algunos migrados están regresando.

Resulta que cuando alertábamos contra una nueva oleada de colonización salvaje, que presuntamente ocuparía los espacios aún vacantes del sureste, estamos enfrentando lo contrario: el reflujo de capitales y la recesión. Y sucede que aún peor que tener un empleo negro en la maquiladora es perderlo; peor que deslomarse piscando café para los finqueros de Soconusco es que este año no hayan contratado a 60 mil cosechadores guatemaltecos sino a 30 mil, y que el resto se haya quedado pasando hambres en su tierra; peor que la familia desgarrada porque el padre se fue de *mojado*⁷ es la familia en crisis porque el padre regresó con el rabo entre las piernas.

Naturalmente, esto no quiere decir que de ahora en adelante vamos a clamar por más maquiladoras, más plantaciones negreras, más migración... pero tampoco por menos. No queremos que llegue lo que nos anuncia el PPP, pero tampoco podemos conformarnos con que no llegue, o conque se vaya lo que ya llegó. Lo que en verdad hace falta es abrirle paso a otra cosa; un cambio de vía, un desarrollo alternativo.

Al sureste mexicano y a Centroamérica les urge una reactivación agrícola, que no sea la del monocultivo privado y de plantación sino de talante campesino; una agricultura sustentable, justiciera y empleadora que aproveche ventajas comparativas para exportar pero también abastezca de básicos al mercado interno. A Mesoamérica le hace mucha falta la industrialización, pero no en plantas ensambladoras contaminantes, negreras y golondrinas, sino integrada en cadenas productivas. A la cintura del continente ya le anda por aprovechar sus recursos naturales y privilegios biológicos, pero no depredándolos y privatizándolos, sino en abono de sus comunidades y garantizando su preservación.

■ Hay ausencias que triunfan...

Y en el diseño de los aspectos agrarios de esta vía alterna, la reunión de Tapachula avanzó significativamente. En el encuentro los campesinos emprendieron la reinvencción de Mesoamérica. De una Mesoamérica profunda: indígena, afrocaribeña y mestiza, donde como nunca antes priven convivencia y solidaridad. Y lo hicieron por sí mismos. A diferencia de los foros mesoamericanos de alternativa al PPP, el Foro Social Mundial de Porto Alegre o la reunión de Monterrey para la financiación del desarrollo, en este encuentro los mayores protagonistas no fueron las ONG sino las OSB, las organizaciones sociales de base.

Si hay ausencias que triunfan, en Tapachula la nuestra triunfó. El Encuentro Mesoamericano fue una reunión convocada, operada y animada casi exclusivamente por organizaciones campesinas, en la que los rústicos definieron la agenda, sostuvieron los debates y tejieron los acuerdos. En tiempos de "sociedad civil" y cuando los grupos profesionales y sus expertos pretenden hablar en nombre de todos, es alentador un foro en el que las organizaciones de base sean la sartén y tengan el mango.

Resumiendo: entre tanto norteado, los campesinos miran al Sur.

■ Notas

- 1 N. de la E.: mafia que se encarga de trasladar a los trabajadores indocumentados hasta el sur de Estados Unidos.
- 2 N. de la E.: estadounidenses en lenguaje coloquial mexicano.
- 3 N. de la E.: guatemaltecos.
- 4 N. de la E.: teta.
- 5 N. de la E.: Tonto es el nombre del ayudante del Llanero Solitario.
- 6 N. de la E.: en Estados Unidos.
- 7 N. de la E.: de trabajador indocumentado en Estados Unidos. Se les llama mojados porque tradicionalmente atravesaban a nado el Río Bravo.



Costa Rica

REGION
NORTE



ENERO

Viernes 25 • Maestros realizan una marcha desde el parque La Merced hasta el Ministerio de Educación Pública (MEP), en San José, para exigir al Gobierno mejoras en la educación y el pago adeudado de sus pensiones.

Lunes 28 • Empleados de la Municipalidad de San José (MSJ) inician un paro por tiempo indeterminado en contra de la decisión de la Contraloría General de la República de rechazar los acuerdos aprobados entre los trabajadores y la patronal en materia de ajuste salarial y del pago del bono escolar. Por la mañana, cerca de 1.600 trabajadores realizan una marcha hacia esa dependencia donde descargan medio camión de basura en defensa de la independencia de los gobiernos locales.

FEBRERO

Domingo 3 • Se realizan las elecciones presidenciales. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) obtiene el 38,58% de los votos, el Partido Liberación Nacional (PLN) el 31,05% y el Partido Acción Ciudadana (PAC) el 26,19%. Como ninguna de las nóminas supera el 40% de los votos, se ordena una segunda votación.

Jueves 14 • Comienza a regir el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Chile suscripto en octubre de 1999.

Lunes 25 • Trabajadores de la Imprenta Nacional realizan un paro de labores en protesta por el atraso en el pago de un incentivo del 25% mensual por su trabajo de cuatro meses en la impresión de los papeles electorales.

MARZO

Sábado 16 • Los recolectores de basura de Limón inician un paro por tiempo indeterminado en reclamo del pago de dos reajustes salariales pendientes.

Miércoles 20 • Miembros de la junta de educación, padres de familia y docentes de la escuela Gabriela Mistral, ubicada en la Guácima de Alajuela, impiden el ingreso al centro educativo y bloquean vías para exigir la renuncia del director del mismo por manejos inadecuados de los recursos.

• Unos 200 productores arroceros de diferentes zonas del país marchan por las calles de San José, recorriendo desde Naranjo hasta las puertas de la Asamblea Legislativa, para presionar a las autoridades para que la Ley de la Corporación Arrocera llegue en primer lugar al plenario Legislativo y sea aprobada antes de que culmine la presente administración. Esta ley convertirá a la Oficina del Arroz en Corporación Independiente Arrocera, con potestad para fijar precios y promover la participación de los productores a través de las juntas regionales.

Jueves 21 • Los recolectores de basura de Limón levantan el paro al conocer la aprobación por parte de la Contraloría General de la República del presupuesto para cubrir el ajuste en los sueldos.

ABRIL

- Domingo 7** • Se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Abel Pacheco de la Es-priella, candidato del PUSC, gana la presidencia de la República con el 58,1% de los votos, contra el 41,9% del PLC.
- Lunes 15** • Los productores arroceros de la Zona Sur, Guanacaste, Pacífico Central y San Carlos se concentran en los alrededores del Congreso, en San José, para exigir la aprobación de la Ley de la Corporación Arrocerera. Los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del Magisterio Nacional también protestan en ese lugar apoyando a los arroceros y en rechazo a un proyecto de ley que pone en manos de los municipios la fiscalización de los servicios de salud y de educación.
- Jueves 18** • Estudiantes de 50 colegios del área metropolitana (San José) toman las calles que comunican la Plaza de la Cultura con la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa en contra del proyecto de ley de transferencia de competencias y fortalecimiento de los gobiernos locales, que busca la privatización de los centros de enseñanza.
- Cerca de 200 productores de arroz se concentran en los alrededores del puerto Caldera, junto a las instalaciones del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), para impedir que el barco Tupungato que trajo desde Nueva Orleans (EE.UU.) 27.500 toneladas métricas de arroz en granza descargue las mismas. Los productores se oponen a la importación de este grano debido a que se pone en peligro la estructura productiva del mismo, que es uno de los cultivos que ha garantizado la seguridad alimentaria de este país.
- Viernes 19** • La policía reprime violentamente a los productores arroceros que se encuentran en las inmediaciones del puerto Caldera impidiendo la descarga de arroz. Hay 15 personas detenidas y 20 manifestantes heridos por los gases lacrimógenos lanzados por los grupos antimotines.
- Lunes 22** • Los arroceros y el Gobierno acuerdan durante la noche la descarga de las toneladas de arroz del barco Tupungato a cambio de que el Consejo Nacional de la Producción (CNP) adquiera el exceso de oferta en el mercado local.
- Sábado 27** • Vecinos de Escobal de Jesús de Atenas bloquean el paso del presidente Miguel Ángel Rodríguez y de su comitiva, quienes recorren la futura carretera de Ciudad Colón a Orotina, en demanda de un contrato de mantenimiento para su camino, intransitable en invierno. La medida es levantada luego de que el ministro de Transporte accede a recibir al día siguiente a un grupo de manifestantes para analizar la contratación de una brigada de mantenimiento.
- Lunes 29** • Los empleados del Hospital San Vicente de Paúl comienzan un paro por 24 hs. y realizan manifestaciones en protesta por la decisión de la Junta Directiva de la CCSS de privatizar dicho centro médico traspasando su administración a manos de dos universidades estatales.

■ Glosario de siglas

CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
CNP	Consejo Nacional de la Producción
INCOP	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
MEP	Ministerio de Educación Pública
MSJ	Municipalidad de San José
PAC	Partido Acción Ciudadana
PLN	Partido Liberación Nacional
PUSC	Partido Unidad Social Cristiana
TLC	Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch y Florencia Ayala.

Fuentes: diarios Prensa Libre, Nación, El Heraldo y Radio Periódico.

El Salvador

REGION
NORTE



ENERO

Lunes 7 • Reclusos del Centro Penal de Ciudad Barrios, al ra exigir a las autoridades penitenciarias trabajo y traslados a otros centros penales del país.

Martes 8 • Trabajadores del Hospital Dr. Luis Edmundo Vásquez, en Chalatenango, agremiados a la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS), inician una huelga por tiempo indeterminado en rechazo a la inminente privatización de la salud. Reclaman también que la indemnización de quienes se han acogido al retiro voluntario se realice en un solo pago y la reincorporación de la cúpula sindical, entre otras cuestiones.

Miércoles 9 • En San Salvador, una docena de representantes de la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) realiza una protesta frente a las instalaciones del Ministerio en rechazo al despido de 300 trabajadores de la institución.

Jueves 10 • Trabajadores del Hospital San Pedro pertenecientes a la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud y al Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI) inician una huelga en rechazo a los despidos realizados en dicha institución y a la intención del gobierno de privatizar los servicios de salud.

Lunes 14 • Cientos de personas afectadas por los terremotos de enero y febrero del año pasado, convocados por el Foro de la Sociedad Civil para la Reconstrucción y el Desarrollo, marchan por las principales calles de San Salvador para exigir viviendas dignas y seguras, así como la aprobación de una Ley de Prevención y Mitigación de Desastres y Protección Civil. Además, se pronuncian en contra de los despidos, el alza de los servicios básicos, las privatizaciones, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Plan Puebla Panamá, entre otras cuestiones.

Miércoles 16 • Trabajadores, sindicalistas y estudiantes universitarios realizan una marcha en San Salvador hacia el Ministerio de Salud, donde confluyen con otras marchas en protesta contra los miles de despidos, la política neoliberal aplicada por el gobierno y para exigir al mismo que abra las mesas de negociación. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos llama a guardar la calma en pos de una negociación posterior.

• Los miembros de ANTMSPAS levantan el paro que venían realizando luego de nueve días de protesta argumentando la búsqueda de una solución jurídica al conflicto.

Domingo 20 • Más de 450 personas, apoyadas por la Asociación Intercomunal de la Comunidad 22 de Abril, bloquean dos carriles del Boulevard del Ejército en señal de protesta por la inminente construcción de un anillo periférico sobre las viviendas en dicha Comunidad, en el municipio de Sopayango.

Lunes 28 • Cientos de mujeres pertenecientes al Comité Nacional Femenino de Transporte Colectivo realizan una marcha desde El Salvador del Mundo hasta la Secretaría Nacional de la

Familia, para exigir al gobierno que termine con las políticas de ajuste y se sienta a negociar con los transportistas del sector público, afectados por la suspensión del subsidio y el anuncio de sacar de circulación las unidades con más de 15 años de antigüedad.

- Jueves 31** • Más de cien vendedores ambulantes y estacionarios del centro capitalino realizan una marcha en contra del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la comuna capitalina por los recientes desalojos producidos en las plazas Libertad, Morazán y la 3ª Avenida Norte. Se producen enfrentamientos entre los vendedores y los agentes metropolitanos.

FEBRERO

- Lunes 4** • Los vendedores del mercado La Tiendona, ubicado en San Salvador, cierran las puertas del mismo en rechazo al aumento de las tarifas municipales vigentes a partir del 1 de febrero. Además, cerca de cien vendedores participan de la concentración organizada por la Comisión de Lucha de los Mercados de San Salvador (CLMSS). Posteriormente, reabren el mercado luego de acordar con la municipalidad una reunión para buscar una solución al conflicto.

- Jueves 7** • Comerciantes realizan una protesta en San Salvador con quema de llantas, en rechazo al desalojo de sus puestos de venta ubicados sobre la 3ª Avenida Norte y la 3ª Calle Poniente. Se producen fuertes enfrentamientos: los vendedores lanzan piedras y botellas contra los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), quienes reprimen con gases y balas de goma.

- Viernes 8** • Vencido el plazo de las tarjetas de circulación y los años de vida útil de las unidades de transporte, buseros de las principales gremiales de transporte –la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS 2) y la Asociación de Empresarios del Transporte (ATP), entre otras– realizan un paro en las zonas oriental y occidental del país para evitar el decomiso de las unidades por parte del Ministerio de Transporte.

• Los vendedores desalojados de San Salvador se reúnen con representantes de la alcaldía capitalina y se comprometen a buscar en forma conjunta opciones para reubicar a los trabajadores.

- Lunes 11** • Empresarios de unos 2.500 buses de El Salvador realizan un paro sorpresivo por tiempo indeterminado en rechazo a la Ley de Transporte que prohíbe la circulación de buses con más de 15 años de antigüedad. Además, sostienen que no aceptarán más prórrogas por parte de la Asamblea y que sólo negociarán con el presidente Francisco Flores.

- Martes 12** • Miles de motoristas, cobradores y empresarios del transporte se concentran en la plaza Las Américas, ubicada en San Salvador, en protesta por el nuevo sistema de transporte. Los manifestantes apedrean a las unidades de transportes que no se sumaron al paro. La UMO reprime con gases lacrimógenos, balas de goma y agua de presión, dejando un saldo de más de 60 detenidos.

- Viernes 15** • Los diputados aprueban una reforma a la Ley de Tránsito que establece un plazo de 24 meses para que sigan circulando buses viejos con la condición de que se les realice una revisión mecánica cada seis meses y un examen de emisión de gas cada año. El paro se levanta a partir de mañana.

Lunes 18 • Los ministros de Economía de Centroamérica, reunidos en Managua, unifican una estrategia negociadora para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que será presentada en Washington. Principalmente, la misma establece acceso total a los mercados y no restricciones bajo el sistema de cuotas, entre otras cuestiones.

Miércoles 27 • Cerca de 300 afiliados a la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) marchan por el centro de San Salvador en contra de la posible aprobación de un decreto transitorio que permite la contratación permanente de 2.885 maestros interinos. Dicho decreto viola los derechos de antigüedad de graduación y traslado plasmados en el artículo 18 de la Ley de la Carrera Docente.

Jueves 28 • Transportistas, productores y trabajadores, junto con los administrativos del Ingenio Azucarero Jiboa (INJIBOA), realizan una protesta en San Vicente para exigir el pago de sus salarios atrasados.

MARZO

Viernes 1 • Decenas de mujeres –convocadas, entre otros, por el Movimiento de Mujeres Mérida Anaya Montes– marchan por las calles de la capital salvadoreña, en el inicio de las conmemoraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Reclaman pan, vivienda, trabajo digno y contra la violencia hacia las mujeres.

Miércoles 6 • El presidente Francisco Flores y su par de Panamá, Mireya Moscoso firman un TLC bilateral. Además, los mandatarios de Centroamérica firman los textos generales del acuerdo regional Panamá.

Viernes 8 • Cerca de 400 personas, convocadas por varias organizaciones ambientalistas, realizan una marcha hasta el Ministerio de Medio Ambiente, en contra del proyecto que promueve la construcción de un anillo periférico que pasará por los municipios de Sopayango y Ciudad Delgado y la comunidad El Carmen de San Salvador, entre otras.

Domingo 24 • El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), entre otras organizaciones, realiza una marcha en San Salvador en conmemoración del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, contra la visita del presidente de Estados Unidos a El Salvador y el establecimiento de un TLC con dicho país.

ABRIL

Lunes 1 • Más de 50 personas de las comunidades de San Lucas, Barra Salada, Vista Hermosa y el Ojushtal, pertenecientes al cantón Salinas de Ayacachapa, se concentran en las instalaciones del nuevo relleno sanitario para protestar contra su inauguración, realizada por el concejo de Sonsonate, y denuncian que la obra afecta los mantos acuíferos del lugar.

Lunes 22 • Alrededor de 50 residentes de la Comunidad 22 de Abril bloquean por una hora dos importantes vías de acceso a la ciudad de San Salvador en protesta por la construcción del anillo periférico. La ministra de Medio Ambiente no acepta las críticas hasta que no se realice la evaluación del impacto ambiental.

Martes 23

• Las presiones ejercidas por las comunidades que residen en los alrededores del cantón Salinas de Ayacachapa obligan al alcalde y al Consejo Municipal a suspender el depósito de basura en el nuevo relleno sanitario. El consejo anuncia que la suspensión del uso del relleno se extenderá hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva sobre el recurso interpuesto por los pobladores.

Viernes 26

• Unos 300 docentes del grupo sindical Bases Magisteriales marchan desde el parque Barros hasta la entrada del Ministerio de Educación (MINED) para exigir un aumento salarial del 30% sobre el salario base, un incremento del 40% para los maestros que atienden doble sección y una mejor asistencia médica. Por su parte, la ministra del área anuncia que la revisión salarial se discutirá luego de conocer los lineamientos presupuestarios que indique el Ministerio de Hacienda.

■ Glosario de siglas

AEAS	Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños
AGEMHA	Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda
ALCA	Area de Libre Comercio de las Américas
ANDES	Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños
ANTMSPAS	Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ATP	Asociación de Empresarios del Transporte
CAM	Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CLMSS	Comisión de Lucha de los Mercados de San Salvador
CSJ	Corte Suprema de Justicia
FMLN	Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
INJIBOA	Ingenio Azucarero Jiboa
MINED	Ministerio de Educación
MOLI	Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas
TLC	Tratado de Libre Comercio
UMO	Unidad de Mantenimiento del Orden

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera y María Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.*

Guatemala

REGION
NORTE



ENERO

Viernes 4 • Los vecinos de San Pedro de Sacatepéquez im-
pladadores que desde un mes atrás ocupan la comuna exigiendo la renuncia del intenden-
te, acusado de corrupto.

Jueves 10 • Los médicos residentes del Hospital San Juan de Dios comienzan un paro indefinido
para exigir el pago de sus sueldos.

Lunes 14 • Cientos de partidarios del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) se congregan
frente al Congreso –donde los diputados eligen la nueva Junta Directiva, siendo Efraín
Ríos Montt reelecto como jefe del Legislativo por tercer año consecutivo– para celebrar
el segundo aniversario del gobierno. Al mismo tiempo, militantes de la Unidad Revolu-
cionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se reúnen también frente al Congreso para
protestar por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Miércoles 16 • Los vendedores de La Terminal de Buses, zona 4, capital, se manifiestan frente al Con-
greso y presentan acciones legales, respaldadas por más de 12 mil firmas, para dejar sin
efecto el acuerdo gubernativo que dio lugar a la creación de la Empresa Metropolitana
de Transporte (EMETRA).

Sábado 19 • La Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) toma la Facultad de Derecho de la
Universidad de San Carlos (USAC) para impedir que se lleven a cabo las pruebas de ad-
misión para los estudiantes de primer ingreso. Sostienen que éstas violan el derecho de
acceso a la educación superior.

Viernes 25 • Unos 100 empleados del Banco Metropolitano destituidos ayer bloquean el acceso al
edificio de la institución en la zona 1, exigiendo el pago de sus prestaciones.

Lunes 28 • Numerosos vecinos protestan frente a las oficinas centrales de la Empresa Eléctrica de
Guatemala S.A. (EEGSA), debido a las tarifas excesivas que la compañía está emitiendo.

Martes 29 • Los habitantes de la aldea Chocón, en Livingston, Izabal, son atacados por un coman-
do del Departamento de Operaciones Antinarcóticas (DOAN), que sitia el poblado, su-
puestamente en busca de drogas. Dos personas son asesinadas, una es secuestrada y
otras tres son detenidas ilegalmente.

Jueves 31 • Campesinos sin trabajo y sin tierra de comunidades de Alta y Baja Verapaz, Quiché,
Mazatenango, Retalhuleu y Quetzaltenango cierran las carreteras a San Julián, en las
Verapaces, y ruta al Pacífico, km. 211, por la situación de hambruna que azota a sus fa-
milias y para pedir tierras al gobierno.

• El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y unos 1.200 maes-
tros de Petén, integrantes de la Coordinadora de la Asamblea Nacional del Magisterio,
ocupan las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Santa Elena, Pe-
tén, hasta que la directora departamental renuncie a su cargo, por autoritaria y corrupta.

FEBRERO

Viernes 1 • Ciento cincuenta familias de varias comunidades de Suchitepéquez pertenecientes al Comité de Unidad Campesina (CUC) ocupan terrenos de la finca nacional San Basilio, jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez, mientras que 90 familias de la finca Papalhá, en La Tinta, invaden los terrenos más fértiles de la misma. Argumentan que el Gobierno no ha cumplido con los convenios de paz y no les ha otorgado las tierras que ellos necesitan para sembrar y construir sus viviendas.

• Organizaciones sindicales, populares y universitarias integrantes de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) comienzan una serie de plantones a realizarse diariamente en las afueras de la EEGSA en la zona 1 de la capital hasta que el gobierno solucione las múltiples denuncias sobre cobros excesivos que intenta aplicar la empresa.

Miércoles 6 • Unas 400 familias invaden la finca San José del Mar, en el puerto de San José, Escuintla, en demanda de terrenos para construir sus viviendas.

Viernes 8 • Convocados por la Asamblea Nacional Magisterial (ANM), unos 15 mil maestros del interior y la capital se movilizan hasta la Casa Presidencial, para exigir mayor presupuesto para Educación, más plazas para maestros, más escuelas y un reajuste salarial del 100%. Se dirigen al Congreso de la República y culminan con una concentración frente al Ministerio de Educación (MINEDUC).

Martes 12 • Los controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional La Aurora paran durante la jornada, en demanda de mejores condiciones laborales, lo cual provoca la cancelación de los vuelos nacionales e internacionales.

Viernes 15 • La titular de la Dirección Departamental de Educación en Santa Elena, Petén, es destituida de su cargo.

Martes 19 • Tres campesinos que fueron apresados durante la incursión del 29 de enero de los agentes del DOAN en la aldea Chocón, de Livingston, Izábal, son acusados por el homicidio de las dos personas que fueron asesinadas durante esos días.

• Más de 100 familias campesinas de las Verapaces ocupan terrenos de la finca del caserío Mezcal, ubicada en Purulhá, Baja Verapaz.

Lunes 25 • Diversas organizaciones de derechos humanos conmemoran el Día Nacional de la Dignidad, en homenaje a las 200 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos durante los 36 años de guerra interna, finalizada en 1996 con la firma de la paz. Marchan desde el Parque Morazán hasta la Catedral metropolitana y acusan a los gobiernos del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y del FRG de incumplir con las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Martes 26 • Centenares de campesinos del sindicato de trabajadores de la finca San Luis, en el Carmen, San Marcos, ocupan los terrenos exigiendo que el gobierno les otorgue títulos de propiedad de la tierra. Denuncian también mala paga y acoso sexual a las mujeres.

Jueves 28 • Militares de Quiché, Quetzaltenango, Petén, Totonicapán y Huehuetenango se alzan contra el Gobierno para oponerse a supuestos relevos que éste estaría planeando dentro de la institución castrense.

MARZO

Viernes 1

• Los habitantes de al menos 300 asentamientos se concentran frente al Congreso para pedir que se extienda el plazo de operación de la comisión liquidadora del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), que debe terminar el proceso de legalización de sus tierras.

• El Gobierno anuncia relevos en las zonas militares de Zacapa, Chimaltenango y Alta Verapaz y omite cualquier cambio en las zonas que un día atrás habían registrado alzamientos militares.

Jueves 7

• Más de 500 miembros del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores 2002 de la USAC marchan por la capital y se concentran frente al Congreso para pedir la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, del secretario Privado de la Presidencia y del director del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), quienes son señalados como responsables de abrir 163 cuentas bancarias en Panamá, apoyados en empresas de dudosa legitimidad, para negocios aparentemente petroleros.

Viernes 8

• Miles de mujeres de más de 20 organizaciones femeninas marchan desde la municipalidad capitalina, pasando por el Congreso y la Secretaría de la Mujer, hasta el Palacio Nacional de la Cultura, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Miércoles 13

• Alrededor de 5 mil personas, encabezadas por el Movimiento Cívico por Guatemala, marchan por la capital desde el Parque Morazán hasta la Casa Presidencial para exigir al Presidente y al Vicepresidente de la Nación que renuncien a su inmunidad y se sometan a los tribunales, por su implicación en la apertura de cuentas bancarias en Panamá.

• Cientos de pobladores de asentamientos de la capital y del interior del país marchan al Congreso de la República reclamando la creación del Consejo Nacional de la Vivienda y que se inicie la Política Nacional de la Vivienda y Asentamientos Humanos.

Jueves 14

• Unos 500 campesinos que el 26 de febrero habían invadido la finca San Luis, en El Carmen, desalojan en forma pacífica el lugar, con la condición de que los propietarios o el gobierno resuelvan, en 45 días, el problema de falta de tierras.

Viernes 15

• Cientos de maestros miembros de la ANM marchan desde la Plaza de la Constitución hacia la Casa Presidencial para sumarse a las protestas contra la corrupción y, además, pedir reajuste salarial y mejores condiciones laborales.

• Unos 500 vecinos de Nahualá, Sololá, ocupan el edificio de la gobernación departamental para pedir la intervención del Gobierno en el conflicto que desde 1999 persiste entre ellos y los pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán por un camino en Chuapilá, cuyos terrenos se disputan.

Sábado 16

• El dirigente del Partido Patriota (PP) Jorge Alberto Rosal Zea es asesinado de cuatro balazos frente a la sede de esa agrupación en la capital. El Movimiento Cívico responsabiliza del crimen al Gobierno.

Lunes 18

• El Movimiento Cívico por Guatemala comienza la recolección de 500 mil firmas en todo el país para pedir la renuncia del Presidente y del Vicepresidente de la República e insistir en que se aclaren los casos de corrupción gubernamental.

• Unos 8 mil habitantes de Nahualá, Sololá, ocupan la ruta Interamericana, km. 158, como medida de presión para que las autoridades intervengan en la invasión de tierras de esa localidad, por parte de vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán.

Martes 19 • El Movimiento Cívico por Guatemala presenta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra el presidente Portillo, por abuso de autoridad y malversación de fondos.

Miércoles 20 • Unos 1.500 manifestantes, encabezados por el Movimiento Cívico por Guatemala, marchan hasta la sede central de la Contraloría en la capital, para reclamar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente y pedir la integración de un nuevo gobierno de unidad nacional.

• Luego de tomar las instalaciones de la distribuidora de productos de limpieza Nítido y de recibir una respuesta negativa al pago de sus salarios retenidos, un grupo de trabajadores de esta empresa le prende fuego a una de las bodegas, ubicada en la zona 9 de la capital.

Jueves 21 • Los tres civiles capturados por el DOAN a fines de enero tras una incursión en la aldea Chocón, Livingston, son puestos en libertad.

ABRIL

Lunes 1 • Empresarios del transporte urbano de Quetzaltenango comienzan un paro indefinido en demanda de un aumento del pasaje.

Martes 2 • Aproximadamente 150 campesinos de 12 comunidades de varios departamentos ocupan el Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRA) para exigir la agilización de préstamos para la adquisición de tierras en el interior del país. Levantan la medida luego de que las autoridades de la institución les prometen una respuesta para finales de la semana.

• Todas las unidades de la Fuerzas Especiales Policías (FEP) suspenden los registros de vehículos y la identificación de conductores, ante la posibilidad de ser destituidos si llegaran a multar a algún protegido de las autoridades, luego de que un agente es destituido cuando intenta registrar un automóvil de una familiar del presidente Portillo.

Sábado 6 • Los trabajadores del Instituto Nacional de Bosques (INAB) forman un sindicato para proteger sus intereses, debido a que varias personas han sido destituidas de sus puestos de trabajo injustificadamente desde que éste está intervenido.

Martes 9 • Universitarios, sindicalistas, profesionales y vecinos de Quetzaltenango marchan desde el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) a la Municipalidad local para exigirle a la Comuna una solución al paro de transporte urbano que llevan a cabo los empresarios del servicio desde hace nueve días, en demanda de un aumento en la tarifa.

• Catorce organizaciones forestales piden a la Corte de Constitucionalidad (CC) declarar inconstitucional la intervención del INAB.

Miércoles 10 • Campesinos de varios departamentos se manifiestan frente a la CC para expresar su descontento con la intervención del INAB. En tanto, un juzgado civil deja sin efecto dos acuerdos emitidos por el interventor de ese Instituto, con los cuales destituía al gerente de esa dependencia. Al asumir, éste ordena la restitución de todos los cesantes.

Jueves 11 • La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOOC) y el gobierno acuerdan diez puntos a tomar en cuenta para evitar que se profundice el conflicto agrario, entre los cuales se encuentran la postergación de la propuesta del programa de desarrollo rural y la promoción de la reforma al Código Penal de la figura de usurpación, trasladándola al ámbito civil.

Viernes 12 • Integrantes del Movimiento Cívico por Guatemala realizan una caravana de unos 90 vehículos desde el monumento a Juan Pablo II, pasando frente al Ministerio de Educación, el Banco de Guatemala, la Casa Presidencial, el Palacio Nacional de la Cultura y retornando al lugar de inicio, para exigirle al gobierno que convoque a una consulta popular que determine si el Presidente y el Vicepresidente deben continuar en sus cargos.

Lunes 15 • Vendedores ambulantes del mercado de Mazatenango, Suchitepéquez, realizan una marcha por las calles cercanas a la comuna local, para exigir el ingreso del transporte extraurbano a la ciudad, donde se ubica el mercado. Tras no encontrar al alcalde, bloquean la ruta al Pacífico en el kilómetro 160.

Miércoles 17 • En el Día Internacional de la Lucha Campesina, miles de campesinos de varias comunidades del interior del país, nucleados en la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), realizan diversas protestas, reclamando a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos de paz y exigiendo la reforma agraria. En Alta Verapaz y Chimaltenango, ocupan 14 fincas y toman la oficina de FONTIERRA, manteniendo como rehenes a un grupo de funcionarios. En Bella Vista, centenares de indígenas bloquean la ruta de Purulhá hacia Cobán en rechazo a la presencia de soldados y policías en sus comunidades. En Suchitepéquez, marchan por las calles de Mazatenango y bloquean la ruta a Taxisco, km. 87.

• Vecinos de Quetzaltenango ocupan la municipalidad para exigir que se amplíe el recorrido de los pocos autobuses urbanos que continúan funcionando, en el marco de una huelga de empresarios del transporte iniciada el 1 de abril.

Lunes 22 • Vecinos de distintas zonas de Quetzaltenango inician protestas frente a la municipalidad para exigir solución al servicio del transporte urbano.

Martes 23 • Centenares de desplazados pertenecientes a la CNOOC ocupan las oficinas del FONTIERRA de la capital, Santa Elena, Petén y Cobán, para exigir al gobierno la concesión de créditos y la compra de 12 fincas. Mientras tanto, varias organizaciones sindicales, encabezadas por la UASP, bloquean sectores claves de la capital y queman llantas frente al Centro Cívico, en apoyo a los reclamos de tierras de los campesinos.

Miércoles 24 • Cerca de 250 familias campesinas integrantes de la CONIC invaden la finca San Miguel, ubicada en el km. 103 de la ruta del Polochic, Alta Verapaz.

Jueves 25 • Varios miembros de las asociaciones que se benefician del Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) ocupan las sedes regionales del INAB de Cobán, Alta Verapaz y Quetzaltenango, en protesta por la incertidumbre que viven tras la intervención estatal. A su vez, decenas de trabajadores del Instituto también ocupan la regional de Quetzaltenango, en protesta por la destitución del director local.

Viernes 26 • Comerciantes del mercado capitalino La Terminal bloquean la entrada a Mazatenango, Suchitepéquez, para oponerse al Acuerdo de Ordenamiento de Tránsito de la comuna. Se enfrentan con la policía, que les lanza bombas lacrimógenas y detiene a seis vendedores.

Lunes 29

• Guillermo Ovalle de León, militante de derechos humanos y miembro de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), es asesinado. Las organizaciones de derechos humanos califican el hecho como una ejecución extrajudicial, en la cual estarían involucradas estructuras clandestinas de represión.

Martes 30

• Más de 300 trabajadores del sector forestal bloquean las rutas que pasan por Cuatro Caminos, entre Quetzaltenango y Huehuetenango, para exigir el fin de la intervención del INAB.

■ Glosario de siglas

AED	Asociación de Estudiantes de Derecho
ANM	Asamblea Nacional Magisterial
BANVI	Banco Nacional de la Vivienda
CC	Corte de Constitucionalidad
CEH	Comisión para el Esclarecimiento Histórico
CNOC	Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
CONIC	Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CUC	Comité de Unidad Campesina
CUNOC	Centro Universitario de Occidente
DOAN	Departamento de Operaciones Antinarcóticas
EEGSA	Empresa Eléctrica de Guatemala S.A.
EMETRA	Empresa Metropolitana de Transporte
FEP	Fuerzas Especiales Policíacas
FONTIERRA	Fondo Nacional de Tierras
FRG	Frente Republicano Guatemalteco
FRMT	Fundación Rigoberta Menchú Tum
INAB	Instituto Nacional de Bosques
INFOM	Instituto de Fomento Municipal
MINEDUC	Ministerio de Educación
PAN	Partido de Avanzada Nacional
PINFOR	Programa de Incentivos Forestales
PP	Partido Patriota
STEG	Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala
UASP	Unidad de Acción Sindical y Popular
URNG	Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
USAC	Universidad de San Carlos

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.
Fuentes: diarios Prensa Libre y La Hora.*

Honduras

REGION
NORTE



ENERO

Lunes 7 • Mentores del Proyecto Hondureño Educativo Cc pa hacia la Tesorería General de la República exigiendo el pago de siete meses de salario adeudado.

Jueves 10 • Más de 1.500 personas cortan la ruta que comunica Trujillo con el resto del país junto al Movimiento Campesino del Aguán (MCA) exigiendo el pago de una indemnización de 30 millones de lempiras para 600 familias que residen en una colonia donde funcionó el Centro de Entrenamiento Militar.

Sábado 12 • Los campesinos que tomaban la ruta a Trujillo levantan el bloqueo.

Martes 15 • El Consejo Nacional Indígena Maya-Chortí (CONIMCH), la Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH), la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), la Unidad de la Mosquitia (MASTA), la Federación de Tribus Pech de Honduras (FETRIPH), la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) y la Federación de Indígenas Nahuas de Honduras (FINAH) realizan una reunión constitutiva de una nueva organización indígena, el Consejo Nacional Indígena de Honduras (CNIH), en la que exigen la disolución de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH).

Domingo 27 • Asume Ricardo Maduro como presidente de la República.

FEBRERO

Miércoles 6 • Alrededor de 400 trabajadores de la maquila Prima toman las instalaciones del Parque Industrial Chip, ubicado en Choloma, Cortés, exigiendo el pago de prestaciones atrasadas, y pidiendo a las autoridades migratorias que no autoricen la salida del país de los dueños de la empresa. Ejecutivos de la empresa proponen abonar una semana atrasada y entregar maquinaria como parte de pago. La manifestación finaliza tras el encuentro.

Viernes 8 • El Poder Ejecutivo emite un decreto en el que ordena el despido de 3 mil personas pertenecientes a organismos autónomos del Estado.

Viernes 22 • Más de 3.500 maestros de Cortés participan en la asamblea general convocada por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), donde reclaman al gobierno el respeto al Estatuto Docente.

MARZO

Lunes 4 • En Tegucigalpa, setenta delegados de ocho etnias dan inicio al primer CNIH, desde donde exigen al gobierno crear una oficina de coordinación indígena, designar personal de salud y educación en sus territorios y crear un fondo de desarrollo.

• Decenas de ex trabajadores de las maquilas Sarina Industries y Max Power se manifiestan junto al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) frente a las instalaciones de los tribunales sampedranos exigiendo el pago de salarios e indemnizaciones atrasados.

Jueves 7 • Más de 1.300 integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) toman las instalaciones de la universidad ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Comayagua en reclamo de un aumento salarial mayor al 10% ofrecido por la institución en la rediscusión del contrato colectivo de trabajo.

Viernes 8 • Ex trabajadores de la maquila Cheil de Honduras se manifiestan en Tegucigalpa frente al bufete de su apoderada legal exigiendo el pago del dinero recibido tras la venta de maquinaria y terrenos de la compañía.

Lunes 11 • Cerca de 1.500 ex empleados del Tribunal Nacional Electoral (TNE) toman parte de sus instalaciones capitalinas en reclamo del pago de prestaciones y aguinaldo.

• Más de 200 empleados de la Empresa Hondureña de Correos (HONDUCOR) del sector noroccidental inician una huelga indefinida exigiendo el pago de los salarios de febrero y la entrega al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y al Banco de los Trabajadores de las correspondientes cuotas salariales deducidas desde mayo.

Miércoles 13 • Centenares de integrantes de organizaciones obreras, campesinas, magisteriales, de mujeres e indígenas marchan en Tegucigalpa junto a patronatos comunales siguiendo la convocatoria del Bloque Popular. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS), la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINIA) y las demás organizaciones participantes rechazan la privatización de instituciones estatales propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como forma de pago de la deuda externa y la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Sábado 16 • Cerca de 300 trabajadores de la empresa Industria de Muebles de América Central S.A., ubicada en el sector de Villaflores, toman sus instalaciones indefinidamente reclamando la reincorporación de 120 compañeros despedidos.

Lunes 18 • Casi cien médicos cortan los accesos al Ministerio de Salud exigiendo su nombramiento inmediato en 97 plazas asignadas por concurso.

Martes 19 • Cerca de 140 ex empleados de la alcaldía capitalina toman por dos horas las instalaciones del edificio ejecutivo demandando su reincorporación.

• En Comayagüela, la organización de mujeres Visitación Padilla realiza un plantón frente a instalaciones de las Fuerzas Armadas requiriendo al Ministerio de Defensa castigo para un militar acusado de acoso sexual.

Miércoles 20 • Más de 180 ex empleados de Vidrios Nacionales S.A. (VINASA) se manifiestan junto a trabajadores despedidos de otras empresas frente a la sede capitalina del Poder Judicial instando al pago de prestaciones adeudadas.

Jueves 21 • En San Pedro Sula, ex trabajadores de la maquiladora Interfashion se manifiestan frente al Banco Mercantil, quien posee los bienes de la empresa, en reclamo del pago de prestaciones atrasadas.

ABRIL

Lunes 1 • El Sindicato de Trabajadores de HONDUCOR (SITRAHONDUCOR) convoca a una huelga en reclamo del pago de los salarios de febrero y marzo, efectivizados sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La medida es acatada por 900 trabajadores de las 289 oficinas regionales y las 35 administrativas de la empresa.

Miércoles 3 • SITRAHONDUCOR levanta la huelga tras la designación de un nuevo gerente de la empresa.

• Tras una asamblea general, SITRAUNAH inicia una huelga de brazos caídos y corta los servicios de agua y luz en la institución académica exigiendo un aumento salarial de 500 lempiras y protestando contra las amenazas del gobierno. La rectoría ofrece un incremento de 200 lempiras.

Miércoles 10 • Cerca de 150 productores de Palma de Yoro, Atlántida y Colón se manifiestan en Tegucigalpa emplazando ser incluidos en un proyecto de emergencia para la reactivación del sector agrícola mediante el otorgamiento de un préstamo de 114 millones de lempiras.

Martes 16 • Ahorristas del Banco Hondureño de Créditos y Servicios (BANHCRESER) se manifiestan en San Pedro Sula exigiendo al presidente la devolución del dinero depositado en la entidad en quiebra además de la destitución de los miembros del Poder Judicial.

Miércoles 17 • El Bloque Popular y el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) se manifiestan frente al Congreso Nacional en el marco del Día Mundial de Lucha Campesina. Los cerca de 500 labriegos participantes reclaman la sanción de una nueva Ley Agrícola que contemple una reforma agraria que beneficie a 350 mil campesinos, asistencia técnica por 500 millones de lempiras y la dotación de 70 millones al Instituto Nacional Agrario (INA) además del congelamiento de los productos de la canasta básica y la no privatización de instituciones estatales, entre otras cosas.

Jueves 18 • El Ministerio de Educación emite un comunicado en el que afirma que sustituirá y sancionará a los docentes que no asistan a clases además de dejar de asistir a las reuniones con la dirigencia gremial del sector. El presidente de FOMH ratifica la realización de asambleas informativas el jueves 25.

Viernes 19 • Cerca de 1.200 profesores del departamento de Cortés pertenecientes al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) resuelven en una asamblea informativa en San Pedro Sula adherirse al paro convocado para el jueves 25, además de demandar al estado hondureño ante la Corte Internacional de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y exigir la renuncia del ministro de Educación.

Sábado 20 • COPEMH resuelve continuar con las asambleas informativas en horarios que no afecten el dictado de clases.

Lunes 22 • La dirigencia magisterial solicita al gobierno un pacto patriótico que contemple el respeto al Estatuto Docente. El ministro de Educación expresa que el diálogo se reiniciará sólo después de que los docentes levanten las convocatorias a medidas de fuerza.

Jueves 25 • La FOMH organiza asambleas informativas en 16 departamentos del país exigiendo el cumplimiento del Estatuto Docente y la destitución del ministro de Educación. En

Tegucigalpa cientos de docentes se reúnen en un instituto mixto junto al COPEMH, el Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras (COLPROSUMAH), FOMH y el Primer Colegio Hondureño de Maestros, entre otras organizaciones. Los más de 3.500 docentes de Cortés acatan el paro. El ministro del ramo afirma que 18 millones de lempiras serán deducidas de los salarios de mayo de los profesores que acudieron a las asambleas.

Viernes 26

• Los representantes de trabajadores y empresarios participantes de la comisión tripartita en torno al salario mínimo acuerdan que sea el gobierno el encargado de fijar el monto del aumento, siempre que sean congelados veinte productos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos. Las centrales obreras demandan un 25%, mientras que el empresariado ofrece un 7,5%.

Lunes 29

• Integrantes de COPEMH se manifiestan junto a estudiantes frente a la catedral de San Pedro Sula en reclamo del pago de salarios atrasados desde febrero.

■ Glosario de siglas

ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
BANHCRESER	Banco Hondureño de Créditos y Servicios
CNIH	Consejo Nacional Indígena de Honduras
COCOCH	Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
CODEH	Comité para la Defensa de los Derechos Humanos
COLPROSUMAH	Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras
CONIMCH	Consejo Nacional Indígena Maya-Chortí
CONPAH	Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras
COPEMH	Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
FETRIPIH	Federación de Tribus Pech de Honduras
FETRIXY	Federación de Tribus Xicaques de Yoro
FINAH	Federación de Indígenas Nahuas de Honduras
FITH	Federación Indígena Tawahka de Honduras
FMI	Fondo Monetario Internacional
FOMH	Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras
FUT	Federación Unitaria de Trabajadores
HONDUCOR	Empresa Hondureña de Correos
IHSS	Instituto Hondureño del Seguro Social
INA	Instituto Nacional Agrario
MASTA	Unidad de la Mosquitia
MCA	Movimiento Campesino del Aguán
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONILH	Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras
SITRAHONDUCOR	Sindicato de Trabajadores de HONDUCOR
SITRAINA	Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario
SITRAUNAH	Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
STIBYS	Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares
TNE	Tribunal Nacional Electoral
VINASA	Vidrios Nacionales S.A.

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Prensa y La Tribuna.*



ENERO

Martes 1 • En Oventic, Chiapas, los consejos autónomos de San Pedro Polo, San Juan de la Libertad y Santa Catalina Pantelhó realizan un acto al que acuden 2 mil personas en el que conmemoran el octavo aniversario del levantamiento indígena.

• El consejo municipal autónomo Ricardo Flores Magón denuncia la realización de patrullajes, sobrevuelos y hostigamientos del Ejército Mexicano en Montes Azules y la zona Chancalá-Palenque.

Miércoles 2 • Miles de integrantes de las bases de apoyo zapatista realizan un acto en la plaza de San Andrés, Chiapas, denunciando que el ayuntamiento priísta intentará ocupar el palacio municipal autónomo de dicha comunidad.

Viernes 4 • Alrededor de 200 habitantes de distintas comunidades de Chiapas toman las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo que les sean asignadas tarifas preferenciales al consumo energético y al pago de una deuda de 90 millones de pesos, entre otras cosas.

Viernes 11 • Productores de algodón toman las instalaciones del Banco de Crédito Rural (BANRURAL) de ocho municipios del estado de Chihuahua exigiendo a la empresa el levantamiento de las demandas penales por deudas iniciadas contra 120 compañeros.

• En Jalapa, Veracruz, integrantes de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC) toman el ingenio La Concepción junto a sus trabajadores exigiendo el pago de la zafra 2000-2001, el de la segunda parte del aguinaldo y la expropiación del mismo además de reiterar su negativa a entregar la gramínea a la compañía.

Sábado 12 • Más de 10 mil personas se manifiestan frente a la empresa Lázaro Cárdenas-Las Truchas junto a trabajadores de SICARTSA e IMEXA –en huelga desde el 20 de diciembre– y la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) en reclamo del reconocimiento de su dirigencia sindical, garantías de estabilidad laboral y un aumento salarial y de prestaciones.

Lunes 14 • Dos centenares de trabajadores jubilados de diversos ingenios realizan un plantón frente a la residencia oficial de Los Pinos en demanda de la intervención presidencial en su lucha por el pago de indemnizaciones y jubilaciones adeudadas.

• Campesinos afectados por el decreto de expropiación marchan por seis comunidades de la zona y bloquean la autopista Texcoco-Lechería en repudio al accionar de las autoridades municipales que intensificaron el reparto gratuito de material de construcción en los últimos días.

Miércoles 16 • El Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (FASUES) llama a un paro nacional universitario de dos horas en demanda de un aumento salarial de

8,7%. La medida es acatada en el 60% de las instituciones de educación superior, entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y universidades de Puebla, Veracruz, Sinaloa, Morelos, Nayarit y Yucatán, además de la Metropolitana del Distrito Federal (DF). El gobierno ofrece un incremento de 4,5%.

Jueves 17

• Los cerca de 2.600 obreros de SICARTSA e IMEXA aceptan en asamblea general extraordinaria el acuerdo alcanzado por las empresas, la dirigencia nacional y local del SNTMMSRM y el secretario de Trabajo y Previsión Social, consistente en el otorgamiento de un incremento salarial de un 10%, el pago del 50% de los salarios caídos, el mantenimiento de la relación laboral individual con los trabajadores y el reconocimiento de la nueva dirigencia de la sección 271 del sindicato.

Viernes 18

• Cerca de 2 mil trabajadores del Sindicato Democrático de Trabajadores del Metro marchan hacia el Zócalo capitalino exigiendo al gobierno local la entrega de uniformes y equipos además de garantías para el pago de los descuentos aplicados, el cumplimiento del Reglamento de Condiciones de Trabajo y la destitución del director del servicio.

Martes 22

• Los más de 1.100 trabajadores de la empresa hulera Euzkadi inician una huelga en la planta El Salto, ubicada en Jalisco, exigiendo la reapertura de la empresa y el pago de salarios atrasados y cuotas sindicales.

Miércoles 23

• Más de 2 mil ejidatarios de los 13 núcleos agrarios afectados por el decreto de expropiación marchan hacia el congreso y el palacio de gobierno estatal acompañados de estudiantes y trabajadores de Euzkadi. Los manifestantes reclaman la destitución del alcalde y la disolución de los poderes de San Salvador Atenco.

• Cerca de 1.300 integrantes de FASUES se manifiestan frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lunes 28

• Cerca de 400 trabajadores de la subsidiaria estadounidense National Castings, declarada en quiebra el 11 de diciembre pasado, ingresan a las instalaciones capitalinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) requiriendo el pago de salarios, aguinaldo y fondo de ahorro además de la reapertura de la planta.

Martes 29

• Productores de algodón de cuatro municipios de Chihuahua realizan un plantón en el Congreso local exigiendo la anulación de 260 órdenes de aprehensión giradas contra labriegos que enfrentan procesos judiciales a raíz de una demanda impulsada por BANRURAL.

Miércoles 30

• Cuarenta y dos sindicatos de 30 universidades públicas de 25 estados del país se pliegan al llamado a huelga de la FASUES realizando mitines, marchas y paros de entre dos y doce horas.

FEBRERO

Viernes 1

• Alrededor de 5 mil indígenas mazahuas del municipio San José del Rincón, estado de México, bloquean la ruta México-Toluca exigiendo la anulación del decreto que dio origen a la entidad, al tiempo que el contingente que se encuentra en Toluca impide la entrada a la legislatura a los trabajadores administrativos.

Martes 5

• Cerca de 4 mil personas participan en la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino convocada por los trabajadores cesanteados de Euzkadi y los ejidatarios

de Atenco y Texcoco. Los organizadores son acompañados por despedidos de las empresas Ford, National Castings, Dina y Fertinal además de empleados telefónicos, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).

- La SEP ofrece un aumento salarial de 5,25% más otro de 1,5% al tabulador a los trabajadores de la educación superior pública.

Miércoles 6 • El Consejo General de Huelga (CGH) marcha junto a 700 personas hacia el Zócalo capitalino acompañado de trabajadores de Euzkadi y huelguistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en conmemoración del final de la huelga estudiantil del año 2000.

Jueves 7 • Es oficializado en el parlamento nacional un aumento de un 32,5% promedio en las tarifas eléctricas.

Viernes 8 • FASUES manifiesta su rechazo al ofrecimiento de aumento salarial de 5,25% realizado por la SEP marchando hacia el Zócalo capitalino. Los empleados de la universidad de Veracruz aceptan un incremento global de un 8%.

Sábado 9 • Los Frentes Cívicos de Resistencia Civil (FCRC), la Unión de Usuarios de Hermosillo y el Frente Democrático Belisario Domínguez se manifiestan respectivamente en las ciudades de Tapachula, Sonora y Matamoros contra el aumento a las tarifas eléctricas.

Miércoles 13 • Cerca de 500 integrantes del Movimiento Urbano Popular (MUP) y del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) se manifiestan frente a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) exigiendo la sanción de medidas en materia de vivienda y protestando contra la aprobación de reformas inquilinarias y la posible realización de desalojos masivos.

- Cientos de trabajadores de Rutas Unidas, del servicio de transporte público concesionado del DF, se manifiestan en la Plaza Constitución exigiendo al gobierno capitalino el pago de un subsidio compensatorio del aumento del combustible o la autorización para aumentar el boleto en 50 centavos.

Lunes 18 • En Comitán, Chiapas, 50 mil colonos de cinco municipios de la región fronteriza se declaran en resistencia civil y anuncian el cese del pago de las tarifas eléctricas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Martes 19 • En Torreón, Coahuila, agricultores de la Comarca Lagunera se manifiestan frente a la sede de la CFE, donde acuerdan suspender los pagos de las tarifas eléctricas.

Miércoles 20 • Alrededor de 700 pescadores de Sabancuy, Campeche, toman la ruta que conduce al estado de Tabasco reclamando la entrega de 3 millones y medio de pesos que Petróleos de México (PEMEX) destinó a proyectos productivos.

- Trabajadores en huelga de la UAM marchan del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos. La caravana es acompañada por estudiantes de la institución y personal de las universidades de Zacatecas, Puebla, Chapingo y la UNAM.

Viernes 22 • Alrededor de 400 indígenas tepehuanos de siete comunidades de Durango ocupan un terreno de 80 has. ubicado en el municipio de Valparaíso perteneciente a ejidatarios zacatecanos exigiendo la entrega de 5.400 has.

Lunes 25 • Alrededor de 4 mil habitantes del municipio Villa Guerrero, estado de México, toman las instalaciones locales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) exigiendo a la Procuraduría General de la República (PGR) medidas contra sus vecinos de San Pedro Tlanixco, a quienes acusan de haber dinamitado la tubería que suministra el líquido a más de 80 mil habitantes de 15 poblados, además de la restitución del servicio.

Martes 26 • Alrededor de 50 mil trabajadores convocados por el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del DF (SUTGDF) se manifiestan en el Zócalo capitalino por el cese de la política de austeridad y los despidos injustificados, además del pago de prestaciones atrasadas.

• Cerca de 4 mil mujeres y mil jefes de familia de los municipios de Tonalá y Arriaga marchan hacia Tiltepec exigiendo la anulación del aumento en las tarifas eléctricas y medidas contra los apagones y las bajas de tensión que ocurren en la zona.

Miércoles 27 • Un millar de campesinos del Frente Popular Revolucionario (FPR) provenientes de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Baja California realizan un plantón en el Zócalo capitalino por la liberación de integrantes de la organización.

MARZO

Martes 5 • Más de 15 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas marchan hacia el Zócalo del DF y exigen un aumento salarial de 15% además del reestablecimiento del subsidio a la electricidad y respeto al contrato colectivo de trabajo.

• Más de 1.100 trabajadores sindicalizados de seis plantas de la Compañía Minera Mexicana del Cobre ubicadas en Sonora, Zacatecas y Coahuila inician una huelga en reclamo de aumentos salariales.

• En el estado de México, más de 300 internos del penal de Barrientos se amotinan exigiendo mejoras en su condición dentro del reclusorio además de la finalización de malos tratos. Cerca de 700 policías y custodios sofocan la protesta.

Miércoles 6 • La directora de Prevención y Readaptación Social del estado de México destituye al director de penal de Barrientos y afirma que investigará la actuación de custodios y autoridades de seguridad, tras la muerte de un preso en un enfrentamiento.

Sábado 9 • Más de 2 mil habitantes de Hermosillo, Sonora, junto a la Unión de Usuarios marchan en la ciudad por el reestablecimiento del subsidio a la electricidad.

Domingo 10 • Cerca de 500 trabajadores de la empresa SICARTSA rechazan en asamblea extraordinaria un acuerdo entre la compañía y el sindicato que reduce de mil a 300 el número de empleados puestos en paro técnico dentro de la empresa.

Miércoles 13 • Los trabajadores de la UAM deciden aceptar la oferta de la rectoría consistente en un aumento salarial de 5,25% y de 4,08% en prestaciones, además del pago del 50% de los sueldos caídos.

Jueves 14 • Alrededor de 3 mil productores de maíz de tres entidades chiapanecas bloquean una ruta al norte del estado exigiendo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) el pago de 400 pesos por tonelada adeudados a 60 mil agropecuarios.

• Alrededor de 2 mil indígenas huastecos y nahuas bloquean el palacio municipal de Ixhuatlán de Madero, ciudad de Veracruz, exigiendo la instalación de un hospital regional en la zona.

Lunes 18

• En Monterrey, cerca de 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) realizan la Asamblea Social Otro Mundo es Posible, en la que comunidades indígenas de América Latina se pronuncian contra el Plan Puebla Panamá (PPP) y el neoliberalismo. Tras el foro opositor, alrededor de 13 mil personas marchan en la ciudad protestando contra las políticas de los países ricos y la privatización de la industria petrolera nacional.

Miércoles 20

• Alrededor de 300 simpatizantes zapatistas marchan desde Aguascalientes hasta el centro de Morelia, Chiapas, denunciando presencia paramilitar en la zona. Bases de apoyo zapatistas expresan que hay actividad paramilitar en los municipios chiapanecos de Tila y Nueva Revolución, además de patrullajes del ejército federal en Sabanilla.

Jueves 21

• Cincuenta y ocho jefes de estado y representantes ministeriales de 122 países participan en la inauguración de la sesión plenaria de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se aprueba el Consenso de Monterrey. Alrededor de 3 mil campesinos de Atenco, jubilados, anarquistas, integrantes del Foro Social Mexicano y del CGH marchan en la ciudad rechazando la globalización neoliberal y la integración mexicana-estadounidense. El Barzón marcha en la ciudad. Organizaciones de derechos humanos denuncian un número indeterminado de detenciones.

Viernes 22

• El presidente Bush expresa en Monterrey que son el comercio, la inversión extranjera y los capitales nacionales los verdaderos motores del desarrollo a seguir por los países pobres, además de condicionar la entrega de asistencia financiera –que incrementarán en 5 mil millones de dólares– a la implementación de reformas políticas legales y económicas. El bloque de la Unión Europea se compromete a elevar los recursos de ayuda a un 0,7% de su Producto Bruto Interno (PBI) global.

Sábado 23

• Cerca de 2 mil internos del penal de Juárez, ubicado en Chihuahua, se amotinan exigiendo la destitución del jefe de custodios además de medidas contra el hacinamiento. La medida es sofocada con gases lacrimógenos. Alrededor de 800 familiares de presos son reprimidos por la policía al intentar ingresar a la cárcel.

Lunes 25

• El director interino del penal de Ciudad Juárez anuncia la destitución de su antiguo mandatario.

ABRIL

Viernes 5

• Cerca de 200 integrantes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (FRECIEZ) provenientes de varios municipios de Campeche inician un plantón en las cercanías de Los Pinos para exigir la regularización de la tenencia de las tierras y la introducción de los servicios básicos, entre otras reivindicaciones.

• Los 600 trabajadores de la minera San Martín de Zacatecas en huelga desde el 5 de marzo levantan la medida luego de acordar un aumento de 5,75% del salario y el pago de 50% de salarios caídos.

• Más de 1.100 trabajadores sindicalizados de seis plantas de la Compañía Minera Mexicana del Cobre ubicadas en Sonora, Zacatecas y Coahuila inician una huelga exigiendo aumentos salariales e incrementos en otras prestaciones además de la conformación de una comisión de seguridad e higiene.

- Sábado 6** • Cientos de campesinos se apoderan de nueve oficinas de la CFE en Chihuahua en protesta contra los altos precios del servicio y los cortes por falta de pago.
- En Coacalco, cerca de 700 taxistas bloquean durante más de dos horas la vía López Portillo para exigir el cese de los operativos realizados por tránsito municipal para trasladar sus vehículos al corralón y cobrar multas excesivas.
- Lunes 8** • Más de 400 integrantes de México Alianza Urbano Nacional (MAUN) se manifiestan frente al edificio del gobierno del DF en demanda de la construcción de viviendas.
- Miércoles 10** • En el DF y los estados de Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y Sinaloa se realizan manifestaciones en conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata. Organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el MUP y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas marchan junto a 4 mil personas a Los Pinos. Dos mil labriegos de Atenco y Texcoco marchan hacia el Zócalo capitalino junto a ejidatarios de Oaxaca, Veracruz y Campeche, el PPFV y el CGH.
- Cerca de 8 mil integrantes de la Coalición de Autotransportistas del Estado de Veracruz (CAEV) paralizan sus unidades y bloquean las centrales camioneras del centro y norte de la entidad exigiendo al gobierno estatal medidas para restringir el ingreso de vehículos de líneas nacionales.
- Viernes 12** • Cerca de 5 mil empleados del estado de Oaxaca marchan en su capital junto al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STSPEIDCE) y se manifiestan frente a la Cámara de Diputados y el palacio de gobierno en reclamo de un aumento en prestaciones y un incremento salarial de 100%.
- Domingo 14** • Ejidatarios de San Salvador Atenco realizan en el municipio una convención contra el PPP y la construcción del aeropuerto junto a campesinos de cinco estados y militantes de más de 20 organizaciones sociales, obreras, vecinales y estudiantiles, entre las que se encuentra el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y el PPFV.
- Lunes 15** • Médicos de Veracruz y Oaxaca se manifiestan frente a las oficinas generales del IMSS ubicadas en el DF, exigiendo basificación y el cumplimiento de las jornadas laborales de ocho horas además de la efectivización de contratos laborales estables.
- Martes 16** • Integrantes de la Unión de Campesinos pro Mejoramiento del Agro retienen 4 mil toneladas de granos importados de Estados Unidos en las estaciones ferroviarias de Ciudad Juárez y Chihuahua. Exigen al gobierno la revisión de la política agropecuaria nacional además de una reducción en el precio de energéticos e insumos del sector.
- Miércoles 17** • La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechaza el pedido de suspensión –solicitado por la Cámara de Diputados– del decreto presidencial que exenta de impuestos la importación de fructosa.
- Los 1.200 trabajadores mineros de la planta minera La Caridad, ubicada en Sonora, se reincorporan a sus actividades tras acordar con el Grupo México un incremento salarial de 5,75% y el pago del 50% de los salarios caídos durante los 46 días de huelga.
 - Cerca de 7 mil empleados públicos afiliados al STSPEIDCE inician una huelga en reclamo del 100% del aumento salarial. La Secretaría de Administración del gobierno de Oaxaca ofrece un 5,5%.
- Jueves 18** • Más de 1.500 afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEM) se manifiestan en Ecatepec, estado de México, exigiendo al gobierno municipal un aumento salarial de 40% además de dotación de equipo. La alcaldía ofrece un incremento de 4,5%.

- Sábado 20** • Cerca de 1.200 integrantes del Comité Campesino Urbano, Democrático y Popular (CCUDEPO) marchan hacia la municipalidad de Gómez Palacio, Durango, exigiendo una reducción en las tarifas del servicio eléctrico implementadas por la CFE.
- Lunes 22** • Más de mil personas participan del acto en conmemoración de la masacre de Acteal ocurrida en 1997, impulsado por la organización civil Las Abejas. Los participantes reclaman castigo a sus ejecutantes, el retiro del ejército de las comunidades de Chiapas, el desarme de los grupos paramilitares y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
- Más de 700 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y el DF instalan –por tiempo indefinido– en el Zócalo capitalino el Campamento Nacional Popular por la Defensa de la Educación Pública. Exigen al gobierno un aumento salarial de 100%, 90 días de aguinaldo y mayores prestaciones sociales además del mantenimiento del carácter público de la enseñanza.
- Martes 23** • La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envía a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un informe en el que plantea un recorte presupuestario de 10.100 millones de pesos, de los cuales 1.816 corresponden a educación y 363 al área de salud.
- Los casi 2.500 custodios de los 20 planteles del sistema penitenciario del estado de México inician un paro indefinido en reclamo de un aumento salarial de 50% y el pago de un bono de riego de 500 pesos mensuales.
- Jueves 25** • Alrededor de 500 comerciantes ambulantes se manifiestan frente a la ALDF exigiendo a los legisladores el congelamiento de una ley de transporte que pretende regular el uso de espacios públicos.
- Trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la SHCP realizan un paro nacional demandando la suspensión de reubicaciones unilaterales de empleados y el fin de la contratación de personal de confianza.
- Viernes 26** • El gobierno de Chiapas informa que la Iglesia, el grupo paramilitar Paz y Justicia y organizaciones indígenas simpatizantes con el zapatismo firmaron un acuerdo de no agresión en el municipio de Sabanilla.
- Alrededor de 55 mil profesores integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizan un paro en Oaxaca por mejoras salariales. Maestros de la sección 40 marchan en Tuxtla Gutiérrez exigiendo además mejoras laborales.
- Domingo 28** • Tras las amenazas de ser denunciados penalmente, los custodios de seis centros penitenciarios del estado de México levantan la huelga luego de reunirse con la directora estatal de Readaptación Social y el subsecretario de Seguridad Pública.
- Lunes 29** • Alrededor de 3.500 integrantes del Frente Estudiantil Campesino Socialista de México, acompañados de ejidatarios de Atenco y miembros del CGH, marchan hacia el zócalo capitalino y la SEP exigiendo mejoras educativas y laborales.

■ Glosario de siglas

ALDF	Asamblea Legislativa del Distrito Federal
BANRURAL	Banco de Crédito Rural
CAEV	Coalición de Autottransportistas del Estado de Veracruz
CAP	Congreso Agrario Permanente
CCUDEPO	Comité Campesino, Urbano, Democrático y Popular
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CGH	Consejo General de Huelga
CNA	Comisión Nacional del Agua
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNPA	Coordinadora Nacional Plan del Ayala
CNPR	Confederación Nacional de Productores Rurales
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
DF	Distrito Federal
FASUES	Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior
FCRC	Frentes Cívicos de Resistencia Civil
PPFV	Frente Popular Francisco Villa
FPR	Frente Popular Revolucionario
FRECIEZ	Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata
FZLN	Frente Zapatista de Liberación Nacional
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
MAUN	México Alianza Urbano Nacional
MUP	Movimiento Urbano Popular
ONGs	Organizaciones No Gubernamentales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PBI	Producto Bruto Interno
PEMEX	Petróleos de México
PGR	Procuraduría General de la República
PPP	Plan Puebla Panamá
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SAT	Servicio de Administración Tributaria
SCJN	Suprema Corte de Justicia de la Nación
SEP	Secretaría de Educación Pública
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SITUAM	Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana
SME	Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMMSRM	Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana
STPS	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
STSPEIDCE	Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal
SUTEM	Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios
SUTGDF	Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

*Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
 Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández y Juan Chaves.
 Fuente: diarios La Jornada y El Universal.*

Nicaragua

REGION
NORTE



ENERO

Miércoles 9

• Centenares de trabajadores municipales marcha, en rechazo a los cientos de despidos emitidos por la alcaldía. Cinco organizaciones sindicales de la Alcaldía de Managua (ALMA) –Unión Nacional de Empleados, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Comuna de Managua (FESTRACOMA), Federación de Trabajadores de la Alcaldía de Managua (FETRAALMA), Federación de Trabajadores Municipales de Managua (FTMM) y Sindicato de Profesionales y Técnicos (SIPROTEC)– reunidas en asamblea deciden realizar un paro el próximo lunes.

Lunes 14

• Los trabajadores del Consejo Supremo Electoral (CSE), agremiados al Sindicato de Trabajadores del CSE (SITRACSE), realizan un paro por tiempo indeterminado en distintas ciudades del país, entre ellas León, San Carlos, San Rafael del Sur, Mateare, Tipitapa, San Francisco Libre, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Carazo, Puerto Cabezas y Bluefields, en protesta por la ola de despidos realizados en esa institución desde el pasado 14 de diciembre.

• Trabajadores de la salud del Centro Asistencial Francisco Buitrago, ubicado en el barrio San Luis, Managua, junto con los del Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS), realizan un paro en reclamo del pago de los viáticos de transporte del mes de diciembre y del abastecimiento de medicinas e insumos para la institución.

Miércoles 16

• Los trabajadores del CSE agremiados al SITRACSE levantan la huelga que venían realizando luego de que el Ministerio de Trabajo acepta negociar el pliego petitorio presentado por los sindicalistas que establece el tratamiento del convenio colectivo y la posibilidad de una reforma que garantice estabilidad laboral.

Viernes 18

• Cientos de trabajadores de la empresa constructora Econs-III –perteneciente a la Corporación de Empresas Regionales de la Construcción (COERCO) y adscrita al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)– agremiados a la Federación de Trabajadores de la Construcción “Germán Pomares”, realizan un paro en demanda de un incremento en la partida presupuestaria y en rechazo a los despidos realizados en la empresa.

Lunes 21

• Más de 300 trabajadores de la ALMA, agremiados a FETRALMA, realizan un paro de actividades y toman las instalaciones de la municipalidad para exigir la reincorporación de los 262 trabajadores despedidos. Además, bloquean el despacho del alcalde con camiones recolectores de basura. La policía reprime la protesta.

• Obreros del ingenio Agroindustrial Montelimar S.A. (AMSA), ubicado en San Rafael del Sur, inician una huelga de brazos caídos en demanda de aumento salarial, estabilidad laboral y el inicio de la zafra azucarera demorado desde el 4 de enero pasado. Protestan también contra la posible apropiación del ingenio por parte de la empresa Naviera Nicaragüense (NAVINIC) y de un banco que estaría ligado a ésta.

Jueves 31

• Los trabajadores de la ALMA, acompañados por diputados liberales, realizan una marcha hasta las afueras del Parlamento para solicitar el apoyo de los diputados en su lucha por el reintegro de todos los trabajadores despedidos.

FEBRERO

- Viernes 1** • Representantes sindicales y la ALMA, con la mediación del ministro de Trabajo y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), llegan a un acuerdo que establece el reintegro en idénticas condiciones salariales de los trabajadores que participaron en la huelga, así como no ejercer acciones represivas en contra de los mismos, entre otras cuestiones. La medida de fuerza se levanta.
- Martes 19** • Los transportistas intermunicipales de Carazo, Granada y Masaya –apoyados por la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) y la Coordinadora Democrática de Transporte– realizan plantones en las instalaciones del MTI y de la ALMA, en rechazo a la decisión de trasladar las terminales de buses procedentes de Tipitapa y a la cancelación de más de 300 permisos de operación de buses autorizados el año pasado. Paralelamente, taxistas encabezados por la Federación Nicaragüense de Taxis (FENICOTAXI) realizan una movilización para exigir al Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (IRTRAMMA) una auditoría que dé cuenta de la cantidad de placas autorizadas que hay en Managua.
- Lunes 25** • Los dos sindicatos del Hospital-Escuela Antonio Lenín Fonseca, el Sindicato Independiente de Trabajadores de dicho hospital y la Federación de Sindicatos de la Salud (FETSALUD), realizan un paro escalonado para exigir la renuncia del director del hospital, así como una mejor alimentación y que se termine con los cobros a los pacientes que ingresan a ese centro asistencial.
- Miércoles 27** • Los presidentes de Centroamérica –Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá– reunidos en la ciudad capital firman la Declaración de Managua en la que ordenan iniciar de inmediato las negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

MARZO

- Domingo 3** • Más de 200 pobladores de Diriamba, agrupados en el Movimiento Pueblo Limpio, realizan una marcha en esa ciudad contra la corrupción y la actitud del ex presidente Arnoldo Alemán hacia el actual gobierno, así como la quiebra de bancos y la falta de medicinas, entre otras cuestiones.
- Martes 5** • Miembros de la Unión Nacional de Empleados (UNE) realizan plantones de protesta en Managua contra la Ley de Servicio Civil que impulsa el presidente Bolaños, por considerar que ésta no respeta la libre organización sindical y atenta contra el Código del Trabajo.
- Jueves 7** • Un grupo de trabajadores de AMSA protesta frente a la casa matriz del Banco de la Exportación (BANEXPO) en Managua, para exigir a la entidad bancaria que NAVINIC no siga interfiriendo en la zafra actual y se proceda a la venta de azúcar bajo los mecanismos establecidos.
- Miércoles 13** • Cerca de 1.500 trabajadores de AMSA se concentran frente a la entrada del ingenio, en San Rafael del Sur, en defensa de sus puestos de trabajo y contra la amenaza del BANEXPO de desalojarlos y cerrar la planta.

ABRIL**Jueves 4**

• Profesores del Instituto Nacional Autónomo Azarías H. Pallais, ubicado en Managua, toman las instalaciones del mismo en reclamo del pago del retroactivo de los meses de enero y febrero que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) les adeuda y contra la directora del instituto acusada de múltiples anomalías administrativas, entre otras cuestiones.

• Cerca de 100 personas convocadas por la Casa de la Mujer, la Red de Mujeres contra la Violencia, los ministerios de Salud, Educación y Familia, la alcaldía de Tipitapa, Ixchen, entre otras organizaciones que conformaron la Comisión Permanente para la Seguridad Ciudadana, organizan una marcha desde la alcaldía tipitapeña hasta los juzgados de ese municipio contra la violencia hacia las mujeres y el incremento de violaciones y asesinatos de mujeres en el municipio, entre otras cuestiones.

Domingo 7

• Un grupo de pobladores de los barrios periféricos de Matagalpa realiza una marcha en esa ciudad, de la que participan también autoridades municipales, el alcalde y dos concejales –uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otro del Partido Conservador– deteniéndose frente a Unión Fenosa, Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y la empresa Acueductos y Alcantarillados de Matagalpa (ALMAT). Rechazan los altos costos de los servicios públicos, el desempleo, la corrupción gubernamental y la pobreza, entre otras cuestiones.

Lunes 15

• Más de 400 estudiantes, encabezados por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), realizan un paro en la Escuela de Agricultura y Ganadería de Estelí (EAGE), en demanda de la reapertura del internado, la abolición del reglamento interno y la creación de nuevos mecanismos para la entrega de becas. La medida la toman luego de agotar los intentos de diálogo con las autoridades universitarias.

Viernes 19

• Los estudiantes de la EAGE, encabezados por la UNEN, levantan la huelga llevada adelante desde hace cinco días atrás luego de acordarse el inicio de un proceso de negociación entre los estudiantes y representantes de la institución.

Sábado 20

• Más de 200 personas, representantes de algunos de los distintos barrios de Chinandega y otros afiliados a FETSALUD, UNE y la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), entre otras organizaciones gremiales, participan de la marcha convocada por el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) en Chinandega contra el alza en las tarifas de los servicios básicos y las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Miércoles 24

• Cerca de 130 trabajadores de la comuna de Masaya realizan un paro en reclamo del cumplimiento del convenio colectivo firmado hace dos meses por el alcalde de esa ciudad ante el Ministerio de Trabajo (MITRAB), que contempla préstamos personales, implementos de trabajo y fuero sindical, entre otras cuestiones.

■ Glosario de siglas

ALMA	Alcaldía de Managua
ALMAT	Acueductos y Alcantarillados de Matagalpa
AMSA	Agroindustria Montelimar S.A.
ANDEN	Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BANEXPO	Banco de la Exportación
CENIDH	Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CNT	Coordinadora Nacional de Transporte
COERCO	Corporación de Empresas Regional de la Construcción
CSE	Consejo Supremo Electoral
EAGE	Escuela de Agricultura y Ganadería de Estelí
ENITEL	Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones
FENICOTAXI	Federación Nicaragüense de Taxis
FESTRACOMA	Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Comuna de Managua
FETRAALMA	Federación de Trabajadores de la Alcaldía de Managua
FETSALUD	Federación de Sindicatos de la Salud
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNT	Frente Nacional de los Trabajadores
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
FTMM	Federación de Trabajadores Municipales de Managua
IRTRAMMA	Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua
MECD	Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MITRAB	Ministerio del Trabajo
MTI	Ministerio de Transporte e Infraestructura
NAVINIC	Naviera Nicaragüense
SILAIS	Sistema Local de Atención Integral en Salud
SIPROTEC	Sindicato de Profesionales y Técnicos
SITRACSE	Sindicato de Trabajadores del CSE
TLC	Tratado de Libre Comercio
UNE	Unión Nacional de Empleados
UNEN	Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua

Panamá

REGION
NORTE



ENERO

Martes 8

• Los empleados de las Juntas Comunales se concentran en Panamá, para reclamar el pago de sus sueldos atrasados.

Miércoles 9

• Centenares de vecinos de El Chorrillo marchan hacia las oficinas administrativas de la empresa Bilfinger & Berger, que se adjudicó la construcción del segundo puente sobre el Canal de Panamá, para solicitar 400 empleos. Se dirigen luego hasta la Asamblea Legislativa para reclamar que se apruebe las partidas para el inicio de la obra.

Miércoles 16

• Los docentes universitarios de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP) y estudiantes del Movimiento Universitario 2025 marchan hasta la sede de la Rectoría de la Universidad de Panamá (UP) para protestar por el recorte a los salarios de los profesores de tiempo parcial.

• El legislador Carlos Afú del Partido Revolucionario Democrático (PRD) acusa a tres colegas, miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, de manejar grandes negociados en la aprobación de leyes dentro de la Asamblea Legislativa. Sostiene que todos los legisladores del PRD, exceptuándose él y el legislador Tomás Altamirano Duque, recibieron un total de 20 mil dólares por emitir su voto favorable en la aprobación del proyecto de ley del Centro Multimodal e Industrial de Servicios (CEMIS).

Miércoles 23

• Miembros de la Alianza de Desempleados Colonenses realizan una importante manifestación por las calles de Colón para pedir que se haga realidad el proyecto del Centro Logístico Multimodal del Consorcio San Lorenzo. Exigen la liberación de cuatro personas que fueron detenidas en septiembre pasado durante las protestas que se realizaron en esta ciudad.

Jueves 24

• Moradores de la barriada de prearistas Altos de la Colina de Santiago se concentran frente al Banco Hipotecario Nacional (BHN), en la ciudad de Panamá, para que se les entreguen los títulos de propiedad de sus tierras.

Sábado 26

• Alrededor de 300 trabajadores de la telefónica Cable & Wireless (C&W) protestan frente a las instalaciones de la transnacional en la ciudad capital, para denunciar que por lo menos 400 trabajadores han sido despedidos.

Miércoles 30

• Unos 500 integrantes de las distintas organizaciones populares y sindicales agrupadas en el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) marchan por las principales calles de la capital hasta el Ministerio Público, donde realizan una protesta haciendo sonar cacerolas, para que las autoridades arresten a los implicados en los casos de corrupción pública.

Jueves 31

• Diversas organizaciones obreras –entre ellas, la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social (CSS), la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical (CoNUSI) y la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP)– marchan hasta el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) para oponerse al proyecto de privatización de la CSS.

FEBRERO

- Viernes 1** • Moradores de la barriada de ex precaristas Altos de La Colina cierran la vía que conduce hacia el sector de Punta Delgadita, en protesta porque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) no los provee de agua potable.
- Jueves 7** • Vendedores ambulantes cierran la Avenida Central de la capital para protestar por los desalojos de los que son víctimas.
- Viernes 8** • Integrantes del MONADESO se manifiestan frente a la embajada norteamericana, en rechazo al “Arreglo Complementario 2002” firmado con Estados Unidos, que permite el sobrevuelo de aviones norteamericanos y el patrullaje de naves del Servicio de Guardacostas en territorio panameño.
- La corregidora de Jaqué, Darién, cierra la corregiduría y deja a este poblado fronterizo con Colombia sin autoridades civiles, por lo que la Policía Nacional (PN) sitia la comunidad, exigiendo a toda persona que entre o salga del sector que se reporte en el cuartel local o de lo contrario quedará detenida por 24 hs.
- Lunes 11** • El Sindicato de Trabajadores de la telefónica privatizada C&W rechaza la propuesta del CONEP y de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) de vender el 49% de las acciones de la compañía que aún pertenecen al estado.
- Jueves 14** • Los trabajadores de la Refinería Panamá S.A., agremiados en la Unión de Trabajadores del Petróleo de Panamá (UTPP), marchan por la carretera Transístmica desde la entrada a Bahía Las Minas en Activa hasta la Catedral de la ciudad de Colón, para denunciar la intención del grupo Chevron Texaco –concesionario de la refinería– y del Gobierno nacional de convertir la planta en un centro de acopio.
- El Ministerio de Educación (MEDUC) resuelve que a partir del próximo año lectivo desaparezcan de los planes curriculares las materias Geografía, Historia y Educación Cívica, las cuales serán reemplazadas por una sola materia denominada Ciencias Sociales.
- Lunes 18** • Unos 400 docentes inauguran el Primer Congreso Nacional sobre la Enseñanza de Historia y Geografía de Panamá en la UP, con el objetivo de reclamarle al MEDUC que suspenda en la Educación Básica General la aplicación de los programas que reemplazarán la enseñanza de Historia, Geografía y Cívica por una única materia de Ciencias Sociales.
- Martes 19** • El Movimiento de Emancipación Colonense (MEC), la Unión de Trabajadores y Desempleados Colonenses (UTRADECO) y Reacción Tres realizan una protesta pacífica por las principales calles de Colón para exigir a las autoridades un plan de emergencia en la provincia, que genere empleos para este sector del país.

MARZO

- Lunes 4** • Los vecinos de Nuevo San Juan, provincia de Colón, cortan la carretera Transístmica en los alrededores de la policlínica del lugar, para quejarse por el estado de las vías de acceso a la comunidad. Son reprimidos por la policía, que hiere a varias personas y detiene a otras 15, liberadas unas horas más tarde.

Martes 5 • Los trabajadores de la fábrica de muebles La Predilecta, en Río Abajo, toman la empresa, asegurando que el propietario se declaró en quiebra y se rehusa a pagar las prestaciones laborales que la ley exige.

Miércoles 6 • La presidenta Mireya Moscoso firma con los mandatarios de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador un texto normativo base para establecer un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre toda Centroamérica.

Jueves 7 • El MONADESO marcha por las calles de Panamá desde el Parque Porras hasta el Palacio Justo Arosemena para reclamar a los legisladores que se quiten la inmunidad parlamentaria.

• Grupos de desempleados del MEC y de la UTRADECO cierran la vía principal de la ciudad de Colón, en demanda del cumplimiento de plazas de empleo.

• Varios detenidos de la prisión de Bocas del Toro comienzan una huelga de hambre para denunciar las condiciones de hacinamiento en las que los mantienen desde la noche del miércoles, cuando se fugaron 2 de los 103 presos.

Viernes 8 • La Asociación de Médicos Residentes Internos (AMERI) de la CSS comienza un paro indefinido para que se nombre en forma definitiva a los médicos residentes. Varias horas más tarde logran un acuerdo con la Administración de la CSS a través del cual se arregla conformar una comisión que se encargará de solucionar sus reclamos.

Martes 12 • Vecinos del sector de Las Palmitas, distrito de La Chorrera, toman las instalaciones de la agencia regional del IDAAN, en protesta por la falta de agua potable. Se entrevistan con el gerente regional de la empresa, quien les aclara que en este momento el instituto no está en capacidad de suministrarles agua por tuberías, sino a través de carros cisternas, dos veces por semana.

Miércoles 13 • Cerca de 25 autobuses y más de 50 transportes de carga, encabezados por la Federación Sindical de Colón, marchan en caravana desde Colón hasta la capital para solicitar el inicio de los trabajos aprobados por ley del CEMIS y el Puerto Libre, a partir de los cuales se generarían empleos.

Jueves 14 • Más de un millar de personas, integrantes de diferentes agrupaciones religiosas, profesionales, estudiantiles y empresariales reunidas en el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción (MCCC) realizan una cadena humana a lo largo de la Av. Balboa en la capital para insistir en que se levante la inmunidad de todos los legisladores y no se detenga la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

• Alegando que enfrentan pérdidas millonarias, los representantes de Refinería Panamá S.A. –propiedad del consorcio Chevron Texaco– confirman que pretenden terminar anticipadamente su contrato con la nación –firmado en 1992, por 30 años– y cesar las actividades de refinación de petróleo. Continuarían operando como centro de acopio de combustible importado y sólo mantendrían a 50 de los 284 empleados.

Martes 19 • Pilotos y copilotos de líneas aéreas privadas y comerciales panameñas realizan una huelga de 12 hs. en el aeropuerto de Albrook, en protesta por el proyecto de trasladar esta terminal a la antigua base de Howard.

Jueves 21 • Varias organizaciones sindicales aglutinadas en la CoNUSI y en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) marchan hasta la Presidencia de la República para rechazar la presentación en la Asamblea Legislativa de un anteproyecto que pro-

mueve destinar 600 millones de balboas del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) para el pago de deuda externa y oponerse a los intentos de privatización de la CSS. Piden que la totalidad del FFD se invierta en planes sociales, de salud, educación y construcción, los cuales generarían plazas de empleos.

- Lunes 25**
- El legislador Carlos Afú –quien a mediados de enero hizo una denuncia por corrupción de casi todos los legisladores de su partido– es expulsado del PRD.
 - Las alrededor de 200 familias que ocupan los terrenos de lo que es hoy el barrio Las Malvinas, en el corregimiento de Pocrí, Aguadulce, aceptan una propuesta de legalización de tierras del gobierno nacional, por la cual deberán pagar 100 balboas el metro cuadrado, más un 3% de interés anual durante 10 años. Además, recibirán apoyo del Ministerio de Vivienda (MIVI) para la construcción de moradas.

ABRIL

- Lunes 1**
- Cientos de campesinos del sector de Río Uyama, Bocas del Toro, cierran la carretera Punta Peña–Almirante, dejando incomunicada a la provincia, para reclamar el dinero que les adeuda el estado en concepto de indemnización por la construcción de 68 km. de carreteras en las áreas donde se encontraban sus viviendas. Desbloquean el paso, tras la promesa de las autoridades de que recibirán la suma adeudada.
- Jueves 4**
- Unos 300 estudiantes del Instituto Coronel Segundo de Villareal, de Los Santos, cierran el puente del río La Villa para exigir el nombramiento de profesores en varias asignaturas. Al lugar acude el gobernador, quien les informa que los nombramientos no se agilizan por falta de presupuesto. En tanto, los alumnos del Colegio Rafael Moreno, en Maracas, paralizan las clases en reclamo del nombramiento de docentes.
- Lunes 8**
- Los docentes del Primer Ciclo Panamá inician un paro para protestar por el exceso de estudiantes en el turno matutino, mientras que en el vespertino han sido cerrados varios grupos de estudio.
- Miércoles 10**
- Más de 200 conductores de maquinarias pesadas, pertenecientes a la Coordinadora de Transporte de Carga de la provincia de Colón, realizan una caravana de más de 16 cuerdas por la ciudad de Colón, en protesta por las bajas tarifas que pagan las navieras por el acarreo de contenedores y por la imposición de disponer quiénes transportan las mercancías.
- Lunes 15**
- Los integrantes de UTRADECO y MEC obstruyen las vías Bolívar, Centra y Amador Guerrero, en Colón, para reclamar a las autoridades que asignen una partida del FFD que beneficie a los desempleados colonenses.
- Lunes 22**
- Unas 250 familias de la comunidad de Los Laguitos, corregimiento de Cativá, Colón, cierran la vía Transísmica, en los predios de la barriada San Judas, para exigir a las autoridades que arreglen la carretera.
- Miércoles 24**
- Cerca de 550 trabajadores de las provincias de Coclé y Veraguas, afiliados al Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), comienzan una huelga contra la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) para exigir jubilaciones para los trabajadores, aumento de salarios, contratos por obras y la revisión del descuento por el impuesto sobre la renta.

■ Cronología

• Más de 110 maestros y 2 mil estudiantes de la Escuela Ángel María Herrera, en Penomé, comienzan un paro militante para exigir aumento de salarios y el nombramiento de personal de enfermería, administrativo y de portería, entre otros.

Jueves 25

• Los trabajadores de SUNTRACS finalizan la huelga, luego de firmar con la CAPAC una nueva Convención Colectiva, que regirá las relaciones laborales hasta 2006 y por la cual se incrementarán los sueldos a partir de enero próximo en forma escalonada hasta 2005.

Domingo 28

• Precaristas de la barriada El Gringo, en el área revertida de Arraiján, se manifiestan frente a las instalaciones del municipio local para exigir a las autoridades una respuesta al problema habitacional.

Martes 30

• Mientras un grupo de habitantes de Colón se concentra frente al Palacio Legislativo para exigir que se los tome en cuenta en los proyectos a ejecutar, la Asamblea Legislativa aprueba medidas de Reactivación Económica y de Responsabilidad Fiscal, que autorizan el uso de fondos del FFD para obras de interés general y para compras de bonos de deuda externa, a la vez que establecen toques de endeudamiento.

■ Glosario de siglas

AMERI	Asociación de Médicos Residentes Internos
APEDE	Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas
APUDEP	Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá
BHN	Banco Hipotecario Nacional
C&W	Cable & Wireless
CAPAC	Cámara Panameña de la Construcción
CEMIS	Centro Multimodal e Industrial de Servicios
CEN	Consejo Ejecutivo Nacional
CoNATO	Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CONEP	Consejo Nacional de la Empresa Privada
CoNUSI	Coordinadora Nacional de Unidad Sindical
CSS	Caja del Seguro Social
FENASEP	Federación Nacional de Servidores Públicos
FFD	Fondo Fiduciario para el Desarrollo
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
MCCC	Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción
MEC	Movimiento de Emancipación Colonense
MEDUC	Ministerio de Educación
MIVI	Ministerio de Vivienda
MONADESO	Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía
PN	Policía Nacional
PRD	Partido Revolucionario Democrático
SUNTRACS	Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares
TLC	Tratado de Libre Comercio
UP	Universidad de Panamá
UTPP	Unión de Trabajadores del Petróleo de Panamá
UTRADECO	Unión de Trabajadores y Desempleados Colonenses

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).

Relevamiento y sistematización a cargo de Gustavo Gibert y Mariana Fassi.

Fuentes: diarios Crítica y El Panamá América.

Puerto Rico

REGION
NORTE



ENERO

Viernes 4 • Organizaciones opuestas a la presencia militar de la gobernadora Sila María Calderón para exigirle que ordene el retiro de la policía de las cercanías del Campamento García, sede de las actividades de la Marina, y que exija una reunión con el presidente de los EE.UU., George W. Bush, para pedirle personalmente el cese de las maniobras bélicas en la isla-municipio.

Miércoles 9 • Trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) paralizan sus labores debido a la negativa de la presidenta de la agencia a otorgarles sus pagos a los cerca de mil empleados. Mientras tanto, un grupo de 60 choferes realiza una protesta frente a las oficinas de AMA en Río Piedras reclamando su pago.

Martes 29 • Los trabajadores de la central Coloso de Aguada paralizan sus actividades por tiempo indefinido alegando que los colonos se niegan a negociar el nuevo contrato colectivo. Por su parte, los administradores de la central piden más tiempo para elaborar un plan y asegurar el financiamiento que hace falta para la molienda.

Miércoles 30 • Los trabajadores de la central Coloso levantan el paro de actividades y regresan a sus labores al conocer el compromiso de los colonos de negociar el nuevo contrato colectivo.

FEBRERO

Miércoles 13 • El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras (RRP) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decreta una huelga preventiva en rechazo al supuesto aumento de la matrícula a través de una cuota para el desarrollo tecnológico.

Domingo 17 • El Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques realiza un acto en el que participan alrededor de 50 personas en las inmediaciones de la prisión federal de Guaynabo para expresar su solidaridad con los desobedientes civiles que se encuentran en prisión por transgredir la zona ocupada por la Marina de Guerra de los EE.UU. en Vieques.

MARZO

Jueves 21 • La Federación de Maestros de Puerto Rico realiza un piquete en las oficinas centrales del Departamento de Educación (DE) para rechazar la reforma curricular que lleva adelante el Gobierno.

ABRIL

Lunes 1 • Cinco militantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) son detenidas en la zona restringida de Vieques al intentar impedir la reanudación de las maniobras militares de la Marina de Guerra de los EE.UU. en la isla. Se registran enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de la presencia militar.

Jueves 4 • Un grupo de desobedientes civiles ingresa en el campo de tiro de la Marina en Vieques y cuatro de ellos son detenidos por la policía. La gobernadora Sila María Calderón ordena que se arreste a toda persona que se acerque al campamento García con el propósito de violar la ley.

Viernes 5 • Tres desobedientes civiles entran al área restringida en Vieques para protestar contra las prácticas bélicas en la región y son reprimidos con gas pimienta por miembros de la Marina. Integrantes de la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques y de Mayagüezanos con Vieques Alertas y Disponibles radican una querrela en la policía contra los oficiales. Por su parte, el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques envía una carta a la gobernadora Sila María Calderón donde le expresan su preocupación por la seguridad de los tres manifestantes.

• El Centro Islámico de Puerto Rico organiza una manifestación frente al Capitolio en la que participan más de 100 personas en repudio a la invasión israelí a Ramalá.

Sábado 6 • Decenas de desobedientes civiles se concentran frente al Campamento Luisa Guadalupe, cerca de la entrada del Campamento García, para rechazar las prácticas de guerra de la Marina de los EE.UU. Los manifestantes son reprimidos por la policía durante varias horas con gases lacrimógenos y balas de gomas.

Domingo 7 • Un grupo de cinco desobedientes civiles del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), con la ayuda del Colectivo del Cayo La Yayí, entra en la zona restringida de Vieques para intentar detener los bombardeos.

Lunes 8 • Las maniobras bélicas son detenidas por espacio de una hora y media a causa de que varias personas enmascaradas penetran las aguas restringidas y lanzan piedras a las lanchas de los militares, para impedir que el barco que estaba bombardeando continuara disparando hacia la Isla Nena.

Martes 9 • Cuatro de los cinco desobedientes civiles del MST que entraron el domingo pasado en la zona restringida de Vieques son arrestados por la Marina.

• Las cinco militantes del PIP que entraron el primer lunes de este mes en los terrenos restringidos que ocupa la Marina son sentenciadas a 30 días de prisión.

Miércoles 10 • Un grupo de desobedientes civiles realiza un piquete en la entrada del Campamento García para exigir el cese inmediato de las maniobras militares. A metros del lugar, un centenar de simpatizantes de la Marina realiza un acto para apoyar esas prácticas.

Lunes 15 • Unos 12 desobedientes civiles se concentran en el terreno ocupado por la Marina para rechazar las maniobras militares que se realizan en el lugar. Son reprimidos violentamente por la policía.

• La Asociación de Maestros realiza una caravana que escolta “la antorcha por la fe en educación” hasta el Tribunal Supremo, el Capitolio y La Fortaleza, donde los maestros entregarán a funcionarios de esas instituciones un documento que fomenta los valores que deben regir a un buen funcionario, como la igualdad y la justicia.

Sábado 20

• La Marina de Guerra de EE.UU. culmina las maniobras militares que se extendieron por tres semanas en Vieques.

Lunes 29

• Más de un centenar de trabajadores del país, agrupados en doce sindicatos, se concentran con antorchas y cantando consignas de justicia salarial frente a La Fortaleza, en reclamo por mejores condiciones de empleo. Los trabajadores son impedidos de llegar hasta los portones de la mansión ejecutiva por agentes policiales.

■ Glosario de siglas

AMA	Autoridad Metropolitana de Autobuses
CGE	Consejo General de Estudiantes
DE	Departamento de Educación
MST	Movimiento Socialista de los Trabajadores
PIP	Partido Independentista Puertorriqueño
RRP	Recinto de Río Piedras
UPR	Universidad de Puerto Rico

República Dominicana

REGION
NORTE



ENERO

- Miércoles 9** • El Bloque de Organizaciones Populares que agrupa a sindicatos de choferes, estudiantes, maestros y asociaciones de padres, entre otros, inicia un paro por 72 hs. con bloqueo de carreteras y calles en el municipio Paraíso en reclamo por la construcción de una planta escolar que aloje a estudiantes y profesores del liceo secundario de esa localidad.
- Jueves 10** • La filial de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de Barahona inicia un paro de actividades indefinido en ese municipio en rechazo al aumento de un 6% que ofrece el Gobierno, por ser éste insuficiente para enfrentar el alto costo de la canasta familiar.
- Lunes 14** • Un grupo de personas protesta en el barrio El Gringo, Haina, en reclamo de la construcción de las calles y el restablecimiento del servicio de agua. La policía reprime la concentración deteniendo a seis manifestantes.
- Miércoles 23** • La ADP realiza vigilias en diferentes gobernaciones, distritos educativos y regionales en demanda de un aumento salarial y el pago de haberes adeudados.

156

FEBRERO

- Martes 12** • Habitantes de la comunidad de Sainaguá bloquean la vía pública con quema de cubiertas y otros objetos en protesta por la falta de agua potable que padece la población desde hace más de un mes.
- Miércoles 20** • Cientos de maestros de la capital convocados por la ADP se concentran en el parque Eugenio María de Hostos desde donde marchan hasta la Secretaría de Educación para continuar con su demanda por un sueldo de 5 mil pesos por tanda y otras reivindicaciones.
- Jueves 21** • La Coordinadora de Juntas Vecinales, que agrupa a organizaciones sociales, clubísticas, comunitarias y religiosas del suroeste de la ciudad de Santiago, realiza un vía crucis denominado “Por la salud y defensa del medio ambiente” en protesta por la construcción del relleno sanitario que tiene diseñado el Ayuntamiento en la comunidad de El Naranjo. Consideran que el mismo tendrá un efecto negativo para el medio ambiente y la salud de los pobladores.
- Las juntas de vecinos y habitantes no organizados de Haina realizan protestas para exigir al Gobierno y a las autoridades edilicias locales la reparación de las calles y la reorganización del tránsito vehicular, para evitar hechos que pongan en peligro la vida de los ciudadanos y contrarrestar la contaminación medioambiental.

- Martes 26**
- Docentes de la ADP inician un paro por 72 hs. en las escuelas públicas de la zona del Cibao para exigir al presidente de la Nación Hipólito Mejía un aumento salarial de 5 mil pesos por tandas, las jubilaciones según lo establece la Ley General de Educación número 66-97 y la aplicación de los incentivos.
 - Habitantes de la comunidad de Punta, en Villa Mella, bloquean la carretera que conduce a Bayaguana, en protesta por los cortes de energía eléctrica de hasta 20 hs. por día que realiza la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDE ESTE). La manifestación es reprimida por la Policía Nacional.

MARZO

- Miércoles 6**
- Decenas de jóvenes y amas de casa realizan movilizaciones callejeras en los barrios Duarte y Las Pampas, de Herrera, en protesta por la falta de suministro de agua potable por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). Además, reclaman la inmediata recolección de las grandes cantidades de basura acumulada en las calles.
- Viernes 8**
- Decenas de organizaciones feministas agrupadas en la Coordinadora de Mujeres del Cibao conmemoran con diversas actividades en todo el país el Día Internacional de la Mujer.
- Lunes 11**
- Comerciantes mayoristas en provisiones de Santiago y otros sectores productivos de la región se concentran frente a la Empresa Distribuidora de Energía del Norte (EDENORTE) en reclamo de la regularización del servicio energético tras la intensificación de los apagones en los últimos días.
- Jueves 14**
- Pobladores de Najayo protestan por las calles de esa localidad en demanda de la regularización del servicio de agua potable y la reconstrucción de la carretera. La manifestación es reprimida por agentes policiales.

ABRIL

- Sábado 6**
- Más de 100 médicos que trabajan en las cárceles del país como legistas, y en otras instituciones descentralizadas como Aduanas, Agricultura e Instituto Agrario como toxicólogos, suspenden sus labores en contra de la retención de sus sueldos por parte del gobierno, quien los acusa de tener dos trabajos en el estado, hecho que está prohibido por la ley. Por su parte, los trabajadores aseguran que sus actividades no se superponen, por lo que la ley queda sin efecto.
- Lunes 8**
- Habitantes del barrio Moscú bloquean la principal vía que comunica a éste con la comunidad de Sabana Toros, lanzando desperdicios y quemando neumáticos, para exigir a las autoridades del gobierno el arreglo de calles, la construcción de una escuela y la reparación de la vía principal del distrito.
- Martes 9**
- Continúan las protestas de los habitantes de Moscú en reclamo de la construcción de calles y escuelas, el cese de los apagones y contra el alto costo de vida. Un joven muere a causa de la represión policial desatada en el lugar.

■ Cronología

• Un grupo de choferes pertenecientes a la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) realiza durante la mañana una vigilia frente al edificio de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), en la capital, en protesta por la presunta represión y abusos que cometen los agentes de esa institución contra los conductores.

Lunes 15

• El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y el Comité Unido Para Vencer (CUPAVE) junto a otros grupos sociales del municipio de Licey al Medio inician un paro por 48 hs. con bloqueo de calles en demanda de la puesta en libertad del dirigente popular Melitón García, sentenciado a dos años de prisión por una supuesta portación ilegal de arma de fuego.

■ Glosario de siglas

ADP	Asociación Dominicana de Profesores
AMET	Autoridad Metropolitana de Transporte
CAASD	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CNTU	Central Nacional de Transportistas Unificados
CUPAVE	Comité Unido Para Vencer
EDE ESTE	Empresa Distribuidora de Energía del Este
EDENORTE	Empresa Distribuidora de Energía del Norte
FALPO	Frente Amplio de Lucha Popular

La multitud contra el Imperio¹

Por Michael Hardt* y Toni Negri**

“Y Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Mi nombre es Legión, porque nosotros somos una multitud”
(Marcos, 5,9)

■ La noción moderna de democracia está íntimamente ligada a la de Estado-nación

Para examinar el status contemporáneo de la democracia tenemos que comenzar considerando el rol del Estado-nación y los cambios ocurridos en sus poderes. Muchos teóricos pretenden –y muchos otros rechazan– que los diversos fenómenos comúnmente evocados con el término de “globalización” erosionaron, o bien debilitaron, los poderes de los Estados-nación². A menudo estas tesis son presentadas como contrapuestas. En realidad ambas son válidas. La era de la globalización no significa el fin del Estado-nación, que continúa cumpliendo funciones útiles a la regulación económica, política y al establecimiento de normas culturales. Pero los Estados nacionales han perdido su rol en materia de autoridad soberana. Centrar nuestra atención en el concepto y en las prácticas de la soberanía nos ayudará entonces a clarificar el debate.

Proponemos el concepto de Imperio para designar el dispositivo global contemporáneo. El Imperio designa ante todo la nueva forma de soberanía que sucedió a la soberanía estatal: una nueva forma de soberanía ilimitada, que ya no conoce fronteras o más bien que sólo conoce fronteras flexibles y móviles. Retomamos el concepto de Imperio de la antigua configuración romana en la cual se suponía que el imperio era una forma superadora de las tres formas de gobierno –monarquía, aristocracia y democracia– combinándolas en una sola dirección soberana unificada. De hecho nuestro Imperio contemporáneo es monárquico. Esto es evidente en las fases de conflicto militar en las cuales puede constatarse hasta qué punto el Pentágono, con su arsenal atómico y su superioridad tecnológica, puede efectivamente dominar el mundo.

* Profesor de Literatura en la Universidad Duke.
**Filósofo y Teórico Político.

Traducción: Emilio Taddei



Las instituciones económicas supranacionales, como la OMC, el Banco Mundial o el FMI, ejercen también a veces una dominación de tipo monárquica sobre los asuntos globales. Nuestro Imperio es también aristocrático; dicho de otra forma dirigido por una élite limitada de actores. Aquí el rol de los Estados-nación sigue siendo central dado que un reducido número de Estados dominantes se arroga el poder de gobernar la economía global y de controlar los flujos culturales por intermedio de una especie de dirección aristocrática. Esta aristocracia de naciones se manifiesta claramente cuando aquellas que forman el G8 se reúnen o cuando el consejo de seguridad de la ONU ejerce su autoridad. Las principales firmas transnacionales, ya sea que cooperen o que compitan entre ellas, constituyen igualmente una forma de aristocracia.

Finalmente el Imperio es también democrático dado que pretende representar al conjunto de los pueblos aunque, como lo veremos, esta pretensión sea en gran medida ilusoria. El conjunto de los Estados-nación, tanto los dominantes como los subordinados, cumple un papel central en este sentido en la medida que su función es la de representar a sus pueblos. La asamblea general de las Naciones Unidas es sin duda el símbolo más elocuente de esta democracia de las naciones. Si bien afirmamos que en realidad los Estados-nación no representan adecuadamente a sus pueblos, aún así podríamos considerar a las organizaciones no gubernamentales como instituciones democráticas o representativas. El

funcionamiento de diversos tipos de ONG es una cuestión compleja que no podemos tratar aquí. En resumen, el Imperio es un sujeto soberano único que incluye en su lógica las tres formas y los tres niveles clásicos de dirección. En otras palabras, es una forma distintiva de soberanía capaz de incluir y de procesar su diferencia en su propia constitución.

Desde esta óptica vemos que las funciones y la autoridad de los Estados-nación no han desaparecido. Quizás es más apropiado decir que las funciones primarias de los Estados-nación –las regulaciones monetarias, los flujos económicos, los movimientos migratorios, las normas legales, los valores culturales, etc.– mantienen su importancia, pero son transformadas por el proceso de globalización. El cambio cualitativo refiere sobre todo al carácter de la soberanía. Los Estados-nación no pueden ya pretender realizar un ejercicio de la soberanía o cumplir el rol de autoridad última como en la época de la modernidad. En tanto que autoridad última el Imperio se sitúa por encima de los Estados y traduce una nueva forma de soberanía.

Esto supone una transformación histórica mayor en el caso de los Estados-nación dominantes, dado que las naciones dominadas nunca fueron realmente soberanas. Para muchas de éstas el ingreso a la modernidad significó una caída en las relaciones de subordinación económica y política. Este cambio en la forma de la soberanía –de la soberanía moderna encarnada por el Estado-nación a la soberanía imperial post-moderna– nos incumbe a todos. Aún en los países donde la soberanía nacional nunca ha sido una realidad, el paso al Imperio transforma nuestras formas de pensamiento y el abanico de nuestras capacidades. Debemos entonces reconsiderar a la luz del Imperio todos los conceptos fundamentales de la filosofía política.

■ La democracia incumplida, la democracia inaccesible

Volvamos al concepto de democracia. La noción moderna dominante de la democracia estaba basada en las instituciones representativas y asociada a la soberanía nacional en un espacio delimitado por fronteras³. Esas instituciones nacionales democráticas representaban al pueblo, de forma tal que la soberanía nacional moderna tendía a asumir la forma de una soberanía popular. Declarar soberana a la nación significaba declarar soberano al pueblo. ¿Pero qué es o quién es el pueblo? El pueblo no es una entidad natural o empírica. No puede identificárselo haciendo una adición de la totalidad de la población o realizando un promedio. El pueblo es más bien una *representación* que hace de la población una unidad.

En relación a esta cuestión hay tres elementos que son decisivos. En primer lugar el pueblo es uno, como Hobbes

y toda la tradición moderna lo han repetido en reiteradas ocasiones. El pueblo sólo puede ser soberano en tanto que identidad y unidad. La llave de la construcción del pueblo es su representación: la multiplicidad empírica de la población es transformada en identidad a través de los mecanismos de representación –debemos tomar aquí en cuenta tanto las connotaciones políticas cuanto estéticas del término. Finalmente estos mecanismos de representación están fundados en una noción y en una condición de medida –no tanto una medida cuantificable como una medida limitativa. Una multiplicidad medida puede así estar representada como unidad mientras que lo ilimitado no es representable. En este sentido la noción de pueblo está estrechamente ligada a la de un espacio nacional delimitado. En resumen, el pueblo no es una identidad inmediata y eterna, sino el resultado de un proceso complejo propio a una formación social y a un período histórico determinados.

Podemos simplificar esta situación compleja considerando por un instante solamente los mecanismos institucionales de representación, de los cuales el proceso electoral es al menos ideológicamente el más importante. La fórmula “una persona, un voto”, por ejemplo, fue uno de los ideales en torno a los cuales se articulan diversos esquemas de representación popular y de soberanía. Es inútil argumentar sobre el hecho de que este modelo ha sido siempre imperfecto y en gran medida ilusorio. Las críticas de los mecanismos de representación popular en las sociedades democráticas modernas son de larga data. Quizás pueda ser exagerado caracterizar las elecciones como el momento de selección del miembro de la clase dominante que va a representar(me) al pueblo en los próximos dos, cuatro o seis años, pero seguramente hay en esto parte de verdad y el alto índice de abstención electoral es sin lugar a dudas un síntoma de la crisis de representación popular que se expresa a través de las instituciones electorales. Sin embargo hoy la representación popular está socavada de forma mucho más significativa.

En el paso al Imperio los espacios nacionales pierden sus atribuciones, las fronteras nacionales (si bien aún son importantes) son relativizadas, y los imaginarios nacionales son desestabilizados. En la medida en que la soberanía nacional retrocede frente a un nuevo poder supranacional, el del Imperio, la realidad política pierde su dimensión. La imposibilidad de representar al pueblo se hace cada vez más clara, y el concepto mismo de pueblo tiende de esta forma a evaporarse.

Desde un punto de vista político e institucional, la soberanía imperial se opone a la propia noción de soberanía popular, hasta negarla. Consideremos por ejemplo el funcionamiento de instituciones económicas supranacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC. En gran medi-

da las condiciones exigidas por estas instituciones quitan a los Estados-nación el control de las decisiones económicas y sociales. No sólo las naciones subordinadas sino también las naciones dominantes son sometidas de forma creciente al reino de estas instituciones que no representan al pueblo sino únicamente en el sentido más distante y abstracto —ya que los países designan aún sus representantes en estas instituciones. Al considerar su funcionamiento, constatamos un “déficit democrático”. Esto no es azaroso. Estas instituciones sólo pueden funcionar al margen de mecanismos de representación popular.

Algunos de los mejores teóricos liberales euro-americanos de la globalización sostienen que deberíamos reformar el sistema global y reforzar los poderes políticos democráticos, pero sus reflexiones nunca se plantean que esas instituciones supranacionales puedan alguna vez transformarse en representativas en el sentido popular del término. Uno de los principales obstáculos reside en el hecho de determinar —de acuerdo a dicha concepción— qué o quién es el pueblo. Probablemente sería necesario desarrollar una noción de “pueblo global” que incluiría al conjunto de la humanidad más allá de toda pertenencia nacional o étnica. Un desafío de este tipo excedería rápidamente el marco de estas teorías neoliberales.

¿En qué consiste entonces la reforma democrática para los reformadores liberales como Robert Kheoane, Josph Stiglitz, David Held, Richard Folk o Ulrich Beck? Es llamativo constatar hasta qué punto se ha difundido el empleo del término democracia y es universalmente admitido en este tipo de literatura. Uno de los temas recurrentes de esta reforma democrática es simplemente el de una mayor transparencia. La transparencia en sí misma no tiene sin embargo nada de particularmente democrático y no constituye una representación. Una categoría más sustantiva, igualmente omnipresente en este tipo de literatura, es la de “responsabilidad”, que a menudo aparece asociada a la de “governabilidad”. El concepto de responsabilidad puede estar ligado a los mecanismos de representación popular, pero no es el caso en este tipo de retórica. Debemos preguntarnos: “¿Responsable ante quién?”. Descubrimos entonces que los reformadores no proponen hacer responsables a las instituciones globales frente a un pueblo global (ni aún nacional). En la reflexión de estos autores el pueblo está lisa y llanamente ausente. Su reforma consistiría más bien en hacer más responsables a estas instituciones frente a otras instituciones y, en particular, frente a la comunidad de los expertos. Si el FMI fuera más transparente y responsable frente a los expertos económicos, por ejemplo, ofrecería mejores garantías contra las desastrosas políticas preconizadas en el sudeste asiático a finales de la década del ‘90. Lo que resulta interesante, en el empleo de los términos de “responsabilidad” y de “governabilidad”, es que se adaptan perfectamen-



te a las exigencias de la economía y de la política. Desde hace mucho tiempo son conceptos centrales en el vocabulario teórico capitalista⁴. Más bien parecen destinados a garantizar la eficacia y la estabilidad económica antes que a construir cualquier tipo de representación o de control democrático. Finalmente, y si el término democracia está presente en este tipo de literatura, no encontramos en ella ninguna visión de conjunto de la democracia entendida como representación popular. El principal obstáculo conceptual que impide a estos teóricos imaginar un modelo representativo global parece ser la noción misma de pueblo. ¿Qué es entonces un pueblo global? Hoy parece imposible entender al pueblo como sujeto político, y aún más imposible representarlo institucionalmente.

Nos pareció importante tratar de forma tan extensa la cuestión de la reforma democrática de estas instituciones, no solamente para tomar en serio los argumentos de los teóricos reformadores sino también y fundamentalmente porque este discurso se ha difundido entre los diferentes sectores de los movimientos de protesta contra la OMC, el Banco Mundial o el FMI. Algunos grupos reclaman una mejor integración y representación en los procesos de toma de decisión de estas instituciones exigiendo por ejemplo que los sindicatos y las ONGs estén representados. Estas demandas pueden tener efectos positivos pero en última instancia se

enfrentan a obstáculos insuperables. Si concebimos la democracia en términos de autoridad soberana que representa al pueblo, entonces la democracia en la era imperial no es solamente incompleta sino que es irrealizable.

■ La democracia de la multitud

Debemos entonces explorar nuevas formas de democracia que no sean —o que lo sean de otra forma— representativas. Recordamos que la noción moderna de democracia está estrechamente ligada a las de soberanía nacional y de espacio nacional determinado. Dicho de otra forma: que la noción moderna de democracia se funda sobre la capacidad de medición. Hemos dicho que el pueblo es producto de la representación. En la teoría política moderna, de Hobbes a Rawls, el pueblo es considerado como el resultado del acto contractual fundador de la sociedad burguesa. Es el contrato el que transforma a la población en un cuerpo social unificado. Este acto contractual es sin embargo inexistente, mistificador y obsoleto. Inexistente en la medida que ningún hecho histórico o antropológico nos autoriza a postular su efectividad: el contrato niega toda memoria de su propia fundación y este rechazo de la diferencia es constitutivo de su propia violencia. Mistificador en la medida que el pueblo que éste instituye es presentado como compuesto por iguales mientras que estos sujetos constitutivos son en realidad desiguales: los conceptos de justicia y de legitimidad sobre los cuales reposa sirven solamente al más fuerte, que ejerce su fuerza de dominación y de explotación sobre el resto de la población. En último término es obsoleto porque refiere a una sociedad forjada por el capital: contractualismo, pueblo y capitalismo contribuyen a transformar la pluralidad en unidad, a hacer de las diferencias una totalidad homogénea, de la riqueza de todas las vidas singulares la pobreza de algunos y la fortaleza de otros. Pero todo esto no funciona más así. Esto funcionó mientras que el trabajo, las necesidades y los deseos eran tan miserables que aceptaban las imposiciones del capital como un bienvenido confort y como algo seguro frente a los riesgos inherentes de la construcción de valor, a la liberación del imaginario y a la organización de la sociedad. Hoy los términos han cambiado. Nuestra monstruosa inteligencia y nuestro poder de cooperación están en juego: somos una multitud de sujetos dotados de potencia y una multitud de monstruos inteligentes. Debemos pues desplazar el centro de gravedad del pueblo hacia la multitud. La multitud no puede ser tratada en términos de contrato ni, más generalmente, en términos de filosofía trascendental. La multitud desafía la representación porque es una multiplicidad ilimitada e inconmensurable. El pueblo es representado como unidad pero la multitud no es representable porque aparece como monstruosa a los ojos de los racionalismos teleológicos y trascendentales de la modernidad. A diferencia del concepto de pueblo, el de



multitud es una multiplicidad singular, un universal concreto. El pueblo constituía un cuerpo social, la multitud no: es la *chair*^s misma de la vida. Si por un lado oponemos la multitud al pueblo, por el otro debemos diferenciarla de las masas y de la muchedumbre. Las masas y la muchedumbre son a menudo utilizadas para designar una fuerza social irracional y pasiva, peligrosa y violenta, fácil de manipular. La multitud es por el contrario un agente social activo, una multiplicidad actuante. No constituye una unidad, como el pueblo, pero a diferencia de las masas está organizada. Es un agente activo y auto-organizado. Una de las ventajas del concepto de multitud es entonces eliminar los argumentos modernos fundados en el temor de las masas, incluidos aquellos que conciernen a la tiranía de la mayoría, que ha servido a menudo de mecanismo de chantaje para obligarnos a aceptar o reclamar nuestra propia dominación.

Desde la óptica del poder, ¿qué hacer con la multitud? No puede hacerse nada ya que el vínculo entre la unidad del sujeto (el pueblo), la forma de su composición (el contrato inter-individual) y el modo de gobierno (monarquía, aristocracia, democracia o los tres combinados) está roto. La transformación radical del modo de producción por la hegemonía de la fuerza de trabajo inmaterial y por la cooperación del trabajo vivo —esta revolución ontológica, productiva y biopolítica

a la cual asistimos— alteró los parámetros del “buen gobierno” y destruyó la idea moderna de una comunidad que funciona en beneficio de la acumulación capitalista.

Abramos un breve paréntesis. Entre los siglos quince y dieciséis, cuando la modernidad asomó bajo la forma de esbozos revolucionarios, los revolucionarios se autopercebieron como monstruos. Gargantúa y Pantagruel pueden ser considerados como las figuras emblemáticas de todos los gigantes y de todas las formas extremas de libertad que se nos presentaron a través de los años, proponiéndonos futuros aún más cargados de libertad. Hoy precisamos de nuevos gigantes y nuevos monstruos capaces de reunir la naturaleza y la historia, el trabajo y la política, el arte y la invención, y de ilustrar la nueva potencia que el “intelecto general”, la hegemonía del trabajo inmaterial, las nuevas pasiones de la actividad abstracta de la multitud pueden aportar a la humanidad. Necesitamos un nuevo Rabelais o, quizás, muchos.

Spinoza y Marx hablaron de la democracia de la multitud o mejor dicho de una forma de democracia que no tendría más nada que ver con esta democracia que participa con la monarquía y la aristocracia de las formas clásicas de gobierno. La democracia reivindicada por Spinoza es calificada como democracia *absoluta* —en el sentido que ésta sería ilimitada e inconmensurable. Las concepciones contractualistas de lo social evocan cuerpos sociales limitados y —en este sentido— sirven de poco. Cuando decimos que la democracia absoluta se sitúa por fuera de la teoría (y de la práctica mistificada) de las formas clásicas de gobierno, evidentemente queremos decir que toda tentativa de realizar la democracia por intermedio de la reforma de las instituciones imperiales sería vana e inútil. Inclusive pensamos que el único camino para realizar la democracia de la multitud es la revolución.

¿Pero qué significa invocar una democracia revolucionaria en la era del mundo imperial? Hasta hoy sólo nos hemos interesado en intentar responder qué es lo que no debería ser. No es más una forma correspondiente al concepto de nación (al contrario, ella se define cada vez más por el combate contra la nación). Tampoco es algo que correspondería al concepto de pueblo. Llegados a este punto debemos buscar otros conceptos que nos ayuden a comprender la democracia de la multitud. El concepto de contrapoder nos parece esencial cuando queremos tratar estos nuevos contenidos de una democracia absoluta de la multitud.

■ El contrapoder y las paradojas de la insurrección moderna

El concepto de contrapoder implica tres elementos: resistencia, insurrección y poder constituyente. Sin embargo

es preciso reconocer que, al igual que la noción dominante de democracia, la noción dominante de contrapoder fue definida en la modernidad en referencia al espacio nacional y a la soberanía nacional. De esto resultó que a lo largo de la era moderna —al menos desde la Revolución Francesa y durante la larga fase de agitación socialista y comunista— los tres componentes del concepto de contrapoder (resistencia, insurrección, poder constituyente) tendían a ser comprendidos como exteriores los unos de los otros: así pudieron funcionar como estrategias diferentes, o al menos como diferentes momentos históricos de una estrategia revolucionaria. En la medida que estos elementos se encontraban separados el propio concepto de contrapoder se reducía a uno de ellos, el de la insurrección o, en realidad, el de la guerra civil.

El pensamiento político de Lenin es ejemplar en este sentido. Para Lenin, el contrapoder —dicho de otra forma, en sus propios términos, la dualidad de poder establecido por la emergencia de un poder proletario contra la burguesía— sólo podía existir durante un corto período insurreccional. La resistencia, que para Lenin revestía principalmente la forma de luchas sindicales salariales, jugaba un rol político importante pero fundamentalmente distinto del proceso revolucionario. El poder constituyente tendía a desaparecer de su visión puesto que todo avance de ese poder se transformaba rápidamente en un elemento del nuevo Estado y mutaba inmediatamente en poder instituido. Lo que quedaba en Lenin del concepto de contrapoder era entonces antes que nada una gran fuerza insurreccional, o en realidad, una guerra civil contra la dictadura de la burguesía.

Una vez que se admite que la noción moderna de contrapoder se reducía a la insurrección, debemos examinar de forma más atenta las condiciones y las aventuras de la insurrección moderna. Paradójica y trágicamente —aún cuando la insurrección comunista moderna logró triunfar— en realidad se trataba de derrotas porque rápidamente ésta se encontró presa de una sucesión de guerras nacionales e internacionales. Resultó claro que una insurrección nacional era en realidad ilusoria.

Los Comuneros parisinos de 1871 establecieron el modelo de la insurrección comunista moderna. Su experiencia sirvió para enseñar que la estrategia ganadora consistía en transformar una guerra internacional en guerra civil entre clases. La guerra internacional se transformaba en la condición de posibilidad de un levantamiento insurreccional. Los Prusianos en las puertas de París no solamente derrocaron el Segundo Imperio de Luis Bonaparte sino que hicieron posible el derrocamiento de Thiers y de la República. París en armas, es la revolución armada. Cuarenta años más tarde los Bolcheviques también necesitaron de la guerra europea como condición para su insurrección. Una vez más Alemania, el enemigo nacional, proveyó esa condición de posibi-

lidad: los Bolcheviques a su vez transformaron una guerra internacional en guerra civil.

Sin embargo la tragedia de la insurrección moderna es que la guerra civil nacional se transforma inevitablemente a su vez en guerra internacional, o más precisamente en guerra defensiva contra la burguesía internacional coaligada. Una guerra civil estrictamente nacional es prácticamente imposible a partir del momento que una victoria nacional desemboca en una nueva guerra internacional permanente. Por consiguiente la condición de posibilidad de la insurrección nacional comunista –la guerra internacional– tiende una trampa a la insurrección victoriosa y la transforma en régimen militar permanente. Los Comuneros parisinos fueron víctimas de este *double mind*. Marx comprendió claramente los errores de la Comuna pero no mostró que las alternativas que se le ofrecían a la misma también hubieran sido erróneas. La opción se limitaba a otorgar todo el poder al Comité Central para marchar contra el ejército burgués de Versalles –lo que significaba instituir un régimen militar– o bien a padecer la derrota y la masacre. La cuestión no se hubiera tampoco saldado con una victoria sobre Versalles. Las clases dominantes prusianas y británicas no lo hubieran tolerado. Una victoria de la Comuna hubiera significado el inicio de una guerra internacional sin fin. La victoria soviética confirmó este *double mind*. La victoria militar en Rusia, la derrota total de la burguesía nacional rusa, inauguró una guerra internacional (caliente o fría) que duró más de 70 años.

Durante la guerra fría la insurrección obedeció a la misma estructura reduciendo la guerra internacional a su forma esencial. Por un lado hubo una situación de guerra internacional permanente ya codificada en términos de clase. La estructura representativa de los dos poderes opuestos se impuso a todos los nuevos movimientos. Esta alternativa fue igualmente determinante en términos materiales en la medida en que un movimiento insurreccional podía solicitar la ayuda de una de las superpotencias o enfrentarlas una contra otra. La suerte de la insurrección nacional estaba entonces echada de antemano, al igual que estaban fijados de antemano sus límites infranqueables. Ningún movimiento pudo escapar a la alternativa de la guerra fría. Aún los movimientos insurreccionales que no se definieron en un inicio en términos de clase –como los movimientos anticoloniales en Asia y en África, antidictatoriales en América Latina o los Black Power en Estados Unidos– no podían escapar a uno de los dos campos de esta gran confrontación. La insurrección nacional se reveló en definitiva como una ilusión. La insurrección victoriosa y la nación revolucionaria no eran más que un simple peón en el gran tablero de la guerra fría.

La conclusión de actualidad que se desprende de esta breve historia de la insurrección moderna gira en torno a dos ideas. Por un lado, con el declive de la soberanía nacio-

nal y el pasaje al Imperio, las condiciones que permitían la insurrección moderna desaparecen, de tal forma que inclusive hasta parece imposible pensar en términos de insurrección. Por otra parte también desaparece lo que mantenía presa la insurrección moderna del interminable juego entre guerras nacionales e internacionales. Al considerar hoy la cuestión de la insurrección nos enfrentamos simultáneamente a una gran dificultad y a una enorme posibilidad. Lo que nos conduce a la cuestión general del contrapoder.

■ Un contra poder de *chair monstruosa*

Con el actual debilitamiento del Estado-nación soberano se hace nuevamente posible explorar el concepto de contrapoder y volver a sus fundaciones conceptuales. La relación entre resistencia, insurrección y poder constituyente puede hoy transformarse en absolutamente permanente, y cada uno de estos momentos encierra la expresión posible de un poder de invención. Cada uno de estos tres momentos puede ser concebido como inmanente a los otros dos. El contexto en el cual –y contra el cual– el contrapoder actúa no es el de una soberanía limitada del Estado-nación, sino el de la soberanía ilimitada del Imperio de forma tal que el propio contrapoder puede ser entendido como ilimitado.

Nos enfrentamos aquí a una nueva problemática política y teórica muy estimulante. En el actual contexto imperial debemos pensar los conceptos de resistencia, insurrección y de poder constituyente, y sus vínculos internos, a la luz del concepto y la práctica del contrapoder. Si consideramos el campo de la producción teórica contemporánea podemos encontrar ciertas herramientas. El desarrollo realizado por Michel Foucault del concepto de resistencia, la noción del arma del débil del antropólogo James Scott y numerosos trabajos sobre las resistencias micropolíticas pueden ciertamente contribuir a las investigaciones sobre la cuestión. El gran límite de estos trabajos reside sin embargo en el hecho de que jamás se preocuparon por la relación entre resistencia, insurrección y poder constituyente. La resistencia puede ser un arma política poderosa pero si los actos de resistencia individual se producen de forma aislada no lograrán jamás transformar las estructuras de poder⁶.

Hasta el día de hoy, los otros dos componentes del contrapoder no han sido desarrollados. Una insurrección es un acto de revuelta colectiva. ¿Pero cuáles son las condiciones presentes de la insurrección y cómo puede ser puesta en práctica? No podemos traducir directamente insurrección asociándola a la idea de guerra civil, tal como fue el caso durante la época moderna cuando se suponía por “civil” la existencia de un espacio nacional. En el seno de una sociedad moderna la insurrección sigue siendo una guerra de los dominados contra los dominadores, pero ahora esta socie-

dad tiende a ser la sociedad global ilimitada, la sociedad imperial como totalidad.

¿Cómo podría tomar cuerpo una insurrección contra el Imperio? ¿Quién puede conducirla? ¿Cuáles son los vínculos internos entre la micropolítica de la resistencia y la insurrección imperial? Debemos reconsiderar la resistencia, la insurrección y el poder constituyente como un proceso y fundir los tres en una noción de contrapoder y, finalmente, en una nueva formación social alternativa. Estas son las cuestiones cruciales que estamos comenzando a formular.

Más que abordarlas frontalmente parece preferible cambiar de registro para disponer de diferentes puntos de vista sobre la problemática en su conjunto. Debemos romper las cadenas de la “razonabilidad”, derrumbar las formas ordinarias de pensamiento sobre la democracia y la sociedad, abrir perspectivas más imaginativas o más inventivas. Comencemos por examinar los propios fundamentos de los tres elementos del contrapoder. La materia prima del contrapoder es la *chair*, la sustancia viva común en la cual coinciden lo corporal y lo espiritual. “La *chair* no es ni materia, ni espíritu, ni sustancia”, escribía Merleau-Ponty (1964). Para designarla necesitaríamos emplear el viejo término de “elemento” en el sentido en que éste se aplicaba al agua, al aire, a la tierra, al fuego; dicho de otra forma, “al sentido de cosa general”. Ella es pura potencialidad, el elemento aún informe de la vida, un elemento del ser. No debemos sin embargo confundir la *chair* con cualquier noción de vida desnuda que designaría una forma viviente desprovista de sus cualidades, una especie de límite negativo de la vida. La *chair* apunta a otra dirección: hacia la plenitud de la vida. No permanecemos *chair*. La *chair* sólo es un elemento del ser. Hacemos permanentemente de nuestra propia carne una forma de vida.

En el desarrollo de las formas de vida nos descubrimos como multitud de cuerpos y nos reconocemos en cada cuerpo una multitud de moléculas, de deseos, de formas de vida, de invenciones. Cada uno de nosotros alberga una legión de demonios o, quizás, de ángeles –tal es el fundamento esencial, el grado cero de la multitud. Lo que actúa sobre la *chair* y le da forma son potencias inventivas que actúan a través de las singularidades para tejer el conjunto de los espacios híbridos y de las metamorfosis de la naturaleza, de las potencias que modifican los modos y las formas de la existencia.

En este contexto, resulta claro que los tres elementos del contrapoder brotan en forma conjunta de cada singularidad y de cada uno de los movimientos de los cuerpos que componen la multitud. Los actos de resistencia, los actos de revuelta colectiva y la invención común de una nueva constitución social y política atraviesan en forma conjunta innu-



merables microcircuitos políticos. De esta forma se inscribe en la *chair* de la multitud un nuevo poder, un contrapoder, algo viviente que se levanta contra el Imperio. Es aquí donde nacen los nuevos bárbaros, los monstruos y los gigantes magníficos que emergen sin cesar en los intersticios del poder imperial y contra ese poder. Este poder de invención es monstruoso en la medida que es, por naturaleza, excesivo. Todo acto de invención verdadera, que no se contente con reproducir la norma, es monstruoso. El contrapoder es una fuerza excesiva, arrasadora e incommensurable, que un día será liberada. En esta tensión el carácter monstruoso de la *chair* y del contrapoder revisten una gran importancia. Mientras esperamos la plena aparición de los monstruos (resistentes, revoltosos, constituyentes), parece que el sistema imperial, forma contemporánea de represión de la voluntad de potencia de la multitud, se encuentra alicaído y minado por la crisis. Las débiles filosofías del margen, de la diferencia y de la desnudez aparecen así como figuras mistificadas de la conciencia infeliz bajo la hegemonía imperial.

Contra esto el poder de invención (o para ser más exactos, el contrapoder) tira de la *chair* de los cuerpos comunes que no tienen nada que ver con los grandes animales que Hobbes y los teóricos del Estado moderno imaginaban cuando hicieron del Leviatán el instrumento sagrado y el

pitbull de la burguesía propietaria. La multitud a la que nos referimos es sobre todo una multiplicidad de cuerpos atravesados por potencias intelectuales y materiales de razón y de afectos. Son los cybercuerpos que se mueven libremente, sin reparos en las viejas fronteras que separaban lo humano de la máquina. Estos numerosos cuerpos de la multitud producen en forma continua nuevas formas de vida, nuevos lenguajes, nuevos poderes intelectuales y éticos. Los cuerpos de la multitud son monstruosos, irrecuperables por la lógica capitalista que intenta permanentemente controlarlos a través de la organización del Imperio. Los cuerpos de la multitud son en definitiva bizarros (“*queer*”) y variables; rebeldes a las fuerzas de la disciplina y de la normalización, sensibles solamente a sus propios poderes de invención.

Cuando declaramos que esos poderes de invención son decisivos para la formación del contrapoder en la era del Imperio, no pensamos en una población de artistas o de filósofos. En la economía política del Imperio el poder de invención se ha transformado en la condición general común de la producción. Es lo que queremos decir cuando postulamos que el trabajo inmaterial y el “*general intellect*” ocupan una posición dominante en la economía capitalista. Si la forma dominante de democracia legada por la modernidad y por la historia europea –una democracia popular y representativa– no está solamente inacabada sino que es irrealizable, entonces no debe calificarse como un sueño utópico nuestra perspectiva de democracia alternativa de la multitud. La imposibilidad de realizar la vieja noción de democracia debe empujarnos hacia adelante. Esto quiere decir que nos oponemos entera y radicalmente a la dominación imperial y que en este punto no podría existir un pasaje dialéctico posible. Lo único que nos queda por inventar es una democracia nueva, absoluta, ilimitada e incommensurable. Una democracia de multitudes poderosas, no solamente de individuos iguales, sino también de poderes abiertos a la cooperación, a la comunicación, a la creación. No hay un programa a proponer –¿y quién se atrevería a esto luego de la experiencia del siglo XX? Los protagonistas de la modernidad –los curas, los periodistas, los predicadores, los políticos– aún pueden ser útiles al poder imperial, pero no a nosotros. Las características fundamentales de la multitud son los elementos filosóficos y artísticos presentes en cada uno de nosotros, las prácticas del trabajo sobre la *chair* y sobre sus irreductibles multiplicidades, los poderes de invención ilimitados. Más allá de nuestra democracia irrealizada existe el deseo de realizar una vida en común. Quizás podamos, mezclando la *chair* con la inteligencia de la multitud, engendrar a través de una gran obra de amor una nueva juventud para la humanidad.

■ Bibliografía

- Agamben, Giorgio 1999 *Homo Sacer* (París: Reivages).
 Held, David 1995 *Democracy and Global Order* (California: Stanford University Press).
 Hirst, Paul y Thompson, Graham 1999 (1996) *Globalization in Question* (Cambridge: Polity Press).
 Merleau-Ponty, Maurice 1964 *Le Visible et l'Invisible* (París: Gallimard).

■ Notas

1 Este artículo fue publicado en la revista *Contretemps* 2001 (París: Textuel) No. 2, septiembre, 153-166. Agradecemos a Daniel Bensaïd la autorización para reproducirlo.

2 La argumentación contraria más detallada, según la cual la globalización considerada en este sentido sería un mito, se encuentra en Paul Hirst y Graham Thompson, *Globalization in Question*.

3 Ver David Held, *Democracy and Global Order*.

4 Debemos mucho a Craig Borowiak por sus análisis sobre el concepto de responsabilidad en la discusión sobre la globalización.

5 N del T: El término francés *chair* reviste diferentes sentidos. Puede ser traducido en forma literal como carne o piel, según el contexto en que se lo emplee. En este texto el empleo de *chair* refiere a un sentido más inmaterial del término. Se hace así referencia a un “estado exterior del cuerpo humano”. Los autores señalan que para Merleau-Ponty “La *chair* no es ni materia, ni espíritu, ni substancia”. En el texto Hardt y Negri sostienen que para designarla sería preciso emplear el viejo término de “elemento” en el sentido en que este se aplicaba al agua, al aire, a la tierra, al fuego, dicho de otra forma “al sentido de cosa general”. Hemos preferido mantener a lo largo del texto el vocablo original en francés.

6 Félix Guattari fue quien más desarrolló esta noción de resistencia en el sentido de una revolución molecular, en particular en sus trabajos en colaboración con Gilles Deleuze.

7 Ver Giorgio Agamben, *Homo Sacer*.

Imperio: dos tesis equivocadas

Por Atilio A. Boron*

Las polémicas tesis desarrolladas por Michael Hardt y Antonio Negri en *Empire* (Hardt y Negri, 2000) han suscitado un amplio debate internacional. El mismo refleja, no sin algunas distorsiones, el vigor de los movimientos opositores a la mundialización neoliberal cuyas exigencias prácticas los llevan a requerir cada vez con mayor urgencia un diagnóstico claro y distinto sobre la estructura del sistema imperialista mundial, las peculiaridades de la actual coyuntura y las alternativas que, con un grado razonable de realismo, podrían construir las fuerzas populares. En ese sentido, discutir sobre el imperio y el imperialismo es sumamente importante. De ahí que el principal mérito de la obra de Hardt y Negri (en adelante H&N) no sea la rectitud de las principales tesis expuestas en su libro –y especialmente aquella que asegura que vivimos en una época de “imperio sin imperialismo”– sino su capacidad para haber dado origen a una vigorosa discusión sobre el asunto. Dado que ya hemos criticado *in extenso* estas tesis en otro lugar, remitimos al lector interesado en examinar nuestras críticas a dicho trabajo a los efectos de interiorizarse en los detalles de nuestros cuestionamientos (Boron, 2002). Incidentalmente, conviene dejar sentado que el debate promovido por H&N refleja también una sorprendente vitalidad teórica en el campo del pensamiento crítico; vitalidad que, al calor del tan recorrido discurso sobre la “crisis del marxismo”, muchos habían ya dado por perdida. El hecho de que los planteamientos de nuestros autores hayan sido cuestionados por toda una pléthora de trabajos que desde distintas variantes del marxismo refutaron sus principales aseveraciones, no deja de constituir un signo alentador que merece ser destacado en una situación como la que estamos viviendo.

En esta oportunidad nos limitaremos a examinar dos tesis principales del argumento de nuestros autores: la primera, relativa al estado, desarrollada en *Imperio*; la segunda, referida al tema de la democracia, esbozada en un trabajo posterior que se reproduce en el presente número del *OSAL*.

* Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Profesor de Teoría Política y Social en la Universidad de Buenos Aires.



■ Una concepción radicalmente equivocada del estado y la soberanía en el capitalismo contemporáneo

Uno de los problemas más graves que enfrenta la teorización de H&N se relaciona con los serios errores de la teoría del estado que subyace a toda su construcción. Una expresión clarísima de éstos lo ofrece esta cita extraída de *Imperio*:

“Hoy... las grandes compañías transnacionales han superado efectivamente la jurisdicción y la autoridad de los estados-nación. Parecería pues que esta dialéctica que ha durado siglos llega a su fin: *¿el estado ha sido derrotado y las grandes empresas hoy gobiernan la Tierra!* (p. 283, bastardillas en el original)¹.

La proclamada “derrota” del estado supone el desplazamiento de sus funciones estatales y de las tareas políticas que le eran propias hacia otros niveles y dominios de la vida social. Revirtiendo el proceso histórico por el cual el estado-nación “expropió” las funciones políticas y administrativas hasta entonces retenidas por la aristocracia y los magnates locales, en esta nueva fase de la historia del capital tales tareas y funciones habrían migrado hacia otras esferas y dominios de la vida social, principalmente hacia “los mecanismos de mando del nivel global de las grandes empresas transna-

cionales” (p. 284). Esto implica dar por buena una presunción insanablemente errónea: que las llamadas empresas transnacionales no tienen referencia alguna a una base nacional. Este supuesto es completamente equivocado, toda vez que ignora el hecho de que, por ejemplo, el 96% de las doscientas megacorporaciones que prevalecen en los mercados mundiales y cuyos ingresos totales alcanzan los 7,1 billones de dólares por año –equivalentes a la riqueza combinada del 80% de la población mundial– tienen sus casas matrices en ocho países, están legalmente inscritas en los registros de sociedades anónimas de esos mismos ocho países, se encuentran protegidas por las leyes y los jueces de “sus estados”, y sus directorios tienen su sede en los mismos países del capitalismo metropolitano. Para despejar las dudas que pudieran restar, téngase en cuenta que menos del 2% de los miembros de sus directorios son extranjeros, mientras que más del 85% de todos los desarrollos tecnológicos de las firmas se originan dentro de sus “fronteras nacionales”. En suma: estas corporaciones tienen un alcance global, pero su propiedad, por más dispersa que se halle, tiene una clara base nacional, y sus ganancias fluyen de todo el mundo hacia el país donde se encuentra su casa matriz (Boron, 1999: 233; Boron, 2000: 117-123). En relación a este asunto conviene tomar nota de las enseñanzas que deja un informe elaborado por la revista *Fortune* a partir de una encuesta aplicada a las cien más grandes empresas transnacionales de todo el mundo: la totalidad de las firmas encuestadas, sin una sola excepción, reconocieron haberse beneficiado por las intervenciones hechas en su favor por los gobiernos de “sus países”, mientras que el 20% de ellas admitió no sólo eso sino que habían evitado la bancarrota gracias a los subsidios y los préstamos de rescate que les habían sido oportunamente concedidos por “sus gobiernos” (Chomsky, 1998; Kapstein, 1991/2). En suma: pese a lo afirmado por los autores de *Imperio*, los estados-nación todavía siguen siendo actores cruciales en la economía mundial, las economías nacionales siguen existiendo y las empresas transnacionales continúan operando desde una base nacional.

En su presunta autodestrucción, el estado capitalista nacional se habría fragmentado y dispersado entre una vasta colección de nuevas agencias, grupos y organizaciones entre los que sobresalen “los bancos, organismos de planificación internacionales y otros... que progresivamente tendieron a buscar legitimidad en un nivel transnacional de poder” (p. 285). Una vez más: el supuesto aquí es que los mentados bancos y organismos de planificación son entidades que “navegan en aguas internacionales” y que carecen de toda ligazón con los estados nacionales, aún con los que configuran el vértice del sistema imperialista mundial. Todo esto es tanto más inaceptable toda vez que H&N están hablando de que los fragmentos dispersos de la vieja soberanía estatal fueron recuperados y reconvertidos no por cualquier clase de institución sino por “toda una serie de cuerpos jurídicos

co-económicos, tales como el GATT, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el FMI” (p. 308). ¿Qué quiere decir exactamente “cuerpos jurídico-económicos”? ¿No es esto un eufemismo para evitar llamar por su nombre a los “perros guardianes” del imperialismo? ¿A qué intereses responden esos “cuerpos jurídico-económicos”?

Con relación a las posibilidades que se abren ante esta supuesta transformación estatal la sentencia de nuestros autores es radical e inapelable, y se encuentra en línea con los planteamientos ortodoxos de los teóricos neoliberales: “la decadencia del estado-nación no es meramente el resultado de una posición ideológica que podría revertirse mediante un acto de voluntad política: es un proceso estructural e irreversible” (p. 308). Dado que la globalización de la producción y circulación de mercancías ocasionaron la progresiva pérdida de eficacia y efectividad de las estructuras políticas y jurídicas nacionales, impotentes para controlar actores, procesos y mecanismos que excedían en gran medida sus posibilidades y que desplegaban sus juegos en un tablero ajeno a las fronteras nacionales, no tendría sentido alguno tratar de resucitar al difunto estado-nación. En el artículo que hoy publicamos en este número del *OSAL* nuestros autores matizan un tanto su posición: reconocen que pese a la globalización los estados nacionales seguirán cumpliendo “funciones útiles a la regulación económica, política, y al establecimiento de normas culturales.” Pero, concluyen paradójicamente, “los estados nacionales han perdido su rol en materia de autoridad soberana” (H&N, 2002: 159). En efecto, no se entiende cómo es que tales instituciones continúan cumpliendo esas útiles funciones de regulación señaladas más arriba si, al mismo tiempo, su soberanía se ha esfumado. Hoy en día sería precisamente el imperio quien personifica la nueva forma de soberanía que, según nuestros autores, ha sucedido a la soberanía estatal.

En consecuencia, nada podría ser más negativo para las futuras luchas emancipatorias que caer víctimas de la nostalgia de los viejos tiempos dorados. Pero aún si fuera posible resucitar al estado-nación cual Lázaro de entre los muertos, existe una razón aún más importante para desistir de esta empresa: esa institución “conlleva una serie de estructuras e ideologías represoras y cualquier estrategia que se sustente en ella debería rechazarse por esa misma razón” (p. 308). Supongamos por un momento que damos por válido este argumento, haciendo caso omiso del inquietante “aire de familia” que el mismo guarda en relación al anarquismo liberal de Robert Nozick. En tal caso no sólo deberíamos resignarnos a contemplar la ineluctable decadencia del estado-nación, sino también la del orden democrático resultante de siglos de luchas populares que inevitablemente reposa sobre la estructura estatal. Parecería que las conquistas democráticas de las multitudes del pasado –las cuales se plasmaron en el repertorio de instituciones, organiza-

ciones, regulaciones, leyes y formas estatales específicas que limitaron el despotismo del capital y por las cuales nuestros autores sienten particular aversión— no cuentan, tal vez porque fueron producto de un sujeto llamado “pueblo”, y que el reverso de esa negación es la exaltación retórica de la multitud del futuro, la que aún no se ha hecho presente en la historia. En todo caso, al satanizar el estado-nación como puro ámbito de la represión y al desconocer que es ésta la estructura básica sobre la cual se asienta la vida democrática, ¿creen que a cambio será posible “democratizar” los mercados o una sociedad civil estructuralmente dividida en clases? ¿Cuál es la salida entonces? (Boron, 2000: 73-132)

Hechas estas consideraciones previas, pasemos al análisis que H&N hacen sobre la cuestión de la soberanía. Nuestros autores parecen no haber tomado nota de que el imperialismo tiene un doble patrón de evaluación, o como decía la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el primer gobierno de Ronald Reagan, Jeanne Kirkpatrick, que hay un doble *standard* con el cual Washington juzga a los gobiernos y sus acciones. Un patrón es el que se utiliza para evaluar la soberanía de los Estados Unidos y sus aliados; otro, bien diferente, es el que se usa para juzgar la de los neutrales o los enemigos. La soberanía nacional de los primeros debe ser preservada y fortalecida, la de los segundos debe ser debilitada y puede ser violada sin ninguna clase de escrúpulos o falsos remordimientos de conciencia. Prisioneros de sus fantásticas especulaciones, H&N no pueden percibir esta inquietante dualidad, creyendo entonces que hay una “lógica global” más allá y por encima de los intereses nacionales de la superpotencia e indiscutido “centro” del imperio, los Estados Unidos. Para autores tan interesados sobre asuntos constitucionales y jurídicos como ellos, el deplorable desempeño de Washington en materia de reconocimientos a los tratados y acuerdos internacionales aporta un oportuno baño de sobriedad. Como es bien sabido, los Estados Unidos han repudiado cualquier instrumento jurídico internacional que signifique un mínimo menoscabo de su soberanía. Es más, tal como ha sido señalado por Noam Chomsky, en realidad los Estados Unidos “no han ratificado ni una sola convención, porque aún en los muy pocos casos en los que lo hizo el gobierno norteamericano se las arregló para introducir una cláusula de reserva que dice lo siguiente: ‘no aplicable a los Estados Unidos sin el consentimiento de los Estados Unidos’” (Chomsky, 2001: 63).

Lo anterior sugiere claramente que nuestros autores no han llegado a apreciar en toda su magnitud la continua relevancia del estado-nación y la soberanía nacional, lo cual debilita insanablemente el núcleo de toda su argumentación sobre el sistema imperialista en su fase actual. En relación a lo ocurrido con el estado capitalista nos parece que los yeros antes citados se tornan aún más graves. Primeramente



existe un problema inicial de importancia nada marginal relativo a la pregonada decadencia final e irreversible del estado: toda la información cuantitativa disponible sobre el gasto público y el tamaño de los aparatos estatales se mueve en una dirección exactamente contraria a la que imaginan H&N. Si algo ocurrió en los capitalismo metropolitanos en los últimos veinte años ha sido precisamente el notable aumento del tamaño del estado, medido como la proporción del gasto público en relación al PIB. Los datos suministrados por todo tipo de fuentes, desde los gobiernos nacionales al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y desde el Banco Mundial al FMI y la OECD, hablan con una sola voz: todos los estados de los capitalismo metropolitanos se fortalecieron en los últimos veinte años, pese a que muchos de los gobiernos de esos estados hayan sido verdaderos campeones en la retórica antiestatista que se lanzara con furia desde comienzos de la década de los ochenta. Lo que ocurrió desde el advenimiento de la crisis del capitalismo keynesiano, a mediados de los setenta, fue un descenso relativo en la tasa de crecimiento del gasto público, pero éste continuó creciendo sin interrupción aunque a un ritmo más lento. Es por eso que un informe especial sobre el tema elaborado por la revista conservadora británica *The Economist* lleva por título “*Big Government is Still in Charge*”, y en él su redactor no pue-

de ocultar su desencanto ante la tenaz resistencia de los estados a ajustarse y achicarse tal cual lo manda el catecismo neoliberal (H&N no parecen haber tenido la posibilidad de examinar este trabajo porque el último apartado del capítulo 15 del libro lleva un título que por sí solo retrata los alcances del extravío en el cual se hallan en un tema crucial para todo su argumento teórico: “*Big Government is over!*”). En todo caso, luego de un cuidadoso análisis de los datos recientes sobre el gasto público en catorce países industrializados de la OECD el articulista concluye que a pesar de las reformas neoliberales iniciadas a partir de las proclamadas nuevas metas de austeridad fiscal y reducción del gasto público, entre 1980 y 1996 el gasto público en los países seleccionados ascendió del 43,4% del PIB al 47,1%, mientras que en algunos países como Suecia (y en menor medida algunos otros) este guarismo supera con creces el 50% (*The Economist*, 1997: 8). Dicho en sus propias palabras, “en los últimos cuarenta años el crecimiento del gasto público en las economías avanzadas ha sido persistente, universal y contraproducente”, y el objetivo tan fuertemente proclamado de llegar a un “gobierno pequeño” aparentemente ha sido más un arma de la retórica electoral que un verdadero objetivo de la política económica. Ni siquiera los más rabiosos defensores de la famosa “reforma del estado” y del achicamiento del gasto público, como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, lograron algún progreso significativo en este terreno (*The Economist*, 1997: 48).



dadera desestructuración del estado y, con el objeto de generar excedentes para destinar al pago de la deuda, reducir al mínimo el presupuesto público sacrificando para ello gastos vitales e impostergables en materia de salud, vivienda, educación y otros del mismo tipo que deterioraron de manera impresionante la calidad de vida de grandes masas de la población. Las empresas de propiedad pública fueron primero desfinanciadas y luego vendidas a valores irrisorios a las grandes corporaciones de los países centrales, con lo que se hacía lugar para el máximo despliegue de la “iniciativa privada” (¡pese a que en muchos casos los adquirentes eran empresas públicas de los países industrializados!). Nada de esto hubiera sido posible, naturalmente, sin la incansable propaganda ideológica del neoliberalismo que, desde sus grandes usinas en Washington y las principales capitales europeas, satanizó al gobierno y la empresa pública al paso que endiosaba a los mercados. Otra política que se impuso sobre la periferia fue la apertura unilateral de la economía, con lo que se posibilitó la invasión de bienes importados producidos en otros países a la par que los índices de desocupación aumentaban extraordinariamente. Cabe consignar que mientras la periferia era forzada a abrirse comercialmente, el proteccionismo del Norte se sofisticaba cada vez más. La desregulación de los mercados, sobre todo el financiero, fue también otro de los objetivos de la “revolución capitalista” precipitada desde los años ochenta del siglo pasa-

Pero mientras los estados se agigantan en el corazón de los capitalismos desarrollados, la historia en el mundo de la periferia es completamente distinta. En la reorganización mundial del sistema imperialista que tuvo lugar bajo la égida ideológica del neoliberalismo, los estados fueron radicalmente debilitados y las economías periféricas sometidas cada vez más abiertamente, y casi sin la mediación estatal, a los influjos de las grandes empresas transnacionales y las políticas de los países desarrollados, principalmente los Estados Unidos. Este proceso no tuvo nada de natural y fue el resultado de las iniciativas políticas conscientemente adoptadas en el centro del imperio: el gobierno de los Estados Unidos, en el papel rector, acompañado por sus agencias y lugartenientes (el FMI, el Banco Mundial, la OMC, etc.) y respaldado por la militante complicidad de los gobiernos del G7. Fue esta coalición la que forzó (en muchos casos mediante brutales presiones de diverso tipo) a las endeudadas naciones del conjunto del Tercer Mundo a aplicar las políticas conocidas como el “Consenso de Washington” y a reconvertir sus economías en consonancia con los intereses de la coalición dominante y, muy especialmente, del *primus inter pares*, los Estados Unidos. Estas políticas favorecieron la prácticamente ilimitada penetración de los intereses empresariales norteamericanos y europeos en los mercados domésticos de las naciones del Sur. Para ello fue preciso dismantelar el sector público de esos países, producir una ver-

do. En su conjunto, estas políticas tuvieron como resultado un fenomenal debilitamiento de los estados en la periferia, cumpliendo el sueño capitalista de mercados funcionando sin tener que preocuparse por las regulaciones estatales, lo que originó que de hecho fuesen los conglomerados empresariales más fuertes los que se encargaban de “regularlo”, obviamente en provecho propio. Y como decíamos antes, estas políticas no fueron para nada fortuitas ni producto del azar, toda vez que el desmantelamiento de los estados aumentó significativamente la gravitación del imperialismo y de las firmas y naciones extranjeras en su capacidad para controlar no sólo la vida económica sino también la vida política de los países de la periferia. Por supuesto, nada de esto hallamos en la obra de H&N. Lo que sí encontramos, en cambio, son reiteradas declaraciones en el sentido de que las relaciones imperialistas se han acabado, pese a que la visibilidad que éstas han adquirido en las últimas décadas es tan destacada que hasta los sectores menos radicalizados de nuestras sociedades no dudan en reconocerlas.

Para concluir, nuestros autores parecen no poder distinguir entre formas estatales y funciones y tareas de los estados. No hay la menor duda que la forma del estado capitalista ha cambiado en el último cuarto de siglo. Dado que el estado no es una entidad metafísica sino una criatura histórica –continuamente formada y reformada por las luchas de clases y las intermitentes irrupciones de las clases y capas populares– sus formas difícilmente podrían ser concebidas como esencias inmanentes flotando por encima del proceso histórico. Consecuentemente, las formas del estado democrático en los países capitalistas avanzados han cambiado. ¿En qué sentido? Hubo una verdadera involución democrática, algunos de cuyos indicadores son los siguientes: una progresiva pérdida de poder en las manos de congresos y parlamentos; creciente *unaccountability* de los gobiernos, junto a una acrecentada concentración del poder en favor de los ejecutivos; proliferación de áreas secretas de toma de decisiones (vgr. las abortadas negociaciones del MIA, la acelerada aprobación del NAFTA, las actuales negociaciones a puerta cerrada para crear el Área de Libre Comercio de las Américas, etc.); declinantes niveles de respuesta gubernamental ante los reclamos y demandas de la sociedad civil; drástica reducción de la competencia partidaria debido a la mimetización de los partidos políticos mayoritarios, siguiendo el modelo del bipartidismo norteamericano; tiranía de los mercados –de hecho, de los oligopolios que los controlan– que votan día a día y capturan la permanente atención de los gobiernos, mientras que el público vota cada dos o tres años; en función de lo anterior, lógicas tendencias hacia la apatía política y el retraimiento individualista; creciente predominio de grandes oligopolios en los medios de comunicación de masas y la industria cultural; y, por último, creciente transferencia de derechos decisorios desde la soberanía popular hacia algunas de las agencias adminis-

trativas y políticas del imperio, proceso éste que se verifica tanto en las “provincias exteriores” del mismo como en el propio centro. En el caso latinoamericano ello significa que la soberanía popular ha sido privada de casi todos sus atributos, y que ninguna decisión estratégica en materia económica o social se adopta en el país sin una previa consulta con –y aprobación de– alguna agencia relevante de Washington. Como se comprenderá, una situación como ésta no puede menos que contradecir en los hechos la esencia misma del orden democrático: la soberanía popular, reducida a una inverosímil letra muerta.

Boaventura de Sousa Santos ha examinado los cambios experimentados por los estados bajo la globalización neoliberal y sus análisis confirman que “no hay una crisis total del estado, y mucho menos una crisis terminal del estado, tal como lo sugieren las tesis más extremas de los teóricos de la globalización” (de Sousa Santos, 1999: 64). Las funciones hobbesianas, represivas, del estado, gozan de todo su vigor tanto en la periferia como en el centro del sistema. En el apartheid social del capitalismo contemporáneo el estado sigue desempeñando un papel crucial: es el Leviatán hobbesiano de los ghettos y los barrios marginales, mientras garantiza las bondades del contrato social lockeano para ricos, famosos y poderosos. En consecuencia, ese estado, supuestamente en vías de extinción según la ofuscada visión de H&N, continúa su marcha como un estado escindido, casi esquizofrénico: para los pobres y los excluidos un estado fascista, para los ricos un estado democrático. Pero la vitalidad del estado-nación no sólo se mide en estos términos. También se constata cuando se examina el papel cumplido en varios otros terrenos, tales como la unificación supranacional, la liberalización de la economía, la apertura comercial, la desregulación del sistema financiero y la elaboración de un marco jurídico-institucional propicio para la adecuada protección de las empresas privatizadas y el nuevo modelo económico inspirado en el “Consenso de Washington”. “Lo que está en crisis es la función de promover intercambios no-mercantiles entre los ciudadanos”, remata de Sousa Santos (1999: 64).

Sintetizando: los mercados globales potencian la competencia entre las gigantescas corporaciones que dominan la economía mundial. Dado que estas firmas son transnacionales por su alcance y el rango de sus operaciones pero siempre poseen una base nacional, para tener éxito en esta lucha sin cuartel requieren del apoyo de “sus gobiernos” para mantener a sus rivales comerciales en raya. Conscientes de esta realidad, los estados nacionales ofrecen a “sus empresas” un menú de posibilidades entre las que se incluyen las siguientes: la concesión de subsidios directos; gigantescas operaciones de rescate de firmas y bancos costeadas en muchos casos con impuestos aplicados a trabajadores y consumidores; imposición de políticas de austeridad fiscal

y ajuste estructural encaminadas a garantizar mayores tasas de ganancias de las empresas; de valorar o apreciar la moneda local, a fin de favorecer a algunas fracciones del capital en detrimento de otros sectores y grupos sociales; políticas de desregulación de los mercados; “reformas laborales” orientadas a acentuar la sumisión de los trabajadores, debilitando su capacidad de negociación salarial y sus sindicatos; garantizar la inmovilidad internacional de los trabajadores al tiempo que se facilita la ilimitada movilidad del capital; “ley y orden” garantizados en sociedades que experimentan regresivos procesos sociales de reconcentración de riqueza e ingresos y masivos procesos de pauperización; la creación de un marco legal adecuado para ratificar con todo el ímpetu de la ley la favorable correlación de fuerzas que han gozado las empresas en la fase actual; establecimiento de una legislación que “legaliza”, en los países de la periferia, la succión imperialista de plusvalía y que permite que las superganancias de las firmas transnacionales puedan ser libremente remitidas a sus casas matrices. Estas son algunas de las tareas que realizan los estados nacionales y que la llamada “lógica global del imperio” tan exaltada en los análisis de H&N no puede garantizar si no es a través de esta todavía imprescindible mediación del estado-nación (Meiksins Wood, 2000: 116-117). Sólo bajo el supuesto de que la clase capitalista está constituida por imbéciles profundos podría entenderse que sus más prominentes e influyentes integrantes estén trabajando activamente para destruir un instrumento tan útil y formidable como el estado-nación (nos apresuramos a aclarar, para despejar posibles dudas, que el estado capitalista no es tan sólo una herramienta de la burguesía sino muchas cosas más, lo que no obsta para que también sea un instrumento imprescindible en el proceso de acumulación de capital).

■ Las desventuras de la democracia absoluta

Un segundo tema que quisiéramos tratar en estas páginas es el de la teorización sobre la democracia que se propone en el artículo reproducido en este número del *OSAL*. En relación a ella digamos, para anticipar sintéticamente nuestra opinión, que la misma contiene numerosos errores que la tornan inaceptable desde el punto de vista de un proyecto socialista de emancipación humana.

En este artículo los autores introducen la noción de la “democracia de la multitud”, una concepción que apenas estaba insinuada en *Imperio*. Ahora bien: ¿qué significa exactamente esto? Tras las huellas de Baruch Spinoza los autores aseguran que se trataría de una “democracia absoluta” y, por eso mismo, “ilimitada e inconmensurable”. Si bien es comprensible la desconfianza que genera una propuesta tan grandiosa como esa, H&N logran calmar momentáneamente la inquietud del lector cuando afirman que una realización de-

mocrática de ese porte es impensable, e irrealizable, en el marco de las arcaicas instituciones del imperio. Esta constatación los lleva a concluir que “el único camino para realizar la democracia de la multitud es la revolución” (H&N, 2002: 163). Se trataría pues de una “democracia revolucionaria”: sólo que, a diferencia de otras que le habrían precedido y que tuvieron una fugaz y turbulenta existencia, este tipo de democracia nada tiene que ver con la nación o con el estado nacional. Lo que la define es precisamente lo contrario: su vocación de encarnar “el combate contra la nación”. Por razones similares la “democracia revolucionaria” no guarda correspondencia alguna con el concepto ya obsoleto, según H&N, de “pueblo”, ligado como es sabido a la idea misma del estado-nación y a la noción de la “identidad-unidad” que le es sustancial. El pueblo sería, por definición, limitado, y sus límites son precisamente la condición de posibilidad de su representación política. La multitud, en cambio, es ilimitada e infinita y, por eso mismo, irrepresentable. “La multitud –dicen H&N– desafía la representación porque es una multiplicidad ilimitada e inconmensurable” (H&N, 2002: 162). En la edad del imperio, argumentan nuestros autores, las fronteras son flexibles y móviles, y la soberanía imperial es ilimitada. Podría decirse en consecuencia que el carácter ilimitado de la multitud no sería sino el reverso dialéctico de la constitución del imperio, pese a que, como es bien sabido, nuestros autores retrocederían horrorizados ante la sola mención de la palabra “dialéctico”. En el imperio, el pueblo -o mejor, los pueblos- se desdibuja por completo y en su lugar aparece la figura arrolladora de la multitud: móvil, multiforme, avasallante. En virtud de este razonamiento H&N concluyen que los contenidos esenciales de la nueva democracia de la multitud no pueden referirse a las viejas instituciones de la democracia representativa, ni aún a las de la democracia directa como la que heroicamente ejercieran los comuneros de París. Tales contenidos remiten, en cambio, al concepto de “contra-poder”.

El “contra-poder” implica tres componentes: resistencia, insurrección y poder constituyente. Luego de analizar las mutaciones sufridas por estos elementos en el tránsito de la modernidad a la posmodernidad, H&N aseguran que en las diversas experiencias insurgentes habidas en la época de la sociedad moderna –un amplio y bastante indefinido arco histórico que arrancarían desde los albores del capitalismo hasta el advenimiento de la sociedad “post-moderna”, en las décadas finales del siglo XX– la noción de “contra-poder” se reducía a uno solo de sus componentes: la insurrección. Pero, según nuestros autores, la “insurrección nacional era en realidad ilusoria”. Es preciso buscar la causa de esta frustración en el entramado internacional, que hacía que en esa época histórica la insurrección nacional comunista estuviese condenada a desembocar en una guerra internacional crónica, lo que “tiende una trampa a la insurrección victoriosa y la transforma en régimen militar permanente”. Pero

si el papel sumamente relevante del sistema internacional es indiscutible –como lo atestigua la obsesiva preocupación que manifestaran por este asunto los grandes revolucionarios del siglo XX, desde Lenin y Trotsky a Fidel y el Che, pasando por Gramsci, Mao y Ho Chi Minh– no es menos cierto que, tal como ocurre reiteradamente en *Imperio*, H&N incurren en graves errores de apreciación histórica cuando hablan del carácter “ilusorio” de las tentativas revolucionarias que jalonaron el siglo XX. ¿Qué quiere decir “ilusorio”? El hecho de que una insurrección popular ponga en movimiento los mecanismos internacionales de sometimiento y control, en un abanico de políticas que va desde el aislamiento diplomático hasta el genocidio de los insurrectos, demuestra precisamente lo contrario de lo que aducen H&N: que en una situación tal no hay nada de “ilusorio” y sí mucho de real, y que las fuerzas imperialistas reaccionan ante lo que consideran como una inadmisibles amenaza a sus intereses con su reconocida ferocidad. En todo caso, cualquiera sea la experiencia insurreccional que se analice a lo largo de los siglos XIX y XX, resulta evidente que la guerra internacional es mucho menos atribuible a la intransigencia de los revolucionarios que a la furia represora que desata la insubordinación de las masas.

Por otra parte, afirmar que las revoluciones triunfantes asediadas por los ejércitos y las instituciones imperialistas –con un repertorio de iniciativas que incluye sabotajes, atentados, bloqueos comerciales, boicots, guerras “de baja intensidad”, invasiones militares, bombardeos “humanitarios”, genocidios, etc.– se convierten en “régimenes militares permanentes” implica un monumental error de interpretación del significado histórico de dichas experiencias. Equívoco que, dicho sea al pasar, es típico de la ciencia política norteamericana que procede de igual manera cuando, por ejemplo, coloca en una misma categoría –los famosos “sistemas de partido único”– a regímenes políticos tan diversos como la Italia de Mussolini, la Alemania Nazi, la Rusia de Stalin y la China de Mao. Nuestros autores subestiman los factores históricos que a lo largo del último siglo obligaron a las jóvenes revoluciones a armarse hasta los dientes para defenderse de las brutales agresiones del imperialismo, a años luz de las sutilezas del imperio imaginado por H&N. Si la revolución cubana sobrevive en estos días de un supuesto “imperio sin imperialismo”, se explica tanto por la inmensa legitimidad popular del gobierno revolucionario como por la probada eficacia de sus fuerzas armadas, que disuadieron a Washington de intentar nuevamente una aventura militar en la isla. Por otra parte, la interpretación de H&N revela asimismo el grave equívoco en que incurren a la hora de caracterizar a las emergentes formaciones estatales de la revolución. Una cosa es lamentarse por la degeneración burocrática de la revolución rusa y otra bien distinta afirmar que lo que allí se constituyó fue un “régimen militar”. De la misma manera, que Cuba haya tenido que invertir cuantiosos recur-



sos, materiales y humanos, para defenderse de la agresión imperialista no la convierte en un “régimen militar”. Sólo una visión irreparablemente insensible ante el significado histórico de los procesos revolucionarios puede caracterizar de ese modo a las formaciones sociales resultantes de las grandes revoluciones del siglo veinte. Por último, y haciéndonos cargo de todas sus limitaciones y deformaciones, ¿puede efectivamente decirse que las revoluciones en Rusia, China, Vietnam y Cuba fueron apenas una ilusión? Una cosa es la crítica a los errores y desviaciones de esos procesos y otra bien distinta decir que se trató de meros espejismos. ¿Habría sido un simulacro baudrillardiano la paliza sufrida por el colonialismo francés en Dien Bien Phu? Y la bochornosa derrota de los Estados Unidos a manos del Vietcong, ¿habrá sido tan sólo una visión alucinada de sesentistas trasnochados, o se produjo de verdad? Esa huida desesperada desde los techos de la embajada norteamericana en Saigón, donde espías, agentes secretos, asesores militares y torturadores policiales destacados en Vietnam del Sur se mataban entre sí para subir al último helicóptero que los conduciría sin escalas del infierno vietnamita al “*American dream*”, ¿habrá sido verdadera o fue una mera ilusión? Los cuarenta y tres años de hostigamiento norteamericano a Cuba, ¿son producto del fastidio que provoca en Washington el carácter ilusorio de la revolución cubana? Y, para acercarnos a nues-

tra realidad actual: el abierto involucramiento del gobierno norteamericano en el frustrado golpe de estado de Venezuela, ¿habrá sido propiciado por el carácter ilusorio de las políticas del “chavismo”?

De todos modos nuestros autores nos advierten que se trata de preguntas que, en realidad, ya son anacrónicas porque según ellos en la posmodernidad las condiciones que tornaban posible la insurrección moderna, con todo su ilusionismo, han desaparecido, “de tal forma que inclusive hasta parece imposible pensar en términos de insurrección” (H&N, 2002: 164). Pero el pesimismo que se desprende de esta afirmación se atenúa ante la constatación de que la decadencia de la soberanía nacional y la laxitud que caracterizaría al imperio también se llevaron consigo las condiciones que sometían a la insurrección a las restricciones impuestas por las guerras nacionales e internacionales.

Posterguemos por un momento la crítica a este segundo supuesto, el que anuncia la “emancipación” de los procesos insurreccionales de las guerras nacionales e internacionales, y veamos lo que significa la insurrección en el capitalismo posmoderno. Si en la sociedad moderna ésta era “una guerra de los dominados contra los dominadores”, en la posmodernidad la sociedad “tiende a ser la sociedad global ilimitada, la sociedad imperial como totalidad” (H&N, 2002: 165). Bajo estas condiciones la resistencia, la insurrección y el poder constituyente se funden en la noción de contra-poder que, presumiblemente, sería la prefiguración y el núcleo de una formación social alternativa. Todo esto es sumamente discutible, pero aún así comprensible. No ocurre lo mismo a la hora en que nuestros autores definen, en un arrebato poético, lo que denominan el fundamento último del “contra-poder”, su materia prima. Dicho fundamento no se encuentra en ninguna novedosa construcción social o política ni en ningún otro producto de la acción colectiva de las masas sino en la carne, “la sustancia viva común en la cual coinciden lo corporal y lo espiritual” (H&N, 2002: 165). Según este argumento los tres elementos que constituyen el contra-poder “brotan en forma conjunta de cada singularidad y de cada uno de los movimientos de los cuerpos que componen la multitud” (H&N, 2002: 165). Es por esto que

“Los actos de resistencia, los actos de revuelta colectiva y la invención común de una nueva constitución social y política atraviesan en forma conjunta innumerables microcircuitos políticos. De esta forma se inscribe en la carne de la multitud un nuevo poder, un contra-poder, algo viviente que se levanta contra el Imperio. Es aquí donde nacen los nuevos bárbaros, los monstruos y los gigantes magníficos que emergen sin cesar en los intersticios del poder imperial y contra ese poder” (H&N, 2002: 165).



De este modo, el planteamiento de nuestros autores adquiere un tono inequívocamente vitalista que los aproxima mucho más a los vahos metafísicos de Henry Bergson que a las enseñanzas de Spinoza, al paso que los aleja irremisiblemente de la tradición del materialismo histórico. No habría que esforzarse demasiado para descubrir los inquietantes paralelos existentes entre la doctrina del “ímpetus vital” del filósofo francés y la exaltación de la carne hecha por H&N. En todo caso, y para resumir, digamos que una impostación de esta naturaleza disuelve por completo el carácter histórico-estructural de los procesos sociales y políticos en la singularidad de los cuerpos que conforman la multitud, con lo que se arriba a una conclusión desoladoramente conservadora toda vez que en dicha formulación se desvanecen la especificidad del capitalismo como modo de producción y las relaciones de explotación que le son propias. En segundo lugar, se liquida sin mayor trámite cualquier pretensión de intentar llevar a término uno de los proyectos inconclusos de la modernidad: la “democracia popular y representativa”. No sólo ésta es considerada inacabada e incompleta, sino que, peor aún, se la tiene por irrealizable, lo cual no causaría mayores objeciones si H&N sugirieran al menos que la frustración del proyecto democrático que surge en la modernidad y se expande con la experiencia de la Comuna de París y los *soviets* se debió a la intransigente

oposición de la burguesía y el bloque dominante por ella hegemónizada, que no escatimaron esfuerzo alguno para sabotear un proyecto que en su expresión más radical era incompatible con su dominación de clase.

La alternativa propuesta por nuestros autores es la reivindicación de una democracia de nuevo tipo, la democracia alternativa de la multitud, una democracia “nueva, absoluta, ilimitada e incommensurable”. Pero desafortunadamente se limitan a la sola enunciación, a una invocación apasionada a favor de una nueva forma política definida en términos tan categóricos como los que enunciamos más arriba pero sin aventurarse a identificar quiénes podrían ser los sujetos de semejante proyecto emancipador y, menos todavía, cuáles serían las formas institucionales que el mismo podría asumir. Es muy difícil para quien se identifique con la tradición del realismo político que enhebra en un hilo rojo a autores como Maquiavelo, Marx, Lenin y Gramsci, no expresar su profundo pesimismo ante una eclosión de romanticismo político tan acentuado como el que se refleja en los escritos de H&N. ¿Una democracia absoluta e ilimitada? Bien. Pero sus abogados deberían saber que toda forma estatal –y la democracia es indudablemente una forma estatal– reposa sobre un orden económico y social dividido en clases. Ese orden es, en lo que ellos denominan como imperio, el capitalismo. ¿Puede el capitalismo admitir una propuesta democrática como la que alientan H&N? De ninguna manera, dado que ni siquiera la modesta “democracia burguesa” consigue ser plenamente aceptada. ¿Puede una propuesta como ésta existir codo a codo con un régimen universal de explotación? Tampoco. ¿Qué grado de credibilidad puede tener entonces un argumento que mientras propone una forma novedosísima de democracia –absoluta, incommensurable, ilimitada– guarda un estruendoso silencio ante las estructuras de explotación y opresión clasista, sexista y racista que constituyen el andamiaje central del imperio? Podría argumentarse que H&N dan por supuestas todas estas consideraciones. Lamentablemente ello no es así. No se trata de una premisa silenciosa que sin embargo subyace con eficiencia por debajo del argumento de una nueva democracia, sino de una radical subestimación de lo que significa el capitalismo –y la sociedad capitalista– en su fase actual. Parfraseando lo que alguna vez dijera Nicos Poulantzas, quien no está dispuesto a hablar del capitalismo debe permanecer en silencio a la hora de hablar de la democracia. Es precisamente esa indiferencia ante la especificidad del capitalismo la que torna posible auspiciar una propuesta democrática como la que estamos viendo, guardando silencio en relación al capitalismo y soslayando de raíz cualquier pretensión de abolirlo. ¿Cómo eliminar la sospecha de que llevados de la mano por un cierto eclecticismo teórico y político nuestros autores no están negando la existencia de una incompatibilidad irresoluble entre una democracia absoluta y este tipo histórico de sociedad que, su-

puestas, ya no sería más capitalista sino posmoderna y, por consiguiente, liberada de los condicionamientos estructuralmente antidemocráticos descubiertos por Marx? Podría responderse a esta objeción diciendo que todo esto está implícito en los planteamientos de H&N y que se da por supuesto. Sin embargo, un tema tan crucial como éste no puede quedar en las sombras, especialmente si se tienen en cuenta los gruesos errores de interpretación que caracterizan el argumento central de *Imperio*. En todo caso sigue en pie el interrogante planteado más arriba y que podríamos reformular así: ¿hasta qué punto es posible formular un discurso democrático spinoziano –independientemente de nuestras dudas acerca de si ésta es la mejor herencia teórica a la cual acudir para repensar el tema de la democracia en nuestro tiempo– absteniéndose por completo de abordar la problemática de la explotación capitalista?

En una forma bellamente poética H&N dicen que “quizás podamos mezclando la carne con la inteligencia de la multitud engendrar a través de una gran obra de amor una nueva juventud para la humanidad” (H&N, 2002: 166). Tal vez se refieran a lo que Marx planteara como la necesidad de poner fin a la prehistoria bárbara de la especie humana para dar comienzo a la verdadera historia de la humanidad. La diferencia es que mientras el filósofo de Tréveris atisbaba esa posibilidad una vez consumada la revolución socialista, convertido el proletariado en clase dominante y cumplido el programa de transición hacia la sociedad sin clases, lo que arrojaría como resultado el fin de toda explotación, para H&N esta empresa histórica se resuelve en el nivel micro y en el plano de los cuerpos, apelando a las virtudes de la salvífica mezcla de carne con inteligencia. Pero no hay nada en la historia de la humanidad que permita avalar tamaña ilusión.

■ Bibliografía

Boron, Atilio 2002 *Imperio & Imperialismo* (Buenos Aires: CLACSO)

Boron, Atilio 2000 *Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Boron, Atilio, Gambina, Julio y Minsburg, Naum (compiladores) 1999 *Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO/EUDEBA).

Chomsky, Noam 2001 *El terror como política exterior de los Estados Unidos* (Buenos Aires: Libros del Zorzal).

Chomsky, Noam 1998 *Noam Chomsky habla de América Latina* (Buenos Aires: Editorial 21).

de Sousa Santos, Boaventura 1999 *Reinventar la Democracia. Reinventar el Estado* (Madrid: Ediciones Sequitur).

Hardt, Michael y Negri, Antonio 2002 “La multitud contra el Imperio”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 6, Junio.

Hardt, Michael y Negri, Antonio 2000 *Empire* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press) [Traducción al español: *Imperio* (Buenos Aires: Paidós, 2002)].

Kapstein, Ethan 1991/92 “We Are Us: The Myth of the Multinational”, en *The National Interest* (Winter).

Meiksins Word, Ellen 2000 “Trabajo, clase y estado en el capitalismo global”, en *OSAL* (Buenos Aires) N° 1, Junio.

The Economist 1997 “The Future of the State”, September 20/26.

■ Notas

1 Todas las referencias entre paréntesis pertenecen a la edición en español de la obra, publicada bajo el título de *Imperio* (Buenos Aires: Paidós, 2002).